



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**18ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA**

**29 y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
don **JULIO CÉSAR CLETO COBOS**, del señor presidente provisional  
del Honorable Senado, senador **JOSÉ J. B. PAMPURO**, del señor  
vicepresidente del Honorable Senado, senador **JUAN CARLOS MARINO**, del señor  
vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador  
**ROBERTO GUSTAVO BASUALDO**, y de la señora presidenta de la Comisión  
de Legislación General, senadora **LILIANA NEGRE DE ALONSO**

Secretarios:

Señor **JUAN H. ESTRADA** y señor **ANTONIO BENIGNO RINS**

Prosecretarios:

Señor **JUAN J. CANALS**, señor **MARIO DANIELE** y señor **GUSTAVO CARLOS VÉLEZ**



## PRESENTES:

ARTAZA, Eugenio J.  
 BANICEVICH, Jorge E.  
 BASUALDO, Roberto Gustavo  
 BERMEJO, Rolando A.  
 BIANCALANI, Fabio Darío  
 BONGIORNO, María José  
 BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana Raquel  
 CABANCHIK, Samuel Manuel  
 CALCAGNO y MAILLMANN, Eric  
 CANO, José M.  
 CASTILLO, Oscar Aníbal  
 CIMADEVILLA, Mario J.  
 COLAZO, Mario Jorge  
 CORPACCI, Lucía B.  
 CORRADI de BELTRÁN, Ana María  
 CORREGIDO, Elena Mercedes  
 DI PERNA, Graciela A.  
 DÍAZ, María Rosa  
 ESCUDERO, Sonia Margarita  
 ESTENSSORO, María Eugenia  
 FELLNER, Liliana Beatriz  
 FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro  
 FILMUS, Daniel Fernando  
 FUENTES, Marcelo Jorge  
 GIOJA, César Ambrosio  
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor  
 GONZÁLEZ de DUHALDE, Hilda Beatriz  
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel  
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio  
 HIGONET, María de los Ángeles  
 ITURREZ de CAPPELLINI, Ada del Valle  
 JUEZ, Luis A.  
 LATORRE, Roxana Itatí  
 LORES, Horacio  
 MANSILLA, Sergio F.  
 MARINO, Juan Carlos  
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo

MARTÍNEZ, José Carlos  
 MAYANS, José Miguel Ángel  
 MAZA, Ada Mercedes  
 MEABE, Josefina A.  
 MESTRE, Ramón J.  
 MONLLAU, Blanca M.  
 MONTERO, Laura G.  
 MORALES, Gerardo R.  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita  
 NIKISCH, Roy Abelardo  
 OSUNA, Blanca Inés  
 PAMPURO, José Juan Bautista  
 PARRILLI, Nanci María Agustina  
 PÉREZ ALSINA, Juan Agustín  
 PÉRSICO, Daniel Raúl  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos  
 PICHETTO, Miguel Ángel  
 QUINTELA, Teresita Nicolasa  
 RACHED, Emilio Alberto  
 REUTEMANN, Carlos Alberto  
 Riofrio, Marina Raquel  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.  
 ROLDÁN, José M.  
 ROMERO, Juan Carlos  
 SANZ, Ernesto R.  
 TORRES, Eduardo Enrique  
 VERA, Arturo  
 VERANI, Pablo  
 VERNA, Carlos A.  
 VIANA, Luis Alberto  
 VIGO, Isabel Josefa

## AUSENTES, CON AVISO:

JENEFES, Guillermo Raúl  
 MENEM, Carlos Saúl

## SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 4.)
2. **Desaparición de Sofía Herrera.** (Pág. 5.)
3. **Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdo.** (Pág. 5.)
4. **Plan de labor.** (Pág. 5.)
5. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 6.)
6. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 6.)
7. **Homenaje a los caídos el 5 de octubre de 1975. Moción de preferencia (S.-3.288/10 y otro).** (Pág. 11.)
8. **Consideración en conjunto de órdenes del día.** (Pág. 12.)

Pedido de informes sobre la situación actual en materia de importaciones que afectan al mercado interno y a los sectores de la industria local. (O.D. N° 737/10).

Aniversario de la provincialización del territorio nacional del Neuquén. (O.D. N° 741/10).

Declaración de interés de la labor de la Asociación Civil Barriletes de la ciudad de Paraná. (O.D. N° 745/10).

Homenaje a Luis Franco. (O.D. N° 746/10).

Aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N° 747/10).

Día Internacional de las Cooperativas. (O.D. N° 748/10).

Declaración de interés de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, Jujuy. (O.D. N° 750/10).

Bicentenario de la Revolución de Mayo en el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea

“Les Recontres D’Arles” en Francia. (O.D. N° 751/10).

Día del Abogado. (O.D. N° 753/10).

Pedido de informes sobre el Programa Nacional de Capacitación. (O.D. N° 762/10).

Feria Expo Mosconi 2010 en General Mosconi, Salta. (O.D. N° 763/10).

Medidas para difundir el Programa de Ayuda a la Inserción Comercial Internacional de las Pymes que brinda Proargentina. (O.D. N° 764/10).

Medidas para actualizar los montos para la categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas. (O.D. N° 765/10).

Pedido de informes a las compañías productoras y/o distribuidoras de combustibles sobre las causas del desabastecimiento de gasoil en Misiones. (O.D. N° 766/10).

Pedido de informes sobre un eventual desabastecimiento de combustible a las estaciones de servicio de YPF. (O.D. N° 767/10).

Pedido de informes sobre las causas de la caída de la producción energética en 2009. (O.D. N° 768/10).

Solicitud de provisión de combustible a las estaciones de servicio del interior del país. (O.D. N° 769/10).

Beneplácito por la inauguración del II Gasoducto del Estrecho de Magallanes. (O.D. N° 770/10).

Pedido de informes sobre las medidas a adoptarse para paliar la escasez energética en nuestro país. (O.D. N° 771/10).

Declaración de interés de la “Declaración del Bicentenario” realizada en Jujuy. (O.D. N° 773/10).

Solicitud de gestión de fondos para la continuación de los trabajos en la Central Eléctrica de Pilar en la provincia de Córdoba. (O.D. N° 774/10).

Día Nacional de la Minería. (O.D. N° 775/10).

Pedido de informes sobre la aplicación y ejecución de la ley Régimen Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. (O.D. N° 776/10).

Expresión de preocupación ante la escasez de gas licuado de petróleo en garrafa en todo el país. (O.D. N° 777/10).

Declaración de interés del Congreso Internacional de Turismo. (O.D. N° 792/10).

Declaración de interés del programa “Los Caminos del Che”. (O.D. N° 793/10).

Beneplácito por la Reunión Especializada y de Ministros de Estado de Turismo del Mercosur. (O.D. N° 794/10).

Pedido de habilitación de un Registro Seccional de la Propiedad Automotor y Crédito Prendario en Palpalá, Jujuy. (O.D. N° 795/10).

Pedido de informes sobre el funcionamiento y desempeño del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción. (O.D. N° 796/10).

Declaración de interés del VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía. (O.D. N° 797/10).

Declaración de interés del Eisteddfod 2010. (O.D. N° 799/10).

Pedido de informes sobre el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural. (O.D. N° 800/10).

Beneplácito por la distinción obtenida por alumnos en el IX Festival Internacional de Films. (O.D. N° 801/10).

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (O.D. N° 802/10).

Premio Honorable Senado de la Nación destinado a miembros de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Seguridad Aeroportuaria. (O.D. N° 803/10).

Día Internacional del Aire Puro. (O.D. N° 804/10).

Pedido de informes sobre el cumplimiento de la ley referida a presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB’s. (O.D. N° 805/10).

Pedido de informes sobre las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente en explotaciones petroleras costa afuera de nuestro país. (O.D. N° 806/10).

Medidas para evitar la contaminación en el embalse de Río Hondo, Santiago del Estero. (O.D. N° 807/10).

Pedido de informes sobre el avance de la especie *castor canadensis* en Tierra del Fuego. (O.D. N° 808/10).

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (O.D. N° 809/10).

Día de la Solidaridad. (O.D. N° 810/10).

Aniversario de la creación de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. (O.D. N° 811/10).

Conmemoración de la creación de la Universidad de Buenos Aires. (O.D. N° 812/10).

Homenaje al artista Osvaldo Pugliese. (O.D. N° 813/10).

Homenaje al actor Luis Sandrini. (O.D. N° 814/10).

Aniversario de la fundación de Colonia San José, La Pampa. (O.D. N° 815/10).

Aniversario de la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino. (O.D. N° 816/10).

Aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. (O.D. N° 817/10).

Aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 818/10)

Declaración de interés del IX Encuentro Poético Latinoamericano “Madre de Ciudades”. (O.D. N° 819/10)

Declaración de interés del Congreso Artístico Literario “La Grandeza de Belgrano”. (O.D. N° 820/10)

Declaración de interés la celebración de la Fiesta Patronal en Honor a San Cayetano. (O.D. N° 821/10)

Aniversario de la Escuela Lorenzo Goncebat, de Taco Pujio, Santiago del Estero. (O.D. N° 822/10)

Declaración de interés del 3° Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. (O.D. N° 823/10)

Declaración de interés del Primer Congreso Sudamericano de Cocineros Originarios. (O.D. N° 824/10)

Beneplácito por la implementación del Plan de Estudios Adultos 2000. (O.D. N° 825/10)

Aniversario de la refundación de la Ciudad de Santo Tomé, Corrientes. (O.D. N° 826/10)

Beneplácito por la realización del Proyecto Cultural Runasimi. (O.D. N° 827/10)

Declaración de interés de la publicación de la obra *1.500 Coplas seleccionadas de los cinco cantoneros de Juan Alfonso Carrizo-estudio previo*. (O.D. N° 828/10)

Declaración de interés de la participación argentina en la Feria del Libro de Frankfurt 2010. (O.D. N° 829/10)

Centenario de las primeras escuelas en Catamarca. (O.D. N° 830/10)

Declaración de interés del libro *La Revolución de Mayo: entre el monopolio y el libre comercio*. (O.D. N° 832/10)

Beneplácito por el anuncio de las obras de repavimentación y ensanche de una ruta que une Córdoba con Catamarca. (O.D. N° 835/10)

Medidas para la concreción de obras de repavimentación en un tramo de ruta en General Pico, La Pampa. (O.D. N° 837/10)

Pedido de informes sobre la provisión de gas natural en Mendoza. (O.D. N° 838/10)

Medidas para las obras de asfaltado en un tramo de ruta en Salta. (O.D. N° 840/10)

Medidas para incluir en el Plan de Obras 2011 la pavimentación de una ruta en La Pampa. (O.D. N° 847/10)

Pedido de informes sobre la construcción de viviendas sobre la base de los Programas del Plan Federal de Viviendas. (O.D. N° 849/10)

9. **Servicio cívico voluntario –Medidas mínimas de seguridad bancarias– Delitos de lesa humanidad.** (O.D. N° 851/0, C.D. 50/10, O.D. 791). (Pág. 14.)

10. **Asociaciones civiles. Moción de preferencia.** (O.D. N° 798/10). (Pág. 83.)

11. **Manifestaciones.** (Pág. 83.)

12. **Tratamiento en conjunto de proyectos de creación de juzgados.** (Pág. 83.)

**Creación de juzgado federal de primera instancia en Tartagal, Salta.** (S.-89/09). (Pág. 84.)

**Juzgado Federal de Primera Instancia en el fuero universal en Concordia, Entre Ríos.** (S.-2599/09). (Pág. 84.)

13. **Autorización para la salida de tropas a Haití.** (P.E. 136/10). (Pág. 84.)

14. **Libre acceso a la información pública.** (S.-579/10). (Pág. 85.)

15. **Juzgado federal en Concordia, Entre Ríos. Rectificación.** (Pág. 87.)

16. **Libre acceso a la información pública. Continuación.** (S.-579/10). (Pág. 87.)

17. **Protección de glaciares y ambiente periglacial.** (S.-2.200/09). (Pág. 96.)

18. **Apéndice.** (Pág. 183.)

I. **Plan de labor.** (Pág. 183.)

II. **Asuntos entrados.** (Pág. 186.)

III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 518.)

IV. **Actas de votación.** (Pág. 663.)

V. **Inserciones.** (Pág. 687.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 y 49 del miércoles 29 de septiembre de 2010:

**Sr. Presidente (Marino).** — Como hay quórum, queda abierta la sesión.

## 1

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Marino).** — Invito al señor senador por Santa Cruz Alfredo Anselmo

Martínez a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Alfredo Anselmo Martínez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos*).

## 2

### DESAPARICIÓN DE SOFÍA HERRERA

**Sra. Díaz.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Marino). — Tiene la palabra la señora senadora Díaz.

**Sra. Díaz.** — Señor presidente: como se han cumplido dos años de la desaparición de Sofía Herrera hemos pegado en todas las bancas una foto de ella, que es la que se ha publicado en todos lados y, además, una foto con modificaciones en su fisonomía para mostrar cómo sería Sofía en este momento, luego de dos años de su desaparición, para que no la olvidemos y para que estemos atentos y tengamos conciencia de que la seguimos buscando.

Apelamos una vez más a la policía provincial y a la Policía Federal, del mismo modo que a la Justicia provincial, para que podamos dar con el paradero de esta niña, que en la provincia de Tierra del Fuego nos tiene muy consternados, dado que han pasado dos años desde su desaparición.

## 3

### ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDO

**Sr. Presidente** (Marino). — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.<sup>1</sup>

Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.<sup>1</sup>

**Sr. Secretario** (Estrada). — Mensajes solicitando acuerdo para designar: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal:

Nº 1.322/10, Sala V, al Dr. Enrique Néstor Arias Gibert.

Nº 1.323/10, Sala IX, al Dr. Roberto Carlos Pompa.

Nº 1.324/10, Sala VI, al Dr. Luis Aníbal Raffaghelli.

Nº 1.325/10, Sala VII, a la Dra. Beatriz Inés Fontana.

Nº 1.326/10, Sala III, a la Dra. Diana Regina Cañal.

Nº 1.327/10, Sala VI, a la Dra. Graciela Lucía Craig.

Nº 1.328/10, Sala I, al Dr. Víctor Arturo Pesino.

Nº 1.329/10, Sala IV, a la Dra. Silvia Esther Pinto Varela.

Nº 1.330/10, Sala X, al Dr. Enrique Ricardo Brandolino.

Nº 1.331/10, Sala I, a la Dra. Gloria Marina Pasten.

Nº 1.332/10, Sala IV, a la Dra. Graciela Elena Marino.

Mensaje Nº 1.333/10, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, a la Dra. Marta Isabel Yáñez.

Mensaje Nº 1.334/10, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, a la Dra. Selva Angélica Spessot.

Mensaje Nº 1.335/10, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Corrientes, provincia de Corrientes, al Dr. Juan Carlos Vallejos.

Mensaje Nº 1.336/10, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Tucumán, provincia de Tucumán, al Dr. Raúl Daniel Bejas.

Mensaje Nº 1.377/10, presidenta del Banco Central de la República Argentina a la licenciada Mercedes Marco Del Pont.

Mensaje Nº 1.379/10, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina al licenciado Miguel Angel Pesce.

Mensaje Nº 1.381/10, director del banco Central de la República Argentina al contador público Santiago Carnero.

Mensaje Nº 1.385/10, solicitando acuerdo para nombrar director del Banco Central de la República Argentina al contador Waldo José María Farías.

**Sr. Presidente** (Marino). — Se giran a la Comisión de Acuerdos.

## 4

### PLAN DE LABOR

**Sr. Presidente** (Marino). — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.



En consideración.

**Sr. Giustiniani.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – La situación de Paraná Metal ubicada en mi provincia, precisamente en Villa Constitución, es un tema que tiene repercusión nacional y que golpea el futuro de 900 familias trabajadoras argentinas. El futuro de éstas está seriamente comprometido por la actual situación.

Esto motiva que lleve ya casi 30 días el corte de la autopista Rosario-Buenos Aires, y nos parece que ante esta grave situación el Senado de la Nación debe mostrar su preocupación y la búsqueda de una salida positiva para los trabajadores.

Por eso, planteo la incorporación sobre tablas de un proyecto de declaración por el que se manifiesta preocupación por la situación de la empresa Paraná Metal y la incertidumbre sobre el futuro de esta importante fuente de trabajo para la localidad de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe.

**Sr. Presidente** (Marino). – Queda reservado en mesa para el momento de la consideración.

**Sr. Giustiniani.** – Gracias, señor presidente.

## 5

### CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

**Sr. Gioja.** – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente** (Marino). – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Gioja

**Sr. Gioja.** – Siempre he considerado que el hecho de que seamos senadores no implica tener privilegios; al contrario, siempre he considerado que ésta es una responsabilidad de tipo social que tiene que ver con un servicio y no con prebendas de orden personal. Pero también es cierto que hay actitudes que van más allá del simple decoro del funcionario y que afectan en gran medida el honor y el decoro de este cuerpo.

Siento que se ve afectado el Senado cuando algunos señores, el caso concreto del señor Miguel Bonasso, dicen en varios programas televisivos y en otros programas que está circulando

la “Banelco de oro” para comprar senadores en relación con el tema de los **glaciares**.

Señor presidente: hace más de cuarenta años que hago política; es más, participé acompañando a mi padre, que es radical, en las elecciones de 1958 repartiendo votos para Balbín cuando Frondizi le ganó en febrero de ese año, y puedo decir que tanto por mi provincia como por todo el país transito sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de molestia y con la frente alta, y que puedo mirar a los ojos a todos mis comprovincianos y a todos mis conciudadanos.

Me siento afectado por este tipo de situaciones que no tienen ningún fundamento.

Además, agrega que yo soy proveedor de la Barrick, cosa que es absolutamente mentira. Y además agrega que él me ha denunciado y que estoy procesado, lo cual es absolutamente mentira. No es cierto.

Creo que se ha afectado a este cuerpo con ese tipo de manifestaciones. Por lo tanto, dejo planteada la cuestión de privilegio y pido que la Comisión de Asuntos Constitucionales la analice y, si es posible, que vaya reclamando las investigaciones que correspondan en el seno de la Justicia.

**Sr. Presidente** (Marino). – Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

## 6

### CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

**Sra. Escudero.** – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente** (Marino). – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Como es de público conocimiento y todos mis pares lo saben, desde hace 5 años vengo trabajando en un proyecto para modificar la actual ley de armas.

Esto sucedió porque la ley de armas vigente data de la década del 70, cuando el objetivo de seguridad era defenderse frente a grupos armados que atentaban contra el orden constitucional. Entonces, lo único que se registraba eran las armas civiles de uso condicional, siendo las otras armas de libre acceso. Toda esta lógica fue cambiando a medida que la sociedad fue entendiendo que había que establecer más res-

tricciones. Por lo tanto, hoy hay una difusión de normas de menor jerarquía que la ley –decretos, simples disposiciones del RENAR–, y la intención fue avanzar en ese sentido.

A lo largo de estos años, recibí cartas documento, en fin, visitas, lobbies y todo lo que ustedes puedan imaginar. Pero, últimamente, a medida que nos acercábamos a la emisión de un dictamen mucho más simplificado y donde puntualizamos con claridad ciertos aspectos y llegamos al corazón del sistema, sucedieron algunos hechos. Lo que queremos cambiar respecto del uso de las armas en la Argentina es que no exista un simple registro, sino un registro y un control. Sin embargo, advertimos que en nuestro país el órgano de control para el registro de armas está financiado y administrado por un ente cooperador que reúne a los fabricantes y a los comerciantes. Por lo tanto, se establece una incompatibilidad. No pueden ser los fabricantes y los comerciantes de armas los que tengan a su cargo la conducción del RENAR.

Ahora bien, a medida que avanzamos en este tema empiezo a recibir algunos mails amenazadores. El primero de ellos es del 4 de septiembre, bajo el supuesto nombre de Alejandro Galván. Entre todas las cosas que dice, menciona que: “El que se dedica a la corrupción y estafa al pueblo como usted y sus patrones, los Kirchner, siempre las pagan.

Siempre, por la gravedad, las paga usted o algún miembro de su familia. Recuerde, el que las hace, las paga”.

Pocos días después, el 11 de septiembre, recibí uno que firma un tal Juan José Díaz.

Se vuelve a utilizar la palabra “mamarracho”, que se había usado en el anterior correo, con lo cual obviamente es la misma persona. Y me dice: “Si sale la ley, yo le prometí a una peronista que está en el cielo que usted no viviría mucho después, en el supuesto caso de que la ley saliera. Yo no tengo nada que perder. Usted sí y lo sabe. Tenga cuidado con lo que haga. Yo no le temo en absoluto. Pero lo que quiero es hacerle daño a su familia. Esté donde esté, yo tengo dinero y yo la encuentro”.

El último mail que recibí es del 13 de septiembre y lo firma Juan Juan Colombiano. Y dice: “Querida Sonia, si sale la tan mentada ley

de armas, tenés problemas. Yo no pierdo nada, vos sí. Yo gano”.

Obviamente, esto es algo insólito. No me había pasado nunca en mi vida recibir este tipo de coacción solamente por querer que el pueblo argentino viva mejor, que tengamos más leyes, justamente en el marco de la seguridad que tanto preocupa a los argentinos. Por supuesto, hice la denuncia penal.

Yo quiero recordar que el actual sistema –que es el que queremos modificar– permitió que Martín Ríos, el tirador de Belgrano, fuera legítimo usuario. Y fíjense que para que Martín Ríos accediera a un arma sólo bastó con la firma de un médico traumatólogo para que el permiso le fuera otorgado. El joven había estado internado por problemas psíquicos, detenido por tenencia de drogas y, posteriormente, fue declarado inimputable en causa judicial.

Eso es lo que queremos cambiar, en eso estamos comprometidos y en eso, a pesar de las amenazas recibidas, les pido a mis pares su acompañamiento. El pueblo argentino nos ha dado una responsabilidad. La inseguridad es un problema grave; el tema de las armas es un problema grave en la Argentina.

En ese sentido, quiero comentarles que en las reuniones de la comisión contamos con la visita de un experto de la Universidad de Lanús, que hizo un estudio en su maestría: ¿cuántos muertos hubo por armas de fuego en la Argentina en un lapso de dieciocho años, entre 1990 y 2008? 59.300 muertos por armas de fuego. ¿Cuántos soldados norteamericanos murieron en Vietnam en dieciocho años? 58.000 muertos. Es decir que hubo más muertos en la Argentina en épocas de paz por armas de fuego.

Señor presidente, que pase este tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales; la Fiscalía y la Justicia se harán cargo de las denuncias. Cuando veo tanta resistencia a algo que es tan lógico, tan razonable, tan racional, empiezo a pensar qué otros intereses estaremos tocando y me entero, dicho en mi despacho, que habría una recaudación de cinco millones de pesos mensuales que entran por fuera del presupuesto, por esta tasa que maneja ese ente cooperador. ¿Estaremos tocando la “cajita feliz” de algunas personas, la “cajita feliz” de algún funcionario? No quisiera creer que las resistencias pasen por

ese lado. Por eso, además del giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales les pido a mis pares compromiso, y que trabajemos y mejoremos la legislación en la Argentina.

**Sr. Presidente** (Marino). – Gracias, señora senadora. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: aunque no corresponde porque se trata de una cuestión de privilegio y no tiene debate, como hemos discutido este tema en la reunión de labor parlamentaria, desde el bloque radical queremos apoyar la cuestión de privilegio que acaba de plantear la senadora Escudero y pedirles a las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales que pongan este tema como primer punto de la agenda de tratamiento en la próxima reunión. No se trata de una supuesta amenaza, sino de una concreta amenaza de la que ha sido objeto y que ha sufrido la senadora Escudero. Hay pruebas concretas, hay elementos contundentes, le han enviado mails amenazándola por la tarea que se viene desarrollando con relación al proyecto sobre armas.

Como bien dijimos en la reunión de labor parlamentaria, si bien es un tema que hemos postergado para tratar junto con el proyecto de ley que ha presentado el senador Pichetto sobre desarmaderos y también el proyecto de ley presentado por la senadora Duhalde sobre emergencia en materia de seguridad, el proyecto sobre armas, que vamos a tratar en la próxima sesión, llega con un gran trabajo de cinco años. Y, con un gran poder de síntesis, la comisión ha logrado articular un buen texto que resume toda la normativa vigente, a la que le da rango de ley, y también modifica la estructura institucional en cuanto a la autoridad de aplicación, que es el aporte más importante que se hace.

Es posible, como dijo la senadora Escudero, que esto termine con el negocio de algunos y esto puede ser lo que haya motivado esta amenaza. Así que no es cualquier hecho, se trata de una amenaza concreta, hay pruebas contundentes y por eso es que le pedimos a las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales que establezcan este tema como primer punto del orden del día de la comisión.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: en la línea de las amenazas, por supuesto que nos solidarizamos con la senadora y nos parece bien que este tema se investigue, creo que es importante que actúe la Justicia. También cabe hacer una reflexión; el mundo en el que hoy vivimos es más complicado. En el espacio informático se escribe con una impunidad absoluta desde el más vil anonimato, y muchas veces se generan acciones de agravio, de infundio, de mentiras. Indudablemente estamos en un mundo más complicado; sería interesante poder determinar de dónde viene este tipo de amenazas, seguramente de algún locutorio, de algún espacio anónimo. En este sentido, nos solidarizamos y creemos que tiene que investigarse.

En orden al debate del proyecto tenemos una posición distinta: le hemos hecho llegar observaciones, pero creemos que el sistema funciona bien; hay un debate que dar. Me parece que en los últimos tiempos ha habido un avance muy importante en todo lo que es control y fiscalización. Los requisitos son duros y exigentes, no se le dan armas a cualquiera.

Pudo haber habido algún caso en que alguien se haya vuelto loco y haya empezado a tirar tiros, pero éstas son circunstancias que pueden ocurrir también y ocurren, como lo vemos en países modernos, como en los Estados Unidos.

Lo que digo es que estamos dispuestos a dar el debate. Nos solidarizamos con la senadora en orden a las amenazas recibidas y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance también para investigar estos hechos. Porque una amenaza a un senador siempre es una amenaza al conjunto de los senadores y al cuerpo.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.

**Sra. Rojkés de Alperovich.** – Señor presidente: en principio, quiero solidarizarme con la senadora. Me parece realmente terrible lo que relata. Pero además estamos viendo que esto es prácticamente un uso común cuando algún senador toma una decisión. Hemos visto salir a compañeros en los diarios porque determinado medio no estaba de acuerdo con



la decisión que se tomó. Lo estamos viendo al diputado Bonasso, y la verdad es que no lo debemos tolerar; como sistema democrático, no podemos tolerarlo. Estoy hablando de una cosa demasiado seria, y si él tiene pruebas, que las presente. Pero yo —y estoy segura de que en esto hablo en nombre del Cuerpo— no lo puedo tolerar. Estamos trabajando mucho desde hace muchos años y queremos salir de la política por la puerta grande. Pero cada vez que uno piensa en tomar una medida diferente tenemos a las corporaciones encima, de alguna manera amenazándonos.

Esas fotos a estos senadores han sido terribles. Estas amenazas a esta senadora son terribles y también lo son las palabras que está diciendo Bonasso. Todo esto, en definitiva, está atacando al sistema democrático.

Es por eso que creo que estamos viviendo una situación muy seria, que debemos estar juntos todos los senadores en un momento como éste, porque no puede ser que cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, alguna de las corporaciones nos amenace de una u otra manera.

**Sr. Presidente** (Marino). — Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

**Sra. Estenssoro.** — Señor presidente: quiero solidarizarme con la senadora Escudero. Me parece realmente grave que haya recibido estos mails en su casilla personal, que no es lo mismo que la información que circula en Internet o la información que aparece en los medios, que tiene que ver con la libertad de expresión, aunque no condono las expresiones agraviantes, maledicentes y mentirosas. Pero otra cosa es recibir una carta en su dirección electrónica, en su despacho o en su casa, con amenazas de muerte.

Quiero además manifestar mi compromiso para acompañar la ley de armas que usted propone.

**Sr. Presidente** (Marino). — Tiene la palabra el senador Cabanchik, no sin antes aclararle, por el gesto que usted hizo, que fui confeccionando la lista de oradores de acuerdo a cómo me iban solicitando la palabra; no me había olvidado de usted.

**Sr. Cabanchik.** — Señor presidente: simplemente, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya asumo públicamente aquí en el pleno, al menos en lo que cabe a mi

acción, el compromiso de hacer todo lo posible para que este punto esté en la próxima reunión de Asuntos Constitucionales como primer tema del orden del día.

También acompaño los dichos de la senadora Estenssoro acerca de que no conviene que diluyamos lo específico de este hecho, poniéndolo en serie con cualquier tipo de hecho que puede tener algo en común, pero que tiene algo suficientemente diferente.

De todas maneras, se muestra acá la cobardía de quien hace estas amenazas, desde la impunidad que le dan la sombras, que le da la dificultad para investigar la fuente. Pero desde este Senado vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, y manifiesto la solidaridad personal con la persona de la senadora Escudero.

**Sr. Presidente** (Marino). — Se lo merece.

Tiene la palabra la senadora Morandini.

**Sra. Morandini.** — Señor presidente: quiero solidarizarme, pero también me parece importante hacer algunas reflexiones en el sentido de que las palabras no son inocentes. De alguna manera Internet lo que hace es proyectar lo que hemos sabido construir como cultura de convivencia.

En ese sentido, desde hace rato en nuestro país se está utilizando el anonimato para la amenaza, para la descalificación, para que se esté usando siempre esta palabra odiosa que tendríamos que erradicar; los escraches no son algo para señalar. Los escraches eran utilizados por los H.I.J.O.S. para mostrar a los delincuentes. Y se ha vulgarizado de tal manera que creemos que escrachar es poner una foto molestando a alguien porque piensa de manera diferente.

Además, la solidaridad debe ser profunda y seria, que no sea un “como si”, porque están pasando a nuestro alrededor cosas de enorme seriedad con relación a los dichos. Si permitimos semejante concepción antidemocrática con relación al no respeto de los poderes, a que se utilice una batería verbal como forma de no diálogo político, parece que todo tiene que ver con todo, y tenemos que ser muy enfáticos no sólo en cuanto a la solidaridad sino también en cuanto a ver de qué manera este Senado evita el “como si”, cuando alrededor de nosotros la ciudadanía está tan alarmada por los comportamientos antidemocráticos que se ven en el decir.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal, quiero solidarizarme con la senadora Sonia Escudero, integrante de nuestra bancada, quien ha sido cobardemente amenazada por defender ideales y convicciones. Creo que esto es sumamente grave. Más aún, ayer, la senadora Escudero se manifestó en la reunión de labor parlamentaria a favor de poner toda la flexibilidad para que el proyecto pueda avanzar sin ningún tema que resulte demasiado polémico, pero hay que tomar medidas urgentes, porque hacen a la seguridad de los ciudadanos de la Argentina. Éste es un tema sumamente grave.

En segundo término, también quiero referirme a lo planteado por el senador Gioja. La descalificación irresponsable que se hace de la conducta del senador y de muchos senadores por tomar determinada posición con respecto del proyecto de ley de **glaciares** por parte de un ciudadano que es diputado nacional –es decir que no es cualquier ciudadano– es muy grave.

El diputado nacional Bonasso tiene derecho a defender sus convicciones, pero no tiene derecho, en la defensa de esas convicciones, a descalificarnos o a descalificar a alguno de los integrantes del Senado, insinuando cosas muy graves, que alguna vez pueden haber ocurrido pero que no se deben repetir jamás.

Entonces, voy a agregar a la propuesta del senador Morales, en el sentido de que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate prioritariamente la cuestión de privilegio planteada por la senadora Escudero, que esta Comisión trate también la cuestión de privilegio formulada por el senador Gioja. Creo que debemos defender la moral, la ética y la actitud de cada uno de los senadores. Y si alguien comete un acto irregular, que pague las consecuencias. Pero me parece que no es éste el caso.

Así, señor presidente, expreso mi solidaridad con ambos senadores en las cuestiones que han planteado.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Lores.

**Sr. Lores.** – Señor presidente: como presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino, quiero expresar mi total solidaridad

con la senadora Sonia Escudero y con el senador Gioja por los agravios y amenazas que recibieron. Creo que también nosotros, como Senado, tenemos que hacer nuestro propio mea culpa.

El país está viviendo una situación difícil, de crispación, de agravios, de descalificaciones. Y, en alguna medida, nos hemos visto involucrados internamente en este tema cuando hablamos de gobernadores genuflexos, por ejemplo, por defender determinado tipo de posturas o los intereses de sus provincias; o también, cuando dejamos deslizar la sospecha de que la Banelco circulaba por algunas bancas del Congreso; o cuando no hicimos demasiado caso a algunos e-mails –que ya venían circulando anteriormente– a través de los cuales se acusaba, se amenazaba o se denunciaba a un grupo de senadores –entre los cuales me incluían a mí–, fundamentalmente, cuando se trataron la resolución 125 –la ley del campo– y la ley de medios, en el sentido de que se utilizaron millones de pesos para comprar sus votos. Sin embargo, no se advirtió, por ejemplo, que yo había votado en contra de la resolución 125.

Estamos ante una situación difícil. En estos días, se escrachó a varios periodistas, a quienes considero muy honestos, y hasta se llegó a expresar que se iban a tomar los Tribunales si no se obtenían determinados resultados judiciales. En consecuencia, debemos asentarnos muy bien respecto de estas cuestiones. Los senadores debemos tranquilizarnos, tener espíritu de cuerpo para expresar nuestro repudio profundamente y tomar las medidas que correspondan y que estén a nuestro alcance para evitar que estas cosas sigan avanzando.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Señor presidente: le brindo toda mi solidaridad a la senadora Escudero, ante las graves amenazas de que fue objeto. Asimismo, me sumo a la decisión política de abordar la temática relacionada con las armas en la próxima sesión de esta Cámara.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

**Sr. Pérez Alsina.** – Señor presidente: en primer lugar, me solidarizo con la senadora Escudero y destaco la gravedad de lo que le sucedió a una comprovinciana y colega nuestra.

**Secretario** (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 38 y los negativos 26.

**Sr. Presidente.** – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.<sup>1</sup>

## 17

## S.-2.200/09

**PROTECCIÓN DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAL**

**Sr. Presidente.** – Corresponde considerar el dictamen contenido en el expediente S.-2.200/09, emitido por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fue pasado en revisión sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

En consideración en general.

Tiene la palabra el senador Pérez Alsina, miembro informante del dictamen en mayoría.

**Sr. Pérez Alsina.** – Señor presidente: como sabemos, el tema que vamos a tratar aquí es el referido a la protección de los glaciares. Los dos dictámenes se refieren a la protección de los glaciares y es bueno aclarar, reafirmar y enfatizar que los dos proyectos apuntan a la protección de los glaciares y la zona de periglaciales.

Deseo aclarar esto, porque se ha generado un debate mediático, casi virtual, sobre si estamos a favor o en contra de esta protección. Sin embargo, ningún senador, y menos aún ningún proyecto, puso en duda esta circunstancia. Aquí empezaron a jugar otras cuestiones, a las cuales voy a hacer referencia a continuación.

Lo primero que pregunto, señores senadores, es qué ha sucedido que el año pasado, prácticamente por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto federal de protección de glaciares donde intervenían la Nación y las provincias y, luego de un año, hay un cambio bastante importante al respecto.

Yo creo que lo que pasó durante este año fue que hubo un verdadero avance sobre el federalismo argentino en materia de recursos naturales y de protección del medio ambiente. Digo esto con cierta preocupación porque creo

que ese avance lo vamos a sufrir en distintos temas, donde el Senado no logra consensuar una posición importante en representación de todas las provincias argentinas. Y eso es preocupante, señor presidente.

Fijense que en las reuniones de comisiones fueron realmente interesantes las posiciones de quienes expusieron a favor de uno o de otro proyecto, dado que fueron muy sólidas y técnicas. En ese sentido, rescato la opinión del presidente del principal instituto argentino en la materia. A él le preguntamos formalmente en la comisión –lo que consta en la respectiva versión taquigráfica– si, como principal responsable de la preservación de los glaciares y periglaciales, podía afirmar que los dos proyectos de ley protegían todo lo que hoy vamos a tratar –mejor dicho, que ya estamos tratando–. Fue muy enfático en su respuesta y dijo que sí, que las dos iniciativas protegían lo que queremos preservar.

¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que acá nos estamos diferenciando en otros temas, no en la protección. Obviamente, hubo muchísimas opiniones al respecto, pero si el representante del organismo que figura en los dos proyectos de ley sostiene enfáticamente esto, creo que todos podemos quedarnos tranquilos en cuanto a que la protección de glaciares y periglaciales está asegurada.

Lo que me preocupa es el avance de muchos dirigentes políticos –quiero aclarar que ninguno está acá– que mediáticamente y a través de muchas opiniones han ido marcando un lenguaje al cual ya me voy a referir más adelante. Por eso les pido a los señores senadores que vayamos tomando conciencia sobre esto porque hoy son las provincias cordilleranas, pero mañana será Corrientes, pasado será Tucumán por el azúcar e, incluso, ya hicieron algún avance con relación con el tabaco. Pero lo que pude apreciar con mucha preocupación es que a través de esas declaraciones se buscaba instalar la idea de que las provincias, sus gobernadores y sus legisladores no están capacitados para preservar los recursos naturales. Y eso es algo sobre lo que debemos tener cuidado porque, como voy a demostrar más adelante, en la Convención Constituyente de 1994 hubo distintas opiniones sobre distintos artículos a los que me voy a referir más adelante. Justamente, en la Constitución se establece que

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

el desarrollo lo debe hacer la provincia en concurrencia con la Nación y no esta última sola.

¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de organismos nacionales o decimos que la Nación va a preservar tal o cual cosa, debemos tener en cuenta que la Nación no es una entelequia, sino que son organismos los que se van a encargar de esa tarea. Fíjense que el propio presidente del organismo que –si se aprobara el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados– tendría a cargo en forma exclusiva el tema de la preservación dijo que ese instituto tiene en la actualidad muy poco personal y resultaría una tarea titánica el inventario de glaciares y periglaciales. Estoy hablando de un funcionario a quien ha sido muy interesante escuchar desde el punto de vista técnico.

Señores senadores representantes de provincias argentinas, muchos con aptitudes para ser candidatos a gobernadores de sus provincias: hay varios gobernadores que vinieron acá a expresar su opinión. Estoy hablando de las provincias de Jujuy, de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Neuquén. El gobernador de Neuquén presentó una carta que voy a leer parcialmente, si me lo permiten, porque realmente los conceptos que contiene son muy interesantes.

Muchos de estos gobernadores fueron apoyados por sus respectivas Legislaturas diciendo que la ley del Senado es la que mejor preserva a las provincias en –valga la redundancia– la preservación del medio ambiente, de sus zonas y del desarrollo local. No nos olvidemos de que junto a la ecología está el concepto de desarrollo humano. Desarrollo sin ecología es, como decía algún autor con un tono fuerte, asesinato. Obviamente que todo desarrollo tiene que ser con ecología. Pero ecología sin desarrollo es suicidio comunitario. Los senadores tenemos que ser los que logremos esa síntesis de la preservación del medio ambiente, y ser muy claros al respecto, sobre todo en quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué forma.

Solicito autorización a la Presidencia para leer parte de la carta a la que me referí de este gobernador, porque todos deben prestar mucha atención a su espíritu, no a lo técnico. A continuación de la parte introductoria formal de la carta dice: “La sanción del proyecto tal como salió del Senado es explícita y clara. Ahora bien, la iniciativa revisada en la Cámara de Diputados

resulta confusa –muchos lo han dicho acá– y afecta peligrosamente la actividad hidrocarburífera en Neuquén y con seguridad también en otras provincias productoras. También afecta la generación geotérmica en las estribaciones cordilleranas. Se trata de una energía renovable, limpia, no contaminante aprobada por el Protocolo de Kyoto.

“La provincia del Neuquén con gran esfuerzo aporta el 23 por ciento del petróleo, el 50 por ciento del gas que se produce en el país y el 25 por ciento de la energía hidroeléctrica. Estos recursos, que pertenecen al pueblo neuquino, permiten el crecimiento y el desarrollo de la industria y economía y sostienen la calidad de vida de los hogares de todos los argentinos. Estos recursos pertenecen a la provincia del Neuquén, que con esfuerzo, sacrificio y dolor seguirá aportándolos para el bienestar de toda la República Argentina”.

Ahí hace referencia a las regalías. Habla de las restricciones a la industria. Luego dice: “En cuanto al aspecto social es necesario tener en cuenta que si se afecta la actividad hidrocarburífera, se pone en riesgo la estabilidad de 15.000 empleos directos y 45.000 empleos indirectos”.

“Señor senador –dirigiéndose a todos, por supuesto–: la provincia del Neuquén y su pueblo van a resguardar sus recursos, entre ellos el agua y el medio ambiente. Pero debemos poner en consideración el esfuerzo sostenido en el tiempo de todos los neuquinos. De la misma manera que la tecnología proporciona los métodos de exploración y explotación de los recursos, también aporta novedosos métodos de cuidado y protección del medio ambiente. Así en Neuquén se hallaron reservas para más de cincuenta años. En consecuencia, las normas deben ser claras sin que quede resquicio alguno por el cual puedan entrar a la República el subdesarrollo, la resignación y la pobreza”.

Esta carta la firma el gobernador Sapag. Allí se expresa el espíritu de muchos gobernadores. La verdad es que, con estos ataques que se han hecho a las provincias argentinas acusándolas de que no cuidan el medio ambiente, ¿creen que los pueblos locales tienen una...

**Sr. Verna.** – Solicito una interrupción.

**Sr. Pérez Alsina.** – Sí, cómo no.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Verna.



**Sr. Verna.** – Señor presidente: como el senador nombró a los gobernadores que vinieron, y como no estuve en la primera reunión pero sí en la segunda, entiendo que se olvidó de la gobernadora de Tierra del Fuego...

**Sr. Pérez Alsina.** – Sí, los he citado.

**Sr. Verna.** – Perfecto

**Sr. Pérez Alsina.** – Claro que los he citado.

Aprovecho lo que dice el señor senador para mencionar que sí escuché la opinión de la señora gobernadora. Al respecto, debo decir que respeto absoluta y totalmente su posición. Y en aras del mismo federalismo que creo que debemos tener los senadores acá, si ella dice que Tierra del Fuego, a través de sus legisladores, vota determinada norma, yo tengo que pensar que es lo mejor para Tierra del Fuego. Lo acepto, y estoy seguro de que debe tener razón, porque supongo que si ella y sus legisladores tienen un concepto sobre determinadas actividades y preservación del medio ambiente, es porque Tierra del Fuego es una zona determinada y la deben haber estudiado. Pero también, le voy a decir, cuando veamos la parte técnica –que es uno de los problemas que estamos tratando acá–, que la zona de Tierra del Fuego no tiene nada que ver con la Puna, donde estoy yo, a la cual también me voy a referir.

Es bueno que ella lo haya dicho. La respeto profundamente. Fue muy clara en sus conceptos y debe tener razón. Y si Tierra del Fuego decide algo, debe ser así; como otras provincias decidirán lo mismo. Ese es el federalismo que tenemos que tener. Porque acá, empieza a haber desconfianza en los gobernadores, desconfianza en sus legisladores provinciales. Por eso, creo que el proyecto del Senado es mucho mejor desde el punto de vista federal. Los dos preservan el medio ambiente, y eso es lo que técnicamente vamos a ir viendo, señor presidente.

Tenemos que ver los aspectos constitucionales. En tal sentido, lo primero que debemos recordar en este debate es que acá hubo una decisión constitucional. Debemos recordar que autores de lo que pasó en Diputados ya han dicho que están totalmente en desacuerdo con la Reforma Constitucional de 1994. O sea que ya hay un trasfondo. Dijeron que los recursos no se les deberían haber cedido a las provincias. Lo han dicho claramente y, muy hábilmente, lo

están poniendo en el proyecto. Porque como ya no pueden cambiar la Constitución, entonces ¿saben qué vamos a cambiar? La forma de ejercer el dominio, que se llama jurisdicción. La jurisdicción la va a tener la Nación y las provincias nos vamos a ir olvidando del manejo de nuestro desarrollo.

¿De quién son los recursos, señor presidente? Tal como dice claramente la Constitución, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio corresponde a las provincias; y nosotros tenemos que ser defensores enfáticos de las provincias, obviamente, en coordinación con la Nación, a lo que también me voy a referir luego. No estoy diciendo que las provincias hagan lo que quieran, pero tampoco que se les quite toda jurisdicción. Porque van a ver acá que, subliminalmente, y cuando empiecen las interpretaciones judiciales, las provincias van a quedar mirando qué es lo que hay que hacer con sus zonas.

La Constitución tiene dos aspectos importantes fuera de los poderes delegados y demás. El artículo 41 resulta claro: el dominio es de la provincia. Y hubo toda una discusión en 1994, en la que muchos convencionales –incluso, algunos creo que están acá– hablaron con mucha propiedad acerca de por qué el dominio tenía que ser de las provincias. Las provincias, en la administración de los recursos naturales, garantizan un presupuesto vital del federalismo, se dijo en la Convención de 1994. Son las provincias las que deben administrar los recursos naturales para generar nuevas oportunidades de empleo e integrar su economía.

Esto lo dijo un convencional santacrucense, creo que Di Tulio. Cada región tiene características propias para su resguardo ambiental y su resguardo de desarrollo. Son las provincias las que deben administrar los recursos naturales, dijo el convencional Arnold.

Esa discusión que hubo en 1994, en la cual participé porque asesoré a un bloque federal, fue muy interesante porque implicaba todo un cambio que yo creo que las provincias y el federalismo argentino tienen que seguir preservando. Obviamente, la Constitución también introdujo el concepto de medio ambiente –clave para el desarrollo–, que había sido incorporado en forma de leyes y de doctrinas pero que no figuraba en la vieja Constitución. Como ustedes



saben, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, aquellas necesarias para complementirlas, sin que alteren su jurisdicción local.

Bien sabemos que jurisdicción es la capacidad para reglar el uso de las cosas. El uso lo deciden las provincias en su normativa, por supuesto, respetando lo que establece la Nación respecto del medio ambiente. Y en el caso de que alguna provincia no lo respete o si algún sector no lo respeta, tiene que caberle toda la sanción habida y por haber. Pero, repito, esa facultad es concurrente.

Por lo tanto, es clara la posición de nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es el problema que observamos en esta iniciativa? En primer lugar, el federalismo. Creo que tenemos que comenzar a tomar conciencia de ello. No estoy hablando de planes u otros aspectos para limitarla, pero sí hay una especie de actitud donde nos quieren imponer ciertas condiciones. En ese sentido, creo que debemos defenderlo, porque ecología es también desarrollo humano. No nos olvidemos de esta palabra porque, como bien dijo alguien, cuando hay pobreza se afecta también en forma tremenda a la ecología. Entonces, las provincias deben preservar eso.

¿Cuál es el problema de esta norma? Uno es el federalismo, al que ya hice referencia; el otro, es algo sobre lo que debemos tomar conciencia, pues al tratarse de una ley antifederal –por el modo en la que fue elaborada–, uniforma todo el territorio. Y voy a explicar por qué.

Hay zonas que se diferencian totalmente. No es lo mismo Tierra del Fuego que Jujuy, que Salta o que Catamarca, donde la forma de desarrollo y la preservación se hacen en forma distinta. Por eso, debemos tener cuidado.

Todas las provincias tienen normativas medioambientales. Por ejemplo, en Salta, rige la ley 7.017, conocida como Ley de Aguas. Es tremendamente exigente y clara. Ningún funcionario puede autorizar un proyecto si no se preserva agua para la población, y esto es taxativo. Si algún funcionario aprueba un proyecto donde se afecta el agua para la población, puede tener serios problemas civiles y penales. Existe la ley 7.070, de ambiente provincial. También se sancionó una ley de glaciares, que debe ser combinada con la ley nacional que se

apruebe. Por otro lado, hay una ley ambiental de presupuesto mínimo, que –como ustedes saben– es la 25.675; y, obviamente, también existirá esta norma que estamos discutiendo, sea la sancionada por el Senado o por la Cámara de Diputados. En consecuencia, las provincias saben cuidar a la ecología y deben hacerlo en coordinación con la Nación, pero no ser absolutamente ignoradas en ese tema.

Ahora bien, quiero hacer referencia a ciertos aspectos por los que considero que el proyecto de ley aprobado por Diputados contiene gruesos errores y por los que el del Senado es mucho más claro. Ya existe un primer punto donde, no en forma inocente, dice que los glaciares constituyen bienes de carácter público. Por supuesto, cuando decimos “glaciares”, obviamente, tiene que estar el término “periglacial”. ¡Claro que es público! Pero, salvo los que son parques nacionales, los bienes públicos son provinciales.

¿Dónde hay un grave problema, que creo es lo que va a dar mucha inseguridad a las provincias y que va a causar enormes inconvenientes? En la definición. La definición del Senado es muy clara en cuanto a lo que son glaciares. La definición de la Cámara de Diputados, desde ya, les adelanto que va a dar lugar a muchísimas medidas judiciales que se van a presentar, donde los jueces van a tener que empezar a interpretar si esa área periglacial o no; si se puede hacer algo o si se puede hacer otra cosa, etcétera.

La definición de “glaciar” dice que se trata de toda masa de hielo perenne estable, que confluye en forma lenta, que lamentablemente está en retroceso por el calentamiento global y sobre lo cual hay que hacer algo. En ese punto, no hay problema; pero cuando hablamos de ambiente periglacial en alta montaña, se refiere al área con suelos congelados que actúan como reguladores de recursos hídricos. Incluso, se agregó “en la media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos”.

¿Quién va a decidir el tema del suelo congelado? Fíjese que no dice “agua congelada” sino “suelo congelado”. En cualquier zona de mi territorio, permanentemente, se llega a cero grado, porque es seco, es desierto y pasa a ser suelo congelado. ¡Y les puedo garantizar, señores senadores, que de glaciar no tiene absolutamente nada la puna salteña! Con este proyecto de ley, lo van a poder considerar periglacial.

Fijense que aquí vinieron dos técnicos muy importantes, creo que del Instituto de Geología de Mendoza y del Instituto de Geología de San Juan. Uno de ellos dijo: “¿Aquí no han estudiado las áreas del norte argentino? ¿Cómo pueden definir esto así? ¿No saben que hay suelos secos que se congelan?”. Esto es un enorme error técnico que va a dar tanta amplitud que va a haber una inseguridad en las provincias que, la verdad, no van a saber qué hacer. Está hecha en forma de una quita a las provincias.

Y relacionemos eso con el inventario. ¿Por qué? ¿Nosotros podemos permitir como senadores que en la realización del inventario de nuestro territorio no participen las provincias? Porque más allá de cualquier cosa que digan —“van a llamar a las provincias; hay coordinación; el Consejo Federal, etcétera”—, aquí está bien claro. El proyecto dice que el inventario y el monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias; será realizado por dicho instituto, con la coordinación de la autoridad nacional, y se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores en zonas fronterizas. Esto, obviamente, está muy bien.

¿Y las provincias? ¿O sea que nosotros no vamos a decidir sobre nuestros suelos? Y no vamos a decidir por más que quieran hacer interpretaciones legales. Aquí está muy claro: no vamos a decidir. Ese inventario lo van a hacer desde otro lado. Y nosotros, ¿qué?

Aquí, el federalismo se afecta, el desarrollo se afecta y la ecología se afecta. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo presidente del Ianigla dijo que tienen muy poca capacidad técnica y, con mucha suerte, en cinco, seis o siete años terminan un inventario. Quienes estuvieron en la comisión los tendrían que haber escuchado y tendrían que haber preguntado. O sea que durante cinco, seis o siete años, señores: ¡paralicense! Por lo menos, los que estamos en zonas determinadas. ¡Paralicense! ¡Y roguemos—porque así, más o menos, lo dijo el presidente del instituto— que esté el inventario.

Señores senadores: tenemos que escuchar a los gobernadores. Yo digo: tantos gobernadores que en sus provincias tienen una posición, ¿no deben ser escuchados? ¿No han sido elegidos por su gente? ¿Sus legisladores no han sido

elegidos por su gente? ¿No saben? ¿Son irresponsables? Creo que tenemos que hacer un mérito técnico de este proyecto.

¡Y fijense cómo está hecho el tema de tierras prohibidas! ¡Otro error técnico que, inclusive, es hasta peligroso para ambientes periglaciales! Esto, en el proyecto de Diputados. El del Senado es más claro en eso. Porque, como bien dijo el senador Filmus en distintas comisiones, el del Senado es más restrictivo en algunas áreas. Lo que pasa es que ¿por qué es más restrictivo? Porque tiene bien definidas las áreas, y lo voy a leer. Fijense lo que queda prohibido: en glaciares, obviamente, toda actividad, que está perfecto. No puede haber actividad en glaciares.

Fijense esto: el proyecto de Diputados, el inciso *b*) no prohíbe en las áreas periglaciales las construcciones de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para investigación científica, etcétera. Si uno analiza este artículo, se dará cuenta de que en unos incisos dice expresamente qué se prohíbe en la actividad periglacial; acá, no. Si estamos ante un verdadero periglacial, señor, no podría haber ninguna obra de infraestructura. No debería haberla.

Tampoco prohíbe lo siguiente, señor presidente: la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividad industriales. O sea que en un área periglacial, ¿podrá haber una industria? Por ejemplo, una industria del plástico, que tiene muchos elementos que deben ser muy controlados. ¡Y no lo prohíbe! ¿Por qué? Porque las definiciones acá son enormemente laxas.

Obviamente, sí prohíbe en áreas glaciares y periglaciales la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. ¿Por qué? Porque las incluye en las restricciones para ambiente periglacial. Creo que ahí vino la preocupación del gobernador del Neuquén. Creo que acá hay muchas cuestiones técnicas, señores senadores, sobre las que deberíamos reflexionar.

Fijense que el término “periglacial”, acuñado en 1909, obviamente, ha recibido muchas modificaciones. Antes, se refería a lo “peri”, o sea, lo que circunda un área. Después, fue evolucionando. Entonces, ahora es “glaciar”, y “periglacial” lo que está al lado: la zona, el peligro, periglacial, etcétera.

Eso fue cambiando con el tiempo porque hubo procesos físico-geológicos de congelamiento y descongelamiento marginales a los glaciares. Voy a hablar de mi provincia. Nosotros, a partir de los dos mil metros, tenemos congelamientos esporádicos en suelos; dos mil metros: zonas de muchos habitantes; zonas que necesitan actividad y desarrollo. De tres mil a cuatro mil metros, tenemos congelamiento estacional y, a partir de los cuatro mil, obviamente, congelamiento permanente: del suelo, no del agua. Y acá, esta ley, perdonen la expresión, nos congela el suelo, no el agua.

Hay un artículo, en el que si hemos coincidido y que lo advirtió bien el senador Filmus –sigo hablando del proyecto de Diputados–, que no fue leído, no fue estudiado, o no sé. Pero fíjense: dice que en las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto esté finalizado el inventario. O sea, señores senadores, todas las áreas y cualquier actividad; absolutamente cualquiera. Lo dice la ley, en caso de que fuera aprobada. ¡Lean bien el artículo 17 que vino de la Cámara de Diputados! ¡Ninguna actividad, señor presidente! Olvídense del paso Mendoza-Santiago de Chile (*Risas.*) –discúlpeme–, hasta que tengamos finalizado el inventario.

Por eso, digo que esto va a ser motivo de judicialización; de presiones acerca de qué se va a autorizar y qué no. Porque, cuando una ley es amplia, las interpretaciones se suceden a la orden del día. Y estamos hablando de muchos años. ¿Por qué? Por falta de capacidad técnica, no de personal técnico, ya que el instituto tiene personas muy valiosas y con un conocimiento técnico muy interesante, pero que no dan abasto.

Fíjese, señor presidente: ¿quién va a decidir cuáles son las áreas que potencialmente entran en esto? La provincia no lo va a decidir; lo va a terminar decidiendo algún funcionario de la Nación con el cual habrá que hablar, conversar, convencerlo; o un juez. Entonces, creo que esas cuestiones las debemos tener en cuenta.

Señores senadores: ¿en las provincias, no sabemos cómo cuidar el desarrollo, cómo cuidar el ambiente, cómo cuidar la ecología?

Quiero agregar algo. Uno de los mayores desafíos energéticos del mundo para dentro de cuarenta o cincuenta años, que brinda energía

limpia y pura, es el litio. El mundo va a estar enormemente interesado en él. En Uyuni, Bolivia, está la mayor reserva del mundo. Algunos técnicos dicen –¡y ojalá sea así para el país hermano!– que si sabe aprovechar bien ese recurso, Bolivia será la Arabia Saudita de América Latina dentro de cincuenta años. No lo digo yo, lo dicen muchos científicos. Está en el norte de Chile, está en el norte de la Argentina: energía limpia. ¿Saben dónde entraría eso? En las zonas periglaciales. Una de las energías más limpias que tenemos y que podemos desarrollar. Están también los salares. Hay muchas zonas, señor presidente.

Por eso, digo que el defecto de esta ley es que, en Diputados, se quiso generalizar como si nos pudieran uniformar el territorio, y no es lo mismo Tierra del Fuego que Salta. Quizás, lo que hizo Tierra del Fuego debe estar absolutamente bien, pero Salta tiene otra área. Necesitamos estas cuestiones. ¡Hasta nuestras reservas de energía estarían en problemas! Éste es un asunto técnico, señor presidente, que puede tener consecuencias.

Estábamos muy contentos. ¡Basta ver las versiones taquigráficas del año pasado, en las que muchos senadores que expusieron estaban absolutamente contentos de cómo el Senado había sacado una buena posición! De golpe, nos encontramos con que es una ley mala y viene una ley mejor. Pero esto es porque se ha incurrido en errores técnicos y, creo, en atribuciones por las que se deja a las provincias fuera de las decisiones. Esto es así, cuando la ley que aprobamos en el Senado no deja afuera a la Nación. Por otro lado, no la podemos dejar fuera por la ley de medio ambiente nacional, por la ley de presupuestos mínimos y porque tiene que ser en concurrencia: la Nación tiene que tomar parte y debe hacerlo. De ninguna manera la excluyo. Pero la provincia es la que tiene que generar, porque el conocimiento, la cercanía, hace que sus técnicos, sus funcionarios y sus legisladores sepan cómo debe desarrollarse un lugar. Obviamente, si lo hacen mal, serán castigados judicialmente y, desde ya, en las votaciones. Porque empezó a haber en las provincias una especie de ambiente, en el sentido de considerar irresponsables a los legisladores.

Por ello, creo que tenemos que prestar atención. La ecología debe ser cuidada, y los

glaciares, absoluta y totalmente preservados, al igual que los periglaciares. En ese sentido, el presidente del Instituto de Nivología considera que el proyecto de ley del Senado preserva totalmente los glaciares y las zonas periglaciales. Eso fue expresado por quien, para mí, es la máxima autoridad en este tema.

Para finalizar: lo que estamos discutiendo aquí es cómo, qué, quiénes y cuándo.

**Sr. Presidente.** – La Presidencia informa que hay 34 senadores anotados.

De acuerdo con lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, todos los senadores podrán hacer uso de la palabra por 10 minutos, salvo los miembros informantes. De respetarse los tiempos, estaríamos votando entre las 2 y 30, y las 3.

Tiene la palabra el señor senador Filmus.

**Sr. Filmus.** – Señor presidente: trataré de ser breve.

Estamos en vísperas de contar con una ley que proteja a los glaciares y a las zonas periglaciales. No fue un camino fácil. La ley fue discutida, votada, debatidos sus fundamentos en reiteradas ocasiones. Fue discutida, entre cada uno de los debates que hubo, en no menos de siete audiencias.

Al existir dos proyectos, habiendo manifestado la presidenta Cristina Fernández su acuerdo con ambos y afirmado que se trataba de un tema importante y que, en consecuencia, no iba a vetar la ley, y habiéndose resuelto los temas principales de ambas iniciativas –relacionados con el veto anterior–, la Argentina puede estar tranquila, ya que seguramente tendremos una ley de protección de glaciares y periglaciares. Como dije, no fue fácil el trámite. El proyecto fue y volvió, discutimos, pero finalmente, la Argentina tendrá una ley que proteja tal vez el bien máspreciado, después de la vida, para la humanidad.

Entre la última vez que discutimos el proyecto y hoy, se produjo un hecho muy importante: las Naciones Unidas definieron, por primera vez, que el agua es un derecho humano que está por encima de cualquier otro derecho, como, por ejemplo, el de tener oro o cualquier metal. El agua es, para las Naciones Unidas, un derecho. Esa propuesta fue impulsada por Bolivia y, gracias al discurso de nuestro país, desde

hace poco tiempo es un derecho humano. Por lo tanto, el agua está entre las cuestiones que tenemos que cuidar, preservar y garantizar, para esta generación, para nuestros hijos y para las generaciones futuras.

Sólo el 2,5 por ciento del agua es utilizable, y el 70 por ciento de ese 2,5 por ciento está en las zonas glaciares y periglaciares. Entonces, dependerá de lo que nosotros hagamos allí si, efectivamente, ese derecho humano será protegido y quedará a disposición de la humanidad.

Me gustaría que los que estamos acá veamos qué países acordaron y qué países no acordaron. No hubo ningún voto en contra: hubo 122 votos a favor, pero grandes países centrales –que miran con simpatía nuestros recursos naturales– se abstuvieron. ¿Qué país se puede abstener de declarar el agua un derecho humano? Alguien que apetece el agua que tiene otro país. Porque mientras todavía una parte importantísima –uno de cada tres en la humanidad– no tiene agua potable, hay otros que la despilfarran. Voy a leer después algo del general Perón, en su discurso sobre el medio ambiente en 1972, donde le dedica un capítulo especial al agua, cuando nadie hablaba del tema. Él explicaba qué es lo que nos puede pasar si no la cuidamos.

Dicho esto, es del caso mencionar que, con sus matices y sus diferencias, tenemos dos proyectos, uno de los cuales se convertirá en ley. Ellos plantean como central este tema. Yo mismo fui quien defendió el proyecto del Senado en aquel momento, después de millones de discusiones y de debates, porque realmente nos habíamos comprometido a alcanzar un proyecto unánime. Lo cierto es que hoy vengo a defender aquí la definición que, a través de su proyecto, nos ha elevado la Cámara de Diputados, y lo hago con convencimiento.

Defendimos la otra iniciativa. Entonces, sería poco honesto decir que es un mal proyecto. Ahora bien, en la discusión que tuvimos por la necesidad de seguir aumentando los consensos para que el elemento principal, que es la defensa del agua, quede preservado, incorporamos algunos elementos que son positivos. Y permítame decirle al senador por Salta, que habló recién, que me parece que no lo leyó. Ni siquiera parece haber leído el dictamen que nosotros –por minoría– hemos firmado ayer. No lo leyó o, por lo menos, lo leyó de una manera que me parece



muy particular y con alguna mirada muy especial. Por ejemplo, hablaba de declaraciones. Acá estamos hablando de un proyecto de ley: ¿en dónde atenta contra algún punto del federalismo el proyecto de ley?

Insisto: este proyecto de ley fue votado dos veces por unanimidad en una primera instancia, cuando estaba el proyecto de Maffei; fue votado en condiciones similares aquí y en Diputados. ¡Diputados de las provincias! ¿Diputados de dónde? ¿De dónde son los senadores que votaron los proyectos anteriores? ¿Son senadores de la Nación, representantes de las provincias! ¿Dónde está el ataque al federalismo?

Quiero referirme a un punto anteriormente mencionado. No salgo de mi asombro. La Constitución, en su artículo 41, dice que los recursos naturales son de las provincias. ¿Hay algo que esté por encima de la Constitución? ¡No! Cuando sacamos en el punto uno que el recurso es de la Nación o de las provincias de acuerdo con el lugar en que esté, era para no malinterpretar que podía ser de la Nación lo que estaba en las provincias y no a la inversa, porque la Constitución es totalmente clara. Más aún: una de las razones del veto es que en el proyecto original no se había puesto que los parques nacionales son nacionales y que, entonces, lo que estaba ahí era claramente una omisión de la potestad que tenía la Nación sobre los parques nacionales.

**Sr. Presidente.** – Senador Filmus: el senador Castillo le pide una interrupción.

**Sr. Filmus.** – Cómo no, señor senador.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Castillo.

**Sr. Castillo.** – El tema de constitucionalidad o no lo vamos a discutir después.

Yo le pido que sepa resguardar los votos. No hubo unanimidad. Existieron votos disidentes en particular: uno de ellos, el de Pérez Alsina; otro, el de mi compañera de banca de aquel entonces, Marita Colombo; y el de quien habla, porque teníamos serios planteos con respecto a dejar de lado la actividad de las provincias en este tema.

**Sr. Presidente.** – Senador Filmus: continúe.

**Sr. Filmus.** – La Constitución es muy clara al respecto. Nosotros tenemos...

**Sr. Pérez Alsina.** – Pido una interrupción.

**Sr. Filmus.** – Es la última que permito.

**Sr. Pérez Alsina.** – Con todo respeto para con Daniel Filmus y brevemente.

Sé que usted ha estudiado el tema en profundidad, y respeto su postura. Pero lo que le pido con todo cariño es que no me diga que no lo leí. Diga que lo interpreté mal o que está en desacuerdo conmigo. Yo no diré nunca que usted no ha estudiado porque sé que lo ha hecho.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Filmus.

**Sr. Filmus.** – Perdón, pero se refirió a un artículo que no figura en el dictamen de la minoría. Es el caso del artículo 17. Se discute entre dos dictámenes y uno no contiene ese artículo. Pero pido que se me deje terminar y, luego, todos van a poder intervenir en el debate.

La primera cuestión es que no se puede agitar un falso federalismo, cuando esta norma lo que hace es respetar estrictamente la Constitución en los dos aspectos. Son recursos de las provincias, a tal punto, que se vetó el punto uno para que no haya malas interpretaciones. Es decir que los glaciares están bajo la órbita de Parques Nacionales o de las provincias. Entonces, no hay ninguna ofensa en ese sentido y, además, la Constitución está por encima de las leyes.

Por otra parte, tampoco se plantea cambiar la autoridad de aplicación, que corresponde a las provincias. ¿Qué hace la autoridad nacional? Claramente, lo único que hace a lo largo de toda la norma es contratar al Ianigla, que es un instituto conformado por la Nación, las provincias de San Juan y Mendoza y por la Universidad Nacional de Cuyo.

Se habla de un organismo nacional con participación provincial y de la Universidad Nacional de Cuyo que, justamente, es la especialista en estos temas, a la que se le asigna la función de hacer el inventario. Hasta que no se tenga el inventario, no se sabe qué se va a proteger. Porque de lo que se trata es de proteger zonas glaciares y periglaciares en cualquiera de sus acepciones. Es probable que las regiones en la Argentina sean muy diferentes. Pero un glaciar es un glaciar, se encuentre en una provincia o en otra. Y, como he dicho, de lo que se trata es de proteger zonas glaciares y periglaciares, de ahí que se hallen definidas en la norma.

Quiero decir que asistieron cuatro gobernadores. De ellos, una gobernadora, como se dijo



recién, defendió el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, dos dijeron que no tenían glaciares en sus provincias y el restante dio opiniones importantes en lo que hace al proyecto de ley. Por otro lado, hubo una declaración, que podría suscribir, que defendía la necesidad de complementar el desarrollo y la importancia de la actividad minera con el cuidado de los recursos naturales. En lo que hace a la provincia más austral, donde esta norma podría estar protegiendo más regiones, su gobernadora asistió con un informe hecho por los glaciólogos, donde se indicaba que se protegía el 1 por ciento del territorio, teniendo en cuenta la acepción de la norma sancionada por la Cámara de Diputados.

El presidente del Ianigla, el doctor Villalba, dijo que se hablaba del 1 al 1,5 por ciento. Entonces, ¿por qué habría que hacer minería en ese 1 o 1,5 por ciento si es que allí están las reservas de agua? ¿Cuál es la cuestión? Francamente, no entiendo. Puede ser que allí pase algo que sea muypreciado, y alguno se sienta muy tentado por cierta riqueza que no son derechos humanos. Tampoco se nos puede tomar a los senadores por gente que no conoce la realidad.

Me gustaría mostrar el mapa que se trajo indicando las zonas periglaciares y de congelamiento. Se trata de un mapa de 1959. Comenté que es posible que, en esa época, la humanidad fuera mucho más fría: yo tenía sabañones cuando estaba en la escuela primaria, y podía ser. ¡Pero muestra como zonas congelables a Misiones, Chaco, Santiago! ¡Se pondrían contentísimos todos! Es más: la mitad del Brasil, por ejemplo, figura también como zona congelable. Pero ¿no será que este mapa está mostrando cómo era la glaciología hace millones de años? Porque en una época, toda la tierra era glacial. Así que no se podría hacer nada en ningún lado, siguiendo ese criterio. Insisto: muestro este mapa que se exhibió como ejemplo de que no podríamos hacer nada en ningún lugar de la Argentina, con congelamiento permanente en Buenos Aires y en otras zonas, y congelamiento parcial, en el resto. ¡No es así!

Estamos hablando de dos proyectos buenos. No descalifiquemos el otro, porque ha sido seriamente discutido, seriamente elaborado y que tiene el mismo corazón, que no importa atacar el federalismo.

El senador Pérez Alsina brindó un buen ejemplo. La verdad, lo comprendo. Él puso como ejemplo la ley de prevención del tabaquismo, que acabamos de aprobar aquí, prácticamente, por unanimidad. Hubo un solo voto en disidencia. ¿Eso significa avanzar sobre el federalismo? La votamos nosotros, que somos los senadores de todo el país. ¿Cómo nosotros mismos vamos a avanzar sobre el federalismo? Me parece que no es así.

Lo que hemos hecho es cumplir con la Constitución. Existen recursos naturales que son de las provincias; asimismo, hay leyes de presupuestos mínimos que fijan parámetros y estándares para el resto. Por ejemplo: si una provincia cordillerana daña el agua –como alguno de los senadores podrá relatar acá– y la cuenca tiene que ver con otra provincia, estará dañando a la provincia de al lado. Hay una cuestión que tiene que ver con presupuestos mínimos.

**Sr. Presidente.** – Señor senador Filmus, discúlpeme...

**Sr. Filmus.** – Sí, por favor.

**Sr. Presidente.** – El señor senador Lores le solicita una interrupción, ¿se la concede?

**Sr. Filmus.** – Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Lores.

**Sr. Lores.** – Señor presidente: si bien el senador había dicho que era la “última”, este tema es muy importante.

El senador Filmus dijo hace un rato que el dictamen había excluido al artículo 17 del proyecto que vino revisado por la Cámara de Diputados. Yo entiendo que eso es absolutamente inconstitucional porque nosotros no podemos modificar el proyecto que vino ya revisado de la Cámara de Diputados sino que tenemos que aprobarlo o rechazarlo. De modo tal que, para nosotros, el artículo 17 está en plena vigencia y no se puede modificar este proyecto. Podemos decir que está bien y lo aprobamos, o no. Pero no podemos introducirle nuevas modificaciones.

**Sr. Presidente.** – Continúe, senador Filmus.

**Sr. Filmus.** – Señor presidente: solicito al secretario parlamentario su opinión al respecto, porque el reglamento, para nosotros, dice que se puede aceptar o rechazar cada una de las modificaciones.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor secretario Estrada.

**Sr. Secretario** (Estrada). – El tema de la revisión de lo que ha hecho la Cámara revisora fue acordado entre ambas Cámaras en 1995 en sentido similar al que la Constitución prevé para el veto parcial: es decir que el presidente de la República puede vetar total o parcialmente un proyecto.

De la misma manera, se acordó entre ambas Cámaras que la Cámara de origen podía aceptar, total o parcialmente, lo que la Cámara revisora hubiera modificado. Esto, incluso, fue incorporado expresamente en el Reglamento del Senado, en su artículo 177.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Lores.

**Sr. Lores.** – Señor presidente: el reglamento del Senado no puede estar por encima de la Constitución Nacional.

La Constitución Nacional no hace ninguna excepción. Dice claramente que el proyecto que viene revisado por la Cámara revisora –en este caso, la Cámara de Diputados– no puede volver a ser modificado por la Cámara de origen. No hay ningún tipo de excepciones. El reglamento dirá otra cosa, pero la Constitución es la norma suprema.

**Sr. Presidente.** – Senador Filmus: el senador Cimadevilla le quiere acotar algo.

**Sr. Filmus.** – Cómo no.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** – Señor presidente: reafirmando lo que expresa el senador Lores, la Constitución es muy clara. Incluso, el artículo 177 –si quieren, después lo discutimos– da para otra interpretación distinta de la que expresa el secretario Parlamentario.

Pero aunque el artículo 177 dijera lo que manifiesta el secretario Parlamentario, ningún acuerdo de las Cámaras puede violar lo que la Constitución expresamente establece en su artículo 81, que no es materia de interpretación; es cuestión de aplicarlo literalmente.

**Sr. Filmus.** – Volviendo a la cuestión, señalo que podemos discutir lo legal más adelante, pero desde ya les digo que hay jurisprudencia, porque hay varios casos donde se hizo de esta forma. De cualquier modo, se puede discutir.

Estoy hablando de lo que planteamos nosotros; en el momento de la votación, lo discutiremos.

Éste es un proyecto de ley de presupuestos mínimos, y hay ocho provincias en la Argentina –por ejemplo, San Luis, Córdoba, Chubut y varias más– que aprobaron leyes de prohibición de minería a cielo abierto. Es decir, nosotros no estamos avanzando sobre ese tema. Quizás, esta polémica genera una discusión en la Argentina, también, respecto de esa cuestión. Esas son leyes mucho más duras que el proyecto que estamos discutiendo en este momento, y son las legislaturas de las provincias, los representantes de los pueblos de las provincias, los mismos que están acá discutiendo y que aprobaron varias veces leyes similares a la que estamos debatiendo en el día de hoy.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: como hay número suficiente para votar, creo que podríamos cerrar la lista de oradores y, a la vez, fijar un criterio para que las exposiciones se extiendan no más de diez minutos.

**Sr. Presidente.** – Cómo no.

**Sr. Pichetto.** – ¿Por qué no votamos la lista de oradores? Si hay algún otro senador para incorporarse en la lista, que lo haga en este momento.

**Sr. Presidente.** – Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Después del senador Filmus, figuran anotados los siguientes senadores: Alfredo Martínez, Díaz, Basualdo, Montero, Lores, Fellner, Torres, Monllau, Di Perna, Rojkés de Alperovich, Petcoff Naidehoff, Quintela, Cimadevilla, Bermejo, Riofrio, Morandini, Juez, Parrilli, Cano, Higonet, Vigo, Negre de Alonso, Banicevich, Estenssoro, Corradi de Beltrán, Corpacci, Corregido, Gioja, Romero, Castillo, Giustiniani, Sanz, Verna, Rodríguez Saá, Morales y Pichetto.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.

**Sra. Rojkés de Alperovich.** – Señor presidente: en virtud de la cantidad de oradores y la hora en que estamos sesionando, solicito permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.

**Sr. Presidente.** – Como dijimos antes, los miembros informantes dispondrán del tiempo que requieran, recomendando prudencia en la extensión, y el resto de los oradores tendrán diez minutos.

Se va a votar el cierre de la lista de oradores.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Señor senador Filmus: para un mejor control, quiero plantearle una inquietud. ¿Qué proyecto es el que estamos tratando?

**Sr. Pichetto.** – El dictamen de minoría.

**Sr. Presidente.** – Que es distinto del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

**Sr. Pichetto.** – Es el mismo, con la supresión del artículo 17.

**Sr. Presidente.** – ¿Nada más? Quiero que esto quede claro porque hay confusión en algunos señores senadores.

**Sr. Pichetto.** – Es la sanción de la Cámara de Diputados, con supresión del artículo 17.

**Sr. Presidente.** – O sea que se elimina el artículo 17.

**Sr. Pichetto.** – Sí.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Filmus.

**Sr. Filmus.** – Continúo, señor presidente.

Quiero ejemplificar que no se trata de que hace poco votamos una ley respecto de la prevención del tabaquismo sino que, además, la ley 25.916, de gestión de residuos domiciliarios, fija también varias prohibiciones en dirección a presupuestos mínimos. La ley 25.670, que trata sobre el PCB, también los fija e, incluso, hace no mucho tiempo se votó la ley 26.331, que establece presupuestos mínimos para la protección ambiental de bosques nativos. Acá mismo se trató un proyecto de ley de quien les habla que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de actividades de quema, y así podría seguir mostrando que esto no atenta contra el federalismo. Estamos hablando de presupuestos mínimos y tenemos toda la posibilidad de hacerlo.

También quiero plantear que no entiendo la contradicción. El presidente del Ianigla, el señor Villalba, según podemos leer todos, porque estuvo conversando en la comisión en la primera

reunión abierta que hicimos, excelentemente coordinada por su presidente, el senador Torres, planteó con detalle por qué el proyecto que viene de la Cámara de Diputados es totalmente aplicable y no es un lugar indefinido. A tal punto que el senador preopinante dijo que las dos sanciones eran más o menos parecidas y que hablan del mismo espacio. Si fuera así, ¿entonces cuál es el problema? Ahora bien, está claro que él lo planteó –me ha mandado otros escritos al respecto– porque es un defensor de ese proyecto.

Es muy claro: es el suelo saturado en hielo sólo si regula recursos hídricos. Respecto a eso que usted está diciendo que de repente congela y de repente descongela, no estamos hablando de que hay una noche de congelamiento muy fría en la Capital Federal porque no regula recursos hídricos. Tiene que aportar a una cuenca hídrica. Ése es el elemento central.

Él lo dijo perfectamente: sólo se puede aplicar esto teniendo en cuenta el artículo 1°. Estamos hablando de las reservas estratégicas de recursos hídricos. No es una zona, una nieve o un hielo ocasional una reserva estratégica de recursos hídricos, que es el objetivo de esta ley. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es importante poder plantear lo que dice el artículo 2°.

Una acotación más. El artículo 6° no puede entenderse sin el artículo 7°. Se dijo: se permitirá en una zona periglacial una industria de plástico. No, la ley no dice que se permitirá en la zona periglacial una industria plástica. Dice: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas –por ejemplo, en la sanción de la Cámara de Diputados se dice que una industria, el turismo o alguna otra actividad en la zona periglacial– estarán sujetos a procedimientos de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. No es que están permitidas. Si la actividad que alguien quiera hacer en la zona periglacial va a afectar el glaciar o las reservas estratégicas de agua, claramente pasa al artículo 7°, que es explícito. De manera que me parece una lectura fácil plantear que el artículo 6° es el que define esta situación sin analizar lo que dice el artículo 7°.

Voy a ir cerrando mi exposición, señor presidente, en aras a la brevedad, porque además es

un tema sobre el que hemos hablando, reiterando la importancia que tiene lo que estamos discutiendo hoy; reiterando que para satisfacción y la preservación de los derechos humanos de los argentinos, y en particular el derecho al agua, vamos a tener un proyecto que se convierta en ley prontamente. Puede ser un proyecto más abarcativo, un proyecto que hizo un esfuerzo más para lograr un consenso u otro, pero de ninguna manera va a ser lo que en una primera solicitada de hace poquito tiempo –porque se ha gastado muchísima plata en solicitadas en estos últimos días– algunas cámaras pusieron que en realidad la Argentina no necesitaba ninguna ley, porque es lo que estamos discutiendo de fondo...

**Sra. Ríofrío.** – ¿Quién?

**Sr. Filmus.** – Hablé de las cámaras mineras.

–No se alcanzan a percibir palabras de la señora senadora Ríofrío.

**Sr. Filmus.** – Perdón, pero algunas provincias pueden tener ley y otras no. Estoy diciendo si la Argentina necesita una ley de presupuestos mínimos, que es lo que estamos discutiendo justamente. Yo hablaba de las cámaras mineras.

¿Qué decía esa solicitada puntualmente? La Argentina tiene legislación de preservación ambiental. No necesita una ley específica para glaciares. Nosotros, los que defendemos este proyecto, los que estamos convencidos de que este proyecto no atenta para nada contra el federalismo, que este proyecto es claramente un proyecto que permite avanzar en un consenso con respecto a las zonas a preservar, a las actividades a prohibir, a las evaluaciones de impacto ambiental estratégico que es necesario realizar, a los tiempos que es necesario colocar para que las actividades que ya están en curso o que van a estar en curso tengan prontamente su inventario realizado, estamos convencidos de todo ello porque este proyecto lo permite hacer.

Sin embargo, me atrevo a pensar que justamente les agradecemos a aquellos –y no estoy hablando en este caso de senadores, senadoras o diputados o diputadas, ni tampoco de autoridades provinciales o nacionales– que hicieron un lobby para que ningún proyecto de protección de glaciares pueda prosperar en este Congreso, a aquellos que privilegian las industrias extractivas –que no se trata, como se dijo, de que

tienen mala prensa, porque si no dañan el medio ambiente bienvenidas sean, pero si tenemos que definir una prioridad, nuestra prioridad es con el ambiente y con las condiciones de vida de nuestra población, porque el haber generado la profundidad de este debate va a hacer que este debate sea el primero de muchos debates que va a dar el pueblo argentino para conquistar más derechos, como son estos nuevos derechos que tienen que ver con el ambiente.

Si tenemos que decir algo –y lo dije hace pocos días acá cuando votamos la ley de matrimonio igualitario–, algo que ha pasado desde el año 2003 en adelante es que nuestra sociedad se ha abierto a un horizonte nuevo respecto de la conquista de nuevos derechos.

No era posible –y vuelvo al tema del tabaco– votar acá hace un tiempo una ley que protegiera del tabaquismo; nosotros lo hicimos. No era posible el matrimonio igualitario; nosotros lo hicimos. Se ha avanzado con la Asignación Universal por Hijo en este gobierno.

Se ha avanzado con los derechos de los trabajadores, tal como hemos votado. Y seguramente avanzaremos en el derecho ambiental, en el derecho al agua, que –insisto– es un derecho humano.

Así que, de esta manera me parece que vamos a dar un paso. Invito a todos los senadores y senadoras, a pesar de que tengan posiciones tomadas, a que demos el paso que hay que dar y que no demos medio paso o tres cuartos de paso, que era importante. Cuando discutimos acá defendí el medio paso y los tres cuartos de paso, porque me parecía que era un consenso alcanzado muy importante, porque vamos a volver a discutir acá para dar el tranco que nos falta. Lo podemos dar acá. La vez pasada, en oportunidad de tratarse el tema del matrimonio igualitario, si debía ser unión civil o no y dijimos “derechos iguales”, y si vamos a proteger las reservas de agua hagámoslo, si no vayamos a proteger el oro. Pero aclaro que ese oro termina en forma de lingote en Suiza, y el agua termina en todos los hogares del pueblo argentino, que es lo que venimos a discutir acá.

Demos el paso. Avancemos. Somos un pueblo decidido a seguir conquistando derechos. Conquistémoslos. Seguramente vamos a avanzar. No desvalorizo el avance y el paso que vamos



a dar con cualquiera de los dos proyectos; es un paso importante.

Me gustaría, propongo, reviendo mis propias posiciones –como también lo había hecho con el proyecto sobre el matrimonio igualitario– que demos el paso que nuestro pueblo se merece, seguros de que si protegemos un poco más el agua de lo que debiéramos, no nos estaremos equivocando; pero si protegemos un poco menos el agua de lo que debiéramos, seguramente esta, la próxima y las siguientes generaciones nos lo van a reclamar.

Insisto en que éste es un tema que –como muchos medios de comunicación lo señalaron– fue caliente en la discusión para resolver un tema de las zonas congeladas. Pero, bienvenida esta discusión. Los representantes del pueblo en esta Cámara hemos llevado adelante una discusión importante, con altura, argumentando y planteando con honestidad nuestra posición.

Se han realizado cerca de diez audiencias. Hemos escuchado a todos los actores. Queremos que nadie se quede sin trabajo y que haya mucho más trabajo en la minería. Lo único que decimos es que ese trabajo no se efectúe en los lugares donde están las reservas estratégicas de agua. Eso es lo único que estamos discutiendo acá.

El ingeniero Villalba, presidente del Ianigla, habló del 1,5 por ciento, y dio el caso concreto de Mendoza, por ejemplo, donde dijo que, según el inventario que ya está avanzado –y los legisladores de Mendoza no me van a dejar mentir–, se habla del uno por ciento del territorio. ¿Por qué ese uno por ciento puede ser tanpreciado para otras actividades? Me parece bueno que avancemos en esa dirección.

**Sr. Presidente.** – La Presidencia quiere hacer una acotación por la inquietud planteada por el señor senador Lores.

Solicito al secretario parlamentario que lea un acta que hace referencia a los antecedentes sobre lo que se planteaba.

**Sr. Secretario (Estrada).** – Esto ya está incorporado a los reglamentos de las Cámaras.

“En dependencias del Congreso de la Nación, el día 26 de octubre de 1955, se reúnen las autoridades de ambas cámaras que firman al pie, a efectos de compatibilizar la interpretación del procedimiento previsto en el artículo 81 de la Constitución Nacional. Y al respecto se

acuerda: 1°.- Cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquella aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora. 2°.- Las comunicaciones de las sanciones de la revisora cuando el proyecto de ley vuelve a la de origen, deberá indicar el resultado de la votación que correspondió en particular a cada artículo, a fin de establecer si las adiciones o correcciones fueron realizadas por la mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes”. Esto es la parte dispositiva del acta.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Martínez.

**Sr. Martínez (A. A.).** – Señor presidente: antes de empezar a hablar concretamente sobre el tema, quisiera plantear que hubo algunas manifestaciones –diría de ambos lados– y las más duras, sin duda, y a pesar de tener una posición distinta de la del senador Gioja, han sido las denuncias absolutamente gratuitas. Si hay denuncias que vayan y que las hagan. En esto estoy de acuerdo.

Quiero reivindicar que las diferencias de posiciones en este tema las hemos resuelto con mucha madurez. Hubo audiencias públicas –como bien dijo el senador Filmus– que han sido transparentes y donde cada uno ha expresado su opinión. Considero que esto fue bueno y saludable.

Con respecto a las declaraciones formuladas por los señores gobernadores de las provincias cordilleranas, no tenemos más que estar absolutamente de acuerdo. Hablan de conformidad con el artículo 124, que dispone que los recursos naturales, incluidos los glaciares, son de dominio de las provincias. Hablan también de que cumplen funciones como reservas estratégicas, de recursos hídricos o como proveedores de agua, de recarga de las cuencas hidrográficas y que es necesario generar protección sobre ellos.

– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado de la Nación, don Roberto Gustavo Basualdo.

**Sr. Martínez (A. A.).** – Hablan también de que esto debe hacerse sin comprometer las ne-



cesidades de las generaciones futuras; es decir, compatibilizar el cuidado de este recurso con lo que son los distintos procesos de desarrollo que cada una de las provincias o regiones puedan llevar adelante; que el referido desarrollo sustentable con protección y cuidado del ambiente es política de Estado en cada una de nuestras provincias. Y esto nos alegra porque, en definitiva, nos da la posibilidad concreta de dictar una norma con mucha tranquilidad y sin interferir en una ley de presupuestos mínimos. Inclusive, hay legislaciones provinciales que son mucho más duras que cualquiera de los dos temas que estamos tratando. Incluso, he tenido oportunidad el día lunes de estar en la provincia de Mendoza, donde había funcionarios como Carmona, estaba la gente del Ianigla y había abogados, y veíamos que por ser una ley definitiva en la provincia tiene la definición de glaciares y de zona periglacial. Y tiene también el criterio, porque esto lo hizo la gente del Ianigla, que es parte integrante del gobierno de Mendoza en esta organización, de zona periglacial como reserva estratégica de suelos congelados, que es lo que estamos viendo en el proyecto de ley en revisión de la Cámara de Diputados.

De alguna manera, para reafirmar esto, en el Código Civil se habla con mucha claridad cuando dice que quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la actitud de satisfacer usos de interés general, estos son glaciares y hielos congelados. Sabemos que los glaciares son agua congelada. En esto tenemos la absoluta certeza de no estar avanzando sobre jurisdicciones de las provincias.

Por otro lado, cuando veíamos la diferencia entre una ley y la otra, cuando hicimos el proyecto de ley en el Senado hablábamos de lo que tenían que ser los glaciares descubiertos, cubiertos y los glaciares de escombros. Cuando hablamos de aguas en las definiciones, cuando vamos a glaciario de escombros, cuando vamos a suelo periglacial, que tiene que ser suelo congelado que actúe como regulador del recurso hídrico o regulador del recurso hídrico con suelo saturado en hielo, esto es cuando habla de la alta, media y baja montaña, estamos hablando de la definición de los glaciólogos del permafrost. El permafrost es el suelo aquel que

es el elemento regulador que nos permite poder avanzar en aquellos lugares que tienen procesos de desarrollo de actividades, como pueden ser las provincias de Mendoza y San Juan, donde los productos que están desarrollados desde la agricultura no son anuales, sino que son perennes. Es decir, si la vida no puede regarse durante un año, lamentablemente el proceso de desarrollo no puede continuar porque hay un compromiso muy fuerte.

En esto los glaciares intervienen –y esto lo hemos visto el otro día cuando lo explicaba Villalba con mucha claridad y que Carmona también adhería a este tipo de situaciones– aportando entre ocho y diez por ciento a las cuencas hídricas; y durante los años en los cuales no había nevadas suficientes para poder garantizar los caudales, ese porcentaje era el que permitía que se siga regando.

Todos somos conscientes de que estamos en un proceso de verano glaciario, esto es así de claro. No hay retroceso de los glaciares, técnicamente hay destrucción del frente. No es que vayan retrocediendo porque los glaciares avanzan en la generación.

Reitero, en el artículo 2° tenemos la definición que garantiza la misma zona de protección, respecto de glaciario cubierto o descubierto, no hay ningún tipo de dudas ni discusión, y glaciares de escombros o zona periglacial con suelo saturado en hielo que sea regulador del recurso hídrico, es exactamente lo mismo. Inclusive, en la charla que hubo en Mendoza nos mostraban fotos donde es visible desde la geoforma que tiene, que es tierra o roca lo que se ve, se veía con mucha claridad cuál era y cuál no el regulador del recurso hídrico. Digamos, se definía con bastante rapidez y claridad.

Cuando se habla de que hay que avanzar para hacer un inventario, el Ianigla es sin duda uno de los organismos técnicos que nadie pone en discusión que tiene la capacidad técnica para coordinar la tarea. Esto lo decía bien Villalba, para coordinar la tarea y para decir en todos lados que las manzanas son manzanas y las peras son peras, y no tener diferencias de definiciones. Porque lo que evita la litigiosidad es que la definición no la van a hacer los jueces de lo que es glaciario o periglacial, sino que la va a hacer el Ianigla. Y va a ser lo que, de alguna

manera, ordenará para que pueda aplicarse una legislación sin ningún tipo de inconvenientes.

Cuando seguimos analizando cómo se va a realizar el inventario, o cómo se está realizando el inventario, hay provincias como San Juan y Mendoza que han avanzado mucho. Mi provincia, Santa Cruz, tiene también relevamientos hechos. Creo que esto es lo que realmente garantiza que sea rápida la posibilidad de realizarlo.

Por otro lado, cuando consultábamos a las cámaras mineras, todos nos aseguraron que ellos no estaban actuando sobre glaciares o zonas periglaciales. Esto fue en charlas que hemos tenido en las que nos han manifestado exactamente lo mismo.

Después voy a seguir bajando quizás un poco más a mi provincia para ser más puntual en algunos aspectos.

Cuando hablamos del inventario, el Ianigla —dice— lo hará con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Esto está en el artículo 5. Si vamos al artículo 9°, nos dice con mucha claridad quién es la autoridad de aplicación y cómo se conforma. Allí está el COFEMA, que es, en definitiva, la representación de los organismos de mayor jerarquía de cada provincia en el ámbito de preservación del medio ambiente. Dará intervención, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la demarcación de zonas en las que haya algún mecanismo de posibilidad de diferencias en lo que tiene que ver con los límites. Arregla también una cuestión que fue de forma, pero me parece que era más que interesante. Con la ley que nosotros mandamos, incorporábamos también lo que era el Instituto del Antártico para la zona antártica, y en realidad la provincia de Tierra del Fuego es la que tiene la jurisdicción y es lo que quedó en la ley que viene de Diputados.

Por supuesto, también quedaba claro que la jurisdicción de Parques Nacionales era una jurisdicción nacional, y allí la legislación de preservación que tiene Parques Nacionales es muchísimo más dura que cualquiera de la que nosotros o cualquier provincia pueda establecer, porque no solamente es sobre zona de glaciar o periglacial, sino que es sobre toda la superficie del parque nacional.

Es también importante señalar que hay una gran superficie de glaciares que están dentro de los Parques Nacionales. Es más, en mi provincia, salvo lo que es el campo de hielo continental, la mayoría de los glaciares está bajo la jurisdicción de Parques Nacionales.

Un artículo que es importante volver a remarcar es el 6°. Cuando habla de actividades prohibidas, recuerdo cuando avanzamos, después de haber sancionado la ley, tuvimos observaciones con respecto a la construcción de caminos o de obras de arquitectura que tenían que ser afectadas por la zona periglacial. En el proyecto que nosotros teníamos se prohibía la construcción de obras de arquitectura o de infraestructura en la zona glaciar y sobre los glaciares de escombros.

En la sanción que viene de Diputados, cuando uno lee el artículo 6° inciso b), con mucha claridad establece que está prohibido realizar ese tipo de intervenciones en los glaciares, pero no menciona la zona periglacial, que sí lo hace para la dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes y para la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Para este tipo de obras de ingeniería y arquitectura queda liberado a quien es la autoridad competente, a través de un estudio de impacto, poder llevar adelante este tipo de actividades.

Cuando vamos a la evaluación del impacto ambiental, la diferencia entre lo que mandamos nosotros y lo que viene de Diputados es establecer la evaluación ambiental estratégica, según corresponda. ¿Esto qué significa? Donde en una cuenca aparezca más de un proyecto de intervención, de construcción o lo que fuere, lo que hay que hacer es un estudio conjunto. Es decir, si hay una actividad que requiere mil litros de agua y hay otra que requiere otros mil, lo que se tiene que estudiar es que la cuenca tenga la capacidad de tomar dos mil litros de agua sin generar ningún tipo de problema. Esto es lo que significa, con mucha claridad, “evaluación ambiental estratégica”. Luego, sigue exactamente igual, aplicando lo establecido en la Ley General del Ambiente, en los distintos artículos que tienen que ver con esto.

Las excepciones son exactamente las mismas: de rescate, científicas realizadas a pie, deportivas, etcétera, que no perturben el ambiente.

El artículo 8° establece la autoridad competente que, en este caso, es la que determine

cada jurisdicción, esto es, cada provincia. En el caso de las áreas protegidas, comprendidas por la 22.351, será Parques Nacionales; pero es la jurisdicción, la provincia, la autoridad competente en cada una de estas cosas. La autoridad de aplicación, en el artículo 9º, como habíamos dicho, es el organismo nacional de mayor jerarquía con competencia ambiental.

En el artículo 10 advertimos que interviene el COFEMA y los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias. Nuevamente las provincias están, a través del COFEMA, en este tipo de situaciones. Habla de cuáles son: coordinar la organización, aportar la formulación de una política referente al cambio climático, que es otro elemento que se incorpora y que no habíamos tenido en cuenta en aquella primera ley que habíamos votado; elaborar los informes, porque el inventario no solamente hay que ejecutarlo sino que, cada cinco años, hay que proseguir para hacer un seguimiento de cómo va evolucionando. Como bien decíamos antes, estamos en un período de verano glaciario, pero lo que tenemos que hacer es evitar todas las acciones que aceleren, de alguna manera, la degradación de los glaciares.

Infracciones y sanciones. En esto no hay diferencias entre los proyectos. No tiene sentido hablar al respecto. Lo importante es que, en su momento, este debate fue zanjado rápidamente. Los importes percibidos por la autoridad competente, es decir, de la provincia, en concepto de multa, se destinarán prioritariamente a la protección y restauración del ambiente afectado, en el caso en que fuera afectado.

Después está la cláusula transitoria, el artículo 15, que se refiere a que se deberá hacer un cronograma rápidamente, por parte del Ianigla, para comenzar la ejecución del inventario. Se señala que la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º se considere prioritaria. Estas zonas deberán realizar el inventario en un plazo no menor de 180 días. Luego sigue exactamente igual, pero hay una pequeña diferencia cuando llegamos al final del articulado. El proyecto sancionado aquí dice que, en caso de verificarse impacto significativo, dichas autoridades ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la presente ley. Esto es lo que dice el proyecto del Senado. El que viene de Diputados dice que, en caso

de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial contemplados en el artículo 2º, las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad. Es decir, la jurisdicción es la que va a determinar este tipo de actuaciones, por supuesto cumpliendo no solamente con esta ley sino con la que cada provincia tenga.

Con respecto al Sector Antártico Argentino, sabemos que, no por jurisdicción pero sí por los convenios, el Tratado Antártico y el Protocolo del Tratado, como protección del medio ambiente es algo que debe ser tenido en cuenta.

Habíamos dicho también que, en función de que el artículo 15 garantizaba la posibilidad concreta de controlar las actividades, tanto las existentes como las nuevas, no tenía sentido la aplicación del artículo 17, que es la razón por la cual nosotros lo eliminamos del dictamen, si bien hay gente que tiene algunas diferencias sobre el tema.

Con respecto a mi provincia, cuando comencé a analizar este tema, había tres emprendimientos muy importantes y me interesaba saber si iban a ser afectados o no por esta ley, cualquiera de los dos que pudiera aplicarse. Una es la actividad de la mina de Río Turbio, no solamente por la mina en sí, sino por el proyecto de la megasina, que ya está en marcha. Cuando fui a buscar información técnica me encontré con el inventario de recursos naturales hecho por la Secretaría de Minería de la Nación, confeccionado por geólogos y glaciólogos, quienes hablan con mucha claridad cuando analizan el tema de la zona de Río Turbio. Hay un mapa de geología, que es el plano AZRT —como dicen siempre los muchachos— 3GOE1, donde se habla de la orografía y de la fisogeografía de la zona, que define con mucha claridad y dice que la región precordillerana, por su parte, alcanza alturas máximas de más de mil metros en las mesetas La Torre y Cordillera Chica, y del orden de los 800 en la sierra Dorotea. Estas alturas determinan que las partes más elevadas de la región, por encima de los 700 metros —repito: 700 metros— se encuentran comprendidas en un ambiente periglacial. Por debajo del nivel periglacial el clima se torna más templado, las precipitaciones permiten el desarrollo del bosque natural, etcétera.

Cuando averiguo cuál es la mayor altura ocupada por el hombre en esa zona, advierto que es un centro de esquí denominado Valdelen, ubicado a 680 metros sobre el nivel del mar, es decir, por debajo de la zona periglacial. Asimismo, la mina está por debajo de esa altura, al igual que la superusina. Por lo tanto, me quedé tranquilo, ya que no generaremos ningún tipo de problemas.

Los otros emprendimientos importantes son dos represas –Cóndor Cliff y La Barrancosa–, ubicadas sobre las aguas que vienen de Lago Argentino, pero ambas están muy alejadas de la zona del lago, lo que implica que es una zona que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser definida como zona periglacial. Caso contrario, tendríamos que estar pensando en sacar Piedra del Águila, El Chocón, etcétera, lo cual no es la intención del proyecto ni, mucho menos, la mía. En consecuencia, esos dos emprendimientos estarían garantizados.

¿Cuál es el tercer emprendimiento? En mi provincia se está analizando hacer la ruta 41, que iría paralela a la ruta 40, entre ésta y la zona cordillerana. Es una ruta turística, realmente muy interesante, donde sí puede existir zona periglacial. Ahora bien, en virtud del artículo 6º, que elimina la prohibición de hacer obras de ingeniería y de arquitectura, con un estudio de impacto ambiental esa ruta podría ser construida.

Ésas son las razones que me hacen estar absolutamente convencido de que todos los emprendimientos ubicados en mi provincia podrán seguir funcionando. Me refiero concretamente a emprendimientos mineros y de generación hidrocarburífera. Tengo la absoluta tranquilidad de que votaré un proyecto a través del cual se preservará un elemento tan importante como el agua, y que permitirá el desarrollo sostenido y sustentable de mi provincia.

Reitero, éstos son los motivos que me llevan a apoyar el proyecto de ley que viene con sanción de la Cámara de Diputados; independientemente de algunas cuestiones que tienen que ver con las inversiones realizadas por las cámaras mineras, en función de las últimas solicitadas. En ese sentido, creo que no debemos tener temor a ningún tipo de fundamentalismo, ni de los ecologistas ni de aquellos que quieren llevar adelante explotaciones mineras.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, don Juan Carlos Marino.

**Sr. Martínez (A. A.).** – Quizás, en mi provincia me estén “sacudiendo duro” algunas de las cámaras mineras, porque una de las cosas que quiero hacer –después de que se apruebe esta ley, y que no tiene nada que ver con la minería– es comenzar a discutir la renta minera. A mi provincia, el año pasado, la minería le dejó 17 millones de pesos, y salieron unos cuantas miles de onzas de oro. Además, tuvimos que pagar reembolso por puerto patagónico. Ustedes se acordarán de ese pequeño pesquero que se hundió cuando salía de un puerto de Santa Cruz para ir hasta Punta Arenas, ya que allí se embarca el oro en un avión con destino a Suiza o a Sudáfrica, donde se hace la definición, ya que en mi provincia no hay refinerías para realizar ese proceso.

Por lo tanto, el motivo de que en mi provincia me estén “dando duro” quizá tenga que ver con lo que impulsaremos después. Y reitero, no se trata de una ley antiminera, sino de una norma que protege un recurso tan importante como el agua potable.

**Sr. Gioja.** – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Martínez (A. A.).** – Sí, cómo no.

**Sr. Presidente (Marino).** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.

**Sr. Gioja.** – Comparto con usted que hay que replantearse el tema de la renta minera.

Cuando se confeccionaron las leyes relacionadas con la promoción de la minería, en el país no existía ningún tipo de desarrollo y había que promocionar la actividad en orden a promover la instalación de emprendimientos. Obviamente, pasó el tiempo, las condiciones cambiaron, se demostró la viabilidad del negocio y, en consecuencia, actualmente hay que replantearse las medidas que deben ser adoptadas.

En ese sentido, con muchísima humildad le expreso al senador preopinante que yo ya me he ocupado del tema, y que presenté un proyecto de ley a través del cual se replantea el modo de pagar las regalías mineras, que es uno de los mecanismos con el que las empresas mineras compensan a las provincias. Ese proyecto está en la Comisión de Minería, Energía y Com-



bustibles y espero que podamos considerarlo y conjuntamente analizar la cuestión de la renta minera para que haya equidad en la distribución con sentido común, con inteligencia, sin matar la gallina de los huevos de oro, pero apuntando a que realmente la minería sea un factor de crecimiento y de desarrollo, y no un mecanismo de engrandecimiento para un único sector.

Le agradezco la posibilidad de interrupción.

**Sr. Martínez (A.A.).** – Mañana firmo el proyecto y lo acompaño.

**Sr. Gioja.** – Me parece excelente. Con mucho gusto.

**Sr. Presidente (Marino).** – Tiene la palabra la señora senadora Díaz.

**Sra. Díaz.** – Señor presidente: el debate que nos convoca hoy sobre estos dos proyectos de ley de protección de glaciares y esta supuesta confrontación entre desarrollo y ambiente, más allá de los titulares del día, seguramente pasará a la historia. Los actos y marchas, las personas que se han movilizado durante todo este tiempo hasta aquí, las trescientas asambleas ciudadanas, las ciento cincuenta organizaciones ambientalistas y los sectores técnicos, profesionales y de la producción, agrupados alrededor de la defensa de una norma protectora del ambiente glaciar y periglacial así lo demuestran.

La población indicó hace ya tiempo que no está dispuesta a ceder la representación por la defensa de los bienes comunes de la Nación. Guleguaychú, los pueblos fumigados, los habitantes de Vicente López, que este fin de semana acaban de desalambrar un vial costero que les impide el acceso público al río, entre otros múltiples ejemplos a lo largo y ancho de nuestro país, dan fe de esta nueva situación política. El mapa de la conflictividad social puede superponerse con el de la problemática ambiental y sería saludable tomar nota de este mensaje popular. Esto dicho para quienes aún creen que el cuidado del agua obedece a una visión ingenua, cargada de esnobismo verde y reñida con la lógica racional del desarrollo a la vieja usanza moderna. Ese paradigma naufraga, aunque a mediano plazo todavía genere dinero, como lo demuestra la crisis civilizatoria que jaquea el modelo de consumo y producción mundial. A esto se suma el fracaso de la Cumbre de Copenhague del año pasado donde resultó

evidente la dificultad de todos los gobiernos mundiales para alcanzar mínimos acuerdos en cuestiones estratégicas para la supervivencia de la vida en el planeta.

El mundo desarrollado no se pone límite y el subdesarrollo pugna por ingresar al mercado global. Y no son palabras dramáticas, sino apenas la descripción del proceso que compromete la producción de alimentos y señala nuevas catástrofes climáticas locales e internacionales.

Ayer la gobernadora de mi provincia dijo que resulta difícil defender lo obvio, que el agua, las cuencas, el ecosistema no entienden de jurisdicciones y que poco sentido tiene el desarrollo sin las personas. Aunque nos han amenazado con que toda la provincia sería declarada como ambiente periglacial, según las modificaciones agregadas por Diputados, quedó demostrado que la protección apenas comprende el uno por ciento del territorio provincial, cifra que se extiende al resto del país. Por lo tanto, esos mapas cargados de ambiente periglacial hasta en zonas tropicales expresan una imaginación sin límites más que un relevamiento de las reservas de agua congelada, de allí que mi provincia no se siente apremiada y menos al punto de cuestionar los pactos constituyentes, como se llegó a plantear en algunas reuniones de comisión.

También es justo recordar, como lo mencionó el doctor Estrada Oyuela, que el dominio de las provincias, expresado en el artículo 124 de la Constitución, tiene limitaciones y quien las determina es el soberano. Especialmente es el caso de las cuencas hídricas interprovinciales, en las que el Estado debe ser garante de la unidad de la cuenca. Se debe garantizar la solidaridad entre las distintas provincias en función del territorio nacional.

Somos un país federal y no una serie de departamentos autónomos. En este sentido se expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Mendoza y en el caso “Villivar”.

El proyecto original del Senado de la Nación desconoce la evaluación ambiental estratégica, lo que genera situaciones preocupantes en las que megaemprendimientos ubicados a escasa distancia uno del otro no tienen en cuenta o no son mencionados entre sí en los respectivos informes ambientales.

Por estos días, también fue muy conversada la cuestión de la seguridad jurídica, un argumento que va desgastándose con el uso; hasta cansa escucharlo por momentos.

Prácticamente, no hubo ley trascendente que no fuera acompañada con la amenaza de innumerables juicios a la Nación: el matrimonio igualitario, la ley de medios audiovisuales, la estatización de fondos de las AFJP o el fomento de la industria electrónica.

Otro aspecto fundamental para acompañar la norma modificada en la Cámara de Diputados es la preservación de la zona periglacial que garantiza la protección del glaciar de roca. El foro de recursos naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a través del profesor Luis Fauqué, explicó que la protección del glaciar de roca se basa en el material que le llega desde su cuenca de alimentación. Si realmente se busca proteger estos glaciares es necesario proteger toda la zona que tiene suelo congelado en su superficie. Es la única manera de proteger los glaciares de roca. De lo contrario, dijo, sería como pretender preservar un río sin cuidar su cuenca de alimentación.

Por tanto, el profesor concluyó que el proyecto original de la Cámara de Senadores se propone proteger el 10 por ciento de la zona periglacial, mientras que el de la Cámara de Diputados abarca toda esa área al contemplar los suelos congelados. Este ambiente periglaciario proporciona hasta el 15 por ciento de los caudales de los ríos cordilleranos en años de sequía.

Por último, quisiera mencionar las palabras de la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Ostrom, quien se nutrió de la cosmovisión de los pueblos originarios para abonar el cuerpo teórico que le valió el mayor reconocimiento científico como lo relata el socialista peruano Hugo Blanco en su libro *Nosotros, los indios*.

Respecto a los bienes naturales, Ostrom considera que cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos. Ostrom estaba agradecida a los nativos de Estados Uni-

dos porque ellos le enseñaron a obrar pensando si sus acciones benefician o perjudican a las próximas siete generaciones.

Hoy estamos invitados a pensar en estas próximas siete generaciones de descendientes que deberán crecer en un mundo donde el agua, sin duda, valdrá más que el oro.

**Sr. Presidente** (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.

**Sr. Basualdo.** — Señor presidente: cuando se votó la anterior norma sobre glaciares en el Senado de la Nación hice uso de la palabra y dije que estaba muy contento por tener una ley de presupuestos mínimos sobre glaciares. Pero me gustaría hacer un poco de historia.

La primera norma votada en el Senado, luego también votada en la Cámara de Diputados, contenía una disidencia parcial. Dicha disidencia fue de quien les habla, de la senadora Liliana Negre de Alonso y del senador Adolfo Rodríguez Saá.

¿En qué consistía dicha disidencia parcial? El artículo 5º, si no me equivoco, indicaba que la autoridad de aplicación iba a ser el Ianigla y nosotros pedíamos que fuera un consejo ad hoc, propuesto por las provincias. El senador Rodríguez Saá y la senadora Negre de Alonso me apoyaron, pero lo hicieron porque querían que las provincias controlaran, no que éstas fueran controladas.

Ésa fue la única disidencia parcial. El proyecto se aprobó y tuvo la disidencia parcial nuestra. Fue aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero luego lo vetó la presidenta.

Entonces, empezamos a tratar el proyecto de ley del Senado. Como no soy especialista en aguas, ni nada por el estilo, tuvimos asesores y trajimos a oradores. El presidente de la comisión nos dio la posibilidad de traer a expositores sanjuaninos, quienes vinieron a exponer, quienes tienen mucha más experiencia que yo en materia de agua, obviamente. Trabajamos bastante y pudimos incluir en el artículo 5º que aparte de Ianigla, también fueran representantes de las provincias los encargados de los controles. Allí lo pudimos incluir. De lo contrario, estaríamos en disidencia. Así que esto fue para evitar la disidencia parcial y que la norma se aprobara en forma unánime, por lo menos desde nuestro lado.

Entonces, eso se incluyó, y empezaron a trabar todos nuestros expositores. Antes de votar el proyecto del Senado, les pregunté a ellos si realmente debía votar a favor de esa iniciativa y si constituía un buen proyecto. Esos expositores me respondieron que sí, y que la votara favorablemente. Me dijeron que era una norma que cuidaba el medio ambiente y los glaciares, y que la podía votar a favor.

De tal modo, que aprobamos dicho proyecto en el Senado.

Pasó un tiempo, y ese proyecto fue a la Cámara de Diputados. Sin embargo, los mismos asesores que yo traje y que me aconsejaron que votara a favor de aquel proyecto, ahora me dijeron: “Mirá, nos hemos dado cuenta de que la ley de Diputados es mejor. Entonces, la ley que has votado no sirve. Trabajá con una ley que es superadora”.

Indudablemente, ellos tuvieron muy buena intención cuando me aconsejaron que votara a favor de la primera ley del Senado. Y nosotros, todos los senadores que prácticamente la votamos a favor en forma unánime, tuvimos la misma buena intención. El presidente de la comisión también lo hizo así, pensando que era la mejor ley. Pero, indudablemente, se obtuvo una norma que teóricamente era mejor.

A partir de allí, empezamos a recibir visitas de ambientalistas, geólogos, expertos en glaciares, productores sanjuaninos vitivinícolas, cámaras proveedoras de la minería, petroleros y constitucionalistas. Y nos dimos cuenta de que también la norma de la Cámara de Diputados tenía fallas. Nos gustaba más en el sentido de que podía ser más amplia o cuidar más el medio ambiente. ¿Y qué más vamos a querer nosotros en San Juan que cuidar el agua? En esta provincia, el bien más escaso es el agua. Y todos, en común, queremos cuidarlo.

Por eso, lo bueno fue que de las setenta y cinco entrevistas que recibimos—desde expertos en glaciares hasta proveedores de la minería—todos coincidieron en que querían cuidar los glaciares. Así que fue muy bueno eso. Todos coinciden en que quieren cuidar los glaciares. Y para nosotros, los sanjuaninos, el agua es lo máspreciado. Tenemos el canal de riego, donde una hectárea con agua vale muchísimo más con derecho a agua que otra sin ese derecho. Enton-

ces, ¿a quién en San Juan se le puede ocurrir no querer el agua?

De tal modo que, cuando me presentaron una norma que protegía más los glaciares y el agua, bienvenida sea, pensé. ¡Apoyemos esa ley!

Pero empezaron a venir constitucionalistas y comenzaron a decir—como bien señalara el senador Pérez Alsina—que iba a ser judicialable. Ya estamos sabiendo que lo va a ser. Algunos dirán que no, pero si se sanciona, el jueves o el viernes se van a presentar amparos.

Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la comunidad? Que vamos a tener una ley que teóricamente vamos a festejar cuando se sancione, pero que el viernes vamos a ver que es judicialable.

Se podrá decir que es mejor y que aunque sea judicialable, es mejor que la anterior norma del Senado. Pero entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Qué he visto aquí?

Algunos han defendido el proyecto del Senado, bien y contundentemente. Yo también lo defendí y me alegré cuando la votamos a favor. Otros están defendiendo esta norma, que dicen que es mejor. Pero los dos sostienen que tienen errores ambas normas. En consecuencia, ¿qué estamos sosteniendo? Que votemos la norma con menos errores. Pero yo pregunto, ¿por qué votar una norma con menos errores? ¿Por qué no sancionar una norma que no sea judicialable y que se pueda aplicar? Me gusta la iniciativa de la Cámara de Diputados. Se puede aplicar. Pero quiero que se aplique. Y no quiero engañar al electorado, sancionando una ley que después no se pueda aplicar, y no nos saquemos nosotros la presión de la prensa para que votemos una ley. Si no, va a pasar lo mismo que con la ley de medios, donde votamos una ley y se la pasamos a la justicia. Entonces, todos los que vienen acá a reclamar por la sanción de la ley—ambientalistas, cámaras mineras y demás—van a ir a hacerlo a la justicia. Lo mismo pasó con la ley de medios: nosotros nos sacamos de encima la presión de la ley de medios, pero ahora la tiene la justicia.

Si ya sabemos qué va a ser judicialable, ¿para qué hacer una ley? ¿Por qué no trabajamos en la ley, con base en el texto de la Cámara de Diputados—que es bueno y donde hay un mayor control—con el objeto de sacarle todas las fallas

que pueden tornarla judicialable? Si sabemos que esta ley va a fracasar, trabajemos en una ley que nos sirva, que se pueda aplicar, que sea digna para todos.

Todos queremos los glaciares, ya que éstos son reservas de agua y de oro. ¿Por qué hablo de reservas de agua y de oro? Porque hoy nadie puede tocar los glaciares, pero dentro de 40 o 50 años –Dios quiera que sea dentro de 100– sabemos que no van a existir más y, entonces, ahí va a estar el oro. Por lo tanto, les estamos dando a las generaciones futuras la posibilidad de que dentro de 40 o 50 años puedan explotar la minería, si quieren hacerlo en ese momento, porque allí tendrán el oro abajo, que no se va a echar a perder.

Es fundamental que cuidemos a los glaciares. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero hagamos una ley que sirva. No nos engañemos entre nosotros votando la ley mejor o la menos mala. ¿Por qué no votamos una buena ley? A veces, somos medio mediocres y aceptamos votar la ley que tiene menos errores. Si sabemos que se va a judicializar, ¿cómo le vamos a decir a la gente que estamos contentos porque salió una ley de presupuestos mínimos en materia de prevención de glaciares si el viernes o mañana mismo va a entrar un recurso de amparo? Entonces, de vuelta nos hemos sacado la responsabilidad y se la hemos pasado a la justicia. Hagámonos cargo de nuestra responsabilidad, tomemos como base la sanción de la Cámara de Diputados –que puede ser buena–, modifiquémosla y tengamos una ley excelente para todos y que nos sirva. Si hemos demorado años, no cuesta nada demorar diez días más su tratamiento en el Senado y al mes siguiente estará en la Cámara de Diputados, por lo que antes de noviembre estará siendo sancionada una ley espectacular, que no sea judicialable, que se pueda aplicar y que festejemos todos.

Todos queremos cuidar los glaciares y en mi provincia más que en ningún lado, porque el agua es fundamental. Porque sin agua no tenemos ni vida, no podemos extraer el oro, ni los productores –a quienes yo también apoyo– no van a poder plantar absolutamente nada. El agua es un bienpreciado para San Juan. Es más que lo demás.

Nosotros vivimos del agua de las nevadas. El otro día me recordaba un productor que mi

abuelo y mi tío decían que las nevadas de julio eran las mejores y si había nevada en julio San Juan tenía buenos cultivos. ¿Saben una cosa? Es cierto: nosotros dependemos de las nevadas, no como en otros lugares que pueden recibir agua de lagos artificiales. Nosotros dependemos únicamente de las nevadas. Entonces, los sanjuaninos vamos a cuidar el agua mejor que ningún otro. Tenemos la posibilidad de hacer una ley excelente, por lo que les pido a todos que recapacitemos, que hagamos una ley que no sea judicialable, que se pueda aplicar y que festejemos todos que sea una ley buena. Si la sanción de la Cámara de Diputados tiene más controles, trabajemos sobre eso, pero tratemos de que no sea judicialable, que las provincias tengan la autoridad de aplicación. Si alguien dice “Los gobernadores no van a controlar bien...”, no nos olvidemos de que los mandatos tienen un tiempo y cuando haya elecciones podrán cambiar al gobernador si no le tienen confianza o les parece que no controlan bien. Pero démosles autoridad a las provincias para que ellos sean los responsables de decir esto está bien o está mal. Recién ahí vamos a tener una ley que se pueda aplicar.

Por ello, les pido a todos que reflexionemos porque tenemos la posibilidad de aprobar una ley que pueda ser aplicable. En mi caso particular no voy a aprobar ninguno de estos dos proyectos de ley, porque no quiero votar la ley menos mala sino que quiero votar una ley excelente.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Laura Montero.

**Sra. Montero.** – Señor presidente: creo que yo he resuelto algunos de los conflictos que planteó recién el señor senador Basualdo. A tal efecto, voy a tratar de ser breve y seguir un poco el proceso que abonó mi toma de decisión al respecto.

En primer lugar, quiero decir que como mendocina vengo de una zona que tiene déficit hídrico y donde, precisamente, la ley de agua fue la número 100. Es decir, los mendocinos nos acostumbramos a vivir cuidando el recurso hídrico, que es vital.

En Mendoza, prácticamente, todo es un desierto: llueven 250 milímetros anuales y casi el 4 por ciento de la superficie está cultivada gracias a la distribución del recurso hídrico



escaso. Es decir que yo lo escuchaba recién al señor senador Filmus cuando afirmaba que éste es un derecho humano y yo pensaba que, a veces, se piensa sobre esta cuestión como algo que está allá tan por arriba y los mendocinos la vivimos en la realidad, porque hemos vivido desde nuestro origen en la necesidad de proteger y cuidar el recurso hídrico y de optimizar su uso.

Además, como ingeniera agrónoma debo decir que si en la provincia llueven 250 milímetros y yo tengo que hacer un cultivo que requiere desde 1.200 hasta 500 o 600 milímetros, como es el caso del cultivo de la vid, vivimos en déficit hídrico. Y ese déficit hídrico lo debemos cubrir con agua que debemos obtener por vía de regadíos. Por supuesto que eso lo aportan las nevadas, los glaciares y las lluvias que puedan producirse durante la temporada. Como bien decía el señor senador Martínez, los años que no llueve nada son los glaciares o las reservas estratégicas de recursos hídricos con los que la provincia sostiene su producción. Pero no sólo eso, sino que además le permite animarse a planificar su proceso productivo, su desarrollo y dar viabilidad al trabajo. Realmente nosotros estamos absolutamente vinculados, relacionados, limitados al recurso hídrico. Si no lo sabemos administrar, si no lo sabemos cuidar no tenemos ninguna expectativa de desarrollo, por lo cual los desafíos siempre se nos han planteado desde el punto de vista de cuidar lo que está y de tratar de optimizarlo para poder seguir generando alguna estrategia de desarrollo que tenga que ver con darle mayor potencialidad a Mendoza.

Desde esta perspectiva debo decir que tengo que confrontar esto con otra cuestión, y es que estamos frente a un contexto de cambio climático. En Internet se puede acceder a muchísima información al respecto. El calentamiento atmosférico va produciendo un aumento de las zonas con déficit hídrico. Es decir, lo que le toca a Mendoza ahora posiblemente se vaya extendiendo a otras zonas.

Tal vez este problema que muchas provincias no lo viven, porque tienen un balance hídrico bueno, es decir, no necesitan el agua porque lo que llueve les alcanza para vivir, para los cultivos, nosotros lo vivimos cotidianamente. Debemos decir que frente a esta instancia el cambio climático todavía se nos prenden

muchas más luces rojas a nivel de pensar que debemos preservar este recurso.

Tenemos que poner en valor algo. Ésta es una ley de presupuestos mínimos ambientales y está contemplado en la Constitución, como ya se ha dicho. Por eso no voy a hacer un repaso de todo lo que se dijo sobre marcos normativos y referencias constitucionales. En efecto, está en el artículo 41 de la Constitución respecto a la responsabilidad o a la correspondencia de la Nación de legislar con respecto a presupuestos mínimos ambientales.

Considerar a los glaciares dentro de lo que es una reserva estratégica de recursos hídricos y ponerlos dentro de los presupuestos mínimos ambientales a nivel nacional es de absoluta y vital importancia por estas dos consideraciones que estoy haciendo.

Además, los glaciares están en involución por esta cuestión del contexto climático. Veíamos diapositivas muy claras –como tal vez lo hicieron muchos de los que estaban en la comisión, porque han venido muchos expertos– en las que se mostraba el retroceso de los glaciares.

La conjugación es terrible. Necesito el recurso. Por otro lado estoy frente a un contexto de cambio climático que me va poniendo alertas rojas por todos lados y, por otro lado, el recurso es estratégico.

Entonces, frente a esto pregunto cuál es la ley perfecta, y para mí la ley perfecta es la ley posible que soluciona cosas conceptuales –que tienen que estar en la ley–, y después se debe garantizar que sea aplicada y que la autoridad competente pueda vigilar lo suficiente para que se cumpla.

Bien se ha dicho acá que estos dos proyectos de ley eran similares, que tenían algunas divergencias, tal vez algunos matices, y se mencionó el tema del nivel de conflictividad que podría haber con respecto a la interpretación federal o a la judicialización.

Yo creo que esta ley tiene los suficientes elementos taxativos como para dar la claridad suficiente para despejar dudas y para que sea la ley perfecta.

No quiero repetir, porque el senador Martínez fue artículo por artículo detalladamente, pero el artículo 1° ya habla de esa reserva estratégica de recursos hídricos, y yo sé que quien después

tiene que hacer algo que va a quedar en la ley y que va a ser lo absolutamente taxativo de esta ley, que es el inventario, es el Ianigla, y lo tiene absolutamente claro.

Yo quiero realmente rescatar la figura del Ianigla acá, tal vez porque esté en mi provincia y porque forma parte del Conicet, un instituto de investigación donde yo me formé, pero que además ha tenido siempre los aportes de la Universidad y de las provincias. Quiero decir que hay técnicos de muy buen nivel y que sería bueno que pensásemos en darle el prestigio que tiene confiando en que esa gente va a hacer un excelente inventario, porque creo que es la que más *expertise* tiene para poder definirlo.

Si ese inventario queda hecho se me acaban las dudas con respecto a las cuestiones interpretativas.

Como nos decía la gente del Ianigla que –y lo expresó el senador Filmus– alrededor del 1 o del 1,5 por ciento de las zonas están definidas en esta ley como reservas estratégicas de recursos hídricos. Son aquellas acumulaciones de hielo o nieve que tienen muchos años, o sea que no son de un suelo que se congela anualmente sino que tienen muchos años de formación y por eso tienen la capacidad de ser reguladores de ese recurso.

Entonces, si realmente esto queda con esta definición, con esta claridad, con este instituto y hecho este inventario, a mí se me despejan absolutamente todas las dudas con respecto a cualquier tipo de interpretación judicial que pueda haber.

Y, con respecto al tema federal, sabemos que la autoridad de aplicación es la máxima autoridad ambiental, y yo no creo que esté resignando nada a nivel de mi provincia al delegarle a la máxima autoridad ambiental –en la cual también está representada mi provincia– el hecho de que sea autoridad de aplicación y que se apoye en el Ianigla para hacer un inventario.

Y, después, mi provincia va a ser autoridad competente con su propia legislación. Es decir, Mendoza tiene sus propios marcos normativos, su propia ley ambiental, y por otro lado también ha tenido que dirimir permanentemente este conflicto entre la producción y el ambiente.

**Sr. Presidente** (Marino). – Senadora Montero: le pido que vaya redondeando porque ya ha concluido su tiempo.

**Sra. Montero.** – Está bien.

Para cerrar, creo que este conflicto queda absolutamente dirimido cuando las autoridades competentes son las provincias, cuando tienen sus legislaciones provinciales y cuando pueden, además, tener sus marcos normativos para dirimir conflictos que puedan suscitarse entre producción y ambiente.

En este momento no hay ninguna actividad productiva que esté en zonas de glaciares; por lo cual, estamos absolutamente a tiempo de legislar al respecto con una ley de presupuestos mínimos que cuide un recurso estratégico pero, por sobre todo, un derecho humano.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Lores.

**Sr. Lores.** – Señor presidente: las palabras que pronunció inicialmente el señor miembro informante por el dictamen de la mayoría, obviamente marcan la postura de la provincia a la que represento con respecto a este tema. De todos modos, quiero hacer algunas consideraciones que me parecen sumamente importantes a los efectos de fundamentar esta posición.

Quiero partir de lo que dijo el señor senador Pérez Alsina. Creo que quienes están a favor del dictamen en mayoría o del dictamen en minoría no están en contra de este proyecto de ley, de la protección de los glaciares y del cuidado del medio ambiente, sino que hay diferentes puntos de vista, distintas visiones respecto del federalismo y de la participación que deben tener las provincias en algunas cuestiones como, por ejemplo, en la realización del inventario con el Ianigla –esto figura en el proyecto original y fue excluido en la iniciativa de la Cámara de Diputados– y en los intereses provinciales.

Sin duda, las provincias son las que más conocen los problemas medioambientales existentes. Creo que todas –y en particular la que represento– tienen normas muy estrictas vinculadas con la protección del medio ambiente, con el desarrollo sustentable basado en un equilibrio entre la producción y las necesidades de la gente. La provincia del Neuquén carece de agua, es prácticamente desértica, a pesar de que tiene grandes ríos que la rodean. Salvo la

zona sur, la que todos conocen, la de los lagos, la de San Martín de los Andes y de Villa La Angostura, que tiene un régimen de lluvias de 2.500 milímetros anuales, prácticamente en todo el resto de la provincia no se superan los 150 milímetros anuales. Por lo tanto, nosotros sabemos muy bien la importancia que tiene el agua y nos preocupamos muchísimo cuando vienen años con muy poca nieve.

Hasta la década del 60, la provincia del Neuquén era muy pobre, desértica –como ya dije– y no había turismo. Estas poblaciones que mencioné eran conocidas únicamente porque allí existían grandes regimientos y se sabía que los soldados iban a San Martín de los Andes, a Junín de los Andes, a Zapala o a Covunco. Prácticamente, no había otra forma de conocer estas localidades. Por otra parte, no existían caminos, no había aeropuerto ni ningún tipo de desarrollo para el turismo. Teníamos también el otro polo, que es la pequeña porción del Alto Valle de Río Negro y del Neuquén, donde hay una franja de producción frutícola que le pertenece a la provincia del Neuquén, con valles irrigados con las aguas que provienen de los ríos Limay y Neuquén.

Fundamentalmente a partir de los años 70, se produce una enorme transformación que hace que el Neuquén se convierta en una provincia de carácter energético. Ocurren varias cosas. En primer lugar, la Nación comienza a construir las grandes represas sobre los ríos Limay y Neuquén: el complejo El Chocón-Cerros Colorados, después la represa de Piedra del Águila, la de Alicurá, etcétera, que hacen que la provincia se transforme en una importante proveedora de energía hidroeléctrica. Cabe destacar que el 23 por ciento de la energía hidroeléctrica que se consume en el país proviene del Neuquén. En esa época, se incrementa la explotación petrolera y sucede un hecho de trascendental importancia para la economía de la provincia del Neuquén y del país, y para la consolidación de una determinada matriz productiva en la Argentina: el descubrimiento en 1977 de ese megayacimiento extraordinario de gas llamado Loma de la Lata. Dicho yacimiento aportó y sigue aportando gas a la mayoría de las provincias argentinas, a pesar de su franca declinación por una sobreexplotación. En los 80, no hace mucho tiempo –estamos hablando

de veinte o treinta años atrás–, se construyeron los gasoductos Centro-Oeste y el Neuba II que llevaron gas a todas las provincias argentinas e, incluso, a Chile. El 50 por ciento del gas que se consume en el país sale de la cuenca neuquina y aproximadamente el 23 por ciento del petróleo que se consume en el país sale también de la provincia del Neuquén. La hidroelectricidad, el petróleo y el gas hicieron que Neuquén se transformara de pronto, a partir de fines de la década del 70 hasta la actualidad en una gran provincia energética.

En todas esas obras la provincia del Neuquén prácticamente no tuvo nada que ver porque todavía no se había reformado la Constitución y la provincia no tenía el dominio originario sobre los recursos naturales como lo establece la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Tanto es así que los neuquinos ni siquiera podíamos entrar a los lugares donde se estaban haciendo esas obras. Por ejemplo, en El Chocón había una barrera de gendarmería y hasta ahí se podía llegar. Por la curiosidad de ver qué se estaba haciendo sobre el río Limay uno podía entrar si conseguía alguna invitación especial de algún ingeniero o de algún gerente de la empresa Hidronor.

Gran cantidad del territorio neuquino estaba y está ocupado por terrenos del Ejército Argentino, otra parte importantísima la ocupaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Plaza Huincul, donde también el acceso de los neuquinos estaba restringido y controlado. A eso le tenemos que sumar las extensas regiones que están bajo el control de Parques Nacionales.

Cuando Neuquén toma la propiedad de esos recursos a partir de 1994, cuando Hidronor termina sus obras y transfiere las tierras a la provincia, lo primero que se hizo fue establecer normas estrictas de protección ambiental. Al respecto, se crearon once áreas provinciales naturales protegidas que van desde el volcán Lanín –ahí no hay jurisdicción provincial porque pertenece a Parques Nacionales– hasta la montaña más alta que tiene Neuquén en el norte de la Cordillera del Viento, que es el volcán Domuyo, que tiene 4.890 metros de altura.

Además, ha habido planes de manejo de esas áreas que se cumplen estrictamente y cualquiera que visite la cordillera neuquina puede comprobar el cuidado del medio ambiente, que ha

sido una política de Estado estratégica diseñada por un organismo legendario del Neuquén, el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo. Sinceramente, la provincia del Neuquén es un ejemplo en materia de cuidado de esos recursos.

No debemos dejar de lado, ya que estamos hablando del tema de la provisión de agua, que las grandes contaminaciones de los cursos de agua se producen en las grandes ciudades; los ríos nacen puros en la cordillera y, a medida que van avanzando aguas abajo, atraviesan las grandes ciudades y reciben contaminaciones de todo tipo. El emblema de esta situación es la cuenca del río Matanza-Riachuelo envenenado de metales pesados, de miles de sustancias tóxicas que se están volcando al Río de la Plata y, por ese medio, al Océano Atlántico.

También está el tema del calentamiento global; el mayor peligro que tienen los glaciares es el calentamiento global que produce—el senador Martínez cambió la definición— la retracción. Nosotros lo vemos en la cordillera neuquina donde no hay absolutamente nada, no hay minería. Hace poco visité el cerro Tronador en la provincia de Río Negro y es notable cómo se van achicando esos glaciares. Ahí no hay absolutamente nada que sea culpable de esa situación, solamente es un efecto del calentamiento global.

El calentamiento global es el resultado de las emanaciones de dióxido de carbono y de muchas otras sustancias tóxicas que se producen en todo el mundo, en las grandes urbes, y que están generando este problema. Tenemos que cuidar el agua y los glaciares pero no debemos olvidar los otros factores que son los que realmente tienen mayor peso cuando hablamos de la conservación del agua para el futuro.

Otro tema que tiene que ser muy controlado por las autoridades correspondientes es el tema del tabicamiento de agua, cuando se hacen las grandes represas. La provincia de La Pampa perdió la fertilidad—senador Marino, usted lo conoce muchísimo mejor que yo— cuando le pusieron una represa al río y dejaron seco al sur de La Pampa. Ahí no había obras en los glaciares o en los periglaciares sino que fue una política absolutamente desacertada con respecto al manejo del agua. Digo todo esto

porque hay muchas situaciones que tienen que ver con este tema.

No quiero extenderme demasiado, me queda muy poquito tiempo. Lo único que quiero decir es que el 21 de octubre de 2009, en este Senado, aprobamos por unanimidad el proyecto de ley de glaciares que llegó al recinto con dictamen unánime de comisión y que fue votado también por unanimidad en este recinto, con las excepciones a las que se hizo mención hoy, de algunos senadores en el tratamiento en particular de algunos artículos.

Hoy estuve repasando la versión taquigráfica de aquella sesión. Hay expresiones que eran muy claras. Un senador muy querido por todos nosotros, de una provincia mediterránea, que ya cumplió su mandato, se dirigió al presidente de la comisión, al senador Filmus, diciéndole: “Promesa cumplida, senador Filmus, lo felicito, hemos logrado un proyecto mediante un trabajo en conjunto que mejora incluso la iniciativa inicial que había sido vetada por el Poder Ejecutivo”.

¿Qué fue lo que pasó después de esto, señor presidente, que ha transformado aquel proyecto que era tan bueno, y que todos votamos por unanimidad, en un proyecto que ahora es malo, denostado?

Pareciera que aquellos que defendemos el proyecto original somos antiambientalistas, antiglaciares, que queremos envenenar el agua, etcétera.

Creo que hay matices, y es admisible que los haya. El proyecto que salga votado en esta oportunidad será respetado por todos nosotros. Lo que no podemos admitir es que no se respete el federalismo, como decía el miembro informante; que no se cumpla con lo que establece la Constitución con respecto al dominio y a la jurisdicción que tienen las provincias sobre los recursos naturales.

Señor presidente: creo que todos queremos la ley de glaciares. Como representante de la provincia del Neuquén y uno de los senadores que intervinieron en la redacción del proyecto que aprobamos acá por unanimidad, voy a defender el proyecto que salió del Senado, el dictamen en mayoría.

Termino diciendo que tenemos algunos problemas que resolver en la provincia del



Neuquén, sobre todo si sale aprobado el proyecto que vino modificado por la Cámara de Diputados, porque estamos en un proceso de exploración muy importante de energía geotérmica, que con el concepto de extensión de los periglaciares en el proyecto que vino de Diputados, se vería comprometido.

En ese sentido, la geotermia es una energía limpia, que está impulsada y recomendada por el Protocolo de Kyoto, y Neuquén está, entre otras cosas, desarrollando ese tipo de exploración.

Además, tenemos que hacer nuevas exploraciones. Hay muy buenas perspectivas con respecto a la búsqueda de gas en arenas profundas, compactas, que podrían renovar la disponibilidad de gas para todo el país se calcula que por cincuenta años, cuando la disponibilidad actual, como máximo, es de seis o siete años.

No tenemos que olvidar que este gas no es para los neuquinos solamente sino para todo el país y que el setenta por ciento de la matriz productiva argentina está sustentada en el gas.

**Sr. Presidente** (Marino). – Tiene la palabra la senadora Fellner.

**Sra. Fellner**. – Señor presidente: también estuve buscando, como el senador Lores, las versiones taquigráficas del año pasado, nada más y nada menos, cuando aprobamos por unanimidad esta ley de glaciares.

Estuve repasando mucho lo mío; por qué lo voté a favor y qué dije en ese momento en esa sesión.

La verdad, estudiando el proyecto que viene de Diputados, que ha reformado el nuestro, no advierto esta cuestión de que se avanza sobre las provincias. Porque veo que hay instrumentos, como es el Ianigla. Habla de la autoridad de aplicación. No me ofende como provincia lo que viene hoy de Diputados. Hay artículos que me gustan mucho, me gustan más que los que hemos redactado acá en el Senado, porque creo que avanzan sobre otros puntos que son muy importantes. Por ejemplo, el artículo 7º, cuando habla de la evaluación del impacto ambiental. Y habla también de algo que es muy bueno: la evaluación ambiental estratégica. Cuando habla de la instancia de participación ciudadana, me parece muy bueno ese artículo 7º. Me gusta. Hay cosas que avanzan más. Incluso la definición es más amplia, abarca más zonas. En aquel

momento, hablábamos de los periglaciares, cuando nos referíamos a las áreas de congelado permanente. Acá se avanza más y solamente en una zona muy estratégica.

Y se habla de minería, y me dicen que no hay que meterse en el tema de la minería. Pero yo digo “cómo que no”. Cuando vino mi gobernador, él dijo que en la provincia no había glaciares. Sí, es cierto, pero tenemos periglaciares. Dijo que la minería no era importante, no era lo fundamental para mi provincia. Habló del tabaco y de la caña de azúcar.

Estamos de acuerdo. Pero hay un lugar que se llama Abra Pampa, que aún hoy nos duele a los jujeños; personalmente me duele y mucho. Una vez fui hasta eso que llaman Metal Huasi. ¿Saben qué significa huasi? Casa. Casa del metal. ¿Saben de qué color son las tierras y un pequeño arroyito que pasa por ahí? El color de las carpetas nuestras, esas celestitas algo verdosas. Ese es el color del agua y del terreno de Metal Huasi. Y no es sólo eso, sino lo que está sucediendo justamente en ese pueblo de Abra Pampa, que –repito– nos duele a todos los jujeños. Nos hace tomar mucha conciencia y posturas muy fuertes al respecto.

Me acuerdo de que, en aquel momento, se habló de qué eran presupuestos mínimos. Porque eso es lo que nos dice la Constitución en todo lo que tiene que ser el medio ambiente. Alguien dijo que el COFEMA había determinado qué eran presupuestos mínimos. Está bien, pero son lineamientos, nada más, porque creo que aún hoy, acá, no nos pondríamos de acuerdo en qué es presupuesto mínimo.

En la Legislatura jujeña, hace poco –esto es de 2010–, después de que aprobáramos esta ley en el Senado y mientras se la discutía en Diputados, se sancionó una ley que lleva el número 5.647. Yo no la votaría. La verdad es que me hubiese opuesto. No sé quién es el autor de esa ley, ni me puse a investigar, porque esto va mucho más allá de quién es; se trata de lo que dice esta ley, y yo me hubiera opuesto.

Ahora, ¿cuál es el presupuesto mínimo? Si la ley de mi provincia es mucho más liviana. Le agrega cosas, pero finalmente no sé cuáles glaciares de escombros estaríamos protegiendo con esta ley provincial. La verdad es que la hubiera votado en contra, sin importar su autoría ni de donde viniese.

Decía que, hoy, salía contenta de la reunión de mi bloque. Hay un artículo, el 17, que lamentó que esté en la sanción de Diputados. Creo que fue avanzar en algo que es como ir con todo. Y yo me imagino que, hasta que Ianigla haga los inventarios, llegue a mi provincia y hablando de qué zona estamos protegiendo, va a pasar un buen tiempo. Uno sabe cómo son estas cosas.

Fijese que ese artículo 17 dice que, en las áreas protegidas por la presente ley, potencialmente protegidas, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger.

Yo escuché hablar de este organismo, de que no tiene capacidad técnica, que le falta agregar mucho, que son excelentes. Pero en toda esa gran frontera de los Andes que tenemos me pregunto cuándo se terminará de hacer este inventario. Me pregunto cuánto tiempo esperarán las obras en mi provincia. Son obras que se deben hacer porque necesitamos seguir adelante. Y no estoy hablando de minería. Mi provincia tiene que estar parada.

Salí contenta porque quería creer en algo, que íbamos a eliminar ese artículo y que se iba a hablar para ver si podíamos poner el término permanente cuando se habla de baja y alta montaña. Y me encuentro la Constitución que, en su artículo 81, es clara. En su última parte, dice: “La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”. En este caso, la Cámara de origen fue el Senado, y la revisora, Diputados. En consecuencia, no podemos sacar el artículo 17. Por lo tanto, siento un profundo dolor, porque quisiera, para mi provincia y mi país, un proyecto que contemplara lo establecido en dicho artículo.

Por lo tanto, tendré que votar negativamente el proyecto sancionado por Diputados, y aceptar el aprobado por el Senado, en función de que se disponga de una norma que proteja a los glaciares.

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Torres.

**Sr. Torres.** – Señor presidente: tengo una sensación rara respecto de los proyectos sancionados por la Cámaras de Diputados y el Senado que estamos considerando.

Yo integraba la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuando se dictaminó por unanimidad, incluso con el visto bueno de todas las organizaciones ambientalistas, el proyecto en el Senado.

En virtud de la provincia a la que pertenezco, abordé el tratamiento de este proyecto con la visión de una zona subtropical. Cuando vino en revisión el proyecto sancionado por Diputados ejercía la presidencia de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y empecé a estudiar el tema de los glaciares, que, por cierto, es apasionante. En la comisión escuchamos a científicos y especialistas en la materia; algunos nos aclararon muchas cosas, y muchos nos confundieron más de lo que estábamos.

Mi duda radicaba en si la ley podía ser aplicable. Invitamos a los gobernadores de las provincias afectadas por esta norma, y la mayoría de ellos –a través de su presencia, por medio de representantes del área o por nota– se expresaron en contra del proyecto sancionado por Diputados. Dicho proyecto, en un comienzo, aparentaba que iba a ser convertido en ley.

Sin embargo, me preguntaba qué pasaba, ya que si la mayoría de los gobernadores estaban en contra de ese proyecto, pero los diputados lo aprobaron y nosotros íbamos en camino de lo mismo, algo estaba fallando en la política. O los gobernadores no interpretaban bien a su pueblo, o éramos nosotros, los legisladores nacionales, los que no lo interpretábamos. Se trataba de una dicotomía, de un problema de fondo realmente preocupante.

Asimismo, durante todo el tiempo en que se discutió esta iniciativa escuchamos hablar de minería. Creo que se habló más de minería que de glaciares; pero no debatimos ni profundizamos la primera de las cuestiones. Cada senador expresó su opinión, a favor o en contra, pero no hubo una discusión profunda porque el tema central era el de los glaciares. Sin embargo, no se dejó de hablar de minería, lo cual trajo más confusión.

Además, muchos especialistas plantearon que los glaciares tienen su vida contada. Las organizaciones mundiales advierten que, dentro de quince años, los glaciares del monte Kilimanjaro desaparecerán, y los de la zona centro y sur del Himalaya, en 2035. Los Andes peruanos probablemente desaparezcan para

2020, trayendo grandísimos problemas a países como Bolivia, Perú y Ecuador. En los Pirineos, prácticamente la mitad de los glaciares han desaparecido y así ha pasado con los Alpes austriacos. En Alaska el Bering tiene un gran desgaste y más en los últimos años; también Groenlandia. Y en la Argentina, en los últimos treinta años han desaparecido sesenta y tres glaciares. Y esto colaboró a que haya aumentado en 0,042 milímetros el nivel del mar.

En los últimos años el derretimiento de los glaciares fue mayor y se ha aumentado el nivel del mar en 0,105 milímetros.

Los hielos continentales se dividen en hielos continentales patagónicos norte, patagónicos sur y los andinos, que abarcan la zona cuyana. Se prevé que para dentro de 90 años los glaciares andinos desaparecerán, para 2100 y un poco más los glaciares patagónicos, lo que nos lleva a lo que a mí me parece es el centro de la cuestión, el uso del agua, que es lo que demandan las provincias, tan escasas en sus recursos, que son todas las provincias precordilleranas. Ahí hablamos de conservación de glaciares y periglaciares, en lo que casi ninguno de los científicos se puso de acuerdo es en lo que significa periglaciación. Cada uno da su opinión e interpretación al respecto. Por debajo de la zona de glaciares y periglaciares existen explotaciones mineras, nadie habló, por ejemplo, del tratamiento del agua, que sí se transforma en una competencia con lo que era la economía tradicional de esa región, llámese agricultura, ganadería, otro tipo de actividades. Nadie habló de la contaminación, porque no era un tema de tratamiento ni del reciclaje del agua, porque yo, por ejemplo, desconozco el Código de Minería, y fundamentalmente creo que lo que está es el uso del agua y la prevención que tenemos que hacer como país, y cómo vamos a subsistir cuando desaparezca este recurso tan importante que —como bien dijo el senador Filmus— pasó a ser un derecho humano.

Me parece que el doctor Villalba, del Ianigla, fue escuchado atentamente y nos ha aclarado muchos puntos. El Ianigla es un organismo que tiene diez técnicos altamente calificados y nos comentaba que en un convenio con la provincia de Mendoza habían conseguido un subsidio para hacer un estudio de sus glaciares, lo que les va a llevar tres años. Nosotros tenemos 5.000 kilómetros de zonas donde están los glaciares,

en la Cordillera de Los Andes, y le damos un plazo de cinco años al Ianigla para que haga el estudio. No le aceptamos los presupuestos necesarios. Tiene diez técnicos, supongo que pueden hacer convenios con universidades. Creo que las provincias que integran este instituto van a colaborar, seguramente, para hacer los inventarios de los glaciares en sus respectivos territorios. Pero al resto de las provincias, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuántos glaciares más se van a derretir hasta que se termine el estudio del inventario de estos glaciares?

Por eso, planteo que lo fundamental es la discusión sobre el uso del agua, y cómo se puede usar racionalmente el agua siendo un recurso tan escaso en esa zona. Cómo pueden convivir las actividades de la minería con las actividades tradicionales y cómo puede evitarse la contaminación para que el agua que se usa en la minería no afecte a las otras actividades ni la calidad de vida de los habitantes de esa región. Pero creo que todas estas cuestiones no las hemos discutido. Nos hemos limitado a conservar los glaciares que están condenados a desaparecer.

Estamos en un plazo fijo. Los glaciares van a desaparecer y si las provincias no prevén qué va a ocurrir, no sé qué va a pasar con ellas. Pero es obvio que algo vamos a tener que hacer desde la Nación y desde las provincias.

Desde el punto de vista político, vengo desde una zona subtropical y sin vivir el problema en el lugar de origen, quiero dejar sentado que voy a acompañar la sanción del Senado de la Nación porque en su momento fue acompañada por las organizaciones no gubernamentales y porque la mayoría de los gobernadores apoyan dicha iniciativa.

Creo, señor presidente, que en una ley de presupuestos mínimos, lo menos que se puede hacer, sobre todo en la Cámara de Diputados donde algunos se manejan con tanta soberbia, es convocar a los gobernadores para tratar de acordar una norma donde los representantes del pueblo se pongan de acuerdo con los que gobiernan a nuestros representados.

Por estas razones, acompaño la sanción de la Cámara de Senadores.

**Sr. Presidente (Pampuro).** — Tiene la palabra la señora senadora Monllau.

**Sra. Monllau.** – Señor presidente: voy a comenzar por decir algunas cosas que me generan asombro, cuando no cierto ruido.

Por ejemplo, ver que en una documentación que distribuyó el senador Gioja en el marco de una reunión de comisión hay un pronunciamiento de los gobernadores cordilleranos firmado por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Pero luego la senadora asiste a la reunión de comisión para pronunciarse de manera contraria.

Repasando la génesis del proyecto de ley –no he sido parte porque me he incorporado recientemente al cuerpo–, debo decir que en la versión taquigráfica del 21 de octubre de 2009, en ocasión de ser considerado el proyecto de los señores senadores Filmus, Rossi, Estenssoro, Alfredo Martínez, Miranda, Guastavino, Díaz, Perceval, Pinchetti, Morales, Iturrez, Lores, Banicevich, Gallego y Giustiniani, el miembro informante, senador Filmus, quien nos pidió que no llamáramos a la norma Ley Filmus porque había sido apoyada por catorce senadores más, decía en ese momento: “Creo que es un ejemplo para esta Cámara el tipo de trabajo que se realizó con relación a este proyecto de ley. Habiéndose discutido entre todos e, incluso, planteado por parte del bloque opositor su dificultad y su crítica al veto de la presidenta, finalmente se acordó discutir un proyecto común. En consecuencia, entre todos, hemos avanzado durante estos meses, cosa que no fue fácil, y logramos un proyecto común, que no sólo recupera lo mejor de la iniciativa original sino que también profundiza y avanza en temas fundamentales como definir a los glaciares como un bien de carácter público y aclara y precisa las zonas en las que hay que defender los glaciares y los periglaciares. Avanza en la definición de la preocupación respecto del cambio climático y de la función que tiene que cumplir al Estado al respecto; avanza en la participación ciudadana, como pidieron muchas organizaciones ambientalistas, en la elaboración de las evaluaciones ambientales y en la necesidad de tener medidas transitorias que permitan evaluar rápidamente el impacto de las acciones que se están realizando y que puedan perjudicar a los glaciares y a los periglaciares, y adecuarlas inmediatamente al marco de la ley.

Luego, dice el senador Filmus: “Aprovecho la oportunidad para agradecer a quienes en aquella sesión acompañaron la idea de llegar a un consenso y no a una votación dividida, y que posteriormente colaboraron tanto en las reuniones que se realizaron en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como en las que se efectuaron aquí, con diversas organizaciones y en las audiencias públicas, para que todo el mundo pudiera expresarse. Me refiero a los senadores Sanz –quien tuvo una actitud muy noble en aquel momento–, Martínez –que en aquel momento y durante todo el proceso acompañó y debatió–, Basualdo, Gioja, Riofrío, Rossi y Lores. Todos ellos hablaron aquel día y estuvieron de acuerdo con que la misión del Senado más que tomar una posición oportunista y coyuntural consistía en avanzar para llegar a un acuerdo. Creo –dijo finalmente el senador Filmus– que estamos dando un paso trascendente que nos lo agradecerán las generaciones futuras”.

Y el senador Martínez, en aquel momento, dijo: “Pasamos de la alegría en su momento, por la sanción unánime del proyecto de ley en revisión enviado por la Cámara de Diputados, a la desazón del veto. Y nuevamente a remar. Hoy estamos ante la posibilidad concreta de aprobar esta iniciativa, para que sea remitida a Diputados. Somos absolutamente conscientes de que se respeta el espíritu de la ley original. Se le han agregado aquellas cuestiones que el veto en su momento había manifestado, en cuanto a las jurisdicciones en el caso de los parques nacionales o el Tratado Antártico, a través de la Cancillería. Se avanzó, también, en una mayor claridad en las definiciones. Y en esto, debemos rescatar el gran apoyo que nos brindó la gente de Ianigla, en la búsqueda de una definición que pudiera contemplar todo lo que nosotros queríamos proteger. Allí es donde surgen los glaciares de escombros, con una definición muy clara, equivalente a lo que son las zonas periglaciares. Quiero hacer un homenaje a la diputada Maffei –decía el senador Martínez–, creo que hoy será un día de alegría para ella. Pero esencialmente, hoy es un día en el que creo que hemos cumplido con ciertos compromisos ineludibles, como la preservación del lugar donde se habita”.



Finalmente, el senador Martínez cerraba su exposición diciendo: “Repito, ésta es una gran alegría, porque creo que estamos cumpliendo con un compromiso. Y destaco nuevamente a todos los que participaron”.

Señor presidente: creo que me perdí en el medio algún hallazgo científico relevante, que me permita entender que las bondades de ayer de esta ley no son las de hoy.

Pero además, debo decir que nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 41 que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para complementarlas.

Las responsabilidades de los gobiernos locales son primarias. Las provincias tienen una responsabilidad fundamental en el manejo de los asuntos ambientales. La responsabilidad en temas ambientales corresponde a la jurisdicción en la que se localizan, pero la Nación es quien debe dictar una legislación de base con presupuestos mínimos. Tiene que dictar esa norma de base que es el piso y a los gobiernos provinciales y locales les corresponde fijar el techo. El artículo 41, según dicen Sabsay y Di Paola, abrevia en nuestra organización federal, considerando el concepto de presupuesto mínimo en virtud de la distribución de las competencias Nación-provincias. La división de las competencias entre la Nación y las provincias surgen de la aplicación del artículo 121, donde queda claro que la Nación posee una competencia de excepción hecha a su favor por parte de las provincias.

Dice Sabsay que los artículos que hacen a la cuestión federal y que han sido introducidos en la reforma de 1994 establecen de manera invariable el fortalecimiento del ámbito local, como los artículos 75 –incisos 2, 30 y 31–, 123 y primera parte del 124. Todas estas cuestiones, junto a las consideraciones particulares en materia de desarrollo territorial del inciso 19 del artículo 75 –que es la nueva cláusula del progreso–, nos señalan un claro rumbo deseado por el constituyente de reforma, el que se sitúa en el camino de recuperación del federalismo. En virtud de ello, la determinación del alcance de las potestades nacionales derivadas de la expresión “presupuestos mínimos” debe hacerse con carácter restrictivo. Esto es lo que dice Sabsay en “Anales de Legislación del año 2002”, concluyendo de la siguiente manera:

“La Argentina acusa un elevado déficit en lo que hace a la vigencia del federalismo. Nuestra forma de Estado se ha visto devaluada en el tiempo. Esta situación ha sido en gran medida el resultado de una tendencia de larga data, de conformidad con la cual de un modo u otro en materia de facultades concurrentes o de asuntos que merecían un reparto de facultades entre los dos niveles de gobierno la interpretación o la práctica fue llevando a la atribución de nuevas esferas de competencias propias y exclusivas a favor de la Nación. De este modo se ha llevado a afrontar desde la Nación todo asunto de este carácter, configurándose una suerte de federalismo de imposición. En este contexto, la sanción de la ley general del ambiente trae aparejada la necesidad de cambiar este criterio por el de federalismo de concertación, diseñando el escenario básico sobre el cual se deben sancionar, interpretar e implementar las normas de presupuestos mínimos”.

Creo que el proyecto del Senado es más prolijo y preciso. Esta ley, como dijo el senador Filmus, busca el mejor enunciado para proteger el agua, pero hasta ahora sólo el agua de nuestra cordillera, no toda el agua, no la de la cuenca del Paraná ni la de la cuenca del Plata ni la del río Matanza-Reconquista ni la del Riachuelo ni la de las vastas extensiones de aguas y lagos de nuestros pueblos originarios, hoy rematadas y en manos de propios y extraños; no protege el agua subterránea ni el agua contaminada de nuestras napas freáticas.

Por lo expuesto, y porque a pesar de lo dicho creo necesario proteger nuestros glaciares, apoyo el proyecto de ley oportunamente sancionado por este Senado.

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.

**Sr. Filmus.** – Solicito una interrupción porque he sido aludido.

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Filmus.

**Sr. Filmus.** – Señor presidente: suscribo nuevamente –me imagino que el senador Martínez también– el espíritu con el que hemos trabajado en el Senado, que es el mismo espíritu con el que trabajamos en esta vuelta, y hemos tratado una y otra vez de llegar a consensos. No escuché del senador Martínez –creo que tampoco yo lo

he dicho— una crítica a la ley sino que hemos dicho que es un paso más adelante.

Insisto, lo que estamos haciendo es dar un paso hacia adelante. Esto tiene algún elemento mayor de protección.

De todas maneras, usted ha dado algunos ejemplos que me parecen propicios. Por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo. Justamente es el mejor ejemplo de la que la Nación interviene. La Nación interviene por una ley, quitándole jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, y genera un organismo tripartito. Por algo a quien multó la Corte Suprema por no cumplir con los requisitos de la cuenca Matanza-Riachuelo fue al secretario del área de Nación. Hace pocos días ocurrió eso. Apeló, y, por suerte, lo atendieron. Pero la Nación fue culpada de no haber tomado los recaudos necesarios con relación a algo que está en territorio de la Ciudad de Buenos Aires—quizá después explique más algún tema de la Ciudad de Buenos Aires— y de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la Nación? Justamente porque estamos hablando de un bien que es interjurisdiccional y donde la Nación tiene una responsabilidad enorme.

Acuerdo con la mayor parte de las cosas que usted dijo senadora. Pero es bueno que escuchen al pueblo de Andalgalá, que vino acá a hablar. Como ministro de Educación tuve que tener un debate fuertísimo en el Consejo Interuniversitario Nacional porque los rectores de las universidades se negaban a recibir los recursos que les correspondían por la minería porque justamente lo que habían detectados las investigaciones de las universidades nacionales es que había contaminación, que es lo que queremos evitar con esta ley.

Por eso, con cualquiera de las dos leyes que se sancione creo que damos un paso importante para evitar lo que está pasando en el pueblo de Andalgalá.

**Sr. Presidente** (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Monllau.

**Sra. Monllau.** — Señor presidente: no voy a hablar de minería porque el objeto de la ley es la protección del agua. Hablaré de minería cuando corresponda, cuando tratemos la ley sobre esa materia. En este caso, no.

Qué bien que la gente de Buenos Aires pueda tratar los problemas en el ámbito de su propia jurisdicción.

**Sr. Presidente** (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.

**Sra. Di Perna.** — Señor presidente: quiero destacar, tal como se ha hecho previamente en varias exposiciones, la importancia de que una ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial pueda ser sancionada esta noche.

De cumplirse el oscuro pronóstico que expresó el senador Torres hace un momento sobre la desaparición de glaciares en nuestro territorio, eso necesariamente irá asociado a la desaparición del ser humano de vastas extensiones territoriales de nuestro país, por lo cual tenemos que poner énfasis en tratar de sacar la mejor ley que proteja los glaciares.

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce en nuestro país. Un recurso natural estratégico es todo recurso escaso, actual o potencialmente vital para el desarrollo de la actividad económica o para el mantenimiento de la calidad de vida de un país. Proveen agua a las cuencas subterráneas, a los ríos, en especial en verano. Son recursos no renovables. También se utilizan para estudios de clima y científicos. Aportan invalorable servicios ecosistémicos, que en muchos casos son irremplazables, y que muchas veces no son tenidos en cuenta en estudios de factibilidad económicas, de proyectos que afectarán a dichos ecosistemas.

También son íconos culturales, ya que culturas nativas y sociedades modernas han tenido especial reverencia hacia los glaciares y sus lenguas de hielo. Tienen una importancia social enorme. El agua que proveen los glaciares constituye un bien social y natural imprescindible para la vida, el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, constituyendo un derecho humano que conecta con la vida misma y con la cultura de la tierra.

Los glaciares mantienen —como ya se ha dicho— ese balance hídrico y climático en las cuencas, aportan agua a los ríos y a los lagos, y también a las napas subterráneas. En las cabeceras de las cuencas son cuerpos fundamentales. Una cuenca con glaciar es estable y provee seguridad estratégica a la agricultura, a la industria;

una cuenca sin glaciación es riesgosa, porque va a tener agua en la medida en que llueva.

Los glaciares se comportan de manera contraria al período de lluvias y sequías. Cuando nieva poco el glaciar tiene poca nieve encima, el hielo antiguo queda en la superficie y, como es un poco más oscuro, se derrite más y da más agua a los ríos. En épocas lluviosas y en años con más nieve el hielo nuevo protege el hielo de abajo y hay menos derretimiento. En los años secos los glaciares aportan más. En los años lluviosos los glaciares se resguardan.

Se ha hablado aquí del tema de presupuestos mínimos. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Nacional, las provincias han delegado en la Nación la potestad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.

El presupuesto mínimo implica una protección básica y uniforme para todo el país. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden complementar esos presupuestos mínimos dictando normas que atiendan a las particularidades de su jurisdicción, las cuales pueden ser más exigentes pero nunca inferiores a las dictadas por la Nación.

Considero que hay aspectos superadores en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, los cuales voy a enumerar, y por esa razón es el proyecto que voy a apoyar.

En primer lugar, este proyecto utiliza un concepto más amplio del ambiente periglacial, a diferencia del proyecto del Senado, que definía dentro del ambiente periglacial solamente a los glaciares de escombros, abarcando solamente una parte del área.

En el artículo 6°, referido a las prohibiciones, se amplían las restricciones del ambiente periglacial en sus incisos a), c) y d).

El artículo 7° incorpora el concepto de evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica se define como un procedimiento que tiene como objetivo la valoración de las consecuencias o impactos ambientales en la formulación de las decisiones estratégicas por parte del sector gubernamental. Esto es en todas aquellas decisiones que se tomen previamente a la instancia de proyectos específicos, tales como las distintas iniciativas, políticas, planes y programas.

La evaluación ambiental estratégica utiliza un estudio de impacto ambiental para analizar cada proyecto, influye en las políticas macroeconómicas, toma en cuenta los efectos sinérgicos y analiza las posibles alternativas de diseño y del sitio.

Y el cuarto punto es que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados establece un tiempo concreto para la realización del inventario. Si bien se debieran determinar plazos razonables y realizables, el proyecto del Senado no establecía ningún plazo, dando lugar a que no se complementara con el mismo.

Por esa razón voy a apoyar el proyecto que ha sido sancionado en la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Alperovich.

**Sra. Rojkés de Alperovich.** – He pedido la palabra para participar de este debate no porque sea una especialista en glaciares ni tampoco porque en este caso los intereses de mi provincia se vean especialmente tocados, pero en este tiempo de reflexión que hemos tenido los legisladores para escuchar todos los argumentos a favor y en contra de esta ley llamada de protección de los glaciares he sentido la necesidad de hacer mi aporte al tema. En primer lugar, porque, como muchos de los colegas que han opinado, provengo de una provincia pequeña del norte de nuestro país, donde a veces los recursos son pocos y las necesidades muchas.

Al escuchar las referencias que han hecho algunos señores legisladores y, sobre todo, algunas organizaciones defensoras del medio ambiente acerca de los recursos naturales y, en especial, de las fuentes de aguas ubicadas principalmente en las provincias cordilleranas, me vino a la memoria un Foro Mundial del Agua que se realizó en el marco de las Naciones Unidas y en el que participé como parlamentaria del Mercosur. Sin entrar en detalles, rápidamente quiero comentarles que allí participaron delegaciones de muchos países del mundo, como también numerosas organizaciones ambientalistas dedicadas al cuidado y a la preservación de los recursos naturales.

En esa ocasión, y al promediar la larga serie de reuniones programadas, los organizadores pusieron a la firma un documento en el cual, entre otras cosas, decían –palabras más, palabras

menos— que las fuentes de agua son patrimonio de la humanidad y que todos los habitantes del mundo tenían derecho a acceder al agua potable. Esto, en una primera lectura, nos pareció una importante defensa de un derecho humano básico y universal, como es el derecho al agua potable y como lo son también el acceso a la alimentación digna, al trabajo decente, a la vivienda, a la salud, etcétera. Pero cuando hicimos una segunda lectura, descubrimos que, si bien nadie puede negar que el acceso a una fuente de agua confiable es un legítimo derecho de todos los habitantes de este planeta, también es muy importante afirmar que el cuidado y la preservación de las fuentes de agua son responsabilidad exclusiva de cada Estado, de cada uno de los países que deben decidir sobre el uso racional y responsable de sus reservas naturales.

No me cabe la menor duda de que todos los que han trabajado en esta legislación de preservación y cuidado de nuestros glaciares lo han hecho de muy buena fe. Pero una cosa es cuidar de ellos tratando de no advertir acerca de los riesgos de contaminación y otra es avasallar los derechos de las provincias a decidir sobre el uso que deben hacer de sus recursos naturales.

—Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Legislación General del Honorable Senado de la Nación, senadora Liliana Teresita Negre de Alonso.

**Sra. Rojkés de Alperovich.** — Esto no significa que la Nación deba desentenderse definitivamente de algo que, sin lugar a dudas, nos involucra a todos; pero la función del Estado nacional no debería ir más allá de exigir el cumplimiento de los controles de impacto ambiental que permitan resguardar los glaciares y toda fuente de agua.

Señora presidenta: por lo alto de la hora, le pido permiso para insertar el resto de mi discurso. En definitiva, éstos son algunos de los pensamientos que quería compartir con todos.

Para finalizar, diré que creo todo esto podría lograrse con la participación activa de todos los recursos disponibles, acudiendo —de ser necesario— a universidades y centros de investigación especializados, así como también dando participación a las comunidades que estén involucradas en los emprendimientos, a los fines de otorgar la mayor transparencia

posible al proceso del control ambiental. Considero que, de esta manera, ambos factores en aparente pugna —el factor productivo y el factor ambiental— encontrarían el justo balance para que la acción productiva del hombre sirva para una mejor calidad de vida, pero que también preserve los bienes de las generaciones futuras.

Por las razones expuestas, acompañaré el dictamen de este Senado.

**Sr. Presidenta** (Negre de Alonso). — Vamos a poner en consideración su pedido cuando se voten las inserciones.

Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** — Señora presidenta: en primer lugar, como cuestión previa, quiero plantear, a mérito de mi acompañamiento a la sanción del proyecto de ley en revisión, algunas cuestiones que me parecen que deben ser atendidas en este recinto y que tienen que ver con el dictamen de la minoría que aconseja al rechazo del artículo 17 de la sanción de la Cámara de Diputados. Más allá de las argumentaciones reglamentarias, con este rechazo estamos modificando el capítulo de formación y sanción de las leyes porque el artículo 81 establece en su parte final que la cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la cámara revisora. Algunos senadores interpretamos que rechazar o eliminar un artículo implica una corrección a la modificación introducida en la Cámara de Diputados. Lo aclaro porque es el dictamen que acompaño.

Más allá de esta cuestión previa, con relación al proyecto que estamos tratando, quisiera detenerme con una mirada un poco más desapasionada que tienda a clarificar ideas y conceptos desde el punto de vista de una visión federal, porque se ha modificado en los últimos años, fundamentalmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Desde luego, esto se ha notado con mucha evidencia en la problemática ambiental y en cómo se deben dar las relaciones entre la Nación y las provincias en el marco de una armonización de legislaciones provinciales y nacionales y en el marco de competencias que la propia Constitución Nacional otorga al Congreso de la Nación.

Por eso, en cualquiera de los proyectos, estamos a favor de un genuino federalismo ambiental y lo que estamos discutiendo son



normas protectorias que tengan la capacidad de cubrir las expectativas que la propia Constitución Nacional prevee. Para ello, la llave maestra de saber cuáles son los parámetros de cómo tenemos que movernos en la relación Nación - provincias la da la propia Constitución Nacional en el artículo 41 y en el artículo 124 en su parte final. La regla es muy simple: corresponde al Congreso de la Nación fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental.

En este caso, estamos tratando presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares. En su oportunidad, a otros senadores que nos tocaba de cerca, hemos tratado los presupuestos mínimos de protección ambiental, por ejemplo, de los bosques nativos que comprendía la provincia de Formosa. Sin embargo, la lógica indica que es una facultad que le corresponde al Congreso de la Nación, como también es muy cierto que las propias provincias tienen la facultad de dictar las normas necesarias para complementarlas. Y, en el marco de esas normas necesarias para complementarlas, esto no significa de ninguna manera contradicción con la declaración del dominio originario que tienen las provincias con sus propios recursos naturales.

La delimitación de las competencias entre la Nación y las provincias ya había sido abordada antes de la reforma constitucional de 1994 por prestigiosos constitucionalistas, como por ejemplo Pedro Frías, quien expresó con mucha vehemencia que debíamos avanzar en el contexto de un federalismo de concertación y que había que evitar las teorías confrontativas. También expresó que la materia paradigmática para evaluar el federalismo de concertación en la Argentina pasaba por la cuestión ambiental.

¿Cómo se puede visualizar este federalismo de concertación en materia ambiental? Esto es muy simple. La senadora por Catamarca leyó versiones taquigráficas anteriores y reflejó una cosa muy cierta: que los presupuestos mínimos en materia ambiental habilitan a la Nación a dictar un piso.

Las provincias pueden dictar un techo, necesario para complementarlas en el marco de las propias legislaciones que tienen para proteger el medio ambiente.

Pero me parece muy importante señalar que esa facultad de complementar normas no

implica en modo alguno que las provincias puedan dictar normas complementarias de leyes nacionales que tengan que ver con materias de códigos de fondo. Porque esto expresamente lo prohíbe el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.

Entonces, ¿cómo se armoniza esto? ¿Cómo juega esto? Es muy claro. La competencia federal, que la tiene el Congreso para dictar normas de protección ambiental, tampoco implica extensión de jurisdicción federal en materia ambiental. Esto también es muy claro; se delimitan las propias competencias. Fundamentalmente cuando la reforma del 94 zanjó una vieja discusión, al otorgar a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales.

Ahora bien, acá se hacía mención a Sabsay, quien creo que fue muy contundente en esta idea, cuando decía que en definitiva la complementación se da por una especie de delegación no escrita de provincias a la Nación, en relación a este tipo de materias; y que para saber cuál es el límite, si no hay un avasallamiento de competencias que invadan prácticamente las esferas provinciales, la cosa pasa por saber que es siempre que la misma no importe un vaciamiento de tal dominio.

Por lo tanto, me parece que en los proyectos que podemos discutir, se puede estar a favor o en contra, pero creo que este proyecto de Diputados que algunos acompañamos, no implica vaciamientos de dominios de jurisdicción provincial.

**Sra. Presidenta** (Negre de Alonso). – Senador, la senadora Escudero le pide una interrupción.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – Cómo no, es un gusto.

**Sra. Escudero.** – Coincido con que la competencia del Congreso es estrictamente fijar el umbral de protección.

Pero por el artículo 124, la gestión corresponde a las provincias. Y el avasallamiento de la sanción de Diputados, es porque establece gestión, esa gestión pone una autoridad nacional a gestionar en los recursos que son de las provincias. Y ahí es donde hay una violación clarísima al artículo 124.

**Sra. Presidenta** (Negre de Alonso). – Gracias, senadora.

Continúa en el uso de la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – En realidad, es materia de interpretación. Yo creo que no; creo que está en el marco de las propias competencias del Congreso de la Nación y creo que la autoridad nacional también tiene un propio mecanismo como para actuar en forma conjunta con las provincias.

Pero avanzando en esta idea de esta visión federal, y quizás esta visión constitucional un poco desapasionada, me parece que todos tenemos que profundizar esta idea del federalismo de concertación. Porque, en mayor o en menor medida es el espíritu del constituyente, y creo que la cuestión ambiental –repito– es paradigmática en este sentido.

Tampoco avanzamos en el federalismo, en esta idea fuerza de que las provincias conservan todo el poder que no han delegado al gobierno federal; y vaya si no avanzamos, porque la propia reforma del 94, al otorgar justamente a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales, zanjó esa vieja discusión que se había dado con la reforma de la Constitución de 1949, donde prácticamente se rompió esa lógica, y hoy las cosas están en su justa medida o en su justo lugar.

Creo que tampoco podemos desconocer que este Congreso ha sancionado, a partir del año 2002, determinadas leyes de protección ambiental o pautas protectorias normativas.

Sí quiero detenerme en que el espíritu protector y los principios establecidos en el año 2002 con la ley 25.675, a mi modo de ver se encuentran reforzados y mayormente reflejados con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Estos principios, por citar algunos, son: el de prevención, el precautorio, el de equidad intergeneracional y el de sustentabilidad.

En definitiva, todo gira en los recaudos, en prevenir y garantizar el ambiente para las presentes y futuras generaciones, fundamentalmente de recursos naturales, algunos que son insustituibles y que tienen que ver justamente con el carácter básico que establece la propia Constitución nacional.

Para finalizar, quiero decir que estos proyectos –reitero– los contiene el proyecto de

Diputados. Esta visión federal es la que debe marcar este debate. Es decir, federalismo de concertación, delimitación de competencias que son claras; me parece que tampoco hay superposición de competencias. Y no puedo dejar de señalar, a modo de la claridad conceptual que nos da la propia Constitución nacional, que con esta sanción habremos dado más que un paso adelante para avanzar en la protección de derechos fundamentales que otorga la propia Constitución para las generaciones presentes y futuras de los argentinos.

**Sra. Presidenta** (Negre de Alonso). – Tiene la palabra el senador Bermejo.

**Sr. Bermejo.** – Señora presidenta: el caso de mi provincia, Mendoza, es un paradigma en las zonas áridas y semiáridas, con un marcado déficit natural de agua. Entre el 2 y el 3 por ciento de su superficie, de poco más de 148 mil kilómetros cuadrados, está irrigada artificialmente y se evidencia la necesidad de lograr un uso eficiente de los recursos hídricos y de preservar las fuentes de agua dulce.

Las precipitaciones, como aquí se dijo, apenas superan los 250 milímetros de agua anuales, nada en comparación con los 700 u 800 milímetros que bendicen cada año a la Pampa Húmeda.

Según información proporcionada por el instituto Ianigla, del Conicet, los glaciares no cubren más que 1 por ciento de la superficie mendocina y con su protección se asegura casi el 70 por ciento del caudal de los ríos en momentos de escasez hídrica. He aquí, entonces, señor presidente, nuestra fábrica de agua.

Vengo de un departamento, en la provincia de Mendoza, conocido como la cuna del vino. Y para que nuestras viñas y parrales nos den sus mejores uvas necesitamos contar con el agua que baja desde la montaña y transforma el desierto en oasis.

Es relevante comprender que la agricultura es el sector más afectado cuando existen problemas de agua. Es decir, pierde prioridad frente a otros usos.

Antes que llegaran los españoles, los pueblos originarios de Mendoza, los huarpes cultivaban la tierra con riego y derivaban el agua por medio del Canal Zanjón, que luego se llamó Guaymallén. Hoy, se sigue usando la misma infraestructura con algunos agregados.

En 1884, la provincia pone en vigencia la primera ley de aguas del país, que sigue rigiendo los destinos del uso local de ese elemento vital para nuestra vida diaria y el desarrollo económico sustentable para mi provincia. Allí concentramos el poder de policía del agua, a través del Departamento General de Irrigación, que administra el recurso hídrico superficial, el aprovechamiento general de las aguas subterráneas y ejecuta impermeabilizaciones de canales, obras para sistemas de riego por goteo tanto de fuente superficial como subterránea. Al mismo tiempo, participan sus técnicos en el diseño y control de diques derivadores.

Por esa misma cultura de oasis a la que hago referencia, los mendocinos consideramos al agua como un patrimonio. Y en materia de desarrollo sustentable, en Mendoza, fuimos los primeros en sancionar la ley de preservación del ambiente. La ley 5.961 contiene las instituciones esenciales de la política ambiental provincial. Y, desde su sanción, muchas provincias argentinas la tomaron como ejemplo y modelo.

—Ocupa la Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

**Sr. Bermejo.** — Esta ley nos exige la evaluación del impacto ambiental, el deber del gobierno de presentar el informe ambiental anual y el plan ambiental, y la creación del Consejo Provincial del Ambiente, entre otras disposiciones señeras.

Señor presidente: hice referencia a que la cultura del oasis requería de obras que responden a esa particularidad. Y por esa misma cultura se arma un andamiaje legal, normativo acorde a la sustentabilidad del oasis.

El pasado año se sancionó la ley 8.081, de ordenamiento territorial y usos del suelo, con un aporte significativo por parte del sector científico, concretamente del Conicet, del cual depende el Ianigla. La norma es una política de Estado que tiende al crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio provincial.

Traigo toda esta referencia con el convencimiento de que, con la sanción de leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental, conforme la distribución de competencias que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, la legislación provincial recibe una renovada

interpretación a la luz de los nuevos principios e instituciones que, obligatoriamente, se deben complementar y aplicar, lejos de significar un avasallamiento al federalismo.

La Asamblea General de las Naciones reconoció al agua potable como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Para no ser extenso, solicito autorización para insertar el resto de mi exposición.

Represento a la provincia de Mendoza. Esa que nació y creció junto a la Cordillera de los Andes; donde la tierra da sus mejores frutos, y desde donde el Padre de la Patria inició su gesta libertadora, surcando riachos, manantiales y glaciares. Desde mi tierra vengo a este recinto para defender el agua, porque estoy convencido de que así definiendo la vida.

Por los motivos expuestos votaré el dictamen en minoría, que contiene el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, con la convicción de que es una herramienta válida para enfrentar el desafío que nos impone el futuro, con una población infinitamente superior a la de la etapa inicial y con el mismo volumen de agua del que disponían los huarpes. Esa será la única forma de que las futuras generaciones no sólo tengan agua pura, sino que además puedan gozar de los adelantos de la vida moderna con cuidados ambientales.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.

**Sra. Quintela.** — Señor presidente: creo que hay que actuar en forma muy sincera y no demagógica.

No hay que confundir la ley de protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, con lo relacionado con la minería. En mi provincia existe un problema grande vinculado con la minería. Pero nosotros, como provincia, contamos con la ley 8.773, sancionada por la Cámara de Diputados provincial, de protección de los glaciares. Dicha norma define perfectamente quién tiene la potestad sobre los glaciares y la zona periglacial.

En este caso, nosotros sostenemos que los recursos naturales de cada una de las provincias pertenecen ellas, y que somos nosotros, es decir, los gobiernos y los pueblos de las provincias, los que debemos decidir qué hacer y cómo para preservar recursos no renovables tales como el

agua, un elemento vital para el desarrollo y el crecimiento de las provincias.

Por supuesto, como argentina, considero que el proyecto sancionado por el Senado sufrió varias modificaciones en Diputados, una de las cuales, por ejemplo, implica la eliminación del reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales y, por consiguiente, el desconocimiento de la posibilidad de las provincias de confeccionar su propio inventario. Asimismo —a diferencia de la iniciativa aprobada por Diputados—, concuerdo con lo expresado por el senador Pérez Alsina acerca del proyecto sancionado por el Senado, ya que el artículo 124 establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Considero que no hay que menoscabar o menospreciar el conocimiento que tenemos los provincianos al definir estas situaciones que nos corresponden por derecho. Nosotros somos acérrimos defensores de los derechos humanos y uno de ellos es este.

Por otra parte, quiero manifestar mi repudio a expresiones de algún senador que ha hecho una yuxtaposición de lo que es esta ley con lo que debería ser una modificación del Código de Minería; en muchas cosas no estamos de acuerdo, como por ejemplo en la extracción de las multinacionales, que se llevan un 97 por ciento de las regalías, dejándonos a la provincia con el 1,5 por ciento y el 1,5 por ciento para el municipio. Encima nos dejan sin nuestros recursos.

Por eso, quiero clarificar al pueblo de mi provincia que, como siempre, voy a defender sus intereses, y cuando se toque el tema de la minería, ya sabremos cómo responder. Pero en este caso de la ley sobre recursos mínimos para la preservación de lo que son glaciares y periglaciares, somos nosotros los que tenemos que decidir.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** — Señor presidente: si bien todos aquí han dicho que el objeto de esta ley tiene como eje central la protección de los glaciares, lo que hemos escuchado en las comisiones durante el tratamiento de esta ley, incluso lo que hasta aquí se lleva dicho, es si esta ley

atenta o no contra los intereses mineros, que es la protección misma de los glaciares.

Considero que esta cuestión hay que abordarla sin ningún tipo de hipocresía. Si en realidad la preocupación fueran solamente los glaciares y pudiéramos analizar el tema de los glaciares desprendidos del tema minero, no estaríamos inmersos en este debate.

Fijense que el tema es tan fuerte que nos ha obligado a hablar del federalismo y del avasallamiento de las autonomías provinciales. Miren cómo será de fuerte el tema minero que mientras en el país los Kirchner se apropiaban de los recursos de la provincia, llegando a un esquema distributivo donde la Nación se queda con el 70 por ciento de lo recaudado o algo más y el 30 por ciento, no discutíamos estas cosas.

Es más, en esto de hablar sin hipocresía, cuando el Senado sancionó la Ley de Coparticipación del Cheque hubo gobernadores que sacaron una solicitada oponiéndose a que este Senado votara una ley que les diera más fondos.

Por eso, cuando abordemos el federalismo me gustaría que lo hiciéramos sin hipocresías y que algún día dejemos de lado esta manera de gestionar el poder que tiene el gobierno hoy, con “aprietes” a través de la billetera. Me gustaría que los intereses entre los Estados provinciales y la Nación alguna vez se pudieran manejar por los intereses permanentes que tanto la Nación como las provincias deben preservar y no por las internas partidarias. Y en esto tienen mucho de responsabilidad los gobernadores en la Argentina. No pueden venir alegremente a echar culpas simplemente al Congreso de la Nación, cuando los gobernadores durante los últimos años han estado apoyando y sosteniendo este federalismo rengu que hoy tiene la Argentina.

Sostengo que hay que abordar esta cuestión desde dos puntos de vista. Uno, necesariamente, es el marco jurídico en el que se va a resolver esta cuestión —aquí se lo ha mencionado— y otro, el escenario político en el que se discute esta cuestión. Pero previamente a todo, quisiera aclarar cuál va a ser mi elección personal frente a las dudas que me puedan generar la preservación del medio y la explotación de alguna actividad que ponga en riesgo el medio. En ese caso, no tengo ninguna duda en quedarme con la protección del medio.



Se ha hablado mucho del dominio originario que tienen las provincias sobre los recursos naturales. Y creo que se hace necesario desentrañar el significado de dominio originario, sobre todo, porque ha adquirido una gran importancia desde el punto de vista económico. Es decir, cómo se proyecta la titularidad y la explotación de los recursos naturales después de la reforma constitucional de 1994; por la trascendencia económica que implica, adquiere una vital importancia. Es por ello que se hace necesario definir con un mínimo grado de certeza cuál es el estatus jurídico que tiene el dominio originario, porque ello constituye el punto de partida para poder avanzar en la resolución de estos temas.

Más allá de que a mí me guste o no la solución que se adoptó en la Constitución Nacional, es la que hay. Y no quiero caer en la falsa discusión del federalismo en la que se plantea una pelea entre provincia y Nación, porque es una cosa de locos. La Nación es el producto de pactos preexistentes entre provincias que preexistían a la Nación y se conformó la Nación entre un acuerdo de todas las provincias. Entonces, conformada aquélla, lo que no se puede perder es el sentido de pertenencia a esa Nación. No tiene ningún sentido que las provincias armen una nación y luego se peleen con ella. Es de locos. Las provincias tienen todas las facultades para reglamentar ese federalismo y la convivencia entre Nación y provincias. Lo que no hay que provocar es la pelea, lo que decía recién el senador Petcoff Naidenoff sobre la necesidad del federalismo de concertación.

La figura de dominio originario es una figura que proviene, precisamente, del derecho minero. Ello hace que debamos remitirnos a esa rama del derecho para tratar de desentrañar claramente su significado. Lo que está fuera de toda discusión, dado que el texto constitucional es sumamente claro, es que el dominio originario es a favor de las provincias. Y los antecedentes se encuentran en las normas que nos regían antes de ser un país independiente, que sostenían que las minas eran del rey. De allí viene el nombre de regalías al canon que se paga por la explotación de las minas. Cuando se pasó a ser un país independiente, se transforman en una propiedad de la Nación por ser los continuadores de la corona. Y de hecho, en la Argentina, el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación,

dictado en 1853, dispuso aplicar en el país las ordenanzas de Nueva España, México, de 1783, que asignaban el dominio eminente al soberano en tanto que el dominio útil se lo asignaban a los particulares. Esto duró hasta la reforma de 1860 y la posterior sanción del Código de Minería, que establecieron la caducidad de aquel estatuto.

El artículo 7 del Código de Minería y los artículos 24 y 32, inciso 2, del Código Civil disponen, también, que las minas son bienes privados de la Nación a las provincias, de acuerdo con el lugar donde se encuentren. Así fue como aquí también se dijo, hasta 1949, en que se sanciona la Constitución, donde pasan a ser propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación. Luego de restablecida la vigencia de la Constitución de 1853, se sanciona la nueva Constitución de 1994 con el concepto de dominio originario que utiliza el Código de Minería, precisamente, en su artículo 10. Sobre este dominio originario o minero se han esbozado distintas teorías. Pero hay básicamente dos: la que se denomina teoría positiva y la teoría negativa del dominio minero.

La primera, la positiva, implica un concepto de dominio real con alcances jurídicos parecidos al derecho de propiedad; y la segunda, la negativa, considera a la mina como algo que los abogados llamamos *res nullius*. Es decir que no tienen dueño originario y la única atribución del Estado es titular el patrimonio minero postergando las concesiones y custodiar el interés público de la producción.

Esta simplificación no alcanzaría para desentrañar el problema que se presenta entre dominio eminente y originario. El dominio eminente, como aquí se ha dicho —creo que fue el senador Pérez Alsina—, es el derecho que tiene el Estado de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad privada de cualquier bien sin ser el Estado el propietario. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de legislar y de reglamentar sobre la propiedad. Es decir, el Estado conserva sobre ellos su jurisdicción, se trate de dominio público o de dominio privado. Y aquí viene lo que a veces genera discusión y, otras, confusión: la distinción que hay entre dominio y jurisdicción, y a quién la Constitución reservó el dominio y a quién delegó la jurisdicción. Repito: más allá de que a mí me guste o no,

es la solución que hoy está vigente en nuestro derecho positivo.

Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Mi provincia es marítima. Nosotros somos los dueños de las costas, pero el Estado nacional se reserva la jurisdicción, por ejemplo, en la zona de faros para la navegación. Ahí tenemos un caso donde alguien tiene el dominio y otro tiene la jurisdicción. O al revés, puede que yo tenga la propiedad y la alquile a una delegación de la Policía Federal. El dominio va a ser de un particular, y la jurisdicción sobre esa casa va a ser de la Nación.

Esta distinción no es nueva. Existe en la jurisprudencia argentina el *leading case* o el caso testigo donde esto se discutió. Fue una sentencia que se originó mucho antes de todos estos problemas y que data del 29 de mayo de 1929 con motivo de la intención de la provincia de Santa Fe de cobrar tributos en la zona portuaria. En ese caso, la Corte, claramente, señaló lo siguiente: Consideramos necesario distinguir el dominio de la jurisdicción, ya que esta última, entendida como capacidad para reglar los usos de un bien, no sigue siempre a su dominio. Y Frías, a quien aquí también se mencionó, respalda su opinión acerca de la distinción entre dominio y jurisdicción en dicha sentencia. Ahí explica la facultad de legislar que se reserva la Nación sobre este tipo de cuestiones.

**Sr. Presidente.** – Señor senador: ruego que redondee su exposición, dado que su tiempo se ha cumplido.

**Sr. Cimadevilla.** – Con lo que sigue termino, señor presidente, para distinguir entre dominio y jurisdicción.

Una vez que las provincias otorgan una concesión minera, como dueñas originarias del recurso, otorgan la concesión minera y nace un nuevo derecho a favor del concesionario, que entra a estar regido por el Código de Minería. Al respecto, debo recordar que los constituyentes facultaron al Congreso para dictar ese Código de Minería. De allí, la intervención y la injerencia que tiene el Congreso Nacional en este tema. Sin embargo, no quisiera terminar mi exposición sin referirme a la necesidad que tenemos en la Argentina de rediscutir la ley de inversiones mineras.

¿Cuál es el argumento que aquí se ha utilizado para oponerse a esta ley de glaciares? Que es una norma que impide dar trabajo a las provincias que tienen la mayoría de su territorio desértico o de montaña. Que es una ley que va a condenar a estas provincias a que la gente viva del empleo público. En definitiva, con estos argumentos, estamos defendiendo una política minera que en la Argentina lleve a que cambiemos recursos por salarios. Seamos absolutamente honestos: lo único que quedan en el país son unas miserables regalías y, en el caso concreto de los hidrocarburos y de las minas, las empresas están facultadas para llevarse lo que producen y ni siquiera ingresar las divisas al país.

Creo que éste va a ser el tema central de la discusión en este Congreso: si estamos dispuestos o no a mantener una legislación minera e hidrocarburífera que no contempla la retención de la renta en la región y que va a seguir permitiendo el cambio de recursos por salarios, que es el esquema productivo de nuestros recursos naturales en la Argentina de hoy, nos guste o no. Seguramente, va a tener que ser una discusión ampliada a los distintos sectores de la sociedad, porque la historia de las provincias nos muestra sobrados ejemplos de cómo la carencia de políticas de Estado es aprovechada por intereses sectoriales puntuales y concretos en detrimento de los verdaderos intereses provinciales.

Son innumerables los casos en que las decisiones que comprometen nuestros recursos a futuro son tomadas en el marco de presiones o de urgencias, auténticas o armadas, pero siempre en ese contexto. Fuentes de trabajo en real o supuesto peligro han sido, en numerosas ocasiones, el elemento de presión que se ha utilizado para justificar la adopción de medidas que, muchas veces, no han sido convenientes para nuestros intereses.

Sin un adecuado análisis y debate, con la inclusión de la opinión y participación de sectores representativos de todas nuestras comunidades, se han negociado siempre nuestros recursos naturales. Generalmente, son empresas o sectores puntualmente interesados, conjuntamente con algunos funcionarios, los que han definido directamente el destino de nuestros recursos naturales, y creo que eso no puede seguir siendo posible. Esta es la ley de los glaciares, pero se me ocurre que era imprescindible hablar de este

otro tema, que es el que está condicionando la defensa de nuestro recurso agua, nada más ni nada menos. Creo que lo que viene es rediscutir la ley minera en la Argentina.

**Sr. Presidente.** –Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.

**Sra. Riofrio.** – Señor presidente: en verdad, se me hace muy difícil hablar sin tener vehemencia en mis expresiones, porque a lo largo de toda esta jornada y de las que han antecedido en la comisión, hemos tenido que escuchar en forma directa, algunas veces, y otras, en forma subliminal, algunas cuestiones que son realmente ofensivas, tanto para nosotros como provincianos como para lo que atañe a lo que señalaba el señor senador Cimadevilla: la minería, una actividad muchas veces vilipendiada y demonizada. Obviamente, no estamos hablando de la ley de minería, no obstante lo cual, coincido en que, en algún momento, vamos a tener que plantearla y darle tratamiento. Asimismo, también estoy de acuerdo en que, durante esta noche, se ha hablado más de minería que de glaciares. Se ha hablado tanto de minería porque, en realidad, era el objetivo. Yo también coincido con alguien que ha dicho eso.

Siempre trato de pensar bien. Cuando se produjo la modificación, uno podía pensar que la definición tiene menos precisión, lo que puede obedecer a un error. Pero a lo largo de los debates nos hemos dado cuenta de que esto no fue inocente; para nada fue inocente. Eso quedó muy claro porque, justamente, las apreciaciones que hizo la autoridad máxima del Instituto de Glaciología –su director– nos dieron toda la tranquilidad en cuanto a que las dos leyes protegen exactamente las mismas zonas: la zona periglacial y los glaciares. Todos estábamos de acuerdo con la definición de glaciares. El señor Villalba, en el seno de la comisión aseguró que los dos proyectos de ley eran exactamente iguales y que no podía emitir opinión respecto de la ambigüedad terminológica ni de las consecuencias que esa ambigüedad podía traer.

Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que acá se ha planteado una antinomia innecesaria y se ha bajado a la sociedad una inquietud absolutamente innecesaria, porque los dos proyectos, en realidad, protegen lo mismo. Aquí no hay un proyecto que busque impunidad para ningún tipo de actividad. Los que estamos

apoyando la sanción de la Cámara de Senadores no estamos buscando un proyecto de impunidad ni estamos buscando laxitud para que proyectos mineros se realicen en zonas protegidas. En todo momento, hemos aceptado la necesidad de la protección de los glaciares y de la zona periglacial. Lo único que estamos pidiendo, y tenemos todo el derecho de hacerlo, es precisión en la terminología que defina la zona a proteger. Estamos pidiendo precisión, y tenemos razones para pedirla. Esta actividad que es la única taxativamente prohibida, que es la minería, es el eje del desarrollo de mi provincia.

El senador Filmus hizo en su exposición una visión del pasado y de la historia de esta ley. Se preguntaba quiénes eran los senadores y los diputados que votaron y a quiénes representaban cuando votaron la primera ley, la ley de la diputada Maffei. Yo le digo que en esta sesión y en esta banca está sentada la senadora Riofrio que representa los intereses de su provincia y la posición del gobierno al cual pertenece. Yo también podría preguntar a quién está representando el senador Filmus. Él es integrante del bloque oficialista. Él es el gestor del verdadero consenso, que fue la sanción de este Senado. Ése es el verdadero consenso. En los medios y en la sociedad, ha quedado instalado que la ley modificada en la Cámara de Diputados es la ley del consenso. ¿Del consenso de quién, pregunto yo? Sostengo que el verdadero consenso –reconozco el mérito, el trabajo, el estudio, la buena voluntad y la dedicación del senador Filmus– es el que se logró en este Senado con el voto unánime de todos los senadores.

No sé si ha dicho, pero tenemos que recordar que, en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista no apoyó esas modificaciones. Por lo tanto, el consenso que yo valoro es el del Senado, el que hicimos todos nosotros. En nada es superador el proyecto de la Cámara de Diputados con referencia a las áreas a proteger. No es que lo diga yo solamente sino que lo expresó la autoridad máxima del Ianigla, y está absolutamente claro en la versión taquigráfica. Si al director del Ianigla, a los fines protectivos, le parece exactamente igual, ¿cuál es el problema de establecer una definición clara y precisa que nos garantice rapidez en el inventario? Obviamente, la precisión terminológica va a traer aparejado menor tiempo en efectuar el inventario.

Tenemos todo el derecho del mundo de suponer que esto va a ser fuente de conflicto. Y esa preocupación también fue expresada en el seno de la Comisión por una posición contundente que no fue hecha en forma personal sino en nombre del gobierno. Acá vino el secretario de Minería de la Nación y vino el secretario de Ambiente—que, si no entiendo mal, tiene rango ministerial— y expresó la posición del gobierno. Hizo hincapié en las falencias operativas que traería aparejada para la reglamentación la modificación introducida en la Cámara de Diputados; hizo mención a la cuestión constitucional; hizo mención a la imprecisión, a los elementos inventariables y a la incertidumbre en las diferencias conceptuales. Eso está en el ítem 7 del documento que él nos dejó.

Él dijo —y este material nos lo dejó a todos— que el término “regulador del recurso hídrico” presente en el artículo 2° del proyecto de la Cámara de Diputados, escindido del concepto de reserva estratégica, también será motivo de controversia técnica al momento de reglamentar la ley y hacer operativo el inventario. Incorpora los suelos congelados reguladores del recurso hídrico y los suelos saturados en hielo que, a priori, no tienen el carácter de reserva estratégica. Porque esto también hay que decirlo: hay muchos suelos saturados en agua o congelados que no son estratégicos; ¿y quién va a determinar cuándo un recurso hídrico es estratégico o no? Y mencionó que para determinar si un recurso hídrico es estratégico o no, hacen falta estudios técnicos suplementarios que van a llevar muchísimo tiempo, y que no está contemplado en esta ley.

En cuanto a los elementos inventariables, el texto del Senado, al definir en su artículo 2° glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, delimita claramente el bien periglaciario, siendo, por tanto, el inventario, una posibilidad concreta y no genérica, como lo es el texto de la Cámara de Diputados, que se refiere a suelos congelados y saturados. Eso daría lugar a interpretaciones amplias administrativas y judiciales, con una secuela de controversias impredecibles por falta de certezas a priori.

Creo que es contundente la posición expresada en nombre del gobierno al cual estoy representando. También, quiero expresar que para la cuestión constitucional, obviamente,

se requieren expertos. A priori, me parece que esto es un avance innegable a las atribuciones provinciales.

La Constitución de la Provincia de San Juan, de la que —si me permiten— voy a dar lectura...

**Sr. Presidente.** — Sí, pero vaya redondeando, por favor.

**Sra. Riofrio.** — Sí; voy a redondear.

Nuestra Constitución dice que la provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; las fuentes naturales de energía hidroeléctrica, solar, geotérmica —hace una descripción total—. Y continúa diciendo que el Estado nacional no podrá disponer sobre estos recursos de la provincia sin el previo acuerdo de ésta expresado por la ley. He redondeado porque obvié una gran parte del artículo; pero nos pone en la obligación de cumplir nuestra Constitución.

También quiero hacer mención al veto de la presidenta de la Nación respecto de la llamada ley Maffei. Cuando habla de presupuestos mínimos, dice que había un exceso exorbitante de la cuestión restrictiva que establecía el artículo 6°. Yo quisiera preguntar qué es; cuánto cambió realmente ese artículo para que hoy tengamos otra posición.

Voy a redondear, señor presidente, intentando dar un mensaje clarificador y, sobre todo, tranquilizador para la sociedad. Reitero el principio de que acá hemos tenido una discusión prácticamente inútil. Si realmente hubiéramos tenido en cuenta las expresiones de los propios técnicos que tendrán a cargo el inventario, veríamos que los dos proyectos de ley protegen absolutamente lo mismo.

Insisto: lo único que nosotros hemos pedido y que tenemos el derecho de pedir —porque en ello está cifrado nuestro proyecto de desarrollo— es precisión en la terminología, que nos posibilite tener algo que se reclama constantemente: seguridad jurídica para los proyectos en curso y para los que tenemos como base para el desarrollo futuro de nuestras provincias. Lamentablemente, mal que les pese a muchos que se han escondido tras la protección de los glaciares, se trata de proyectos mineros.



**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

**Sra. Morandini.** – Señor presidente: quisiera hacer la mejor argumentación, pero por la hora, le voy a pedir permiso para leer. De lo contrario, me será muy difícil hacer honor a lo que me gustaría para defender valores.

La vida se ha burlado bastante de mí, porque como periodista, en 1992, participé de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de esa megarreunión que juntó a presidentes, reyes, primeros ministros y técnicos de todas partes del mundo. Allí, como resultado final, se advirtió que las guerras futuras iban a ser por el agua.

En verdad, digo que la vida se ha burlado de mí porque, con los ojos prejuiciosos de la periodista, miraba a todos aquellos hombres que tenían en sus manos la decisión de todos los mortales del mundo. De hecho, siempre me pareció un absurdo que los técnicos advirtieran lo que iba a pasar y que la responsabilidad de la política fuera, precisamente, no evitar que pasara eso que nos estaban diciendo. Nunca me hubiera imaginado que iba a estar sentada en un lugar de enorme responsabilidad política, es decir, de enorme responsabilidad de anticipar el futuro y de legislar para los argentinos que todavía no han nacido.

Tenemos una gran paradoja porque la Constitución del 94, por un lado, devuelve los recursos a las provincias; pero encadena nuestra Carga Magna a todos los tratados internacionales de derechos humanos. De modo que la cultura de derechos humanos lo que hace es poner en el centro a un ser humano que porta derecho sólo por su condición de persona pero alberga el ideal de que ese mismo ser humano debe tener el mismo sentimiento hacia toda la humanidad. Por lo tanto, los asuntos de medio ambiente –que nuestra Constitución consagra como derecho– no pueden ser escindidos de ese valor universal.

En la declaración de esa conferencia de Río de Janeiro, el principio número 11 establecía, también, que las agresiones ambientales son universales y, por lo tanto, deben ser combatidas y prevenidas independientemente de la raza, la lengua y la cultura de las víctimas. De modo que, en los temas ambientales, por su naturaleza, es imposible asegurar esos derechos si no se les da un marco global.

Entonces, por un lado, estamos encadenados a la universalidad y, por otro lado, he escuchado a lo largo de este debate hacer una reivindicación de lo federal. La verdad es que, no siendo abogada, tengo ventaja, porque no tengo que hacer interpretaciones y me parece que los presupuestos mínimos son bastante claros. “Mínimo” no quiere decir poco, no quiere decir débil, no quiere decir laxo. “Mínimo” lo que está diciendo es que sea igual para todo el territorio y, a partir de ahí, las provincias son las que complementan. De modo que no he entendido la defensa de lo federal como una forma para dar fortaleza. A mi criterio, el debate tendría que poner como centro otros temas.

Tampoco puedo reconocer que aquellos que defienden un proyecto u otro invaliden a los porteños al decir que no tienen autoridad porque el Riachuelo está contaminado. La verdad que es un pobre argumento, porque pertenecemos a la Nación, y si hay algo que enseñan los temas ambientales es no sólo la universalidad del derecho sino que, sobre todo en las catástrofes, no hay límites artificiales. Lo que sucede en una parte del globo afecta la otra.

Cuando hablamos de los glaciares, vemos que el problema serio que tenemos, producto de lo que se ha hecho en otra parte del planeta, es que nuestros glaciares retroceden o se derriten. Lo cierto es que lo que está provocando eso es el calentamiento global; precisamente, es lo que han hecho los países ricos sin tener cuidado con su medio ambiente. Entonces, nosotros, que hoy llegamos tarde al desarrollo, no podemos reivindicar como modelo lo que los países ricos ya han puesto en la basura; además, están convirtiendo lo que eran nuestras nieves eternas, los paisajes, en recursos. Uno debería preguntar desde la obiedad en qué momento eso que es naturaleza pasa a ser recurso. Pasa a ser recurso cuando vienen de afuera y nos dicen “ahí abajo hay oro”. Entonces, las cosas se empiezan a clarificar. No pongo en duda las buenas intenciones. No necesito descalificar a nadie para fortalecer mis argumentos. Pero lo cierto es que uno empieza a ver que hay dos tipos de cuestiones en debate: por un lado, están los intereses y, por el otro, el tema de los valores.

Me parece importante traer a colación el tema del desarrollo, que no es menor. Me llama la atención cómo se legitima la defensa de este

desarrollo, por ejemplo, con la actividad minera, con los mismos argumentos que se utilizaban en los años 90, hoy denostados. De hecho, estamos padeciendo muchísimas de las consecuencias que nos ha dejado ese modelo de desarrollo.

De modo que, en el calentamiento global, ésta es la mejor prueba de cómo el descuido, la forma de producción en nombre del desarrollo sin temer por el medio ambiente, lo padecemos todos; pero, sobre todo, lo padecemos quienes vivimos en esta parte del mundo. Los ricos de la tierra ya jugaron de manera tan irresponsable con el medio ambiente que ellos disfrutaban de la riqueza y nuestros glaciares se derriten. Esta interconexión existe, como señalaba antes, entre los temas ambientales que se producen en una parte del mundo pero cuyas consecuencias sufren otros.

Podría argumentar en un sentido o en otro de los dos proyectos. Vengo de la Cámara de Diputados. He votado el proyecto que viene en revisión, de modo que tampoco entiendo que se pueda hacer una competencia. Es decir, creo que el proyecto de la Cámara de Diputados —lo dice el mismo senador Filmus— es una iniciativa que protege más. Si uno piensa que el Ianigla presenta el cronograma, en el proyecto que viene en revisión, de un inventario de 60 días desde la sanción de esta ley y, además, también pone plazo, ve que, en relación con el proyecto del Senado, por lo menos, hay una precisión y una exigencia en términos de plazo.

Pero para no hacer jugar los argumentos de los dos proyectos, me gustaría poner en el centro del debate el tema de que, como se señalaba, este año, Naciones Unidas ha declarado el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida de todos los seres humanos. Esto también es un compromiso que tiene nuestro país. Por un lado, cuando advertimos que los recursos son de las provincias, nos compromete mucho más. Los provincianos tenemos que ser mucho más celosos de esto que se nos da para que custodiemos, ya no sólo en nombre de nuestras provincias sino en nombre de la Nación, y en nombre de lo que nuestra Nación se ha comprometido a cumplir internacionalmente, que son todos los tratados de derechos humanos.

Podría agobiarlos con las cifras para decir lo que sabemos que es escaso. Según el último cen-

so nacional, tenemos más de siete millones de habitantes de nuestro país que no tienen acceso al agua. Esto significa el 21 por ciento de la población. Muchísimos de nuestros compatriotas tienen acceso a fuentes de agua contaminadas con contenidos elevados de arsénico, de plomo y de cromo; otros, deben caminar kilómetros desde sus casas para obtener el recurso en ríos o arroyos, recolectar agua de lluvia o esperar camiones cisterna que les entreguen pocos litros para varios días. Esto también forma parte de nuestra realidad.

¡Lo que hemos visto por las barbaridades que se han hecho en Asia! ¡Las barbaridades que se han hecho en Europa, donde de cincuenta ríos, les quedan nada más que cinco no contaminados! De modo que es importante no perder de vista qué le pasa y qué le ha pasado al mundo. Creo que el haber llegado tarde al desarrollo nos da una enorme ventaja, que es, precisamente, no reproducir todo lo que el mundo está mostrando como inservible y que ha hecho daño, porque también nos va a hacer daño a nosotros.

La Argentina es el octavo país más extenso del mundo; pero las zonas áridas representan el 5 por ciento de su superficie total donde se asienta el 30 de su población, según datos que figuran en el portal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También, en nuestro país, se empiezan a detectar fenómenos que son alarmantes en Europa, como puede ser la desertización. Hay entre cincuenta y sesenta mil hectáreas por año que entran en la desertización.

Sé que tengo poco tiempo. De todo lo que hemos escuchado, todos hemos aprendido, todos hemos estudiado; pero de las cosas que me quedan y que quiero compartir con ustedes es lo que se nos cuenta también con relación a qué produce la minería con este intenso polvo que se levanta a raíz de las explosiones que llevan adelante a diario las empresas mineras, a muy escasa distancia de los cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes. Produce un material particulado que se deposita sobre los glaciares, formando una capa gris que atrae con mayor intensidad la radiación solar y provoca una aceleración del proceso de derretimiento de los hielos, ocasionando una permanente erosión en estos reservorios naturales de agua dulce,

además de una modificación artificial a todo un ecosistema.

**Sr. Presidente.** – Senadora: ya ha pasado hace rato su tiempo. Le pido que vaya redondeando, por favor.

**Sra. Morandini.** – Celebro que podamos empezar a revisar los tratados mineros de la década del 90. Y permítame, esto sí lo voy a decir con mucho cinismo: me he cuidado de ser muy respetuosa pero, a la luz de esos tratados, de cómo han sido resueltos en Chile y cómo son resueltos en nuestro país, me parece que don Pascual se queda con el oro y nuestro país se va a quedar con la lana.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Parrilli.

**Sra. Parrilli.** – Señor presidente: a esta hora, creo que ya no hay mucho más para decir. Solamente, quiero remarcar un aspecto.

Coincido perfectamente con todo lo que ha planteado el senador Lores, por la provincia del Neuquén; y creo que estamos ante la disyuntiva de dos leyes que están protegiendo los glaciares. Pero creo que el tema se ha derivado y la discusión, quizás, se ha teñido un poco al tocar el tema de la relación con la minería.

Me parece que lo que está ocasionando la pérdida de los glaciares, en todo caso, es el calentamiento global. Esto es lo que fundamentalmente no se ha tocado y es lo que yo quería remarcar porque, justamente, las grandes potencias que están provocando el calentamiento son las que no adhieren a los tratados internacionales para proteger el medio ambiente.

También, creo –esto ha sido dicho por otros senadores– que acá lo fundamental es la protección del agua. No se trata sólo de la protección de los glaciares sino, también, de la protección de nuestros ríos, de nuestras cuencas, del mar. Entonces, celebro que hoy estemos tratando una ley que resguarde los glaciares; pero me parece que, en algún momento, deberíamos considerar cómo hacemos un uso racional del agua y cómo no contaminamos más nuestros ríos que, en nuestra provincia, son muy ricos, pero, lamentablemente, cada vez los vemos más contaminados. Esto es fundamentalmente lo que quería recalcar.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Cano.

**Sr. Cano.** – Señor presidente: en primer lugar, quiero adherir a las manifestaciones de repudio que ha habido en el recinto hacia algunas insinuaciones que se hicieron acerca de las posiciones que pueden haber tomado los senadores de este cuerpo en un sentido, apoyando un proyecto u otro. Me parece que forma parte de quienes denostan la política porque, curiosamente, militan en política y tienen práctica en sembrar dudas sin concurrir –si existieran pruebas de lo que se dice– al ámbito jurisdiccional que corresponde, que es la Justicia. Creo que en este tipo de prácticas o cuando se hace este tipo de manifestaciones, hay que dar nombre y apellido, ir a la Justicia y presentar las pruebas.

He escuchado a lo largo de estos días respecto de este proyecto de ley distintas opiniones en un sentido y en otro. También se dice acá que terminamos hablando de la minería. La verdad es que quienes instalan el tema son las propias compañías mineras. Mientras tanto, en definitiva, de lo que estamos hablando es de la preservación de un recurso fundamental, que es el agua.

Me voy a permitir leer algo publicado en una revista que es financiada por la industria minera. Allí se indica que los gobernadores mineros con grandes chances de retener el poder en 2011 plantean que los gobernadores van a motorizar un proyecto de ley que defienda la industria. En realidad, me parece que no se debe defender la industria ni a un sector. Lo que se debe buscar es el equilibrio, de manera tal que se resguarde un valor fundamental como la preservación del medio ambiente.

En esta misma revista o diario de publicación mensual, se plantea que la falta de agua será el mayor riesgo para la minería sudamericana. La escasez hídrica será el principal desafío que deberá sortear la minería sudamericana durante las próximas décadas. Así lo indica un informe impulsado por el gobierno de Gran Bretaña con el propósito de estudiar el impacto futuro del cambio climático en las zonas mineras del subcontinente. El trabajo, basado en gran medida en datos geológicos y de producción aportados por las compañías mineras y autoridades públicas, estuvo a cargo de la consultora Eco Securities y del Cento de Cambio Global de la Universidad Católica de Chile. Sus resultados se dieron a conocer recientemente, luego del encuentro

entre John Benjamín, embajador británico en el país trasandino, y el director regional de las compañías que han hecho el estudio. El objetivo esencial de esta propuesta es instalar el debate sobre la relación entre el cambio climático y la minería, además de entregar algunos lineamientos sobre las modificaciones que las altas temperaturas obligarán en la cadena productiva del sector, explicó Vicuña.

Según sus palabras, el estudio identificó los principales efectos que el calentamiento global tendrá en las cuencas hidromineras en distintos proyectos de cobre, de oro, de plata, de hierro, de carbón y de níquel que se encuentran en la Argentina, Chile, Colombia y Perú. Además de jugar un rol clave en la economía de esas naciones, la minería es un segmento particularmente sensible a una variabilidad cada vez mayor de las condiciones climáticas, señaló.

El informe pronostica que las dificultades vinculadas a la falta de agua se tornarán visibles en el corto y mediano plazo, si bien serán aún más notorias a partir de 2004. De no mediar políticas de adaptación y mitigación adecuadas, la escasez hídrica se traducirá en retrasos operacionales, pérdida de ingreso y suba en el costo productivo.

Está absolutamente claro que aquí confrontan dos posiciones totalmente distintas. La preocupación que aquí se esgrime se vincula a la producción, mientras que nuestra preocupación radica en el agua, un recurso relacionado con la vida y la gente.

Prosigue el artículo: A medida que el cambio climático se profundice, las altas temperaturas modificarán los patrones de lluvia y los deshielos y, en paralelo, el agua y la energía serán bienes cada vez más escasos.

El futuro ya llegó. No hay que esperar que la falta de agua sea una grave amenaza para la minería sudamericana. En Chile, por caso, el problema tiene plena vigencia en la actualidad. El año pasado, Sergio Bitar, ex ministro de Obras Públicas, reconoció, en diálogo con este medio, que existen complicaciones de esta índole en las regiones Primera, Segunda y Tercera, y que a fin de garantizar el abastecimiento del sector, no descartaba la posibilidad de importar el recurso desde la Argentina.

En un encuentro que mantuvo con el ministro de Planificación, Julio De Vido —aparece el inefable De Vido—, hablamos sobre la importancia de analizar el tratado minero firmado entre ambos países, en pos de promover la congregación de negocios relacionados con la comercialización de insumos para la producción de minerales. Y uno de ellos, está claro, es el agua.

Para la minería trasandina, el aprovechamiento de varios ríos argentinos que corren muy cerca de la frontera sería una bendición. Tan acuciante es la escasez hídrica, que algunas mineras han contemplado la idea de desalinizar agua de mar y llevarla hasta la zona cordillerana.

— Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, senadora Liliana Negre de Alonso.

**Sr. Cano.** — La australiana BHP Billiton, por su parte, llegó a evaluar la factibilidad técnica y económica de habilitar un acueducto de Salta, para satisfacer los requerimientos de su minera Escondida.

Finalmente, debe destacarse el caso de la japonesa Lumina, empresa que evaluó la posibilidad de importar agua del río Salado, ubicado en La Rioja, a cuatro kilómetros de su proyecto cuprífero, en la región Tercera de Chile.

En consecuencia, conceptualmente, el gran debate se da respecto del artículo 2º, ya que la protección de la zona periglacial es estratégica en virtud de que en ella se encuentra el recurso acuífero —el agua—, que es lo que la minería necesita para la explotación. Por lo tanto, queda en claro que el problema es la definición de la zona periglacial. Hay que tener en cuenta que el consumo de agua de una explotación minera es el doble que el de una población común. Además, necesitan agua potable.

Soy respetuoso de las autonomías provinciales. Jamás votaría una norma que avasalle las autonomías federales o el federalismo. He escuchado ambas posiciones relacionadas con si este proyecto avanza sobre las autonomías provinciales. En ese sentido, respeto la posición del gobernador de Catamarca, quien no sólo se acuerda de la autonomía o del federalismo cuando se tratan temas como éste, sino que también hizo planteos vinculados a los fondos coparticipables, al igual que el gobernador de San Luis.



Verdaderamente, me gustaría que otros gobernadores que defienden el federalismo, lo hagan en serio; es decir, que defiendan el federalismo económico y la independencia de las provincias para tomar decisiones, ya que muchas veces se toma la decisión de cuál empresa realizará una obra en una determinada provincia desde el ministerio a cargo de De Vido.

Con esta visión de lo que significa el tema que estamos tratando, adelanto que mi voto será favorable al proyecto sancionado por Diputados.

**Sra. Presidenta** (Negre de Alonso). – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.

**Sra. Higonet.** – Señora presidenta: estamos aquí tratando un tema de altísima relevancia nacional y por más que suene redundante –porque creo que todos o casi todos lo hemos dicho–, creo que cuanto más lo repetimos, más afirmamos el valor de lo que estamos hablando. Y esto es la protección de uno de los mayores bienes que cualquier Nación puede tener, que es el recurso agua.

Tenemos para la discusión un proyecto que viene sancionado por Diputados, que ha realizado modificaciones al proyecto originario que salió de este recinto, modificaciones que lo han mejorado sustantivamente, pero en estas modificaciones sabemos que radican fundamentalmente los mayores puntos de conflicto y uno de ellos es en lo que quedaría comprendida la definición de área periglacial que comprendería también las distintas actividades que puedan realizarse en ellas.

Como sabemos, y lo hemos repetido, los glaciares son reguladores de los recursos hídricos y juntamente con los periglaciares constituyen un sistema que todos debemos proteger. Allí radica el principal punto de conflicto, como ya lo hemos dicho; también en el artículo 7° de este proyecto que se refiere a una evaluación ambiental, y en el artículo 15 que justamente establece un plazo de 180 días para realizar este inventario.

Nadie puede desconocer que en estas zonas periglaciales se realizan algunas actividades económicas e industriales que podrían verse afectadas. Y aquí nos encontramos ante una situación donde debemos o adoptar una solución basada en el bien mayor y en principios razonables. Debemos realizar una justa ponderación de

los bienes en juego; y a partir de una escala de valores debemos privilegiar unos en detrimento de los otros. Y es aquí donde cabe preguntarnos, ¿qué valores como pueblo, como Nación privilegiamos los argentinos? ¿Cuál es el mejor aporte que podemos hacer para preservar estas reservas de agua, estas fábricas de agua, en una apuesta a un desarrollo sustentable a largo plazo? ¿Podemos pensar que todos los argentinos vamos a tener agua suficiente para cien años si, por ejemplo, cada provincia a través de una legislación local establece parámetros que le permiten utilizar estos recursos de manera arbitraria afectando, a veces, no sólo a sus propios habitantes sino a todos los argentinos? He aquí la razón de por qué la definición de ubicar el área periglacial dentro o fuera de la zona de protección constituye un presupuesto mínimo. Estos presupuestos mínimos constituyen el estándar de homogeneidad que se necesita establecer para proteger un recurso que es natural para todos los habitantes.

Éstas son las normas base sobre las cuales estamos construyendo todo el edificio normativo que nos va a servir para tutelar el medio ambiente y deben ser comunes y operativas para todo el país, para todas las provincias. Y es nuestro deber velar para que estos presupuestos mínimos sean lo suficientemente protectores para que por encima de ellos puedan legislar las provincias.

Mucho se ha dicho sobre el hecho de que el proyecto en consideración avasalla las autonomías provinciales. No debemos caer, entonces, señora presidenta, en la mala interpretación del artículo 124 de la Constitución Nacional cuando establece que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. No es el espíritu de este precepto ni de ninguno de nuestra Carta Magna el autorizar a las provincias a disponer de los recursos de manera exclusiva y arbitraria. Y es por eso que el artículo 41 establece que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas.

Ésta es la variable que, a mi juicio, permite interpretar fielmente la Constitución que, como lo indica el Preámbulo, no es sólo para nosotros, sino para nuestra posteridad y para todos

los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

En este sentido, el proyecto que fue sancionado por la Cámara de Diputados da un importante paso hacia la defensa del medio ambiente, del sistema cordillerano y de todo el territorio nacional.

Como representante de una provincia mediterránea, donde no podemos desconocer que la base de su economía es la agricultura y ganadería —es preponderantemente agrícola ganadera, aunque hay explotaciones mineras—, me veo más que nunca obligada a velar por la salvaguarda de las cuencas hídricas, las cuales, como bien sabemos, constituyen una unidad ecológica única y sistemática que no reconoce jurisdicciones provinciales.

Las aguas nacen en una provincia, la mayoría de las veces nacen de nuestra querida cordillera, y recorren distintas jurisdicciones; llevan consigo la vida y nos permiten el desarrollo de todo nuestro país.

En este sentido, no puedo borrar de mis sentidos las imágenes de nuestros queridos puesteros del Oeste cuando hace tiempo decían con mucha alegría: el agua es vida para nosotros. Y digo que decían porque hoy eso se ha convertido en casi un llanto cuando ven los cauces de los ríos prácticamente secos.

Señores senadores: el agua es un bien escaso y estratégico, y no tiene precio. El agua es considerada por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es nuestro deber protegerlo por encima de cualquier otro interés que no sea comparable con la vida misma.

Hemos escuchado con mucha atención a los señores gobernadores cuando nos contaron lo que significan para sus provincias los beneficios de la minería. Nos han hablado ciertamente de todos los puestos de trabajo y de los beneficios de tal actividad. Pero, sin embargo, me sigo preguntando en los costos de esos beneficios. Y no puedo no pensar o no tener en cuenta que estos megaemprendimientos utilizan por día el equivalente al consumo diario de una ciudad de cien mil habitantes.

**Sra. Presidenta** (Negre de Alonso). — Señora senadora Higonet: le pido que vaya redondeando su exposición, dado que se culminó su tiempo.

**Sra. Higonet.** — Creo, por eso, que debemos tomar con mucha responsabilidad la decisión de nuestro voto. Y en este sentido, recordando lo que me decían los viejos maestros: cuando hablamos de un tema fundamental, vayamos a las fuentes. Por eso, quiero recurrir a esa gran fuente que tenemos los peronistas, que es el general Perón, quien ya hace treinta y ocho años decía lo siguiente, que voy a leer: “La cuestión ecológica debe plantearse en términos que exceden lo político, superando las divisiones partidarias e ideológicas, entrando en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Es necesaria y urgente una revolución mental de los hombres, especialmente en los dirigentes de países altamente industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo y el surgimiento de una convivencia biológica dentro y entre la humanidad con el resto de la naturaleza. Cada Nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales, pero al mismo tiempo cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y la utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos”. Creo que lo tenía muy claro.

Por todo lo expuesto, estoy convencida de la decisión de que mi voto será acompañar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados.

**Sra. Presidenta** (Negre de Alonso). — Tiene la palabra la señora senadora por la provincia de Misiones, senadora Vigo.

**Sra. Vigo.** — Señora presidenta: la verdad es que cada vez que en este recinto tenemos que discutir presupuestos mínimos, creo que a todas y a todos se nos estruja un poco el corazón, porque no solamente se trata de recursos naturales —que no todos son renovables—, sino que se trata también de gente y de analizar cómo nosotros podemos preservar esos recursos para las futuras generaciones. Aquí se habló de siete generaciones. Creo que es poco. A su vez, a todos los que vivimos en las provincias se nos llena de angustia el corazón y la cabeza pensando cómo hacer para que la decisión que

aquí tomemos no signifique un concepto político o una acción que se traduzca en políticas retrógradas que garanticen la continuidad del empobrecimiento de la gente que vive en determinados lugares. Creo que nuevamente estamos frente a esta disyuntiva.

Por ello, me parece que lo primero que pensamos los senadores y las senadoras, sobre todo los que no pertenecen a la Capital Federal —esto se viene repitiendo permanentemente— es que la Argentina también se conformó como una especie de embudo, en donde los mayores recursos y posibilidades siempre están concentrados aquí, en la Capital Federal.

Entonces, todas las culpas y los problemas siempre los tenemos afuera de la Capital Federal, porque ahora, inclusive, si ustedes van a la puerta de la ex Caja de Ahorro, donde están los despachos de algunos senadores, verán que allí hay gente durmiendo de cualquier forma. Yo me refería al hecho de que esta decisión que hoy tenemos que tomar es muy importante, porque es lo mismo que nos ocurrió cuando nosotros discutimos los presupuestos mínimos en el tema de los bosques nativos. ¿Quién puede negarse a garantizar las fuentes de agua? Más aún, yo creo que estamos atrasadísimos, justamente por lo que ha señalado la senadora por La Pampa: ya el general Perón hablaba de amigar las necesidades sociales y del desarrollo de la gente con los recursos naturales.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, don Roberto Gustavo Basualdo.

**Sra. Vigo.** — Por esa misma razón, yo creo que sin duda acá nosotros no podemos desechar las diversas actividades económicas que también están asentadas en el aprovechamiento de los diversos recursos naturales, pero a su vez tenemos que ir midiendo todas las cosas.

Yo soy nacida y criada en la provincia de San Juan. Mi padre era un viñatero que tenía una finquita pegada a la precordillera, donde cultivaba manzanas. Y cuando era chica yo pude ver principalmente ese valor espectacular y casi sacro que tenía el agua, como bien lo señaló el compañero senador por Mendoza. Pero también pude ver lo que significó el desarrollo minero, cuando estuvieron los ingleses en las minas de Castaño, donde dejaron muchísima pobreza.

Justamente, cuando ellos se retiraron también se fueron de allí los hombres que quedaron sin trabajo, por lo que las mujeres quedaron solas en el lugar. Entonces, no había otra cosa que hacer que vender el animalito que se tenía o cosas por el estilo. Por supuesto que nosotros, gracias a Dios, estamos viviendo otra etapa de la historia socioeconómica y política de la Argentina.

Nuestro país estalló en el año 2001 y está transformando su propia sociedad. Yo creo que a nosotros nos falta muchísimo, porque tenemos una serie de legislaciones y desarrollos productivos que están perimidos y que pertenecen a otro modelo de desarrollo argentino. No podemos volver exclusivamente a la pampa húmeda, al monocultivo o negarnos al desarrollo industrial que significa generación de empleo, sino que también tenemos que hablar de la biotecnología, de la ciencia y de todo lo que significa el desarrollo sustentable de nuestra sociedad, dentro de ello deben estar incorporados los recursos naturales.

Como bien lo han señalado aquí los miembros informantes de los dictámenes de comisión, nosotros hoy vamos a cumplir con una etapa histórica. De acá va a salir una ley de presupuestos mínimos vinculados a la preservación de las fuentes de agua, como son los glaciares, los periglaciares y las distintas reservas de agua.

Por esto es sólo un primer paso, porque aún quedan muchísimas cosas por hacer. Ustedes saben que no está regulada la salida del agua de nuestro país. El señor senador radical por Tucumán señaló que vendrían a comprar agua aquí para llevarla a otros países. Esto no está regulado. Puede salir a granel tranquilamente. Se vende agua de Argentina vía Internet.

Es decir, hay un montón de cosas en las que tenemos que seguir trabajando y legislando para que nuestra gente pueda acceder a una vida digna, pero, al mismo tiempo preservando los recursos naturales para que las generaciones futuras puedan sentirse orgullosas de vivir en un país que sea digno de vivir.

Yo voy a apoyar el dictamen producido sobre el antiguo proyecto de los senadores, sencillamente porque me parece que ahí nosotros decimos con todas las letras que pueden participar las provincias. No hay dudas ahí. Eso genera una posibilidad mayor de discutir. No voy a entrar en el tema específico de glaciares porque no lo

conozco; no es mi tema puntual. Lo he vivido cuando era joven, pero hace cuarenta años que vivo en la provincia de Misiones, en donde todo rebasa: el agua, la vegetación. Pero también en la provincia de Misiones, cuando se habla de los presupuestos mínimos respecto de los bosques, a uno se le estruja el corazón, porque hay muchas poblaciones que viven en situaciones muy precarias y que necesitan hacer el rosado para poder plantar tabaco, ese producto tan vilipendiado. Es decir, nosotros tenemos que ir encontrando las formas para que el desarrollo de nuestras poblaciones no esté en contradicción con el cuidado del medio ambiente, y como dicen los ecologistas, para ser amigable la relación con el medio ambiente. Me parece que tenemos que seguir para adelante.

Creo que el Senado, sin duda, está obligado a ser la voz de las provincias porque en este lugar, y gracias a la Constitución del 94, todas las jurisdicciones políticas que conformamos la República Argentina estamos en igualdad de condiciones.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: yo represento en el Senado a la provincia de San Luis, donde, la verdad, no tenemos oro ni explotación minera a cielo abierto.

Yo voy a plantear la cuestión desde el punto de vista del federalismo. Lamento que no esté el senador Cimadevilla acá. Yo voté la coparticipación del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Mi gobernador no firmó ninguna solicitada en contra de ese proyecto que el Senado estaba tratando en ese momento. Sin embargo, creo que no podemos soslayar hoy el tema del federalismo, y no porque sea una actitud egoísta o porque el derecho humano al agua no tenga límites sino porque creo que, de conformidad con lo que establece el artículo 41 de la Constitución, debemos saber compatibilizar y articular el derecho de los pueblos al desarrollo en un ambiente sano y equilibrado. El medio ambiente no puede desplazar el otro derecho humano, que es el derecho que tenemos todos a desarrollarnos en muy buenas condiciones.

Los recursos, efectivamente, pertenecen a las provincias. ¿Para qué vamos a repetir lo que acá se ha dicho? Lo ha expuesto muy bien la señora senadora por La Pampa. Pero yo le quiero decir,

señor presidente, que las provincias sabemos cuidar el medio ambiente. No se nos puede presentar en este lugar y en este marco que las provincias queremos poner muros de contención a los derechos humanos o que queremos estaquear nuestros límites para que el derecho de todos los habitantes de la República Argentina no sea respetado y preservado. De ninguna manera, señor presidente.

Ya dije que no tenemos actividad minera y que no tenemos oro resguardado en nuestras sierras esperando para ser explotado. Esto lo aclaré desde el principio, porque en algunas reuniones que han ocurrido en esta casa, en la casa del federalismo –y esto lo digo con el mayor honor y el mayor orgullo, pues mi provincia tiene toda una historia en la preservación y la lucha por el medio ambiente–, nos hemos sentido realmente maltratados, denostados y denigrados.

Nosotros queremos la participación de las provincias, pero no encontramos explicación lógica y razonable. Cuando a usted, señor presidente, le tocó hablar, desde su banca hizo una síntesis de la historia y, en el primer proyecto que se votó en este Senado, sólo tres senadores votamos en contra del artículo 5º. A propuesta suya, nosotros, con el senador Rodríguez Saá, lo apoyamos y, casualmente, usted decía que debían participar las provincias en el órgano que fuera a controlar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros venimos apoyando esta ley de preservación de los glaciares desde el principio, pero lo que no logramos entender es por qué se borra del mapa absolutamente la participación de las autoridades provinciales, y a eso nos resistimos.

Llegué a escuchar que los gobernadores de las provincias no estaban en condiciones de garantizar el respeto al derecho humano por el agua. Eso llegué a escuchar en esta casa, presidente. ¿De qué estamos hablando, presidente? ¿Estamos hablando de trabajar para una Argentina mejor o estamos hablando de una Argentina donde algunos son ciudadanos de primera y otros somos ciudadanos de segunda? Y no tenemos actividad minera en nuestra provincia, presidente. No tenemos oro, no tenemos actividad a cielo abierto.

¿Y por qué digo que hablo con orgullo y con un total desprendimiento de la situación? Porque fíjese que mi provincia tiene una serie



de leyes que preservan el medio ambiente, y las voy a mencionar en forma rápida: residuos peligrosos, competencia ambiental minera, reglamento de residuos patológicos, San Luis no nuclear, ley de agroquímicos, ley de gases de combustión del tabaco, ley de aire y contaminación atmosférica, ley de residuos peligrosos, ley de preservación y restauración ambiental del sector minero, prohibición de detergentes no biodegradables, tratamientos biológicos de suelos, evaluación de riesgos ambientales y control de impactos.

Cabe destacar que en la provincia de San Luis, pionera en obras públicas, que cuenta con la mayor cantidad de autopistas del país, se realizan estudios de impacto ambiental para desarrollar la obra pública. Otras legislaciones son los requisitos provinciales de consultores mineros; productos, actividades o servicios amigables con el medio ambiente; veda total de caza comercial y deportiva; protección del venado; fauna, caza y pesca; cotos de caza y de pesca; protección de bosques nativos de la provincia; protección de las hierbas aromáticas; la ley de bono verde; etcétera.

Quiero mencionar que, además de todo esto, hace dos semanas, en la provincia de San Luis, se suscribió un tratado entre el derecho al progreso y el derecho a un ambiente sano, acto que contó con la presencia de importantísimas autoridades internacionales. Haré aquí un pequeño interregno, porque estoy recordando otra cuestión que había olvidado comentar. Es tan importante el cuidado del medio ambiente en San Luis, que se elaboró un programa digital que se comenzó a implementar en los pueblos del sur de la provincia, donde los niños—a través de un programa— logran establecer cuál es el daño ambiental de los aparatos que ellos tienen en sus casas. Entonces, cargan en ese programa los objetos que tienen: heladera, cantidad de foquitos de luz, lavarropas, etcétera. Y ese programa, que además es pedagógico, a modo de juego, les dice: “Tenés que plantar uno, dos o tres árboles”. Entonces, cada familia se va involucrando en luchar por tener un espacio libre de contaminación y así se les otorga un certificado, con lo cual, posteriormente, se logra que ese pueblo o esa ciudad sea considerado absolutamente libre de contaminación a raíz

de la forestación que realizan para compensar la contaminación.

Finalmente, pido autorización para leer, porque quiero referirme a este tratado donde se establece que toda persona tiene derecho al progreso—tal como lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Constitución Nacional y la Constitución provincial—, constatando que el sujeto de ambos derechos es el hombre; que el progreso se frustra si agrede al medio ambiente; que el cuidado del ambiente es una condición necesaria y un factor de progreso genuino y que, por lo tanto, lejos de paralizarse mutuamente, ambos derechos pueden complementarse y potenciarse; y considerando que el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente - Estrategia 2010/2020 de la Provincia de San Luis es una expresión concreta, clara y posible de la convivencia y asociación de ambos derechos, se acuerda: 1. En el espíritu del hombre reside una fuerza que lo impulsa a mejorar continuamente las condiciones de su existencia. Progresar es un derecho. 2. La vida del hombre se nutre de los dones de la naturaleza. Su protección es un derecho. 3. La inteligencia del hombre y la lógica de la naturaleza deben entrar en diálogo y asociarse: ésta es la paz entre el derecho al progreso y el derecho a un ambiente sano. 4. El progreso será propiamente humano en armonía con un ambiente equilibrado y, al mismo tiempo, la protección y la restauración del ambiente serán factores de progreso. 5. De la sabiduría de los pueblos originarios podemos aprender cómo se hace esta paz. 6. En el estado social y democrático de derecho, la paz entre el progreso y el medioambiente es un componente fundamental de la justicia social. 7. Haremos la paz del agro, las industrias y las ciudades con la pureza del agua y del aire, la diversidad de la flora y de la fauna y la riqueza de los suelos. 8. Habrá paz entre la generación de energía y el clima de la Tierra; entre la producción, los residuos y la limpieza de los ecosistemas; entre el consumo y los recursos. 9. Con esta paz, recompondremos el ambiente dañado y haremos la prevención y la contención de catástrofes ambientales. 10. Bajo esta bandera de paz, los ciudadanos y los gobiernos educaremos a nuestros hijos y ordenaremos nuestras actividades. Conservaremos así un planeta habitable para las generaciones

futuras. Éste es el compromiso que acaba de firmar la provincia de San Luis.

En algún momento, sentía que sólo faltaba que nos invadieran. Posiblemente, si nos invadían, iban a garantizar el cuidado del medio ambiente. Tenemos derecho a cuidar nuestro hábitat, sabemos cuidar nuestro hábitat y, además, asumimos la obligación por nosotros, por nuestros padres, por nuestros hijos y por nuestras futuras generaciones. Así nos comprometemos en saber compatibilizar el derecho humano de los pueblos a desarrollarse, a comer, a vestirse, a tener dignidad y a tener educación en un ambiente verdaderamente equilibrado. Nunca un derecho desplaza a otro, ambos son compatibles cuando generamos las políticas de Estado necesarias para que se logre esa combinación que es para el bien de todos.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Tiene la palabra el señor senador Banicevich.

**Sr. Banicevich.** – Señor presidente: este proyecto de ley en revisión contiene varias modificaciones respecto del proyecto original que aprobó esta Cámara el 21 de octubre de 2009. En primer lugar, modifica el artículo 1º, eliminando la clara definición de que el dominio de los glaciares corresponde a los estados provinciales. Se podría argumentar que ello es irrelevante y redundante, pero pareciera ser el hilo conductor de casi todas las modificaciones ensayadas, el permanente avance de decisiones nacionales sobre claras prerrogativas provinciales estatuidas por la Constitución Nacional.

La utilización de la figura de presupuestos mínimos, definidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994 para declarar la prohibición absoluta de actividades industriales, de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y de la construcción de obras de arquitectura e infraestructura no solamente sobre las áreas de glaciares sino también sobre la zona periglacial, constituye también un avance sobre las autonomías provinciales, ello está claramente visible en la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados.

El artículo 41 de la Constitución Nacional es claro en su terminología al expresar que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y, a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren

las jurisdicciones locales. Como puede verse, se distinguió entre dos niveles de regulación ambiental, los presupuestos mínimos de protección, competencia delegada de la Nación por las provincias, y las regulaciones que las complementen y adecuen a las particularidades de cada provincia, competencias reservadas a ellas.

Dado que la Nación únicamente tiene competencia de materia ambiental para establecer esos presupuestos mínimos de protección de toda regulación ambiental que establezca presupuestos superiores a los mínimos...

**Sr. Presidente** (Basualdo). – El senador Pérsico le pide una interrupción.

**Sr. Banicevich.** – Cómo no.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pérsico.

**Sr. Pérsico.** – Presidente: solicité una pequeña interrupción para dejar expresada la postura de mi voto y agregar un breve mensaje, acompañando las palabras del senador y de las senadoras preopinantes Vigo y Riofrio, votando el proyecto sin modificaciones del Senado.

Ha sido clara la opinión de todos y no quiero abundar en palabras. Simplemente, si usted me permite, voy a leer un pequeño párrafo de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos, existente en este país. El artículo 2º dice que será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Por su parte, el régimen penal del artículo 55, para dar dos ejemplos claros, dice que será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez años a veinticinco años de reclusión perpetua. O sea que la contaminación es un delito penal.

He mencionado estos artículos porque estamos discutiendo dos proyectos de ley. Creo que ambos son positivos y que tenemos alguna discusión, tal vez, sobre la autonomía de las provincias en una ley o en la otra.

Daré algunos ejemplos, lo más rápido posible, para no robar tanto tiempo. A nivel mundial, cuando uno recorre Europa –España, Francia–, así como Buenos Aires, San Luis o Misiones, advierte que no están quedando ríos no contaminados. Esto es así porque no hay decisiones políticas, y no voy a culpar a nadie. Creo que ni en el nivel municipal, ni en el provincial ni en el nacional hay decisiones políticas de poner fuerza en los mecanismos de control.

Voy a citar un buen ejemplo de mi provincia de un ente provincial que creó el gobierno hace muchos años –creo que fue el senador Rodríguez Saá el que lo creó–. Se llamaba Creacyt. En un plazo de dos años, solicitó a las industrias que hicieran un programa de control de la contaminación, especialmente, en industrias químicas como Odol o, por ejemplo, alguna curtiembre o industrias que utilizaban material pesado, metales pesados. Tuvo un muy buen resultado Creacyt.

Sin embargo, esto no ocurría del mismo modo cuando no controlábamos desde la municipalidad o desde el gobierno, si bien las industrias habían invertido millones de pesos en los sistemas de tratamiento. Hice un curso de ingeniería sanitaria, y la minería, todo esto, tiene tratamiento. Pero cuando no se lo controla o no se pone fuerza política en esto, hacen un *by pass* y lo tiran, porque es más barato. Esto es una cuestión de valor agregado. Entonces, debemos tener en claro que esto apunta al tratamiento de la cuestión de fondo.

De manera que no podemos prohibir la minería, las curtiembres ni ninguna otra industria. Hablamos de Botnia, pero tenemos papeleras que contaminan más arriba. Tenemos que hacer fuertes mecanismos de control y trabajar mancomunadamente la Nación, las provincias y los municipios para evitar esto.

En realidad, creo que tenemos un grave defecto, que es no poner al ser humano en el eje de la escena de la calidad de vida. Y no lo hacemos porque por ahí tenemos miedo de aumentar los costos o de parar industrias. Y lo que estamos haciendo es matarnos o evitar que un bien tan caro para la vida humana como el agua sea cuidado.

Las leyes están, por eso leí esos artículos. Y lo que vamos a hacer ahora es muy positivo. Lo dijo la senadora Vigo, es un día histórico. Pero

sería bueno que lo apliquemos y que trabajemos duramente todos para que esto, en el futuro, mejore el medio ambiente.

Quiero poner un ejemplo cortito de algo que me pasó este fin de semana en Córdoba con la Ley de Seguridad Vial. Vi que Córdoba está controlando y ha bajado muchísimo el índice de muertes por inseguridad vial. Pero también, veo muchas provincias que no la están aplicando, no están controlando y no han logrado soluciones. No se dan cuenta de que no nos cuidan, que no evitan que pasemos de 1.500 muertes por millón de autos a 100, como ocurre en otros países del mundo.

Por lo tanto, creo que tenemos que poner un fuerte énfasis en estas leyes pero, también, tenemos que hacer un gran gasto público para generar conciencia, controlar y lograr realmente que esto, como decía un viejo dirigente, no sea cháchara, sino que sea una realidad. Como decía el general Perón en el discurso que leyó la senadora, una política de Estado que no tenga partido sino que sea para el ser humano como eje de la escena. Muchas gracias por concederme la interrupción. Eso era lo que quería agregar en mi voto.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Continúa en el uso de la palabra el senador Banicevich.

**Sr. Banicevich.** – Toda regulación ambiental que establezca presupuestos superiores a los mínimos o, como en este caso, la prohibición lisa y llana, sería inconstitucional. Y es que, si no hubiera límites que establecieran hasta dónde pueden llegar esos presupuestos mínimos de protección, el deslinde constitucional carecería de sentido.

Resulta crucial, en materia de política ambiental, la distinción entre qué es un presupuesto mínimo y qué no lo es. Eso es lo que delimita las facultades del Congreso ante las autonomías provinciales y lo que, en definitiva, garantiza la vigencia del federalismo en la regulación ambiental del país.

Podemos ahondar más en estos conceptos si persisten dudas. Podemos hurgar en el espíritu del sentido que los constituyentes plasmaron en la normativa citada. El análisis de los debates revela que los constituyentes eran conscientes de que el artículo 41 delegaba en el Congreso parte de las facultades de policía ambiental en

las provincias y, además, que esa delegación no era absoluta, sino limitada al dictado de esos presupuestos mínimos.

El convencional Alberto Natale, miembro informante del dictamen en mayoría, afirmó respecto de los presupuestos mínimos: que la legislación nacional establecerá los resguardos de protección mínima comunes a todo el territorio del país. Aquellos sobre los que haya consenso general y que deba ser imprescindible tutelar en todo el ámbito de la geografía argentina, allí legislará el Congreso de la Nación. En cuanto a la complementación por parte de las provincias, explicó que en todo lo demás, todo lo que sea necesario para complementar, implementar, extender o partir de ese piso mínimo con relación a la exigencia de tutela del medio ambiente, las provincias conservarán íntegramente sus poderes actuales. Explicando este deslinde de competencias mediante un ejemplo agregó: Ahora, la Nación podría determinar los niveles de contaminación admisibles en los lagos argentinos, dictando los presupuestos mínimos de protección. Pero si las provincia del Neuquen o Río Negro quieren imponer una exigencia de mayor pureza para los existentes en su territorio podrían hacerlo estando las normas necesarias para poder complementarla.

Señor presidente: estas explicaciones demuestran que la intención original del artículo 41 era otorgar al Congreso facultades limitadas para la regulación ambiental. De lo contrario, habría carecido de sentido hablar de presupuestos mínimos y reconocer que las provincias tienen una responsabilidad fundamental en el manejo de los asuntos ambientales.

Las provincias andinas han sancionado leyes que protegen los glaciares en sus territorios, incluyendo la prohibición de actividades, haciendo uso del derecho a complementar los presupuestos mínimos definidos por la Nación. Las provincias también definen el área periglacial en forma similar al texto de la sanción de ésta Cámara. En ambos casos, no se declara la prohibición de actividades en esa área, sometiendo las mismas a procesos de estudio de impacto ambiental, para su aprobación.

De esta manera, queda claro que la complementación entre la sanción original de este cuerpo y las legislaciones provinciales amalgaman las disposiciones del artículo 41 de la

Constitución Nacional. No ocurre lo mismo con la sanción de Diputados, dado que las modificaciones introducidas producen una nueva definición de zona periglacial, de características sumamente difusas, extendiéndola a la alta, media y baja montaña y, por lo tanto, a disponer la prohibición de actividades en amplias zonas de las provincias.

En ese marco, señor presidente, puede sostenerse legítimamente que dicho proyecto viola el artículo 124 de la Constitución Nacional, en tanto la prohibición de la exploración y explotación minera o hidrocarburífera en los glaciares y en el ambiente periglacial que establece el artículo 6º, inciso c), tiene el efecto de frustrar el derecho de dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales mineros o hidrocarburíferos que allí se encuentren. No debemos olvidar que el artículo 124 de la Constitución Nacional consagró que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Por otra parte, señor presidente, es conveniente señalar que la actividad minera es una actividad lícita que se desarrolla al amparo de un Código de Minería y cumpliendo toda la legislación existente que enmarca su desarrollo, incluyendo una ley específica de medio ambiente para el sector; que el avance de la actividad minera ha sido muy impactante en los últimos quince años. Básicamente, hay que decirlo, porque el Estado nacional y los estados provinciales han demostrado su capacidad en el mantenimiento de la estabilidad normativa —indispensable para el desarrollo de un sector que se caracteriza, fundamentalmente, por la inversión de riesgo—, la cual han solidificado con la firma del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena, después de arduas y difíciles negociaciones, que permite el desarrollo de las actividades mineras en toda la Cordillera de los Andes, fundamentalmente, en áreas de seguridad.

En cuanto a este aspecto, merece señalarse que, más allá de las infundadas críticas, ambos países mantienen —no ceden— su soberanía territorial a través de reglas comunes, para permitir el desarrollo de yacimientos ubicados a ambos lados de la frontera o a caballo del límite fronterizo, siendo competentes los organismos federales responsables de dichas áreas.



Debe rescatarse el valor que representa un acuerdo fronterizo que elimina el fantasma del conflicto y que genera una decisión conjunta en el sentido de garantizar las inversiones de riesgo necesarias para la exploración y explotación minera, ya sean de carácter nacional o internacional.

Todo ello significó para las provincias andinas cambiar su matriz productiva y su ecuación de sustentabilidad económica, lo que generó pleno empleo y un movimiento económico genuino que, en la mayoría de los casos, se derrama sobre las empresas metalmecánicas y de servicios radicadas en otras provincias.

No debemos olvidarnos de que, a diferencia de la industria —que se permite seleccionar adecuadamente el lugar de su radicación—, la minería debe desarrollarse donde se encuentre el recurso mineral, y éste, en nuestro país, generalmente se da en regiones de difíciles características geográficas, de escasa densidad poblacional y de casi nula infraestructura.

Estoy plenamente de acuerdo con avanzar en una legislación que proteja el ambiente, pero cuidando de armonizarla con el desarrollo de la calidad del hábitat humano y con las actividades necesarias para poder hacer sostenible el nivel de confort de vida a que nos lleva el avance tecnológico.

En virtud de lo expuesto, voy a apoyar la sanción original votada por este cuerpo.

**Sr. Presidente** (Basualdo). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

**Sra. Estenssoro.** — Señor presidente: desde hace tres años este Congreso intenta sancionar una ley de presupuestos mínimos de protección efectiva de nuestros glaciares.

Hoy, sabemos que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce, no sólo para nuestro país —somos afortunados de ser una Nación rica en glaciares—, sino también para el planeta. Asimismo, sabemos que el agua dulce, acerca de la cual hasta hace un par de décadas pensábamos que era un recurso infinito, es un bien escaso; y que las Naciones Unidas declaran al agua como un derecho humano, porque hay conciencia de la importancia vital del acceso al agua para los seres humanos y de su escasez. Por eso tenemos que cuidarla.

Bien se dijo hoy que el primer derecho humano es el derecho a la vida, y el segundo, el derecho al agua, porque sin ésta no hay vida. De eso estamos hablando hoy.

Ése es un tema fundamental para la Coalición Cívica-ARI, ya que el primer proyecto en ese sentido que trató este Congreso fue presentado por la diputada Marta Maffei, cuando integraba el bloque del ARI.

Uno podría preguntarse quién se opone a un fin tan noble y loable como el de garantizar el derecho de las generaciones de argentinos —actuales y futuras— a contar con los recursos hídricos necesarios para el desarrollo de nuestras comunidades. Sin embargo, la historia del tratamiento de este proyecto a lo largo de tres años demuestra que, aunque todos decimos coincidir y tener un mismo objetivo, en realidad, existen intereses evidentemente contrapuestos y, por ello, no resultó tan fácil su sanción. En octubre de 2008 el Congreso sancionó una ley de protección de los glaciares casi por unanimidad y veinte días después la presidenta vetó esa ley para sorpresa de todos nosotros. Un año después, acá en el Senado, empezamos a trabajar sobre un nuevo proyecto. Inicialmente acompañé ese proyecto que lideraba en su momento el senador Filmus, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Acompañé ese proyecto porque me dijeron que era mejor que la ley que había sido vetada y realmente tenía intención de colaborar para que la Argentina tuviera una ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. Sin embargo, antes de que llegáramos a la votación a través de los equipos técnicos de la Coalición Cívica ARI, en donde tenemos equipos técnicos muy capacitados en el tema de la protección de los recursos naturales, fuimos viendo que el texto no era mejor, como se decía, y que había algunos puntos críticos que lo hacían un texto débil, que no protegía a nuestro modo de ver en forma suficiente a los glaciares y por eso yo no voté ese proyecto.

Al principio se dijo que las dos leyes eran buenas y yo quiero señalar que acá hay un texto que es mejor que otros, a mi juicio. Es el sancionado en Diputados, que realmente asegura una efectiva protección de los glaciares y de la zona del ambiente periglacial y que el texto que aprobó el Senado y que es el dictamen en

mayoría, realmente no protege adecuadamente la zona periglacial.

En primer lugar, el artículo 2° del texto del Senado define el área de protección y voy a leerlo. Dice que a los efectos de la presente ley la protección se extiende dentro del ambiente glaciar a los glaciares cubiertos y descubiertos y dentro del ambiente periglacial a los glaciares de escombros. O sea que dentro del ambiente periglacial solamente contempla los glaciares de escombros.

Ésto significa que la sanción del Senado achica notablemente el bien jurídico tutelado por la ley. Sólo protege dentro del ambiente periglacial a los glaciares de escombros, a diferencia de la sanción de Diputados que protege todo el ambiente periglacial.

Esta es una diferencia sustantiva porque justamente la zona que no se protege con la sanción del Senado es una zona fundamental para la generación de los recursos hídricos.

El otro tema que es muy importante es el artículo 15, y no tanto por lo que se ha debatido acá, que es si compete a la jurisdicción de las provincias o de la Nación hacer el inventario, tal vez uno de los temas claves de esta ley. Se trata de un inventario nacional de glaciares para saber si hay actividades industriales, mineras o productivas que pudieran dañar los glaciares y la zona periglacial. Y el problema con el artículo 15 con relación a la sanción del Senado es que no pone plazos para que las provincias realicen esos inventarios.

El artículo 15 del proyecto del Senado dice que las autoridades competentes deberán en un plazo máximo de 180 días, a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas en el artículo 6° a una auditoría ambiental. Pero no les pone plazo a las provincias para hacer esos inventarios. Entonces, las provincias se pueden tomar un año, dos, diez y recién...

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Perdón senadora, la senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.

**Sra. Estenssoro**. – ... cuando las provincias hagan el inventario, a los 180 días, entra en vigencia esta auditoría ambiental, o sea que no les pone un plazo, a diferencia del proyecto de la Cámara de Diputados que dice que en un plazo

máximo de 180 días el inventario tiene que estar hecho, lo cual es muy diferente.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso**. – Señor presidente: quiero insistir en lo siguiente. Por qué se va a desconfiar de que las provincias no van a cumplir la ley y no van a hacer lo que la ley dice que hay que hacer. Por qué se va a partir de la base de que las provincias van a incumplir. Se parte del supuesto de que las provincias son incumplidoras y no quieren un desarrollo equilibrado.

Es verdad que existen leyes provinciales, a las cuales hice referencia.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.

**Sra. Estenssoro**. – Creo que no hay una discusión de si las provincias o la Nación son mejores cuidadoras del medio ambiente. Debe haber un texto que sea claro y que fije plazos para la realización de ese inventario. Además, si se mira la situación de la Argentina en distintos aspectos, se advertirá que no tiene el primer premio al cuidado del medio ambiente. Entonces, las leyes deben ser claras y no deben quedar al arbitrio de la buena voluntad.

No hay una discriminación entre provincias o Nación sino que digo, simplemente, que el texto del Senado no fija un plazo y la ley necesita tener uno para que ese inventario, que es el corazón de la ley, se realice en un tiempo prudencial. Me sorprende que la sanción del Senado no fije un plazo; eso es llamativo ya que la norma no entra en vigencia hasta tanto los inventarios no estén confeccionados. Es decir que se pueden aducir todo tipo de razones y los inventarios no ser realizados.

Por eso, digo que no se trata de dos textos casi iguales o que ambos sean buenos. En un caso, la sanción de la Cámara de Diputados protege todos los glaciares y todo el ambiente periglacial. El otro, la sanción de la Cámara de Senadores, solamente protege el glaciar y una parte –los glaciares de escombros– de la zona periglacial. El resto queda desprotegido.

Además, el texto de la Cámara de Diputados, fija claramente los plazos para realizar los inventarios y para que la ley entre en vigencia en forma efectiva. Eso no sucede con el texto del

Senado de la Nación. Luego hay otra serie de diferencias importantes, pero esos dos puntos son clave y fueron los que me convencieron de no votar la sanción de la Cámara de Senadores.

Quiero señalar que se ha tratado de instalar una falsa antinomia entre quienes quieren preservar el medio ambiente y quienes desean el desarrollo económico. Me parece que eso es un paradigma viejo. En realidad, el paradigma moderno del siglo XXI es conjugar la protección del medio ambiente, de las comunidades y de las sociedades y el desarrollo económico. Debe haber una armonía; eso es lo que se busca.

Cuando asistieron los representantes de las cámaras mineras, me pareció excesivo que dijeran que la sanción de la Cámara de Diputados, al definir la zona periglacial, haría que casi toda la Patagonia, parte de la provincia de Buenos Aires y no sé qué otras áreas estuvieran comprendidas en esta norma lo cual provocaría una restricción de las actividades productivas en la mitad de la Argentina. Eso, realmente, es una definición de mala fe ya que el texto de la Cámara de Diputados afirma que solamente en el 1 por ciento del territorio argentino van a estar prohibidas las actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales. Es el 1 por ciento del país. Entonces, no me parece que uno pueda decir que se va a evitar dar lugar al desarrollo económico porque en el 1 por ciento del territorio nacional haya lugares que son reservas estratégicas de agua dulce en los que se impedirá llevar adelante emprendimientos mineros, hidrocarburíferos o industriales.

Vengo de una familia de mineros. Mi bisabuelo descubrió el petróleo en Bolivia. Era minero. Mi abuelo siempre tenía en el bolsillo pepitas de oro, plata y distintos minerales y siempre soñó con encontrar alguna mina que lo hiciera rico, cosa que no le ocurrió. O sea que conozco esta actividad.

Creo que los industriales y los mineros realizan una actividad importantísima para el país, pero también en el siglo XX hemos aprendido que no puede haber destrucción para que haya producción. Tenemos que minimizar los efectos negativos de la producción, que no tiene en cuenta el medio ambiente ni la sustentabilidad para las comunidades que viven en esas áreas, en función del desarrollo económico. De esto estamos hablando.

Y reitero; observando los dos textos, no hay dos proyectos de ley que son bastante buenos. Hay uno que protege efectivamente los glaciares de nuestro país, y hay otro que como no tiene plazos para su entrada en vigencia, en realidad deja desprotegida la zona, con lo cual las cosas seguirán como hasta ahora.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Tiene la palabra la señora senadora Corpacci.

**Sra. Corpacci.** – Señor presidente: debido a la hora, dado que ya llevamos más de doce horas de debate en este recinto, voy a tratar de ser breve y solicitar autorización para insertar.

En primer lugar, es importante aclarar que lo que estamos tratando aquí son presupuestos mínimos sobre la protección de los glaciares y las zonas periglaciales. No estamos hablando de minería. Quiero dejar esto en claro, porque estoy hablando de la protección de los glaciares. Cuando debatamos el tema de la minería y la cuestión de cómo las empresas mineras utilizan los recursos hídricos de nuestras provincias, otra será la historia. Puedo asegurar que en esa ocasión saldré a defender a las provincias y a sus pobladores.

Ahora bien, la verdad es que aquí en este Senado se trató oportunamente un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, apoyado por la mayoría de los senadores que hoy se encuentran presentes. Tengo la suerte, por decir así, de no haber estado en esa sesión, y por lo tanto me siento excluida de esa situación. Pero la mayoría de quienes están aquí han votado a favor de ese proyecto de ley. Y los que han votado en disidencia en algún artículo, fue precisamente para preservar la autonomía de las provincias, con lo cual coincido.

Respecto a los glaciares, tengo que reconocer que todos nos tuvimos que sentar a estudiar. Yo, particularmente, me tuve que poner a estudiar, porque la verdad es que no sabía que había tantos tipos de glaciares: de escombros, cubiertos, descubiertos. Y reconozco que hay algunos señores senadores que estudiaron muchísimo. Pero todos han coincidido aquí con que Ianigla es la autoridad en la materia para definir y realizar el inventario de los glaciares.

Cuando vino aquí el señor Villalba, de Ianigla, alguien le preguntó si los dos proyectos de ley, el que venía de la Cámara de Diputados y el

del Senado, protegían áreas distintas, y el señor Villalba contestó: “Por lo tanto, técnicamente, con distintos nombres, ambos proyectos están protegiendo el mismo área. Si Ianigla tuviera que definir cuál es el área a proteger, usando uno u otro proyecto, debemos decir que las áreas son idénticas”.

Por lo tanto, la autoridad que todos reconocemos que va a hacer el inventario, afirma que los dos proyectos son exactamente iguales.

Si tengo que votar a favor de uno de los dos proyectos, por la sencilla razón que al igual que todos los senadores que estamos aquí quiero preservar el área glaciar y periglacial, tengo que definir entre votar el proyecto de la Cámara de Diputados o el del Senado. Y la verdad es que son muy parecidos. Yo escuché que se acusan de cosas, pero la verdad es que los proyectos son muy parecidos. Y en esencia, por lo que dicen los técnicos de Ianigla, protegen exactamente lo mismo. Pero a mí, que pertenezco a una provincia donde hay glaciares y, por lo tanto, puede estar afectada no sólo la cuestión minera sino cualquier otro tipo de desarrollo, me interesa que mi provincia participe y en este sentido el proyecto del Senado es claro en los artículos 1º, donde se dice que los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado nacional según el lugar en el que se ubique, y 5º, donde se afirma que la realización del inventario quedará a cargo del Ianigla en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de la presente ley y con otras instituciones nacionales y provinciales competentes.

Yo no quiero pensar que el proyecto de la Cámara de Diputados desvalore lo que son las provincias, pero no obstante eso creo que no costaba nada incluirlas. De la misma manera que se nombra taxativamente a la Nación las provincias también debieran estar presentes por esto de que todos hablamos tanto del federalismo. Porque, además, es cierto lo que dijo la señora senadora Negre de Alonso: ¿por qué presuponer siempre que las provincias hacemos mal las cosas y la Nación las va a hacer bien? Y cuando hablo de la Nación no me refiero a esta presidenta, ni cuando hablo de la provincia me refiero al gobernador de mi provincia. Me refiero a lo que representan, ya sea esta presidenta o el gobernador que fuera de mi provincia

o de cualquier otra. Tenemos que pensar que las provincias tienen el mismo respeto por el medio ambiente que la Nación.

Como señalé que no quería abundar mucho en esto y como la esencia del sentido de mi voto ha quedado expresada en este recinto, reiterando que voy a insertar el resto de mi exposición en el Diario de Sesiones, adelanto que voy a votar afirmativamente el dictamen en mayoría aprobando el proyecto del Senado.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Tiene la palabra la señora senadora Corregido.

**Sra. Corregido.** – Señor presidente: antes que nada, quiero adherir al repudio a las amenazas que recibió la senadora Escudero, porque no estaba en el momento en que se trató la cuestión y me parece que eso es lo que corresponde.

A su vez, también quiero expresar mi disgusto por todas estas apreciaciones descalificantes en uno y otro sentido que son contaminantes y que deslegitiman el trabajo de los legisladores. Porque cada vez que tenemos que asumir una posición en alguna cuestión relevante o que concita la atención de la opinión pública debemos escuchar agravios de distintos sectores. En el mismo sentido, quiero repudiar las expresiones del diputado Bonasso y las expresiones de quienes dicen que para no quedar “pegado” a lo que dice el diputado Bonasso tenemos que votar en tal o cual sentido, quitándonos a todos nosotros la dignidad y la libertad de poder votar de acuerdo con nuestro mejor entender y conforme a nuestras conciencias y convicciones.

Por ello, quiero comentar aquí la visita que me hicieron en su oportunidad María Rachid y Esteban Paulón, cuando empezamos a tratar la ley de matrimonio igualitario. Ellos me fueron a ver a mi despacho y me explicaron en qué consistía esa ley, cuáles eran sus expectativas y al finalizar me dijeron lo siguiente: “Nosotros le venimos a pedir que usted vote con información y libertad”. Eso es lo que quiero hacer cada vez que tengo que apretar el botón verde o rojo.

Con relación al proyecto de ley en tratamiento, quiero adelantar que voy a votar favorablemente la iniciativa que viene en revisión de la Cámara de Diputados porque entiendo que contiene algunos aspectos interesantes como, por ejemplo, el artículo 1º. Allí, el proyecto incorpora como servicios ambientales los



glaciares y el ambiente periglacial, que es la reserva de recursos hídricos para las actividades industriales.

De esta manera establece implícitamente que sirve y es necesaria para la actividad industrial. Entonces, las mineras podrían sacar nieve de los glaciares y convertirlas en agua. No lo dice la ley, pero deja abierta la posibilidad.

Otro artículo que me parece importante, y distingue uno de otro, es el 7°. En el proyecto del Senado se omite la obligación de realizar una evaluación estratégica –también lo dijo la senadora Díaz– del impacto ambiental. Este tipo de evaluación estratégica agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse. Es decir, analiza las relaciones de diversos proyectos entre sí, entre ellos y sus contextos sistémicos.

Esto toma especial relevancia si tenemos en cuenta que Pascua-Lama y Veladero forman parte del mismo distrito aurífero; o que Agua Rica se encuentra a tan sólo 34 kilómetros de La Alumbraera.

Es decir, la evaluación ambiental estratégica es fundamental para el cuidado de los glaciares y de los periglaciares.

También quiero hacer una consideración especial con relación a lo que significa el agua, que es el bien protegido o que aspiramos proteger.

Se ha dicho acá –entre otros, el senador Filmus, la senadora Estenssoro– que el agua es considerada por las Naciones Unidas como un derecho humano. Quiero decir que en mi provincia, donde no tenemos minas ni tampoco glaciares, hay una gran escasez de agua. En el Chaco nos pasamos mucho tiempo con largas sequías, en las que la mayoría de la población no tiene agua para consumo, y son los chaqueños más pobres. En muchos pueblos no hay red de agua potable. Y si la hay es muy reducida y la presión del agua es muy débil. Incluso hasta los que contamos con red de agua tenemos que tener un pozo alternativo para poder bañarnos. Los chaqueños somos parte de esa relación de 1 de cada 3 que no tiene agua. Somos muchos los chaqueños que no tenemos agua. Dependemos del régimen de lluvias y de los pocos ríos que tenemos.

La verdad es que no podemos soslayar la importancia que tiene que las aguas que traen

los ríos que vienen de la montaña no estén contaminadas. Este dilema que existe entre el desarrollo y la producción y el cuidado del ambiente deberíamos empezar a cerrarlo como sociedad y entender que no hay desarrollo sustentable si no protegemos el ambiente y la salud de las personas que habitan en ese ambiente.

En la provincia del Chaco tenemos un alto crecimiento de enfermedades oncológicas producto de las fumigaciones. Se fumigan pueblos enteros tras la rentabilidad de la producción de la soja y arroz. Hace muy poco hemos tenido el triste episodio, que por orden de un juez federal se reprimió a una comunidad de 400 habitantes. Se trata de una pequeña comunidad sustentable que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la fabricación de quesos. Sus hijos van impecables a la escuela, que fue construida por el general Perón. Eso habla del cuidado que tiene esa comunidad de sus propias cosas. Presentaron un amparo porque están construyendo el electroducto NEA-NOA –todos estamos de acuerdo con su construcción; Chaco y Corrientes necesitan el electroducto– que pasa por el medio de esa comunidad. La comunidad pidió que se corra un kilómetro y el juez no hizo caso al pedido de esta comunidad.

Todos sabemos lo que significa el cuidado del medio ambiente y, como dijo el senador Pérez Alsina, no se puede dudar de las provincias porque los pueblos van a hacer el reclamo, pero muchas veces cuando los pueblos hacen su reclamo no son escuchados.

Yo quisiera que todos pensemos qué sentiríamos si nos pusiesen una torre de alta tensión arriba de los patios donde juegan nuestros niños o donde criamos nuestras gallinas que ponen huevos. Entonces, con ese mismo criterio creo que tenemos que votar la ley que mejor nos reasegure el cuidado del ambiente en todos los casos, no solamente respecto de la cuestión de los glaciares y de los periglaciares.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

**Sr. Gioja.** – Señor presidente: estamos todos de acuerdo en que queremos defender el medio ambiente; estamos todos de acuerdo en que queremos defender los glaciares; estamos de acuerdo en que el agua es mucho más importante que cualquier otro recurso, que el agua es un derecho que tiene que ver con la vida, que

la Organización de las Naciones Unidas lo han reconocido como tal, y que en función de eso debemos adecuar nuestros criterios para resolver cómo hacemos ciertos estos postulados que he mencionado.

Hay dos proyectos: un proyecto de Senadores y otro de Diputados. Algunos dicen que son exactamente iguales pero yo creo que tienen algunas diferencias significativas. Son diferencias que tienen que ver con los procesos de composición, con cómo se elaboraron, y son diferencias que tienen que ver con definiciones técnicas, con los criterios jurídicos que contiene cada uno de ellos y con criterios administrativos.

¿Por qué el proyecto del Senado tuvo en su oportunidad unanimidad? Porque en ese entonces la comisión, a partir del veto de la presidenta y con la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, hizo todo un largo proceso escuchando a todos los sectores que tenían vinculación con el tema: a las provincias, a los sectores técnicos, a las ONG. Escuchó a todos. Se hicieron audiencias públicas, vinieron de todos lados y cada uno dijo su opinión. Y, entonces, a partir de todos los dichos y opiniones se elaboró un proyecto que yo defino como técnico en el que se hicieron definiciones precisas. Ése fue un proyecto que concitó la adhesión de todos los sectores: peronistas, radicales, peronistas de distintos signos, partidos provinciales; todos los sectores estuvimos de acuerdo porque fue una labor común que terminó en una elaboración básicamente técnica.

Ese proyecto fue a la Cámara de Diputados y los diputados no consultaron a nadie, hicieron su propio análisis y le agregaron lo que a mi criterio fueron algunas consideraciones de orden político, y me parece que esas consideraciones enturbiaron y le quitaron definición al proyecto de la Cámara de Senadores.

Desde el punto de vista técnico hay una diferencia sustancial. Nosotros dijimos que el ambiente glaciar y el ambiente periglacial eran conformados por hielos que tenían el carácter de permanentes, y el proyecto de la Cámara de Diputados lo cambió por suelos congelados. Son dos cosas distintas. Los glaciares y periglaciares son hielos permanentes. Lo han dicho todos aquí.

Es más, quiero leer una pequeña definición que hizo el doctor Villalba. Cuando planteó

la similitud de los proyectos personalmente le señalé que hay un tema que me parece que plantea diferencias.

El proyecto original del Senado habla de suelos permanentes congelados; en cambio, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados no habla de permanentes en ningún lado, por lo que cualquier suelo congelado puede ser interpretado como parte del sistema de glaciares. Villalba me dijo: “Estoy de acuerdo con usted. La diferencia fundamental está en el artículo 1°: un suelo que se congela en forma temporaria no es importante desde el punto de vista de reserva hidrológica, por lo que no hay que protegerlo”. “Es decir que hay que proteger a los que son permanentes”, agregó yo. “Exactamente”, dice Villalba.

Ahora bien, respecto de la definición de la Cámara de Diputados cuando se habla de regulador del recurso hídrico, haré una referencia a lo que dijo acá el secretario de Medio Ambiente, el licenciado Bibiloni. Sostuvo que el término “regulador del recurso hídrico” presente en el artículo 2° del texto de Diputados será motivo de controversias técnicas al momento de reglamentar la ley y de hacer operativo el inventario.

La definición de glaciar clásico —el descubierto donde se ve la lengua de hielo— es similar en los dos proyectos. Sin embargo, el proyecto de la Cámara de Diputados incorpora a los suelos congelados reguladores de recursos hídricos y a los suelos saturados de hielo que no tienen, a priori, el carácter de reserva estratégica porque no son permanentes; y al no estar definido el grado de saturación ni el período de congelamiento del suelo, resultará dificultosa la implementación del inventario en los tiempos reglamentariamente previstos. O sea que la diferencia es sustancial: hielos permanentes; hielos congelados. Si hablamos de hielos permanentes, definimos una geografía determinada; si hablamos de suelos congelados, puede ser en la interpretación de un juez —que a lo mejor no entienda o no entre en el análisis profundo de estas cuestiones— cualquier situación nívea que en poco tiempo o en las épocas de invierno se congela, generando situaciones de conflicto de orden judicial que todos conocemos con las medidas de no innovar y los recursos de amparo. Entonces, prefiero básicamente la definición clara y precisa que tiene el proyecto del Senado.

Dije que tenía diferencias jurídicas. Es sintomático. En el proyecto que viene de Diputados se han eliminado tres o cuatro consideraciones relacionadas con la participación de las provincias en el control y en la gestión vinculada con los glaciares. La primera observación que hago tiene que ver con la eliminación en el artículo 1° de una mención que, es cierto, cita la Constitución y que, de alguna manera –por aquello de que lo que abunda, no daña–, informaba claramente que los glaciares son recursos naturales de dominio público y que corresponden a la Nación o a las provincias, según el lugar en que se encuentren. Esa eliminación, caprichosamente hecha por algún diputado –conforme a cierta información que tengo– apunta a marginar, por lo menos en el texto del proyecto de ley, una presencia absolutamente necesaria.

La otra anulación se vincula con el artículo 5°. En el Senado establecimos que el Ianigla era el organismo que iba a programar, a controlar todo el proceso de confección del inventario, y que lo haría consultando a las autoridades nacionales, a las provincias y a las estructuras de otra naturaleza, como lo son las universidades y otros organismos técnicos. El proyecto de la Cámara de Diputados elimina la consideración a las provincias, que son las dueñas del recurso, señalando que el Ianigla actuará en exclusiva consultando solamente a las autoridades nacionales de aplicación de la ley. Hay una marginación evidente en este aspecto.

Decimos que hay errores administrativos, porque no hemos previsto recursos, ni humanos ni financieros, para que atiendan las erogaciones y la formulación del inventario, cosa que me parece absolutamente gravosa porque en el esquema de funcionamiento de nuestra estructura administrativa el Ianigla queda desprotegido en orden a cumplir con la ley.

Aquí hemos hablado muchísimo de los presupuestos mínimos y entendemos que hay algún tipo de abuso con relación a este tema. Por eso, dejo planteado en mi carácter de representante de la provincia de San Juan, que mi provincia, por expresas instrucciones de la Legislatura y del gobernador, no delega en la Nación las facultades que originariamente le corresponden en orden al dominio sobre los recursos naturales que existen en su territorio. Esto está expresado en una carta que nos envía el gobernador, que

nos pide que acerquemos y que pido que sea insertada en el Diario de Sesiones.

Por estas consideraciones, que entiendo son significativas e importantes, que tienen que ver con el objeto fundamental de proteger a los glaciares, tenemos que apoyar el proyecto que aprobamos oportunamente en el Senado.

Quiero hacer algunas consideraciones muy cortitas, no me quería meter en este tema pero escucho afirmaciones que tienen que ver con el consumo hídrico de las empresas mineras. San Juan es una provincia que tiene mucha minería y pocos recursos hídricos. Por ejemplo, la mina Veladero utiliza el 0,4 por ciento del caudal que tiene el río Jáchal, que es el más chico de los ríos de San Juan. Y todos los proyectos mineros que hoy están desarrollándose y los que están programándose en el tiempo no llegarán a utilizar el uno por ciento de todo los recursos hídricos. Tampoco esa agua vuelve a las fuentes, sino que recircula en circuitos cerrados y, en la mayoría de los casos, no es potable.

En esto hay que ser muy consecuente y analizar, como decía muy bien la senadora Vigo, las cuestiones sociales vinculadas con este tema. Sabemos que hay una confrontación no resuelta entre el desarrollo de las actividades productivas y el medio ambiente, pero tenemos que solucionarlo con inteligencia sin afectar el medio ambiente ni los derechos sociales de nuestro pueblo, que no tiene otro tipo de alternativa de mejorar su condición social si no es poniéndole valor agregado a sus recursos.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Le pide una interrupción el senador Mansilla.

**Sr. Gioja.** – Sí, con mucho gusto.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Mansilla.

**Sr. Mansilla.** – Señor presidente: debe ser una de las sesiones en las que he participado en el Senado en que me he preocupado por escuchar a la totalidad de los oradores. Diría que en algún momento estuvimos únicamente siete senadores, por diferentes motivos, escuchando a los oradores y he tenido la posibilidad de escuchar este tema. Le agradezco al senador Gioja que me dé la posibilidad de hablar cuando van a empezar a argumentar los presidentes de bloque. La verdad es que no creía que se llegara

a las circunstancias que se está llegando. Digo esto porque, en alusión a lo que dijo el senador preopinante en cuanto a los intereses de un lado y del otro, se está montando un manto de duda en la votación que podemos tener tanto uno como otro. A ciencia cierta, hace 40 días en el bloque nos dijeron que iba a ser un tema para votar a conciencia y pensé que se viene otro “quilombo” como con el tema del matrimonio igualitario. *(Risas.)*

Muchas veces la conciencia dentro del partido en el cual milito dura hasta 48 horas antes de la votación pero, curiosamente, en este caso está durando hasta llegar a la votación. Digo curiosa y alegremente porque estoy contento de poder votar como quiero. Por eso no quería dejar de expresar mi posición, porque se ha tirado un manto de duda hace 15 días porque nos quieren separar entre los que cuidamos los intereses mineros, y los de Greenpeace.

He visto los dos proyectos, he escuchado las posiciones de todos y pienso que son dos proyectos prácticamente iguales. Uno de los proyectos se aprobó por unanimidad en el Senado y después se le hicieron algunas modificaciones en la Cámara de Diputados.

No he encontrado posiciones totalmente opuestas, como plantearon algunos de los senadores preopinantes. Algunos dijeron que por un lado están los intereses y por otro lado están los valores. No considero que yo pueda tener mejor valor que alguno de mis colegas porque votemos diferente. Por eso, quiero dejar sentada mi posición.

Inclina la balanza por la posición que voy a tomar el hecho de que mi provincia no se ve afectada en estos momentos por este proyecto de ley. Si bien es cierto que tenemos vecinos a los cuales seguramente los afecta y soy partícipe, porque una de las provincias a la cual aprecio mucho, fuera de mi provincia natal, es la de Catamarca, y veo cómo los senadores defienden la posición de esa provincia, a la cual conozco y sé las mejoras que le llevó la actividad minera.

Confío en ellos, que van a velar para custodiar los recursos naturales de esa provincia. Por eso, no quiero dejar pasar la oportunidad de sentar mi posición, porque el manto de duda que tiraron es como si fuese que nosotros votamos de una forma y otros de otra, como que uno cuida la naturaleza y otro no.

No he encontrado argumento como para que hoy se incline la balanza más fuerte para el lado que se me ha inclinado, que es apoyar a una provincia como la de Catamarca y apoyar el dictamen en mayoría del Senado que se emitió por unanimidad en algún momento.

Muchas gracias, señor presidente, y gracias senador por haberme permitido la interrupción.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Continúe, senador Gioja.

**Sr. Gioja.** – Termino, presidente, señalando la representatividad que se ha planteado y que está en juego con relación a este tema.

En ese sentido, han venido acá varios gobernadores de las provincias andinas. Los que no han venido, mayoritariamente han expresado su solidaridad con el proyecto aprobado por el Senado. Ha venido acá el secretario de Estado de Minería a apoyar este proyecto; ha venido el secretario de Estado de Medio Ambiente a apoyar este proyecto.

Creemos entonces que hay una legitimidad política en orden a considerar como una expresión federal de quienes están vinculados a la geografía, que conocen el tema, que se han ocupado y preocupado permanentemente de esta temática; que saben de defensa del medio ambiente pero que saben también de la necesidad de desarrollo; que saben que si a los pueblos se los condena a la agricultura o a la ganadería son pueblos que tienen un futuro incierto.

La minería genera –y no estoy defendiendo a la minería– sociedades industriales, y hay muchos a los que no les interesa acceder a ese tipo de sociedades, porque son beneficiarios de otro tipo de sociedades, que son las que van a ser reemplazadas por las que tienen mayor calidad de vida.

Por eso, señor presidente, ratifico el apoyo a la posición del dictamen mayoritario, que tiene por objeto ratificar el dictamen que oportunamente diera el Senado.

**Sr. Presidente** (Basualdo). – Tiene la palabra el senador Juez.

**Sr. Juez.** – Señor presidente: mire, la verdad es que dudaba si iba a hablar o no; me anoté a mitad de lista, después dije “pásame al fondo”.

Primero, porque vengo escuchando y me pregunto si tengo legitimación activa para hablar. No soy de una provincia cordillerana. Pareciera



que para hablar de minería hay que ser de una provincia cordillerana. Para hablar de tabaco hay que vivir en Jujuy; para hablar de petróleo hay que vivir en Neuquén.

Entonces yo puedo hablar de soja nada más, porque vengo de una provincia sojera.

Digo, sí, tengo legitimación activa. Yo vengo a defender el agua, porque estamos discutiendo de agua, no estamos discutiendo de minería. Podemos discutir, si queremos, qué tipo de minería no queremos. Y ésta, casualmente, no la queremos. No la queremos por contaminante, no la queremos porque no la quiere nadie, solamente nosotros, los países periféricos, o estos laboratorios donde las grandes empresas mineras vienen a probar este tipo de explotación.

¿Yo tengo legitimación activa para hablar? Tengo legitimación activa. ¿Necesito ponerme un poncho rojo punzó y hacerme el caudillo federal? ¿Ser el bonsái de Bustos, un caudillo mediterráneo? ¡No! Porque no creo que estemos discutiendo federalismo. ¡Y miren que soy “jodido” para discutir los derechos de mi provincia y de los pueblos del interior! Pero no estamos discutiendo federalismo. No veo que estemos discutiendo colisión ni contraposición de normas constitucionales.

Se me ha planteado ese escenario: acá hay colisión del tema constitucional. Sin ser un experto constitucional, soy un hombre de derecho desde hace veinticinco años. Entonces, digo que con los artículos 41 y 124 nos han tratado de mostrar una colisión en el derecho constitucional que no existe. Cada norma consagra y defiende principios claramente establecidos: lo que le corresponde a la Nación y lo que corresponde a las provincias. No hay colisión; de ninguna manera.

¡Acá, salvo los tres senadores por la Capital Federal, todos somos representantes de los pueblos del interior! El 95 por ciento de los que estamos acá representamos a los pueblos del interior. Entonces, tener la posición que yo sostengo —que coincide con la del miembro informante, senador Filmus, representante por la Ciudad de Buenos Aires—, ¿me hace menos federal?

Entonces, en la medida en que iba avanzando dije: “Tengo legitimación activa”. Me hice un esquema y dije: “¿De qué hablamos?”.

Recién escuchaba. He escuchado durante esta larga jornada que arrancó a las 11 y media de la mañana. ¡Todos estamos de acuerdo! ¿Es cierto que estamos todos de acuerdo? Si estamos todos de acuerdo, ¿qué hacemos a las 2 de la madrugada discutiendo dos proyectos iguales? ¡No estamos discutiendo dos proyectos iguales!

Mire: yo no tuve la oportunidad ni la bendición de ser senador en la época en que se discutió. Pero, ¿qué pasó? ¡Hace tres años —decía la senadora Estenssoro— que estamos discutiendo este proyecto! ¿Estamos discutiendo todos lo mismo? ¿Estamos todos defendiendo lo mismo? ¡Y esto no es una ofensa para nadie! Ni soy mejor que nadie por la posición que adopto ni creo que alguien sea peor que quien opina porque tenga una posición distinta. Pero, ¿estamos defendiendo todos lo mismo? ¡No estamos defendiendo todos lo mismo, señor presidente!

Hay algunos que con vehemencia, con enjundia, con mucha decisión, defienden intereses provinciales sin darse cuenta de que estamos discutiendo cuestiones esenciales que son de todos. ¿Por qué tengo yo que reservar el derecho a la discusión por el agua de mis hijos y de los hijos de mis hijos nada más que a aquellos que, porque viven en una provincia cordillerana, creen que pueden conocer, opinar y hablar, con fundamento y con conocimiento de un tema? ¡Yo no le voy dar ni a regalar el futuro de mis hijos, ni de mis nietos, nada más que por haber llegado a pie!

Sería una locura que, como vengo de Córdoba, únicamente a los que vivimos en una provincia mediterránea y vivimos de la agricultura nos esté vedada la posibilidad de opinar con qué elementos pueden fumigar la soja, qué es contaminante y qué no lo es; por qué debemos aceptar esa posición en el marco de la discusión que se está dando en muchos lugares acerca de los agroquímicos. ¡Sería una locura pensar que porque vivo en esta provincia solamente los cordobeses —con excepción de algún senador pampeano, de Buenos Aires o de Santa Fe— pueden opinar acerca de cómo controlamos esta locura de la fumigación que contamina pueblos, ríos, etcétera!

¡Tienen derecho! Muchos nos dicen: “Locos: ¿ustedes están haciendo algo para controlar esto, porque la verdad es que el lecho de su río ter-

mina acá, y allá están fumigando con avioneta? Y tienen razón.

¿Yo vengo de una provincia minera? No. No tenemos minería, pero prohibimos la minería a cielo abierto. ¡Nos costó horrores!

No quiero ofender a nadie, señor presidente, pero si me he quedado hasta esta hora debo decirle que no estoy dormido como para creer que acá no hay poderosísimos intereses en juego.

¡Esta ley ha llevado una terrible discusión! ¡No sé si ha habido tantas leyes en este Parlamento que se hayan discutido tanto! Antes de que llegáramos a esta situación ya la habían discutido: había ido de Diputados al Senado, del Senado a Diputados y después terminó en un veto casi incomprensible.

¿Qué pasó? La única ley votada en el gobierno de Néstor Kirchner y el principio de la presidencia actual que logró consenso absoluto fue vetada. ¿Qué pasó en el medio, si estaban todos de acuerdo y coincidíamos todos en qué eran los glaciares, los periglaciales, qué había que controlar, quién iba controlar, quién iba a hacer el inventario? ¿Qué pasó? ¡Hay intereses en juego! Entonces, que nadie se sofoque ni se ponga colorado porque hay poderosísimos intereses en juego.

Está bien que nos animemos a transparentar los intereses que están en juego, y que lo digamos con claridad, sin ofender, agraviar ni injuriar. Pero tengo mis dudas —mis serias dudas— de que todos estemos hablando de lo mismo y de que todos defendamos lo mismo.

¿Estamos hablando de dos proyectos similares o iguales? ¿Dan lo mismo? Creo que no. Debo decir, con absoluta claridad, que no. Es más, entre el veto de la señora presidenta del 10 de noviembre de 2008 a la fecha, transcurrieron 22 meses. Y les brindaré unos datos zonzos: en enero de 2007, la onza de oro valía 635 dólares; en diciembre del mismo año, 820 dólares, y actualmente vale 1.800 dólares. La tonelada de cobre, en 2007, valía 6.500 dólares, y hoy vale 9 mil dólares. Las exportaciones de oro, entre los 22 meses que mencioné, aumentaron el 88 por ciento, las de cobre, el 25 por ciento. Mientras tanto, no había ley; mientras tanto, “vamos que va”. Entonces, no es indistinto que estemos, un jueves a las 2, discutiendo, supuestamente, dos proyectos similares o iguales.

Fui anotando las opiniones vertidas por varios senadores, quienes seguramente se refirieron al proyecto con más fundamentos que los que yo puedo esgrimir. Además, he aprendido, como hombre del derecho, que uno puede usar una parte de la biblioteca para justificar argumentos totalmente contrarios a los de su oponente. En ese sentido, he visto que a Villalba lo llevan y lo traen para justificar un argumento o el otro. Entonces, propongo que Villalba sea elegido senador y se siente en una banca. Porque si Villalba sirve para unos y para otros, en definitiva, o este hombre es terriblemente contradictorio, o su lenguaje es tan vasto que le permite ser interpretado como si hablara en esperanto, ya que pareciera que lo entienden todos sin importar la lengua que se hable.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

**Sr. Juez.** — Verdaderamente, si coincidimos que el estudio, el control y el inventario de los glaciares lo hará un instituto a cargo de Villalba, de quien todos nos llenamos hablando de él; si es tan genio como dicen, a esa persona no le vamos a poner el dedo en la boca. Él sabe qué son glaciares y las zonas periglaciales. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo si los hielos tienen que ser permanentes o suelos congelados, si a Villalba ni por la banquina lo podemos pasar? A Villalba no tuve oportunidad de conocerlo, además, no formé parte de la comisión; pero la senadora Morandini me dijo que le dio la sensación de ser una persona que sabe. De todas formas, todos concluimos que el que más “juna” del tema es Villalba. Entonces, ¿para qué nos preocupamos, si el inventario lo hará el instituto que él conduce y al cual todos le reconocemos una gran capacidad científica? En ese sentido, escuché a la senadora Montero decir, con orgullo provinciano, que ese instituto es lo mejor que había en el país.

Sin ánimo de ofender, reitero que no todos estamos hablando de lo mismo, y que no todos defendemos los mismos intereses. Uno tuvo responsabilidades de gobierno, y pretende tenerlas. Yo pretendo gobernar mi provincia. Y está claro que, cuando uno quiere gobernar su provincia, necesita generar empleo, trabajo y mano de obra. Eso es lo que les da dignidad a los pueblos; lo único que hace digno al ser humano

es el trabajo. Pero cuando uno plantea estas cuestiones, automáticamente le “tiran” con los trabajadores, le dicen “no, porque este tema...”.

No estamos hablando de lo mismo, y no estamos todos defendiendo los mismos intereses. A esta altura de la noche, no me voy a poner un disfraz de hipócrita y creer que todos estamos peleando por lo mismo. Si todos estuviéramos luchando por lo mismo y defendiendo los mismos intereses, hace rato que este proyecto sería ley, que la Argentina tendría una ley de protección de glaciares y zonas periglaciales, que tendríamos hecho un inventario, que sabríamos qué se puede explorar o explotar, y qué está permitido y qué no lo está.

Señor presidente: con absoluta convicción debo decirle que estoy convencido de que el proyecto sancionado por Diputados establece con mayor claridad, precisión, certeza y certidumbre lo que hay que proteger, porque lo que impulsa es la protección de las reservas de agua. Ese es el proyecto que, modestamente, acompañaré con mi voto.

**Sr. Presidente.** – Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Castillo.

**Sr. Castillo.** – Señor presidente: a esta hora de la noche ya ha habido muchos argumentos. Uno no sabe cómo empezar para no ser reiterativo de algunas cuestiones, pero se me ocurre pensar en un lugar geográfico que está en la zona vasca de España, allá en el norte, cerca de las cuevas de Altamira, donde están las pinturas rupestres más antiguas de Europa.

Hay un pueblito encantador que se llama Santillana del Mar. ¡Cuando uno llega a ese pueblo parece que entra a un cuentito! Pero al rato de estar ahí uno empieza a conversar y se da cuenta de que podría ser el pueblo de las tres mentiras, porque no hay santa, no hay llana, hay muchas ondulaciones y tampoco hay mar: ¡está muy lejos el mar! Entonces, cuando uno ve esta ley de glaciares, de presupuesto mínimo y alguna otra medida, ve que es un proyecto de ley que dice una cosa y debajo hay otras cosas de las que se puede hablar.

A esta altura no quiero ser reiterativo, pero acá hubo un proyecto de ley de la diputada Maffei. Este proyecto fue vetado, como se dijo acá. Se llamó al Senado, se llamó a organizaciones no gubernamentales, se consensuó

otro proyecto. Ese proyecto fue a la Cámara de Diputados y de allí volvió con nuevas y bastantes modificaciones. Ahora bien; ese proceso nos ha puesto hoy en el artículo 81 de la Constitución. O sea que ni siquiera podemos hacer grandes modificaciones: podemos insistir como Cámara de origen o podemos receptar. Incluso, estamos con algún problemita referido al artículo 17 y no vamos a saber bien qué hacer hasta dentro de un rato.

Es decir que no tenemos mucha amplitud. En alguna medida estamos cercenados a un debate que ya se ha venido dando desde hace tiempo. Son los temas que –nada más y nada menos– hacen al medio ambiente. Estos derechos en verdad no estaban receptados en la legislación argentina hasta 1994, con la reforma de la Constitución.

Indudablemente a partir de Estocolmo, en 1972; de la Cumbre de Río, en 1992; las Constituciones que se fueron realizando en los distintos países han ido receptando este concepto del derecho del medio ambiente.

La reforma de 1994 nace de un acuerdo político y ese acuerdo, al ser político, ve políticos nada más, tenía algunas limitaciones. Por eso se hizo el Acuerdo del Núcleo de Coincidencias Básicas. Se planteó dicho núcleo y, fundamentalmente, que no podíamos modificar la parte primera “de los derechos y garantías de la Constitución”, porque al ser un acuerdo político ya iba a caer en desgracia frente a la consideración de otros actores que existen en un país.

Entonces, en virtud de eso, lo que sí se acordó es crear un capítulo II donde se pusieron los nuevos derechos y garantías; y ahí vinieron a ser receptados muchos de los temas que en el país no estaban hasta ese momento en vigencia, bajo imperio de Constituciones anteriores muy lejanas en el tiempo. Allí se receptó este artículo 41.

En verdad, previo a ello ha habido algunas reuniones de gobernadores, como la del 24 de mayo de 1990, donde se planteaba en el artículo 7° de esa declaración revertir la acumulación de funciones y atribuciones asumidas por el gobierno nacional. En el 8° se planteaba que se reconocerá el dominio y jurisdicción de los recursos naturales a las provincias.

En fin; cuando se produce en verdad la Constituyente en Entre Ríos, sobre estos temas que si se habían acordado políticamente, en algunos momentos había alguna cuestión de prevención en la redacción de este artículo, sobre todo cuando se plantea el asunto concordante de los presupuestos mínimos; algo en lo que concurren la Nación y las provincias.

La miembro informante fue la señora Elba Roulet y en esa oportunidad fija que la interpretación del artículo 41 solamente se puede hacer en consonancia con el artículo 124, que le reconoce expresamente a las provincias el dominio del recurso natural, en pensamiento con el artículo 121, es decir que lo que no han delegado las provincias es expresamente de ellas, y hasta podría decirse en una interpretación con el artículo 75, inciso 12), que es aquel por el cual el Congreso de la Nación hace la legislación de fondo; o sea, el Código Civil y el Código Penal. Si se hubiera querido incluir este derecho, habría estado en ese lugar y no estaría en el artículo 41. Incluso, hay un voto de Iván Cullen, un constitucionalista de Santa Fe, que indica que cuando se hace este debate queda claro que el concepto de presupuestos mínimos de legislación por parte de la Nación queda interpretado a satisfacción de los congresales que allí se encontraban.

Es decir, entendiendo que presupuesto mínimo es un umbral, un piso, un elemento necesario regulador sobre el cual el país puede marcar este tipo de leyes.

Quiere decir que, a contrario imperio, no puede ser un tope, un techo, porque allí se encuentra el espacio sobre el cual debe estar la reglamentación por parte de las provincias.

Estoy siguiendo lo que allí pasó y, en alguna medida, lo que los constituyentes entendieron como tal.

Luego, existieron expresiones de los gobernadores que firmaron un documento planteado cuando nos visitaron. Incluso, el gobernador de La Rioja le dio lectura. Pero hubo un claro planteo de hacer una interpretación cabal del artículo 41 en clara conjunción con el artículo 124.

Es cierto que en alguna medida son parecidas. Una es una copia de otra con ciertas transformaciones. Y la verdad el senador Gioja ha dicho que la sanción del Senado fue la que

tuvo las mayores consultas. Y, más allá de la felicidad o no del texto, eso fue lo que pasó. Hubo algunas disidencias como la del senador Pérez Alsina y Marita Colombo. Yo no hice uso de la palabra, pero lo que planteábamos en la disidencia votada en general fue la preservación del federalismo. Y porque aquí se nos hable con tonadas y apurados no quiere decir que no estén receptadas cuestiones del federalismo.

Si uno toma el artículo 1º verá que son iguales. Solamente que cuando se indica que los glaciares constituyen bienes de dominio público y su dominio corresponde a las provincias y al Estado nacional según el lugar en que se ubiquen está más que claro. Pero eso no figura así en la sanción de la Cámara de Diputados.

Si eso constituye o no una alteración, no lo sé; pero no está. Lo mismo ocurre en el artículo 5 cuando se plantean los temas referidos al inventario. Me parece que es obvio que las provincias tienen que formar parte de él si son nuestras tierras y nuestro lugar geográfico; pero no está. Y no son cuestiones menores.

Escuché a uno de los supuestos autores de esto el pasado domingo en un programa de televisión reivindicar la Constitución de 1949 como aquella en la cual estos recursos naturales eran del Estado nacional. Después, en la de 1994, se les ocurrió otorgar esto a las provincias. ¡No era una cuestión menor! Podemos compartir la concepción ideológica de este señor, o no; pero en verdad lo que estamos diciendo es que la Constitución vigente es la de 1994. Y para llegar a esa Constitución hubo muchos pensamientos y planteos a lo largo y ancho de este país.

Creo en verdad que esto involucra una cuestión federal y de autonomía de las provincias. Se trata de la armonía de un país federal y también de algo que no menor, como es la definición que se establece en el artículo 2º.

Entiendo que estas son cosas difíciles. Todos hemos escuchado a distintos científicos expresarse de una manera u otra; pero hay dos o tres cosas que me llamaron la atención. Porque en realidad la diferencia en el artículo 2º está dada, más que nada, en que un proyecto hace referencia al carácter permanente del suelo congelado, estableciendo una categoría determinada, mientras que el otro, al no plantearlo de esa manera, lo hace más amplio. No digo ni bien ni mal: soy abogado y de esto no entiendo



mucho; pero como abogado sé también que si no hay una definición precisa estaremos abriendo la puerta para que se susciten situaciones jurídicas.

Un representante de una organización no gubernamental a quien escuchamos cuando vino a esta Cámara casi se autotituló autor de estos artículos. Fue claro en su exposición: por lo menos en tres de los artículos que se modificaron en la Cámara de Diputados ellos habían sido consultados, si no habían sido los autores. Sin ningún problema dijo que el artículo 2° era vago y para esa organización no gubernamental la vaguedad de ese artículo era una cosa muy buena, porque era más amplio. Lo que yo estoy diciendo es que esa vaguedad del articulado abre la posibilidad de que en sedes judiciales se puedan parar determinados tipos de actividad, o no.

**Sr. Presidente.** – Señor senador: estamos con el tiempo cumplido...

**Sr. Castillo.** – Señor presidente: ¡soy presidente de bloque y he pedido que se me inscriba como tal para exponer!

**Sr. Presidente.** – Continúe, señor senador.

**Sr. Castillo.** – De manera que esa cuestión para nosotros no es menor: no es menor que se puedan parar actividades.

Villalba puede ser un gran científico o no; pero en verdad lo que aquí se ha repetido toda la noche es lo que Villalba vino y dijo. Él afirmó que los dos proyectos cubrían de forma específica y clara el concepto de glaciar.

De manera tal que si un proyecto respetaba a las provincias, respetaba al federalismo, tenía mayor armonía con la Constitución, y a su vez tenía alguna definición algo más clara sobre el tema, y los dos tratan de igual manera al bien jurídico tutelado que esta noche estamos considerando, que sería el agua: ¿qué ha pasado, entonces, que hoy estamos tratando el tema de otra manera, quizá con tantas exageraciones y mentiras?

Alguien dijo aquí recién que tenemos que aprender todo lo que hace a lo que son los glaciares, a su movimiento, etcétera. ¡Uno escucha por ahí cosas que realmente son increíbles!

Por ejemplo, he escuchado aquí, esta misma noche, que el 70 por ciento del agua que tenemos viene de los glaciares; pero después escuché hablar del 1 por ciento de la geogra-

fía. Entonces, debemos ponernos de acuerdo. Yo diría, de una forma práctica, que miremos el río Paraná: tiene algo así como 13 millones de litros por segundo, mueve mucha más agua que muchos glaciares –me parece– y no viene de ningún glaciar. El río Paraná viene de la zona del Brasil: es agua que se genera por la lluvia y por otras cuestiones. En mi provincia, por ejemplo, donde están los glaciares, en la cordillera, casualmente es seco, no hay agua. Porque el agua viene de las montañas después de las lluvias en las zonas mucho más bajas.

En lo que se refiere a esto de que el glaciar va un poco más allá o acá, en verdad saber si el glaciar se agranda o se achica es lo que le llaman la balanza de la masa del glaciar y hay algunos glaciares que se agrandan y otros que se mantienen estables. Por ejemplo, el Perito Moreno es un glaciar estable y hay otros que tienen retrocesos fenomenales: por ejemplo, el Upsala, que está en El Calafate.

Si uno va a El Calafate podrá encontrarse, al costado del pueblo, con un museo de los glaciares. Allí uno puede observar cómo era esta zona del Sur hace más de diez mil años: eran todos glaciares. Ni siquiera existían el estrecho de Magallanes ni el canal de Beagle; eran todos glaciares. Hay un proceso de retroceso que algunos sitúan en 100 mil años y otros en 10 mil años. Ya dijo el señor senador Martínez que estamos en un verano glaciar; nada más que, en realidad, son veranos de miles de años. Si uno toma como ejemplo al Upsala podrá ver que está muy marcado el retroceso de ese glaciar. Están marcadísimos los 10 mil o 12 mil años de retroceso que va llevando. Decir que esto se debe al calentamiento global, a esto o a aquello, no tiene mucho sentido. Si se mide al Upsala, quien conoce más o menos algo sobre estos temas dirá que en verdad la revolución industrial empezó a fines del siglo XVIII –hace 200 años–, cuando el Upsala ya venía en retroceso desde hacía rato.

Lo que estoy diciendo es que los glaciares también tienen procesos naturales de aumento y de cambio. Ahora bien, en lo que sí deberíamos ponernos de acuerdo los seres humanos es en tratar de no ser potenciadores de esos procesos.

Hay algunas cosas que me resultan increíbles: por ahí escuché hablar del regulador de la lluvia. También es cierto que es nieve acumulada, pero

una gran verdad es que el glaciar da más agua cuando hace calor o cuando hay una sequía que en tiempo normal. Porque cuando el glaciar lanza su humedad lo hace con sublimación, porque siempre está bajo cero; o sea que no es a través del agua. Por ende, también en esto hay muchas cosas que se hablan de más.

A 20 kilómetros de La Paz había un glaciar que se llamaba Chacaltaya. Allí se hacía esquí y se decía que era el esquí más alto del mundo, porque se lo practicaba a 5.500 metros de altura. Ese glaciar se acabó por varios motivos: por el calentamiento global y, fundamentalmente, por el fenómeno del Niño, que es la corriente cálida que ataca esa zona del Pacífico y que nosotros conocemos porque en la zona del oeste argentino produce cambios en las lluvias.

Cuando ese glaciar se acabó, los lagos que están cerca de él no se secaron, sino que siguieron teniendo agua, los ríos que ese glaciar alimentaba también mantuvieron el nivel de agua, y tampoco se inundó nada. Entonces, a mí me parece que los temas hay que abordarlos con un alto grado de racionalidad porque, si no, vamos a cometer errores de un lado y del otro.

Si hay alguien a quien alguna vez debemos respetar es a Einstein. Precisamente, ese hombrucillo dijo que la solución de los problemas nuevos sólo se puede alcanzar mediante la creación de conceptos nuevos. Si vamos a tratar de resolver estos temas con prohibiciones, con prevenciones, con situaciones ideológicas o con estos fantasmas del preconceito, la cosa no va a funcionar.

Puedo sentir mucho miedo a ser descalificado porque no soy moderno o porque pensé de tal o cuál manera pero no por pensar que quizá, para hablar sobre un tema, primero deba adentrarme en su estudio a efectos de saber de lo que estoy hablando.

Digo, por supuesto con la relatividad de la verdad de cualquiera, que muchas veces estas posiciones van acompañadas de la posición casi del márketing, de cómo me vendo mejor, si voy a ser candidato cómo reaccionará mi provincia en lugar de analizar de verdad el tema que se está trabajando. Acá estamos trabajando sobre el agua. Bueno, entonces trabajemos sobre ello.

En el año 1962 –casi ninguno de nosotros habíamos nacido (*risas*)– en el mundo éramos

3.000 millones de habitantes. En este año 2010 estamos aproximadamente en 6.800 millones de habitantes. Dentro de 80 años vamos a ser el doble. Entonces, cuando estamos hablando de agua estamos hablando de una situación bastante difícil. Será uno de los problemas del siglo XXI. Los problemas del siglo XXI van a estar dados por la escasez de los recursos naturales, con una población absolutamente creciente, lo cual nos va a invitar a esa reflexión de Einstein de buscar conceptos nuevos para resolver los nuevos problemas.

Una de las formas de defender el agua es la que acá se planteó. En el mundo hay países exportadores de materia prima. ¿Quiénes son los principales países exportadores de materias primas? Estados Unidos, Canadá, Australia, la Argentina y Brasil. Hay países receptores de esa exportación.

Cuando estamos produciendo y exportando esos productos también estamos exportando agua a países que les está faltando, como en el caso de China, que en muchos lugares tiene agua para tomar o para producir. ¿Qué está haciendo China? Compra soja, compra agua, y a su agua le dan otro destino.

En el año 2002, a partir de un documento de la FAO en las Naciones Unidas, se ha creado el término “agua virtual”. ¿Qué es el agua virtual? Es la cantidad de agua que necesita un producto; está medido. Podríamos decir que para producir un kilogramo de soja en Estados Unidos se necesitan 1.800 litros de agua. En la Argentina se necesitan 1.100 litros de agua porque acá usamos lo que se llama el agua verde, que es el agua que proviene de la lluvia. El agua azul es el agua que está en los ríos o la que para extraerla es necesario llevar a cabo algún procedimiento. Lo mismo ocurre con la carne. Para producir un kilogramo de carne se necesitan alrededor de 7.900 litros de agua. En Estados Unidos se necesita más cantidad de agua porque allá al animal lo alimentan con el sistema *feed-lot* y acá lo hacemos más con pasturas naturales.

Soy autor de un proyecto en el Mercosur para pedir a las Naciones Unidas que nos diga la cuantificación del agua virtual de las exportaciones. El agua hoy es una externalidad, no forma parte del precio del producto. Nosotros necesitamos que el agua forme parte del precio del producto para que con ese dinero se pre-

serven las cuencas de donde sale el agua; se preserven las nacientes.

Si me permiten, les voy a citar un solo ejemplo de manejo del agua que hizo la ciudad de Nueva York. En esa ciudad había un problema con el agua. Debían hacer un filtrado porque el río Delaware y otro cuyo nombre no recuerdo arrastraban demasiado sedimento. El costo de ese filtrado ascendía a 6.000 millones de dólares: era mucho dinero. ¿Qué hicieron?

Convocaron a los distintos sectores que tenían su actividad en la cuenca del río. Entonces, por ejemplo, se encontraron con un señor que producía papa, en cuyo proceso la tierra se iba al río. Entonces, le dijeron que ponga maíz. El preguntó quién le pagaba la diferencia entre el maíz y la papa. Al respecto, le respondieron “Te la vamos a pagar”. Otros no querían hacer nada y se les expropió. A otras ciudades chicas que estaban a lo largo del río les hicieron las plantas de tratamiento.

Bueno, les hago más corto el cuento: con 1.500 millones de dólares solucionaron el problema de los sedimentos y ahora, cada vez que uno abre la canilla en la Ciudad de Nueva York, sabe que lo que está pagando no es solamente el agua sino también la cuenca que la provee.

Acá se ha planteado el tema de la minería, y creo que estos tratamientos deben ser de igual manera. Y tienen que ser de igual manera por un sentido de trazabilidad. Es decir: si usted va a comprar oro que se sepa cuánto es el dióxido que se emitió por la manufactura de ese material, cuánta agua se ha consumido en ese material. Incluso, yo creo que hasta está existiendo conciencia en el mundo sobre todo este tipo de cuestiones.

Hace poco estuvo en cartel una película llamada *Diamantes de sangre*, en la que trabaja Di Caprio, que muestra el tema de la explotación de las mineras de diamante en Sudáfrica. En verdad, esa película lo que muestra es lo que en la vida real ocurrió con Noemí Campbell cuando recibió aquellos diamantes de uno de los dictadores explotadores de esto y las consecuencias de sanción social frente a este tipo de cuestiones.

Es decir: lo que estoy planteando es que a lo largo de este siglo XXI nos vamos a encontrar con todos estos temas todos los días. Lo que

estoy planteando acá es que el modo de buscar la solución a esos temas es viendo formas nuevas de llevar adelante estas cuestiones.

El miembro informante del proyecto que viene de la Cámara de Diputados dice que no es cierto que el artículo 2° sea indefinido porque la gente del Ianigla lo define de tal o cual manera. Eso lo podrá decir la gente del Ianigla; pero cuando tenga que resolver un no sabemos de qué manera va a resolverlo; o sea que se necesita precisión.

Mi colega dijo que la congelación y la saturación en su provincia se produce a 700 metros. En Catamarca, en Salta y en Jujuy nuestra Puna está más arriba de los 3.000 metros, o sea que se congela. ¿Y sabe qué hay allí? salares de litio. ¿No vamos a trabajar con el litio? entonces, le estamos diciendo “no” a una fuente de energía que es la esperanza y la expectativa para cuando se acaben los hidrocarburos a través de las pilas. Pero no solamente eso, sino que prácticamente desde el año 1935, cuando se hizo la fusión nuclear de elementos livianos, y cuando se hizo la bomba nuclear de 1952, se descubrió que se podía hacer la misma fusión que se está haciendo en el sol.

Hoy se está trabajando en un proceso largo de hacer una fusión de un elemento, que es el detrito, que viene del litio, con otro elemento que se puede sacar del agua del mar. ¿En qué consiste eso? En conformar reacción nuclear, que es la que con el tiempo va a dar energía eléctrica. Son distintas fases. Se está hablando de que, en modo experimental, esto va a estar en el 2030 o 2040 y que probablemente en el año 2100 uno va a poder ir a comprar eso al supermercado. ¿Cuál es la relación? Para 1,5 gigawatts —o sea, para una ciudad grande— hacen falta 8,9 toneladas de litio.

Este proceso, por ejemplo, los chilenos ya lo han tomado. Acá tengo una ley que fue sancionada en Chile por la cual declaran material estratégico al litio. Porque del litio que hay en el mundo las 9 décimas partes están en Bolivia, en la Puna argentina y en la zona de Chile.

Estos temas no los podemos obviar; los debemos tratar.

Y termino con una sola cosa, señor presidente: con los fantasmas que esta noche han estado acá dando vueltas y nadie quiere abordar.

Ahora bien, quiero preguntar a la dirigencia política que está aquí sobre las ONG. Las ONG de distintos rangos han venido a acercarse a la dirigencia política. En ese sentido, las ONG han tenido un mayor posicionamiento en la órbita de la política, sobre todo a partir de 2001, cuando prácticamente los dos partidos políticos tradicionales se atomizaron; cuando los dos partidos políticos y algunos otros dejaron de tener la actividad política del seminario, de la formación, del técnico. Como eso ha ido desapareciendo, es obvio que la dirigencia política necesita del asesoramiento. Y es ahí donde aparecen las ONG de distintas entidades, que nos asesoran técnicamente, que tienen un muy buen nivel profesional, que en alguna medida hasta tienen una neutralidad o una asepsia ideológica, entre comillas, pero que, en verdad, avanzan y ahí están. Y yo no creo que eso sea malo. No obstante, hay niveles de decisiones estratégicas que un país debe tomar y, entonces, si tengo un asesoramiento de estos neutrales o con asepsia, lo menos que quiero saber es quién está financiando eso o qué hay detrás de ese ropaje.

Esta misma conversación la mantuve con un embajador de un país vecino –que no lo voy a nombrar, pero se van a dar cuenta de quién es–, cuya geografía es muy difícil porque tiene la cordillera, una escasa zona de valles y un mar. Cuando alguna ONG le planteó el “no a la minería” –donde prácticamente este rubro es muy importante para el PBI de ese país– el tema se consideró como una cuestión de Estado. Se aplicó inteligencia y se investigó de dónde venía este tipo de cuestiones. Fue muy fácil. Se descubrió que mineras de otros lugares del mundo que competían con la minera de ese país financiaban a ese organismo.

En ese sentido, cabe destacar que existen ONG donde no hay democracia, donde hay fundamentalismo ideológico, donde no hay debate y donde tampoco hay rigor de estudio, de discusión y de debate. ¡Veamos el caso de Botnia! El conflicto que ha tenido la República Argentina con el hermano país del Uruguay. Dejemos de lado la violación o no del Tratado del Río de la Plata. ¿Qué se planteaba? Que contaminaba, que el impacto ambiental, que esto, aquello o lo otro. Ahora, ¿dónde estuvo la fundamentación? ¿O vamos a desconfiar y decir

que la sentencia de La Haya no es ecuaníme? ¿Tenemos aval intelectual para decir eso?

En consecuencia, lo que planteo es que la dirigencia política se muña de todo lo que quiera para que nos acompañen, pero que también adopte su propia postura cuando se trate de cuestiones estratégicas y políticas de desarrollo, y con una visión geopolítica. El sólo hecho de que hoy China electrifique sus zonas rurales ha permitido que se duplique la demanda de cobre en el mundo por los próximos cinco años. En efecto, hay hechos que se producen en el mundo en un minuto y nosotros deberíamos estar atentos a ellos. Bien dijimos la otra vez que hace poco tiempo que los asiáticos empezaron a comer cerdo, así como en su momento sucedió lo mismo con la soja. Cuando comían arroz, no nos interesaban mucho.

Entonces, creo que como país debemos ver cuál es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo sustentable, sin romper obviamente los recursos básicos, pero buscando el equilibrio que seguramente nos va a demandar el sentido común y la racionalidad.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Señor presidente: el calentamiento global es producto de la disminución de la capa de ozono como consecuencia de la intervención de la mano del hombre, lo que genera un retroceso de los glaciares en todo el mundo.

Este retroceso de los glaciares se da en un promedio de 10 por ciento en 10 años. Es decir que, al actual ritmo, en 100 años no existirán más glaciares. O sea que en un siglo el planeta carecerá de estos maravillosos bloques de hielo que contemplamos maravillados en Santa Cruz y que representan las últimas reservas de agua dulce del planeta.

A nivel global, sólo el 3 por ciento del agua es dulce: el 97 por ciento restante corresponde a los mares. Si analizamos lo que produce el cambio climático, los modelos digitales de elevación muestran que durante los últimos 30 años, 63 de los principales glaciares en los campos de hielo en la Patagonia se han derretido y han contribuido en 42 milímetros por año al crecimiento del nivel del mar. A partir de 1995, según datos científicos concretos, el derretimiento se



duplicó, lo que equivale al crecimiento del mar de 105 milímetros por año. Son datos científicos y concretos.

El calentamiento global forma parte de todas las agendas públicas de los gobiernos del mundo; de todas las reuniones internacionales. Las Naciones Unidas han puesto en la agenda como prioridad la cuestión del medio ambiente y, dentro de ello, el tema del calentamiento global producto de la contaminación producida por la mano del hombre.

Hoy estamos tratando el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy estamos tratando la temática del agua. Por una cuestión casi de sentido común me inclino claramente y de manera contundente a apoyar el proyecto de ley en revisión por la sencilla razón de que es más protector que el que habíamos aprobado en el Senado, después de un esfuerzo de consenso realizado.

Esta fusión de los proyectos o consensos llegados entre lo que se llamó el proyecto del senador Filmus y el proyecto del diputado Bonasso, con la articulación hecha en la Cámara de Diputados, representa un paso hacia adelante. Por eso, me parece que el paso adelante real esta noche es votar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados.

¿Qué ha pasado en todo este tiempo, señor presidente? Porque este debate se da en función del veto de la presidenta de la Nación. Si no hubiera habido veto, el proyecto inicial de la diputada Maffei hubiera sido ley y los glaciares hubieran tenido una protección positiva, resguardada, de acuerdo con ese proyecto inicial.

Yo le veo un costado positivo a todas estas idas y vueltas que ha tenido el proyecto de ley de protección de los glaciares. El costado positivo es que verdaderamente ha disparado otro debate: el debate del cuestionamiento al modelo de la minería de los megaemprendimientos a cielo abierto. Esto es lo que verdaderamente se está discutiendo hoy.

Así como hay un consenso en proteger los glaciares, evidentemente hay diferencias profundas en cuanto a este modelo implementado en los '90 con las características de los '90, característica del neoliberalismo, de saqueo económico y destrucción medioambiental. Esto ha sido la característica del modelo neoliberal

de los 90, vivito y coleando actualmente en los emprendimientos de minería en la República Argentina.

Si hay una cosa que me ha quedado absolutamente clara en todo el desarrollo de todo este proceso, que se inicia con el veto del gobierno nacional, y después de escuchar al secretario de Minería tantas veces en las audiencias realizadas aquí en el Senado de la Nación, es que el gobierno nacional acompaña, promueve y desarrolla la minería en las actuales condiciones, que son las establecidas en los 90.

Entonces, evidentemente la lucha contra las corporaciones debe hacerse en serio. Acá parece que hay corporaciones malas y corporaciones buenas. Las corporaciones malas se combaten, las corporaciones buenas se promueven en su desarrollo.

No tengo que hacer un gran desarrollo económico para demostrar esto. Estos señores, que están llevando a cabo semejantes emprendimientos mineros desde los 90 en la República Argentina, han dicho en la solicitada, que es gigantesca y con un título muy grande: "Sin minerales no hay industria, no hay construcción, no hay país". Esto es lo que dice la Cámara Argentina—son todos capitales transnacionales—de Empresarios Mineros.

Éstas son, como se dijo antes, las costosas solicitadas que estas empresas desarrollan en el país.

Es claro que acá se están jugando muchos intereses. Por supuesto, en el país estamos ante una realidad donde lo que se pone en juego es que somos el sexto país potencialmente dispuesto a estos emprendimientos mineros. Los informes consignan que el 75 por ciento de las áreas extractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección.

Entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas en el país se multiplicó por ocho: pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones.

Todo esto se ha hecho en el marco regulatorio de la megaminería a cielo abierto. Se ha construido un modelo en virtud del cual no hay ningún otro emprendimiento económico en el país que tenga los suficientes privilegios como tienen estos emprendimientos, establecidos por ley de los años 90.

Me refiero a la ley 24.196, de Inversiones Mineras; a la ley 24.228, de Acuerdo Federal Minero; a la ley 24.402, y así podríamos seguir.

Primero, estabilidad fiscal por treinta años desde la presentación del proyecto. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscritas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.

Segundo, tope de tres por ciento de regalía por valor de mineral en boca de mina; exención de arancel de importación bienes de capital e insumos; doble deducción de gastos de prospección, exploración, planta piloto, investigación, en el impuesto a las ganancias; devolución del IVA a la exploración; amortización acelerada a las inversiones, tres años; exención de contribuciones sobre la propiedad minera; eliminación progresiva de impuestos provinciales y municipales; liquidación en el exterior, hasta el 100 por ciento, de divisas de exportación; deducción por gastos de conservación de medio ambiente hasta 5 por ciento del monto del gasto de extracción y procesamiento; capitalización de los avalúos de reserva minera hasta 50 por ciento; devolución anticipada de financiamiento de IVA en importación o compra de bienes, inversiones e infraestructura; reembolso de exportaciones por puertos patagónicos. ¿Esto es gratis?

Acá se ha hablado mucho de federalismo. Señor presidente: todos los argentinos vamos a pagar, de acuerdo con el Presupuesto 2011, un gasto tributario de promoción a la actividad minera, de acuerdo con la ley 24.196, de 506,5 millones de pesos. Tenemos derecho a hablar de este tema, no solamente por las cuestiones ambientales, sino también por las cuestiones económicas que estamos poniendo sobre la mesa.

No hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga semejantes privilegios. Entonces, ¿cómo no va a disparar el debate de los glaciares el hecho de que tenemos que poner un punto de inflexión en un debate, pendiente, del Congreso argentino, acerca de este tipo de emprendimientos diseñado en la lógica de los 90 y que el gobierno nacional actual promueve, impulsa y desarrolla?

Me parece importante que, a esta altura del debate, tengamos claro que éste es el punto fundamental que está en discusión.

La segunda reflexión que yo quería realizar es que, en este tema también, con estas solicitadas, con este debate disparado en la ley de glaciares, el capital transnacional ha demostrado angustia. No ha sido posible avanzar en esta cuestión porque estamos hablando del agua, que es un recurso fundamental, como se ha planteado aquí, en cuanto a que es un derecho humano fundamental a preservar. Se ha planteado, con toda claridad, en este recinto, que el agua es el único bien que ha sido declarado un derecho humano, por las Naciones Unidas; que el agua es, entonces, un derecho humano vinculado con la vida. Y, frente a este derecho o, mejor dicho, ante estos dos derechos, el del agua y el de la vida, que están indisolublemente vinculados, algunos pretenden poner por encima de ello el derecho a la explotación y al comercio de un bien, que es el oro. Se han mencionado ejemplos históricos, que son contundentes. El oro y los diamantes han producido golpes de Estado, el *apartheid*, la explotación en el mundo. Eso es lo que ha producido la codicia del oro de los diamantes.

Ésta es la historia de la humanidad, lo que nos enseña la historia. Entonces, no tenemos que plantarnos ante falsas antinomias. Lo que tenemos que hacer es una discusión seria de lo que significa el desarrollo sustentable. Y la verdad, señor presidente, es que tengo la convicción de que el sistema de explotación a cielo abierto es contradictorio con cualquier política de desarrollo sustentable. Por eso las provincias se han ido haciendo eco de esto. Por eso ya hay siete leyes provinciales en esta materia y ya hay provincias que lo prohíben de manera terminante. Por eso, ése es el debate que debe darse en este recinto.

Desde otra perspectiva, hace más de setenta años, Alfredo Palacios señaló que hay que conservar los bosques existentes y que, por eso, sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles, entregando tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la ley del bosque. La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los

bosques, en beneficio del país. Y cuando no se han sabido mantener, repoblarlos.

Esto fue dicho por Palacios, reitero, hace setenta años, después de lo que sucedió en el norte de mi provincia con La Forestal, que devastó los bosques de quebracho por la extracción del tanino. Hay que ver lo que son actualmente esos pueblos del norte de mi provincia, como, por ejemplo, La Gallareta. La Forestal fue un país dentro de la Argentina, algo similar a lo que actualmente son los establecimientos mineros.

Finalmente, sólo dejó devastación, y explotación de los trabajadores y de una de nuestras riquezas naturales: los bosques. Por lo tanto, la Ley de Bosques llegó tarde, pero fue positiva. Y se lo debemos a la acción de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, que impulsaron diversas leyes, entre ellas, la Ley de Bosques, y hoy, la de preservación de nuestros recursos naturales.

Quiero hacer un reconocimiento a la nueva conciencia ambiental, que va creciendo en los niños y se extiende por todo el país, la cual nos da el optimismo de que, a futuro, podamos tener una conciencia ambiental diferente que, seguramente, redundará en una mejor conciencia ambiental en la dirigencia política argentina y del mundo.

Por ello, la dimensión de la catástrofe ambiental está a la vista. Las Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales y los más grandes y prestigiosos organismos científicos del mundo han planteado este tema, y se tomó conciencia de que estamos ante los peligros más dramáticos y complejos de la historia de la humanidad. No son planteos utópicos o extremistas, sino que estamos ante peligros concretos. Y no solamente tenemos la responsabilidad ante nosotros mismos, sino también ante las generaciones futuras.

Estoy convencido de que este debate recién comienza. Esta discusión recién empieza, y deberá continuar a partir de la sanción de este proyecto. En ese sentido, debemos hacer un reconocimiento a ese camino que se inició con la movilización ciudadana en Esquel, y que continuó con la asamblea multisectorial que llamó a una consulta popular, en 2003, cuyo resultado fue negativo y significó la concreción de la primera ley provincial de este tipo de minería.

En consecuencia, el bien que estamos protegiendo con esta ley, que es nada más ni nada menos que el agua, implica la defensa del ecosistema, de la verdadera fábrica de agua que son los hielos continentales.

Para finalizar, haré referencia a la historia de América Latina en cuanto a la extracción de los minerales. Por ejemplo, tenemos el caso de Potosí, en Bolivia, y el de Famatina, en nuestro país, donde el oro y la plata se vieron, se ven y se verán pasar de cable carriles o ductos hacia trenes, luego hacia puertos cuyos barcos llevarán la riqueza hacia el Norte a países desarrollados. La historia no se repite, señor presidente, pero la reproducción de los mecanismos determina que hoy estemos viviendo una situación que tenemos que abordarla con toda responsabilidad, y la pregunta contundente que hoy debemos hacernos es si sabe más el oro o el agua dulce.

Se habla mucho de la responsabilidad social empresaria. ¿Cuál es la responsabilidad social empresaria que tiene un CEO de las corporaciones mineras, que le puede dar lo mismo mirar en el cine una película como *Avatar* que escuchar el reclamo de los mapuches, porque un ducto invade los cementerios, sus cementerios?

Acá se han dado muchas cifras, si se gastan 80 millones de litros por día, es poco. Los viñateros vinieron a hablar con nosotros. Los productores agropecuarios nos decían que esos mismos litros que sirven para estas mineras son los litros que le sacan para sus emprendimientos productivos en estas provincias.

Por eso, creo que hoy damos un paso. Espero que podamos sancionar la ley más protectora, espero que podamos dar un paso real para que después incorporemos en la agenda del Congreso Nacional el debate de la discusión de los mega emprendimientos mineros a cielo abierto, de las características vigentes actuales de los 90 que significa el modelo de saqueo y de depredación ambiental.

Quiero terminar con una canción. Con esto, no quiero parecer sentimental, pero es concreto y contundente. Se llama *Potosí* y dice: “Ahora ya no sale nada (hablando de la mina), sólo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición, esa voz no está tan lejos, que llora necesidad, caminando en laberinto, sigue pidiendo igualdad”.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Me había asustado con lo de la canción porque la nueva trova rosarina además de Baglietto, Garré, ahora la trajo Giustiniani. Menos mal que fue sin música, presidente. *(Risas.)*

Prometo ser muy breve por la hora y porque, además, se han dicho cosas más que importantes. Sólo algo para fundamentar mi voto.

Creo que el senador Martínez ya dijo que estuvimos en Mendoza con la senadora Montero en un debate con la gente del Ianiglia y la verdad que se me aclararon muchas de las cosas de las cuales tenía algunas dudas. El doctor Villalba, tan famoso por estas horas, terminó con un *power* y en su última parte sobre las conclusiones de lo que él entendía como argumento o cuestiones centrales de una ley, lo voy a copiar, dijo que a esta altura del partido es necesario tener una ley de glaciares, porque la peor de las opciones es el estado actual donde la inexistencia de ley permite también la peor de las condiciones. Es decir, que no existan reglas, límites o certezas, ni siquiera discusiones, sobre la amplitud mayor o menor que pudiera tener una ley o diferentes interpretaciones. Ésta es la peor de las situaciones, la inexistencia de ley y en ese escenario los que ganan no somos precisamente los que estamos acá. Descarto que todos tenemos las mejores intenciones respecto de la ley.

La segunda cuestión, el espíritu debe ser la protección del agua y no otra cosa. Hay otras leyes que tienen que dedicarse a proteger o promover esas otras cosas actividades. Y aunque parezca una obviedad dicho así, todos estamos contestes en que esta ley, cuyo espíritu es proteger el agua, me parece que también es una manera de pararse cuando pudiera existir algún tipo de duda. No es mi caso porque tengo una posición tomada. Pero si pudiera existir algún caso de duda, ante ella, el espíritu de lo que se protege es la protección del agua. Y en términos prácticos, ¿qué significa esto? Que se puede pecar por exceso en la protección del bien, pero no pecar por defecto.

La tercera cuestión es que, a pesar de esa definición macro, el texto de la ley debe ser claro, no debe tener grises. Insisto en que esto lo escuché de parte del doctor Villalba, del Ianiglia.

Ahora bien, la pregunta es para quién tiene que ser claro y no tener grises. ¿Para quiénes pretenden tener actividades industriales o de otro tipo? No. ¿Para quiénes tienen que juzgar o interpretarlo desde los estrados de un tribunal? Tampoco. La ley tiene que ser clara para quien la propia ley determina su operatividad. Es decir, para quien debe completar el círculo virtuoso de la ley. Y aquí viene el último bastión.

El último bastión de esta construcción es la formulación del inventario.

En todos los proyectos que se votaron, la existencia de un inventario siempre fue la herramienta indispensable para la operatividad. Puesto que tanto se ha hablado de litigiosidad, no podría haber peor litigiosidad que la de una ley que solamente hiciera una formulación teórica del concepto de glaciares.

Por suerte, el inventario, que se halla en todos los proyectos, se mete en el mapa, en la geografía, con la ley conceptual en la mano y dice “esto sí, esto no”. “Esto es un glaciar, esto no lo es”.

Vuelvo a la pregunta. ¿Para quién la claridad conceptual? Para quien tiene que hacer el inventario. Nada más que para eso.

No comparto que la conceptualización clara tenga que ser para un juez –no la comparto porque se está previendo una litigiosidad de lo que se desconoce, cómo va a ser la operatividad– o para un periodista especializado o para un empresario. Sí tiene que ser clara para el Ianiglia. Y tengo la certeza de que para el Ianiglia, ante quien todos los intereses van a tener que subordinarse a las consecuencias de su accionar, esta ley es absolutamente clara.

Lo escuché el lunes al decir que la ley es clara en el artículo 2º a partir del concepto de regulador de recursos hídricos. Para el Ianiglia, que será la autoridad de aplicación operativa de la norma y que va a definir en el inventario qué es glaciar y qué no, qué es ambiente periglacial y qué no lo es, el eje transversal de interpretación es el de regulador de recursos hídricos.

Además de votar a favor de la sanción de la Cámara de Diputados por esa razón, digo que lo hago porque, a diferencia del concepto de federalismo que he escuchado en muchas alocuciones, para mí el concentrar en una sola estructura estatal nacional –el Ianiglia– la interpretación y



la ejecución del mandato legal es absolutamente necesaria. De haber compartido este espacio con las provincias, que es el argumento que he escuchado para defender el criterio federal, probablemente nunca tendríamos inventario o, lo que es más grave, ese inventario terminaría aludiendo —y éstas son palabras que también le escuché al doctor Villalba— a peras y manzanas en lugar de glaciares de una misma naturaleza a lo largo y ancho de la cordillera.

Y si para muestra basta un botón en esto de peras y manzanas, cómo nos podríamos poner de acuerdo las provincias compartiendo espacio con el lanigla si ni siquiera están de acuerdo en la votación las provincias cordilleranas.

Los tres senadores por Mendoza, provincia cordillerana sobre la cual no vamos a hablar ahora de lo que significa el agua para nosotros, votaremos a favor de la sanción de la Cámara de Diputados a diferencia de otros senadores de otras provincias que votan de manera distinta.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Verna.

**Sr. Verna.** — Señor presidente: voy a ser breve porque supongo que a esta hora ya no hay discurso que convenza a nadie ya que todo el mundo tiene decidido su voto.

Solamente en dos minutos quiero informar qué voy a votar. Lo voy a hacer desde la posición de una provincia mediterránea, para la cual el agua es un recurso caro, escaso y no renovable.

Nosotros tenemos una cuenca hídrica, la del Sistema Desaguadero Salado - Chadileuvú y Curacó, y la cuenca del río Colorado, que como todos saben ha generado controversias entre mi provincia y otras, como la suya.

A los pampeanos el agua nos interesa, y mucho. De los ríos que teníamos, no voy a ser agresivo y afirmar que nos los robaron, pero a uno nos lo embalsaron; a otro lo han estrangulado; y al tercero lo están contaminando. Por lo tanto, estamos preocupados por la calidad de este recurso y vamos a votar a favor de la norma que más defiende el origen del mismo, porque las dos cuencas se originan en un fenómeno níveo que, a veces cuando la nieve es escasa, es reemplazada por el aporte de los glaciares.

En cuanto al reclamo del federalismo, a los gobernadores que vinieron y nos leyeron el

artículo 124, les pido que sigan leyendo y lean el 125, que se refiere a la cuenca.

La única gobernadora que habló de cuenca fue la de Tierra del Fuego, quien explicó con claridad que los ríos no entienden mucho de jurisdicciones provinciales, se originan en provincias y afectan a otros territorios provinciales. A esos gobernadores que se embanderaron con el federalismo, les pido que constituyan la autoridad de cuenca respectiva y que podamos discutir el uso del agua, que todos queremos preservar. Y aquellos que dicen que hacen un uso racional del recurso, que lo optimicen, porque cada litro que dejan las provincias de aguas arriba, nos deja sin agua a quienes estamos aguas abajo.

El senador por Catamarca habló del agua virtual. Sin embargo, virtual es el agua de La Pampa, porque la Corte, en el diferendo que tuvimos con la provincia de Mendoza nos otorgó la razón, pero no nos dio el agua. Eso sí que es virtual. Y virtual es el humedal de Chadileuvú, que tenía 1.000.000 de hectáreas y hoy es un desierto. Eso es virtual.

Por todo lo expuesto, porque queremos defender el agua y porque —como se dijo aquí— ésta no es sólo un recurso para nuestras generaciones o para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, vamos a votar a favor del proyecto que asegure la mayor protección para dicho recurso. Por ende, vamos a votar a favor del proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez. Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: los países centrales más desarrollados, con las chimeneas de sus poderosas industrias que mueven sus economías, han producido en el mundo lo que se llama el calentamiento global. A esto ya se ha referido, con mucha precisión, el senador Giustiniani, y ello ha traído como consecuencia la afectación de los glaciares.

Luego se reúnen en las cumbres mundiales, como en la última que se realizó en Copenhague. Sin embargo, los grandes intereses industriales del desarrollo no quieren aportar la plata necesaria para mitigar el efecto que produce la emanación del dióxido de carbono y tratar de poner en mejor situación al mundo y evitar esta

catástrofe que, según muchos, ya tiene efectos irreversibles.

Al margen de lo expuesto, debo decir que asistí a la cumbre de Copenhague y, lamentablemente, nuestro país tuvo una pobre presencia allí. Parecería que el tema no está en la agenda presidencial.

¿Qué hacen los países desarrollados? Están buscando cómo echarnos la culpa a nosotros, a los países que sufrimos los males, y hacernos pagar también las consecuencias. Entonces, inventan la huella del carbono, que sería una de las formas de pago para mitigar y que tendría que ver con el carbono que los transportes, los fletes, los aviones, los barcos y demás producen en su trayecto, con lo cual la Argentina, que debe hacer largos recorridos para llevar su producción o traer mercadería, sería uno de los países más afectados.

Yo hago comparaciones entre los países desarrollados con los no desarrollados. En tal sentido, debo señalar que he participado en Bruselas de reuniones con otros senadores y con parlamentarios del Mercosur. Allí escuché con asombro, porque no lo imaginaba, a algunos parlamentarios europeos que hablaban de este mismo problema y que discutían si el Mato Grosso pertenece a la soberanía de Brasil o a la soberanía del mundo, ante el silencio de los parlamentarios brasileros y ante mi propio asombro. En verdad, yo no pensé que fuera así. Parece que el mundo está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias.

También escuché en la cumbre del Mercosur que se realizó en San Juan a la ministra de Medio Ambiente de México cuando instó a los presidentes de la región a que tuviesen una posición común en Cancún. Nosotros somos autores en el Parlamento del Mercosur y del Eurolat de posturas sosteniendo ese mismo criterio.

¿Por qué digo que esto es importante? Porque en la Argentina nos pasa una cosa parecida: se ha descalificado a las provincias. En verdad, no sé dónde viven, porque todos vivimos en provincias. Se nos descalifica y se nos hace ver como inservibles o incapaces, lo que no es cierto. Repito: no es cierto.

Yo asistí a las reuniones de comisión a las que concurrieron varios gobernadores y allí escuché razonables propuestas y profundas defensas

de la actitud de las provincias en estos temas y el compromiso de los gobernadores de las provincias andinas para dictar las leyes sobre glaciares para controlar y mitigar los efectos sobre el medio ambiente.

Los legisladores de la metrópoli, que siempre soñaron con un país unitario, culpan a las provincias de que somos atrasadas e incapaces. En este sentido, voy a recordarles que en la década de 1920, durante los gobiernos de Federico Cantoni, en la provincia de San Juan se consagraron el sábado inglés, las vacaciones, los derechos de los trabajadores y el voto femenino. No eran atrasados, porque veinte o treinta años antes del famoso 17 de octubre, después de lo cual se consagraron esos derechos en todo el país, San Juan ya los tenía consagrados.

La provincia de San Luis tiene una modernísima y avanzada política ambiental de defensa del medio ambiente. Acá en esta publicación que estoy exhibiendo figura toda la participación ciudadana, de las organizaciones de medio ambiente, industriales, comerciantes, ciudadanos, vecinos con todas las propuestas, leyes, decretos, reglamentaciones a los que hizo referencia la senadora Negre de Alonso. Se firmó lo que en San Luis denominamos –es una avanzada– Tratado de Paz entre el Progreso y el Medio Ambiente.

El derecho al progreso también es un derecho de los pueblos y el derecho a un medio ambiente sano también es un derecho de los pueblos.

En esta publicación está contenida la estrategia 2010-2020 sobre el medio ambiente, con todas las medidas que se han tomado y que se prevén tomar para protegerlo. De manera que no admito que se diga que las provincias no somos capaces, que no estamos en condiciones. No lo permito.

He escuchado durante toda la noche con mucha atención que en todos los discursos se habló del agua. Los principales contaminadores del agua son los del área metropolitana. La cuenca Matanza-Riachuelo está totalmente contaminada. Se gastaron cientos de miles de millones en estudios para sanear el riachuelo.

Yo escuché a la actual presidenta, entonces senadora nacional, que se sentaba en esa banca (*la señal*) a defender la ley nacional por la que imponía la jurisdicción Matanza-Riachuelo. Le

quitaron a la provincia de Buenos Aires, a la poderosa Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a siete u ocho municipios la jurisdicción sobre esa cuenca. Por supuesto que me opuse. Me parece inmensamente grave. Iba en contra de leyes dictadas por la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de Buenos Aires.

Acá tengo en mi poder copia de la ley de la cuenca Matanza-Riachuelo. El artículo 1° dice: “Créase la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

“La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo ejercerá su competencia en el área de la cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la provincia de Buenos Aires.”

También tengo acá copia del fallo de la Corte del 8 de julio de 2008 en el caso “Mendoza, Beatriz Silvia contra Estado nacional”. Después de un largo proceso se dictó una sentencia por que se condena a la autoridad de la cuenca a que cumpla con el plan que prometió para sanearla.

Tengo copia de la sentencia del juez de Quilmes, que es el que tiene que ejecutarla, por la que resuelve aplicar una multa en forma inmediata por la suma de pesos 1.000 en la persona de la autoridad de la cuenca contemplada en la ley 26.118, doctor Homero Máximo Bibiloni, por cada día de incumplimiento de la orden que fuera impartida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del pasado 8/7/2008, ya citada, respecto del objetivo denominado sistema internacional de medición previsto en el fallo, etcétera.

En el apartado 2 le aplican otra multa de 1.000 pesos a la misma autoridad respecto del objetivo denominado información pública por otro objetivo incumplido.

En el inciso 3 le aplican otra multa de 1.000 pesos diarios por la contaminación de origen industrial. No cumplido.

Se requiere que se intime por diez días bajo apercibimiento de una multa a los miembros del Consejo Directivo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y hay otra multa al doctor Homero Bibiloni. Por el tema del saneamiento de basurales se multa al ministro de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, al ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, a los señores intendentes de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente, al señor presidente de la empresa de Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.A. –CEAMSE–, Raúl Felipe Elizalde. El fallo dice que se dispone que dentro del término de veinte días contados a partir de la presente se dé un estricto cumplimiento con el objetivo de tratamiento conforme lo esbozado en el considerando 8° de la presente bajo apercibimiento de aplicar la sanción de la multa prevista por un monto de 1.000 pesos diarios, los cuales deberán ser abonados de sus propios peculios hasta tanto se dé un inmediato y eficaz cumplimiento.

Sigue, porque hay más multas, pero no les voy a leer todos los incumplimientos.

Es una verdadera vergüenza. Los contaminadores, condenados e incumplidores de la sentencia son los que nos van a dar cátedra a las provincias argentinas sobre cómo cuidar el agua y el medio ambiente.

El gobernador de La Rioja, Beder Herrera, dijo que cuidan cada gota de agua en La Rioja porque es el bien más escaso.

Tiene razón el senador Giustiniani en que tenemos que tratar el tema de la minería, pero eso no significa que tengan que descalificar al federalismo, al sistema institucional argentino, a los gobiernos provinciales en la forma en que lo hacen.

Voten como quieran. Si a ustedes les parece que Bibiloni, el que no cumple acá, va a cumplir todo lo que ustedes dicen, perfecto, voten de esa manera, pero no descalifiquen, porque no corresponde aceptar semejante descalificación.

Las provincias argentinas en muchas cosas son ejemplo y vanguardia de progreso.

Me parece que en este sentido tenemos que reflexionar.

Hoy el presidente del bloque del Frente para la Victoria reconoció que por influencia de la moda de un momento el señor Blumberg, sentado ahí, casi nos dictaba las leyes.

Bueno, hay senadores que han reconocido que en esta oportunidad se sienten muy cómodos porque con libertad van a expresar su voto de la manera que les parezca, porque casi todos los bloques han dejado en libertad a sus integrantes para votar, pero me parece que no debemos votar presionados por ninguna organización no gubernamental cuyo financiamiento no conocemos.

Yo confío mucho más en la palabra de cualquiera de los que están sentados en estas bancas, que son responsables ante sus pueblos, ante la historia, que en personas que no sabemos quiénes son y que nos vienen a dar cátedra de qué tenemos que hacer.

Me parece que en ese sentido de la descalificación estamos equivocados. Mejor dicho, yo creo que no estoy equivocado; creo que hay que defender al federalismo y aclarar que los gobiernos provinciales tienen que hacerse responsables. Ellos son responsables ante sus pueblos, y si permiten contaminar el agua, destruir los recursos y si no saben gobernar la democracia tiene soluciones.

—Ocupa la Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José J. B. Pampuro.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Recuerdo cuando hubo un juicio político en Tucumán y hubo quienes sostenían que había que intervenir la provincia. El juicio político lo ganó el gobernador que estaba a cargo y lo repusieron en el poder, y no hubo intervención federal. ¿Qué ocurrió? En democracia, con libertad, el pueblo tucumano se liberó, votó a otro gobierno, se encaminó institucionalmente y el ex gobernador está preso. El remedio lo encontró la misma provincia. Cada provincia deberá encontrar su camino. Esa es nuestra Constitución, ése es el pacto federal que suscribimos.

El gobernador de Jujuy reclamó con mucha profundidad en este tema. Tuve la oportunidad de conocerlo, ya que nunca había conversado con él, y me impresionó la profunda defensa que hizo del federalismo.

**Sra. Riofrio.** — Pido la palabra para una interrupción.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Con mucho gusto, si el presidente la autoriza.

**Sr. Presidente** (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Riofrio.

**Sra. Riofrio.** — Quiero mencionar algo a raíz de lo que acaba de decir el senador. A mí también me impactaron las manifestaciones del gobernador de Jujuy. Utilizó la expresión “acto de hostilidad”. Esa fue la expresión que usó cuando vino a la comisión. Se refirió al acto de hostilidad hacia las jurisdicciones provinciales.

**Sr. Presidente** (Pampuro). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Creo que hay diferencias. En uno de los proyectos están claramente establecidas las cosas, quiénes son los que tienen que cumplir—tanto la Nación como las provincias— y por eso habla de responsabilidades.

En la otra iniciativa hay una definición, por lo menos confusa, de lo que es periglacial y existen discrepancias, pues no todos estamos de acuerdo con esa definición, ya que permite una interpretación amplísima que puede llegar hasta el mapa que mostró el gobernador de San Juan, que es el mismo que exhibió el senador Filmus, del año 52...

**Sr. Filmus.** — Del 59.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ... que abarca a medio país. Pero no me digan que no se puede llegar, porque este organismo, que no recuerdo bien el nombre...

**Varios señores senadores.** — Ianigla.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ... Ianigla, es un instituto que funciona muy bien y que tiene una persona muy honorable. El INDEC funcionaba muy bien y tenía personas muy honorables. Y llegó un día un funcionario y ahora no es creíble. El Ianigla puede ser fantástico y puede dejar de serlo.

Estamos en la Argentina. Muchas veces, el senador Pichetto nos reclama —con razón— que no pensemos que estamos en Finlandia o en otros países similares. (*Risas.*) Bueno, en la Argentina puede pasar eso. Entonces, no se puede decir que las provincias no podemos ni opinar. Y lo digo desde una provincia en la que está prohibida la minería a cielo abierto. No tengo ningún compromiso con ninguna empresa minera; no tengo nada que ver.



Con respecto a la ley de promoción minera a la que se refirió el senador Giustiniani, por Santa Fe, quiero preguntar lo siguiente: ¿Es una ley nacional o provincial? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la Nación o de las provincias? ¿Quiénes tienen facultad para derogarla o modificarla? No echen la culpa a los gobernadores de las provincias. Desde que se sancionó esa ley, cada gobernador de provincia reclama regalías, que las quieren modificar. Hoy se formularon hasta propuestas en ese sentido. Hay gobernadores que también adhirieron a esa norma.

—Un señor senador formula manifestaciones fuera de micrófono.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Exacto, tiene razón. Y en aquel momento la moda indicaba que era fantástico llamar a las empresas mineras y darles el oro y el moro para que se instalaran en la Argentina porque no había actividad minera.

**Sr. Guinle.** — No se aplica eso...

**Sr. Rodríguez Saá.** — Lo acepto, está bien.

**Sr. Presidente** (Pampuro). — Senador Guinle, por favor.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Es un intercambio ameno. Una vez que tenemos un intercambio ameno, estamos cerca de coincidir.

Las descalificaciones no son buenas; sembrar dudas y sospechas no es bueno; puedo compartir o no muchas cosas de otros gobernadores. El derecho que tienen las provincias a defender el progreso, el desarrollo, etcétera, es legítimo. Y dictar los presupuestos mínimos y establecer que los glaciares los tenemos que proteger es un derecho que tiene la Nación y es una obligación y un derecho que tienen las provincias de establecerlo en cada uno de sus provincias.

Tenemos que respetar exactamente lo que dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 41. Dice que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas —los presupuestos mínimos de la Nación— alteren las jurisdicciones locales. Lo que quisieron los constituyentes —fui convencional constituyente— no fue hacer desaparecer las jurisdicciones provinciales, sino compartir en forma vertical la competencia. La Nación dicta los presupuestos mínimos que están contenidos

en ambas leyes. Nosotros vamos a votar por el despacho de mayoría, que es lo que resolvimos internamente en el bloque, porque contiene los presupuestos mínimos que respetan las jurisdicciones provinciales; y no vamos a aceptar las modificaciones de la Cámara de Diputados, vamos a votar en contra, porque hacen desaparecer a las jurisdicciones provinciales. Lo que parece una ingenuidad no lo es.

Además, debo decir que ya nos pasó con la Ley de Bosques, que afecta a muchas provincias argentinas, porque cuando ya contaminaron y talaron los bosques dictan la ley y le impiden talar a los que todavía no han talado. Está bien, puede ser necesario. Fue necesario poner un límite, perfecto. Sin embargo, también había formas de que económicamente se asistiera para poder realizar las tareas necesarias, para que los estudios pudieran hacerse en las provincias, a los fines de aplicar correctamente la ley.

Nunca se mandaron los fondos. La provincia de San Luis hace cumplir la Ley de Bosques, está todo en orden, pero los fondos de la Nación no llegaron a ninguna provincia.

Últimamente, por la delegación de facultades, los superpoderes y las emergencias, el jefe de Gabinete de Ministros pasó los fondos de la Ley de Bosques de las provincias a programa “Fútbol para todos”. Entonces no confío en que la Nación va a cumplir. Sí confío en que las provincias van a cumplir.

Por eso, con convicción federal, porque pertenezco al peronismo federal y me siento orgulloso de ser federal, defendiendo al federalismo voy a votar por la ley que establece los presupuestos mínimos, que le pone límite a las provincias pero que respeta las jurisdicciones provinciales. Vamos a votar por el proyecto que sancionó, casi por unanimidad, el Senado de la Nación luego de un gran acuerdo que se celebró y que votamos con alegría en aquella oportunidad. Con la misma alegría vamos a votar hoy, porque al final vamos a tener una ley de glaciares.

**Sr. Presidente** (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Fernández.

**Sr. Fernández.** — Señor presidente: ante todo le pido disculpas al senador Rodríguez Saá, porque lo lógico hubiera sido que yo hablara con

anterioridad a que hablara él en representación del bloque, pero como fui inscripto al final...

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Perdón, senador Fernández, le pide una interrupción la senadora Iturrez de Cappellini.

**Sr. Fernández.** – Sí, presidente.

**Sra. Iturrez de Cappellini.** – Gracias, presidente; gracias, senador.

Yo no estuve anotada en la lista de oradores pero siento la necesidad de fundamentar mi voto, porque he acompañado el dictamen de minoría, pero este enriquecedor debate que hemos tenido durante toda esta tarde me ha ilustrado lo suficiente y también me ha generado alguna duda sobre la fragilidad que tiene el proyecto que oportunamente acompañé, en cuanto a la supresión del artículo 17.

De esta manera, quiero dejar formalmente aclarado que habiendo acompañado el dictamen de minoría, voy a votar acompañando hoy, ya en esta sesión, el proyecto por la mayoría.

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Continúa en uso de la palabra el senador Fernández.

**Sr. Fernández.** – Creo que luego de este amplio debate, en el cual se han esgrimido razones más que suficientes en posiciones a favor de ambos proyectos, no puedo dejar de afirmar, conforme lo prevé la Constitución Nacional, que el procedimiento de sanción de leyes vigente en la República Argentina es un acto complejo. Esto es, demanda la intervención necesaria de las dos cámaras del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo.

El artículo 81, concretamente, tiene tres reglas referidas al proceso de formación de leyes. En particular, nosotros debemos analizar el alcance del privilegio que tiene la cámara iniciadora ante las correcciones de la cámara revisora. La cámara de origen –por eso habla el derecho constitucional de “privilegio”– tiene la posibilidad de aprobar las adiciones o correcciones, o insistir en su proyecto original.

El camino que se propone por parte del dictamen de minoría, estableciendo la derogación de uno de los artículos, es violatorio del artículo 81. En consecuencia, en este proyecto, que se inició en esta cámara, sólo es posible la insistencia en el proyecto de esta Cámara o la insistencia en la modificación de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el dictamen de la minoría, debemos concluir de manera categórica que el dictamen de minoría es inconstitucional, al suprimir una parte –y es un aspecto sustancial– de la media sanción de la Cámara de Diputados, con lo cual esto conllevaría a la nulidad de la norma aprobada.

En esta situación nosotros tenemos dos caminos –y no podemos circunscribirnos a otra cosa–, dos alternativas que son: acompañar la media sanción del Senado de la Nación o acompañar la media sanción de la Cámara de Diputados.

En el abordaje del proyecto de la cámara revisora debemos poner acento en lo dispuesto en el artículo 2º de dicha propuesta, que define como ambiente periglacial a los recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Este artículo lo debemos conjugar con el artículo 17, que textualmente dice que en las áreas potencialmente protegidas por la presente ley no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definido el sistema a proteger. Además, queda en el mismo artículo, absolutamente claro y sin lugar a dudas...

**Sr. Presidente** (Pampuro). – Perdón: un poquito de silencio que no podemos escuchar al disertante.

**Sr. Fernández.** – Sin lugar a dudas, la solicitud de nuevos emprendimientos exploratorios dependerá inexorablemente de que el Ianigla realice el inventario de las áreas en cuestión. En este aspecto, resulta sustancialmente, modularmente importante tener en cuenta qué dijo el Ianigla. El instituto reconoció no contar con recursos humanos ni presupuestarios para cumplir con la manda que le pone esta ley. Por lo tanto, esto es sinónimo de parálisis total en las nuevas actividades exploratorias, a tal punto que, alertados de esto, se pretendió derogar ese artículo.

No resulta un dato menor que la sanción de la Cámara de Diputados eliminara la participación en la elaboración de los inventarios de las provincias, como tampoco que eliminara la participación de los organismos especializados, que sí están contemplados en la sanción del Senado de la Nación y fueron suprimidos en la Cámara de Diputados. A tal efecto, también es muy importante –artículo 5º– lo que han

dicho distintos senadores respecto de que esto constituye un cercenamiento de las autonomías provinciales. Está claro que éste es el Senado, y, en el Senado, nosotros, en ese aspecto, tenemos un rol indelegable.

Creo que absolutamente todos estamos defendiendo los recursos hídricos. Eso ha quedado demostrado a lo largo de este debate. Pero no se puede votar la ley prescindiendo de los requerimientos que el crecimiento sostenido de la República Argentina demanda. El crecimiento sólo se sostiene en el tiempo si existen, por parte de los estados provinciales y del Estado nacional una fuerte actividad en procura de mejorar el nivel de reservas gasíferas y petroleras, que están directamente vinculadas con las nuevas actividades exploratorias, que el proyecto de la Cámara de Diputados dinamita más allá de las buenas intenciones, porque el artículo 17 introduce una especie de medida de no innovar que se convierte en un obstáculo insalvable.

Tampoco puedo dejar de señalar la enorme contradicción que deja al descubierto el hecho de que a las provincias a las que se les reconoció dominio originario, que emprendieron renegociaciones de los contratos de explotación de las áreas petroleras y que pusieron énfasis en las actividades exploratorias para mejorar el nivel de reservas del país, se les imponga el artículo 17, porque esto, de alguna manera, es efectivamente un fuerte condicionamiento, por no decir un impedimento de carácter absoluto.

—Ocupa la Presidencia del Honorable Senado el vicepresidente de la Nación, senador Julio César Cleto Cobos.

**Sr. Fernández.** — Todas las renegociaciones de los contratos petroleros, incluida la que está en marcha en la provincia de Santa Cruz, impone las actividades exploratorias como uno de los mecanismos para mejorar las reservas. Si eso lo sumamos a la laxa definición del artículo 2º, permítanme decirles que no va a ser fácil de resolver la situación respecto del artículo 17, si nosotros insistimos en ese camino.

También parece un verdadero contrasentido que haya una voz —que yo no escuché—, que es la de los especialistas y ex integrantes de las secretarías de Energía que, a lo largo y a lo ancho del país, en los últimos tiempos, han visitado cuanto programa televisivo o radial

uno pudo haber visto, reclamándole al gobierno la falta de políticas que mejoraran el nivel de reservas. Obviamente, por su condición y por su especialización estos analistas saben que el artículo 17, que establece una medida de no innovar a futuro, justamente conspira contra la búsqueda de nuevas reservas petrolíferas y gasíferas. Y no les escuché hacer ningún tipo de comentario sobre el particular cuando, en realidad, efectivamente, esto deviene como una especie de parálisis total, teniendo en cuenta siempre que, en la audiencia pública el Ianigla ha reconocido que no tiene recursos humanos ni presupuestarios para cumplir con el inventario; y que hasta tanto el inventario no esté concluido, las nuevas actividades en las áreas protegidas están terminantemente prohibidas.

Además, me parece importante que tengamos en cuenta lo que votamos. En mi caso, voté a conciencia. Y como bien manifestó el senador preopinante, el voto del Senado fue prácticamente unánime. En ese sentido, a través de mi voto pretendía la protección de los glaciares, pero compatibilizando esa medida con el desarrollo de un proyecto que generara los trabajos que las necesidades sociales de este tiempo demandan.

Verdaderamente, como bien expresó el senador Filmus, los dos proyectos protegen los glaciares. Creo que el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, además de proteger los glaciares, vulnera las autonomías provinciales, y que la conjugación de los artículos 2º y 17 paraliza toda actividad exploratoria. Al respecto, el artículo 17 es imposible derogarlo, desde el punto de vista constitucional. Además, nos encontramos frente a una situación de difícil defensa.

La Cámara de Senadores puede insistir con el proyecto que sancionó, o votar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, cuyo artículo 17 paraliza las actividades exploratorias futuras hasta tanto el inventario no esté terminado. Y el inventario no estará finalizado nunca jamás, porque el titular del Ianigla confesó que no tiene recursos humanos ni presupuestarios para llevarlo adelante.

Por ese motivo, acompañaré el proyecto sancionado por el Senado.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Señor presidente: simplemente, quiero aclarar que, en relación con su tratamiento en este recinto, el artículo 17 no existe.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Seguramente el senador preopinante, Nicolás Fernández, tendrá que profundizar un poco su análisis respecto del motivo de la caída de las reservas de gas y de petróleo. No creo que haya sido porque hace ocho años se pensó que iba a tratarse este proyecto y, en consecuencia, cayeron las reservas de gas y de petróleo. Eso tiene que ver con otras razones.

Señor presidente: estamos considerando el proyecto de ley sancionado por el Senado, y mejorado por la Cámara de Diputados. Al respecto, trataré de profundizar el debate sobre la cuestión federal que se planteó. Los senadores aquí presentes también representamos a las provincias, por lo que efectuaré algunas aclaraciones acerca de la participación de algunos gobernadores durante el análisis de este proyecto.

Creemos que la Cámara de Diputados mejoró sustancialmente la iniciativa en consideración, por eso vamos a votar a favor de esa propuesta. El proyecto sancionado por Diputados enriquece y genera aportes conceptuales importantes, a través de un texto corto que establece, justamente, presupuestos mínimos, y que plantea claramente el objeto, cuya redacción es casi textual a la de la sanción del Senado. Particularmente, el artículo 2º establece mayores precisiones con relación a las zonas periglaciales.

La iniciativa de Diputados sigue la lógica del proyecto sancionado por el Senado en cuanto al inventario, pero es mucho más estricta, mucho más específica y, como acá se ha mencionado también, establece plazos perentorios para la determinación del inventario.

Acá, señor presidente, se han planteado algunas cuestiones que tienen que ver con si la aprobación de la sanción de la Cámara de Diputados vulnera o no los derechos de las provincias. Me parece que hay que hacer un análisis profundo del artículo 41 porque estaríamos en presencia de las facultades concurrentes de Nación y provincias en materia de recursos naturales; y tratándose de facultades concurrentes, justamente el artículo 41 viene

a ordenar la concurrencia de estas facultades y establece cuál es el rol y cuáles son las materias y la obligación del Estado nacional, y cuáles son las obligaciones de las provincias, pero sobre la base de los preceptos que establece el primer párrafo del artículo 41 que quiero permitirme leer, presidente. El artículo 41 dice en el primer párrafo: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Es decir que impone la obligación al Estado nacional y también a las provincias, en esta cuestión de las facultades concurrentes, de preservar el medio ambiente y de preservar los recursos naturales.

“El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Es decir que los principios que establece el artículo 41 son, primero, el establecimiento de presupuestos mínimos, principio de preservación, un criterio restrictivo y también un criterio reparador. Dice también: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Acá, en el tercer párrafo, están las competencias de uno y de otro en estas facultades concurrentes, tanto de Nación como de provincias.

“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas (como recién ha leído el senador Rodríguez Saá), sin que aquéllas alteren la jurisdicciones locales”, pero el tema es que el párrafo tercero tiene que ser leído sobre la base del fundamento y del principio establecido en el primer párrafo del artículo 41.

La aprobación del texto de Diputados ¿vulnera las facultades de las provincias? La verdad que para quienes somos representantes de las provincias, no. Porque no le está vedado a los gobiernos provinciales, a los estados federales, sancionar normas que complementen la sanción que vamos a producir hoy pero que lo hagan con un criterio restrictivo y cumpliendo con lo que establece el primer párrafo del artículo 41, que es el deber de proteger y el deber de reparar. No



pueden sancionarse normas que complementen el proyecto que vamos a sancionar nosotros, que flexibilicen las obligaciones establecidas en el artículo 41.

Hasta acá, señor presidente, las provincias han sancionado normas que flexibilizan las condiciones restrictivas que establece el artículo 41 en el primer párrafo. Esto es lo que pasó en mi provincia. El gobernador ha venido a decir que hay hostilidad en la aprobación, si es que se aprueba la sanción de Diputados. Quiere decir que una ley que ha salido muy rápido en nuestra provincia establece el objeto, la definición, el inventario a cargo de autoridades provinciales. Hasta ahí viene bien, la información, la registración del inventario. Cuando lleguemos al artículo 6°, que era la prohibición, no es taxativo, como sí lo establecen tanto el texto de la sanción del Senado como la de Diputados con relación a las prohibiciones. Establece para las prohibiciones condiciones genéricas en la ley de la provincia de Jujuy, que es igual a la de Salta y no sé la de San Juan, que le solicité al senador Gioja que me la pase. Vi la correspondiente a Santa Cruz, que también establece un detalle taxativo aunque con condiciones de flexibilidad.

La columna vertebral o el tema esencial de las leyes que sancionan las provincias es que son flexibles en el punto de las prohibiciones. Es decir, por un lado prohíben, pero por el otro permiten.

En el artículo 6°, en términos genéricos, en los glaciares incluidos en el inventario se establece que quedan prohibidas las actividades que impliquen deterioro de los recursos y de la protección del agua. Pero en el artículo 7° dice que la autoridad de aplicación va a evaluar cuál es el impacto ambiental que generan las actividades. Entonces, se prohíbe o no se prohíbe. No se puede desarrollar la minería ni la industria ni ninguna actividad sobre los glaciares. Hay que proteger el agua.

De ahí que la redacción es clara y de allí también que la sanción de la Cámara de Diputados establece los presupuestos mínimos. Es decir que no se vulneran los derechos federales de las provincias. Lo que estas deben hacer es sancionar normas que, en todo caso, sean más restrictivas y cuiden mucho más el medio ambiente. Lo deben hacer por el deber de proteger

los recursos, tanto de parte de la Nación como de las provincias.

Hay que leer bien el artículo 41. No es que representamos a la nada. Representamos a las provincias.

El gobernador de mi provincia tiene otra calidad de representación porque representa al Poder Ejecutivo elegido en legítimas elecciones y yo represento a la provincia de Jujuy en el Senado de la Nación. Una provincia minera, capital en otro tiempo de la minería, con todos los antecedentes que tiene, como muchas otras, en materia de minería. Además, con toda la cuestión cultural de quienes provenimos de provincias mineras. Es más, yo mismo soy nieto de mineros. Mi abuelo era minero en mina Pirquitas, que se ha reactivado hace poco tiempo. Lo cierto es que conocemos bien cuál es la realidad. He recibido a la Cámara Minera de mi provincia en una reunión pública en el comité de la provincia de Jujuy. Y la verdad es que hay cuestiones donde nos entendemos y otras en las que no nos entendemos.

La primera responsabilidad de proteger al medio ambiente corresponde a las empresas mineras, presidente, y esto no ocurre. Cuando hablaba con los miembros de la Cámara me decían que ellos cumplen con las normas ambientales, la ISO 14.000 y el resto de las normas de protección del medio ambiente, yo les decía que la verdad que no me consta que eso ocurra. En primer lugar, no hay autoridad de aplicación en condiciones y la Secretaría de Medio Ambiente de mi provincia tiene cinco empleados y no cuenta con capacidad de control. Además, están impactando el ambiente. Lo he visto con mis propios ojos.

En Abra Pampa, en un emprendimiento Metal Huasi, hay plomo que ha contaminado el agua. Y el plomo no se saca más de la sangre. También ha ocurrido en Liviara y Orosmayo, asuntos que hablé en ocasión de ser gobernador el doctor Eduardo Fellner, actual presidente de la Cámara de Diputados. Con él compartimos la visión de que en estos emprendimientos de oro a cielo abierto había empresas constructoras que traían diez camiones, todos empleados de la provincia de Santa Fe, dos empleados aborígenes de la zona y dos palas cargadoras. Y cuando vamos a ver a los residentes de la zona, resulta que el ojo de agua con el que podían alimentar

a las ovejas y a las llamas ya no existía. Había que recorrer cinco kilómetros porque habían impactado el medio ambiente.

Cuando conversamos con el gobernador decíamos cuál es el negocio. No es lineal. Nosotros no nos oponemos a la explotación minera, pero deben cumplirse con las normas ambientales. Hay que cumplir con lo que dispone el artículo 41 de la Constitución.

No es un verso lo de la cuestión del calentamiento global ni el impacto ambiental. Y se ha generado un cambio cultural del que tienen que tomar nota las empresas mineras, la industria y la producción en general.

La verdad que era impensado, hace quince años, que pudiéramos estar debatiendo aquí en el Senado una ley antitabaco, o una ley salud. También era impensado generar este debate en la provincia de Jujuy, una provincia tabacalera. Sin embargo hoy, señor presidente, después de un gran cambio cultural, hemos logrado poner las cosas en su lugar: poner a la salud y a la producción donde corresponde en cada caso. Y esto tiene que ver con un cambio cultural.

No es casual tampoco que la Organización Mundial de la Salud recién en la década del 90 haya puesto prioritariamente en la agenda de la salud mundial la cuestión del tabaquismo, después de que se fuma desde hace siglos y de que el tabaco venga afectando a la salud de los habitantes de Latinoamérica y de la Argentina desde hace siglos.

Por ende, lo que deben comprender las empresas mineras es que también se está generando un cambio cultural en esta materia. Esto es lo que le manifesté a la Cámara Minera de mi provincia, cuando les dije: “Muchachos, ustedes tienen que ocuparse primero de reconocer el principio de la responsabilidad propia, de asumir este compromiso. Deben ser ustedes los primeros custodios de la protección del medio ambiente, porque de lo contrario, las comunidades les van a impedir generar la producción”.

Nosotros, la verdad, todavía queremos en la provincia de Jujuy tener emprendimientos mineros, pero que cumplan con las normativas ambientales. No es el modelo de provincia y de desarrollo que nos estamos planteando desde el radicalismo. No descartamos la actividad minera y de hecho creemos que es una fuente de

producción y de riqueza, pero en la medida en que se proteja el medio ambiente. Sin embargo, vamos a poner como prioridad para la provincia de Jujuy el ambiente. Ha sido reconocida la quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad por su paisaje, por su naturaleza y por su cultura. Lo más rico que tenemos en Jujuy es la naturaleza, los recursos naturales y la gente. Entonces, esta cuestión tiene que ver con los modelos de sociedad que se vayan generando. Pero hay que cumplir con las normas ambientales.

De tal modo que este tema no solamente pone en debate la cuestión del agua, sino que también pone en debate la cuestión de la minería a cielo abierto y la responsabilidad propia que deben asumir los emprendimientos mineros y la sociedad toda.

En definitiva, como ha dicho el senador Giustiniani, ésta es una cuestión que hoy se desarrolla en todos los foros del mundo. En una conferencia de la que participamos hace un par de semanas tuve la oportunidad de escuchar al ministro de Medio Ambiente de México, quien planteaba algunas cuestiones que realmente ya deberían estar ocurriendo en el mundo. En primer lugar, que los países desarrollados como Estados Unidos y los países europeos, que son los que más impactan el ambiente y que son los máximos responsables del calentamiento global, por la capacidad tecnológica que tienen, deberían estar liderando un gran proceso de revolución industrial y un gran proceso de innovación tecnológica, con producciones con baja emisión de carbono, brindando las soluciones para la protección ambiental. Ésta es la nueva revolución industrial que deberían estar aportando los países responsables del calentamiento global. Esto ya está en debate. Los países desarrollados, los que más impactan en el medio ambiente, tienen esta responsabilidad propia con toda la humanidad.

Por otra parte, se deberá poner también en debate la cuestión de las regalías mineras, que no es lineal porque hay determinados tipos de minerales que sirven como matriz para la producción y para la generación de empleo y para generar una cadena productiva en distintos aspectos y sectores. O sea, no todo es lineal, pero habrá que generar una rediscusión de la cuestión de las regalías mineras, como nosotros nos estamos planteando en la provincia de Jujuy.

Por ejemplo, no sé si el oro tendría que pagar un 3 por ciento de regalías mineras, porque me pregunto cuál es el negocio para la provincia. ¿Qué le queda a la provincia? Ni siquiera le quedan los recursos para las comunidades. No vuelven los recursos para las comunidades donde se impacta el medio ambiente, y ni siquiera alcanzan para reparar, como establece el artículo 41.

Entonces, la verdad que este tema abre un gran debate, que debe ser compartido en el marco de esta responsabilidad. Y los primeros que tienen que cumplir con las normas ambientales y con la Constitución son las compañías mineras, que vienen, mienten y dicen cualquier cosa y, en verdad, no cumplen con las normativas ambientales porque en el cerro nadie las controla. Entonces, esta es un poco la realidad. En la medida en que sigan así, actuando con esta gran irresponsabilidad, serán ellas las responsables de que se conspire en contra de la actividad minera como una fuente de producción y de trabajo.

Tengamos cuidado: los que primero tienen esta responsabilidad son ellos y también el Estado y la política. Viene muy bien este debate porque esto es lo que hoy vamos a tratar. Por eso es que no hay ninguna prohibición total e ilimitada, sino que se prohíbe textual y taxativamente donde hay que prohibir, según establecen el artículo 6° y demás artículos correlativos. Lo cierto es que vamos a sancionar una buena ley.

De la misma manera, está bien que tengamos ley de bosques. Ése también ha sido un gran debate y nosotros mejoramos acá, en el Senado, el texto de esa norma. Así, la provincia de Jujuy ya tiene el programa de ordenamiento territorial. En función de ello, ya sabemos que nos quedan cien mil hectáreas para desmontar, y también ya sabemos qué podemos cultivar ahí. A la vez, según la matriz de desarrollo productivo de la provincia de Jujuy, si metemos más caña y más tabaco podemos duplicar el producto bruto en nuestra provincia. Igualmente, ya sabemos qué no se puede tocar y cuáles son las áreas verdes, amarillas y las rojas —que no se pueden tocar.

Entonces, está bien que avancemos con estas normativas que ordenan territorialmente y que ponen límites. Precisamente, es muy bueno que a través de 17 o 18 artículos se establezcan los presupuestos mínimos. Las facultades de las

provincias están intactas, porque éstas tienen que complementar esta norma, pero no para flexibilizar o para decir que se prohíbe y después no se prohíbe nada. Porque la verdad es que esta ley de Jujuy casi parece hecha por las mineras, porque primero se prohíbe y después se permite. Y las cosas no deben ser así: se debe prohibir expresamente y donde hay agua, donde hay un glaciar, donde hay una zona periglacial no se pueden desarrollar determinadas actividades, lo que debe quedar expresamente aclarado.

Por estos motivos, vamos a votar afirmativamente la sanción de la Cámara de Diputados, dejando a salvaguarda que los derechos federales y autónomos de las provincias quedarán intactos a partir de esta aprobación.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** — Señor presidente: en primer lugar, quiero clarificar que no voy a hablar en representación del conjunto de mi bloque, sino que sí lo haré en nombre de un grupo importante de senadores que van a acompañar la sanción de la Cámara de Diputados.

Asimismo, quiero afirmar lo siguiente, y desde ya les pido disculpas por ser autorreferencial: en todos estos años he tenido una conducta de fuerte disciplinamiento al Poder Ejecutivo porque entiendo que el bloque del oficialismo debe acompañar las políticas del Poder Ejecutivo. No hay ninguna duda acerca de cuál ha sido mi comportamiento político en este Senado. Indudablemente, siempre he estado vinculado a las decisiones políticas que ha tomado el ex presidente durante su mandato, que se desarrolló desde 2003 hasta el 2007, y la actual presidenta de la Nación.

Lo que quiero decir es que durante todo este largo debate la presidenta en ningún momento me impuso que votáramos sobre algunas de las versiones que están en pugna en este Senado. La presidenta ha dejado que se lleve adelante este debate, con un ejercicio pleno de la libertad y en función de visiones que son personales y que tienen que ver también con los intereses de las provincias.

Por ello, quiero rescatar el debate de hoy. Me siento orgulloso de pertenecer al Senado. Hemos dado aquí un debate importante, transversal, que cruza a los distintos bloques y que

encierra las visiones que tienen los senadores, con honestidad y transparencia, dejando de lado cualquier versión maliciosa que transitó por la calle.

Yo creo en la honestidad de los senadores que han planteado una postura o la otra, quienes lo han hecho desde esa visión personal desde los intereses que defienden.

Ahora bien, como la presidenta ha sostenido claramente que cualquiera sea la ley que se vote, va a ser promulgada, en este caso, y a título personal, yo entiendo que el mejor proyecto, el que mejor expresa la limitación de llevar adelante actividad minera en el glaciar y en el periglacial es el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Creo que es más preciso, que tiene un mayor trabajo y desarrollo. En lo personal lo voy a acompañar.

Comparto algunas de las visiones que se han dado en cuanto a que este Senado en algún momento va a tener que abordar el debate de fondo, el debate de la minería, el debate de la gran mega minería, el debate sobre los recursos que le quedan al país, además de la inversiones que realizan, que son importantes, o la generación de empleo por determinado período de tiempo. Si analizamos en términos de ingresos y tributarios, indudablemente este modelo minero tiene más consustanciación con la etapa del 90, en la que no había ninguna inversión en minería, donde no venía nadie a invertir en minería. Era una política de aliento a la minería. En algún momento el Congreso va a tener que abordar esta discusión, fundamentalmente el tema de la mega explotación, el tema de la explotación con cianuro, con elementos contaminantes. Habrá que abordarlo con responsabilidad e inteligencia.

Esta iniciativa no es una ley antiminera. No prohíbe la minería. Es totalmente falso ese concepto. Lo que hace es limitar la actividad minera en un punto central, que es el lugar del glaciar y el lugar del periglacial, allí donde está el agua, donde está este elemento trascendente que configura un derecho humano en términos del derecho del acceso al agua y el derecho a la vida. De estas cosas estamos hablando esta noche.

Quiero destacar también que a lo largo de este debate ha habido expresiones importantes de sectores de la sociedad que gravitan en la

discusión de las ideas. El grupo de intelectuales de Carta Abierta ha definido claramente este lineamiento. Ha dicho que es mejor el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, al igual que artistas, incluso sectores que tienen afinidad con el gobierno. Hoy vi un documental hecho por artistas relativo a la defensa del agua. Me parece que este tema ha sido enriquecido. Entiendo que tampoco hay que dramatizarlo tanto. Las inversiones van a seguir porque tienen un alto nivel de rentabilidad en el país. El otro día hubo una inversión en la provincia de Santa Cruz por más de 4.500 millones de dólares. Se trata de una nueva explotación y desarrollo minero. Acá no se para nada; tampoco se afecta la actividad petrolera.

Estábamos discutiendo sobre minería y de repente aparecieron los petroleros. Estamos excluyendo el artículo 17 del dictamen de minoría. Además estamos haciendo algo que hemos hecho de manera reiterada en esta Cámara. Muchas veces hemos excluido artículos que venían de la Cámara de Diputados. Hay antecedentes suficientes al respecto. El propio senador Sanz en un debate dejó claramente establecida esta facultad.

O sea, no le estamos violentando nada al sector petrolero. Tienen todo el territorio argentino para hacer inversiones en minería y en petróleo. De manera que no se dramatice esta cuestión.

Por otra parte, tampoco se afecta la competencia de las provincias. Toda cuestión de controversia se va a resolver dentro del ámbito de la jurisdicción provincial. La competencia es de los estados provinciales. Lo dice claramente la sanción de la Cámara de Diputados al igual que la del Senado. Los dos proyectos establecen la competencia de las jurisdicciones provinciales. O sea, acá no hay sustracción de competencia al ámbito federal; solamente rige la competencia federal en el caso de los parques nacionales. Con relación al resto, se regula y se discute en el ámbito de la justicia provincial.

La esencia de este debate es la defensa del agua.

En el año 1972, muy poco tiempo antes de morir —dos años antes—, y casi como un visionario, el general Perón había planteado el tema de los recursos naturales y, fundamentalmente, lo que significaba la importancia de defender el agua frente al desarrollo del mundo moderno,



de la economía de mercado y de la industrialización que podía afectar los recursos naturales. Fue un debate anticipatorio de Perón en el año 1972.

**Presidente:** yo quería dejar sentada esta posición. Me parece que el debate ha sido muy rico, muy importante, así que procedamos a la votación y veamos qué pasa.

**Sr. Sanz.** – ¿Solicito una interrupción, presidente?

**Sr. Presidente.** – ¿Autoriza la interrupción, senador?

**Sr. Pichetto.** – Sí.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Vi que estaba terminando y no lo quise interrumpirlo antes.

Como a través de la intervención del senador Fernández se pudo haber puesto en duda, y atento a lo que acaba de decir el senador Pichetto con respecto a si se puede rechazar parcialmente algún artículo del proyecto que viene de la Cámara de Diputados, quiero señalar que esto no se trata solamente de la interpretación de algún debate, de algún senador o de algún antecedente que hubiera por allí sino que tiene que ver con una interpretación que las dos cámaras hicieron en el año 1995 y por la cual se suscribió un acta por sus autoridades. Luego, cuando se reformuló el Reglamento del Senado –creo que fue en el año 2001–, que tuvo como impulsora de esa reforma a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, se incorporó ese espíritu en el artículo 177 de dicho reglamento.

Me voy a permitir leer el párrafo del artículo 177 que está relacionado a esto. El artículo dice que cuando un proyecto de ley vuelve al Senado como cámara de origen con adiciones o correcciones, ésta puede aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir modificaciones y demás.

Así que, no es una cuestión de interpretación sino que está escrito, está resuelto y no hay absolutamente ningún instrumento legal, llámese sentencia o cosa parecida, que haya ido en contra de esto.

**Sr. Morales.** – Solicito una interrupción, presidente.

**Sr. Presidente.** – ¿Autoriza la interrupción, senador Pichetto?

**Sr. Pichetto.** – Sí, presidente.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Quiero citar algunos antecedentes al respecto.

La ley 26.369, que fue aprobada en el Senado el 20 de diciembre de 2006, fue modificada en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2007, volvió al Senado con esas modificaciones el 16 de abril de 2008 y fue sancionada y convertida en ley. No se aceptaron modificaciones de los artículos 1º, 2º y 3º, se rechazó el texto del artículo 4º y se insiste en el artículo 3º. Es decir que lo que no se puede es modificar el texto de los artículos, pero se han tomado artículos de una sanción y de otra para conformar la ley.

Hay más antecedentes, y no quiero leer quienes estaban en la sesión porque la verdad que estábamos casi todos los que estamos acá. *(Risas.)*

**Sr. Presidente.** – Senadora Riofrio: ¿usted había pedido autorización para insertar?

**Sra. Riofrio.** – Sí.

**Sr. Romero.** – Yo también pido autorización para insertar, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – Se van a votar las inserciones.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobadas.<sup>1</sup>

**Sr. Basualdo.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.

**Sr. Basualdo.** – Quiero recordarle que yo pedí la abstención porque, como dije en mi intervención, Dios quiera que me equivoque y que esta ley no sea judicialable para que realmente tengamos una ley, pero...

**Sr. Presidente.** – Se va a votar la autorización de abstención del senador Basualdo.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobada.

Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en par-

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

ricular en una sola votación el despacho de la mayoría, que sería la insistencia en el proyecto del Senado. Los que estén de acuerdo, votan afirmativamente.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 33 votos por la afirmativa, 35 por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 9.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda, entonces, someter a consideración el dictamen de minoría que corresponde al proyecto que viene de la Cámara de Diputados, sin el artículo 17.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Señor senador Basualdo, ¿insiste en la abstención?

**Sr. Basualdo.** – Sí.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 35 votos afirmativos, 33 negativos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 10.<sup>2</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>3</sup> (*Aplausos*)

Continúa la sesión.

Corresponde considerar los proyectos sobre tablas a solicitar que fueron acordados en la reunión de labor parlamentaria.

**Sr. Mayans.** – Estamos cansados. Que queden para la próxima sesión.

**Sr. Presidente.** – Entonces, estos asuntos pasan para la próxima sesión.

Queda levantada la sesión.

–Son las 4.30 del jueves 30 de septiembre de 2010.

JORGE A. BRAVO.

Director General de Taquígrafos.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.

<sup>3</sup> Ver el Apéndice.

ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada en vigencia:

Dentro de los ciento veinte (120) días:

a) Adecuar su formativa sobre el acceso a la información pública de conformidad a los principios, límites y procedimientos establecidos en esta ley;

b) Reorganizar y sistematizar los procesos de recepción y producción de la información a fin de conformarla a los parámetros estipulados por esta ley; y

c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma exigida por esta ley, en los portales o sedes de los sujetos obligados.

Dentro de los ciento ochenta (180) días: crear, capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no tenerlos los integrantes de las Unidades de Enlace, o sus equivalentes.

Dentro de los doscientos cuarenta (240) días:

a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP); y

b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de esta ley.

## CAPÍTULO II

### *Disposiciones finales*

Art. 55. – *Fuentes documentales.* El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.

Art. 56. – *Adhesión.* Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a adherir al régimen previsto en esta ley.

Art. 57. – *Aplicación supletoria.* Esta ley es de aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes esenciales vigentes, en todo lo no expresamente regulado por éstos.

Art. 58. – *Vigencia del decreto 1.172/03.* El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto 1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto los Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP) queden definitivamente conformados y se dispongan las normas que lo reemplacen.

Art. 59. – *Entrada en vigencia.* La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 60. – *Reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.

Art. 61. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. C. COBOS.

*Juan H. Estrada.*

Nota: Los antecedentes y la aprobación en general figuran en la sesión del 8 de septiembre de 2010.

77

(S.-2.200/09)

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.

*Señor presidente del Honorable Senado:*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se aprueba el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de la mayoría absoluta de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

### RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL

Artículo 1º – *Objeto.* La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

Los glaciares constituyen bienes de carácter público.

Art. 2º – *Definición.* A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recrystalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Art. 3º – *Inventario.* Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

Art. 4º – *Información registrada.* El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no

mayor de cinco (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.

Art. 5° – *Realización del inventario*. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional, previo al registro del inventario.

Art. 6° – *Actividades prohibidas*. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1°, las que implique su destrucción o traslado e interfiera en su avance, en particular las siguientes:

- a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;
- b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos;
- c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;
- d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

Art. 7° – *Evaluación de impacto ambiental*. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –ley general del ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:

- a) De rescate, derivado de emergencias;
- b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
- c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.

Art. 8° – *Autoridades competentes*. A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.

Art. 9° – *Autoridad de aplicación*. Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.

Art. 10. – *Funciones*. Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación:

- a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
- b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático;
- c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
- d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
- e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
- f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
- g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos cabe la presente ley;
- h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Art. 11. – *Infracciones y sanciones*. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que ese fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.



Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
- c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
- d) Cese definitivo de la actividad.

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se registrarán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.

Art. 12. – *Reincidencia*. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.

Art. 13. – *Responsabilidad solidaria*. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que atengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.

Art. 14. – *Destino de los importes percibidos*. Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.

Art. 15. – *Disposición transitoria*. En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días.

Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera.

Las actividades descritas en el artículo 6°, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2°

las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla, la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.

Art. 16. – *Sector Antártico Argentino*. En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Art. 17. – En las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Ianigla priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.

Art. 18. – La presente ley se reglamentará en el plazo de noventa (90) días a partir de su realización en el Boletín Oficial.

Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.  
Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO A. FELLNER.  
*Enrique Hidalgo.*

*El Senado y Cámara de Diputados...*

## RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL

Artículo 1° – *Objeto*. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

Los glaciares constituyen bienes de carácter público.

Art. 2° – *Definición*. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recrystalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Art. 3° – *Inventario*. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional

con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

Art. 4° – *Información registrada.* El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.

Art. 5° – *Realización del inventario.* El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional, previo al registro del inventario.

Art. 6° – *Actividades prohibidas.* En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1°, las que implique su destrucción o traslado e interfiera en su avance, en particular las siguientes:

- a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;
- b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos;
- c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;
- d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

Art. 7° – *Evaluación de impacto ambiental.* Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –ley general del ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:

- a) De rescate, derivado de emergencias;
- b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquís, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
- c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.

Art. 8° – *Autoridades competentes.* A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.

Art. 9° – *Autoridad de aplicación.* Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.

Art. 10. – *Funciones.* Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación:

- a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
- b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático;
- c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
- d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
- e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
- f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
- g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos cabe la presente ley;
- h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Art. 11. – *Infracciones y sanciones.* Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que ese fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
- c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
- d) Cese definitivo de la actividad.

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.

Art. 12. – *Reincidencia.* En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.

Art. 13. – *Responsabilidad solidaria.* Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que atengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.

Art. 14. – *Destino de los importes percibidos.* Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente,

a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.

Art. 15. – *Disposición transitoria.* En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días.

Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera.

Las actividades descritas en el artículo 6°, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2° las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla, la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.

Art. 16. – *Sector Antártico Argentino.* En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

Art. 17. – La presente ley se reglamentará en el plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diez.

EDUARDO FELLNER.

Marta Luchetta.

JOSÉ J. B. PAMPURO.

Juan J. Canals.

*Votación Nominal*

## 128º Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión

DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN POR EL QUE SE APRUEBA EL RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL

S-2200/09

## VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría. Artículo 81 Constitución Nacional. Se aconseja insistir en la sanción del H. Senado.

Acta N°: 9	Fecha: 30 -09-10	Hora: 4:29
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los votos emitidos	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C.C.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	69	Votos afirmativos:	33
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	35
Total Presentes:	69	Abstenciones:	1
Ausentes:	3		
Votos Afirmativos Necesarios:	35	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>NEGATIVA</b>



  
 JUAN JOSE CANALS  
 PROSECRETARIO PARLAMENTARIO  
 H. SENADO DE LA NACION



*Votación Nominal*

128º Periodo Legislativo - Ordinario - 13º Sesión

DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN POR EL QUE SE APRUEBA EL RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL

S-2200/09

## VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría. Artículo 81 Constitución Nacional. Se aconseja insistir en la sanción del H. Senado.

Acta N°: 9

Fecha: 30-09-10

Hora: 4:29

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

COBOS, Julio C.C

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
BANICEVICH, Jorge Esteban	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	ABSTENCIÓN	MARTINEZ, José Carlos	NEGATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	NEGATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	NEGATIVO
BONGIORNO, María José	NEGATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CABANCHIK, Samuel Manuel	NEGATIVO	MESTRE, Ramón Javier	NEGATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	MONLLAU, Blanca María del Valle	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	NEGATIVO	MONTERO, Laura Gisela	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	NEGATIVO
CIMADEVILLA, Mario Jorge	NEGATIVO	MORANDINI, Norma Elena	NEGATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CORPACCI de MERCADO, Lucia B.	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	NEGATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	NEGATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	NEGATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
DÍAZ, María Rosa	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	NEGATIVO
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	NEGATIVO	RACHED, Emilio Alberto	NEGATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	NEGATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	NEGATIVO	ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	NEGATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	NEGATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	VERA, Arturo	NEGATIVO
JUEZ, Luis Alfredo	NEGATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	NEGATIVO	VERNA, Carlos Alberto	NEGATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO

## V

## INSERCIONES

**Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:**

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR MESTRE

**Protección de glaciares y ambiente periglacial  
(S.-2.200/09)**

Señor presidente:

Quiero fundamentar mi voto por la negativa del dictamen de la mayoría de la Comisión de Ambiente relativo al expediente S.-2.200/09, y adelantar que en caso de rechazo del mismo, votaré favorablemente el dictamen que suscriben los senadores Cano, Filmus, Vera, Martínez y Morandini y en consecuencia, es necesario, en los términos del artículo 81 de la Constitución, aprobar el proyecto con las adiciones y correcciones introducidas por la Cámara de Diputados actuando como sala revisora.

Creo que la aprobación de la Cámara de Diputados significa un progreso en relación al texto originado en este Senado.

Me parece positivo que en el artículo 1º del proyecto se haya eliminado como fundamento de la política de preservación de los glaciares a su utilización para actividades industriales y para la generación de energía hidroeléctrica.

En este sentido, la preservación de un recurso natural debe realizarse teniendo en cuenta el nuevo artículo 41 de la Constitución incorporado en la reforma de 1994 que dispone el derecho a un ambiente sano.

Apoyo especialmente el texto de los incisos a) y c) del artículo 6º de la comunicación de la Cámara de Diputados que establece que las prohibiciones de liberación de productos químicos y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera debe extenderse no sólo a los glaciares propiamente dichos, sino también a las zonas periglaciales, es decir (como las define el artículo 2º del texto de Diputados) a las áreas de suelos congelados y suelos saturados en hielo en la baja, media y alta montaña.

Sin duda que estas restricciones son las que han producido las mayores polémicas en torno a la sanción de esta ley.

Yo no soy un legislador contrario a la actividad minera. Creo que la extracción de los recursos minerales de la tierra puede contribuir decisivamente a nuestro desarrollo. La minería, que quizá sea la primera industria de nuestra América, puede generar trabajo y riqueza que tanto necesitamos para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Al votar este proyecto de la forma en que lo hago no estoy impidiendo el desarrollo de actividades productivas sino actuando con responsabilidad.

Sin pretender erigirme en representante exclusivo de los jóvenes creo que tenemos que pensar el tema ambiental con una perspectiva de futuridad. Nuestra responsabilidad en materia ambiental no es sólo con nosotros sino también con los argentinos que vendrán.

La Constitución Nacional en su artículo 41 nos ofrece un mandato claro respecto del ambiente cuando dice que las personas tenemos el derecho “a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

No adscribo al ecopesimismo que dice que en materia ambiental hay que sacrificar la economía y el progreso para regresar a una sociedad preindustrial. Nuestra visión política pone el centro y el foco de nuestras preocupaciones en el hombre, y sin duda que el desarrollo económico es el que mejora su calidad de vida.

Desarrollo y protección del medio ambiente no son incompatibles. Se pueden respetar ambos principios con leyes benignas y responsables.

Creo que el texto de la Cámara de Diputados avanza en el proyecto original de este cuerpo, y ése es el dictamen que aprobaré en caso de rechazo del que estamos considerando y que voto negativamente.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA DÍAZ

**Libre acceso a la información pública  
(S.-579/10)**

Señor presidente:

El acceso a la información es un derecho humano, incluido en nuestra Constitución y en tratados internacionales, claramente violados en nuestra historia. En nuestra provincia de Tierra del Fuego hemos sido pioneros con una ley de acceso a la información pública.

Investigadores de la ONG CIPECC detallaron en agosto de este año la importancia de este tema, analizando el caso fueguino como “muy positivo” en nuestra legislación. Tales como la obligatoriedad de la televisión y difusión pública de las sesiones legislativas y también la publicación de las sentencias del Superior Tribunal de Justicia.

La soberanía del pueblo es la base de la democracia y la participación es la que genera la legitimidad del

sistema. Esta libertad de conocimiento, implica la posibilidad de pensamiento y expresión.

Esta ley promueve una comunicación social pública y abierta, entendida como base de todo sistema democrático, en donde para poder ejercer una crítica, y construir desde el pluralismo, es precisa una correcta y libre comunicación. No solamente mediante los medios masivos, sino en todas las personas que podrán acceder a conocer los actos de los administradores públicos. Esto permite el ejercicio eficaz de una ciudadanía concreta, posibilitando un accionar mayor como ciudadano, con plena responsabilidad sobre sus decisiones. Implica el involucramiento del pueblo, en pleno conocimiento y control del bien público.

La importancia de este proyecto radica centralmente no sólo en contemplar la información en manos del Estado sino en fiscalizar cómo se utilizan los fondos públicos cedidos a terceros. Es el Estado quien está obligado a garantizar el ejercicio de este derecho.

Luego de trabajar con Participación Ciudadana, y nuestros legisladores, acarreado un gran costo político, estamos convencidos de este logro realizado en Tierra del Fuego.

Es por lo expuesto, y tomando como experiencia la ley de Tierra del Fuego, junto a la necesidad de legislación nacional al respecto, que con el senador José Carlos Martínez acompañaremos esta ley.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR BASUALDO

#### **Protección de glaciares y ambiente periglacial**

**(S.-2.200/09)**

Señor presidente:

Considero de fundamental importancia la necesidad de dar a luz una ley que proteja los glaciares y el ambiente periglacial de nuestro país, así como también que respete nuestra Constitución Nacional, la autonomía de las provincias y su potestad frente a sus recursos naturales, vale decir, una ley federal en la que nos encontremos todos representados.

Existe consenso generalizado a nivel mundial sobre el valor fundamental de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas de agua dulce, así como de la imperiosa necesidad de protegerlos frente a actividades de alto impacto ambiental que pudieran dañarlos irreversiblemente.

Estimo que tanto la ley que tiene origen en la Cámara de Senadores, así como también las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados son proyectos de gran valor por el esfuerzo y los conocimientos vertidos en ellos, y de ninguna manera susceptibles de ser desechados en su totalidad, no obstante esto, considero que ambos son potencialmente judiciables, entendiendo por ende, que votaríamos un proyecto por ser el “menos

defectuoso”. Es por esto que propongo sensatez frente a la sociedad y a nosotros mismos, trabajando sobre un nuevo proyecto de ley superador.

En el día de la fecha he presentado un proyecto de ley en tal sentido, teniendo en cuenta artículos del proyecto de presupuestos mínimos sobre protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que tiene como origen la Cámara de Senadores, así como también algunas modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados.

Como representante de un pueblo que me eligió con su voto, es que me veo en la obligación de no acompañar con mi voto a ninguno de los proyectos en discusión.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
ROJKÉS DE ALPEROVICH

#### **Protección de glaciares y ambiente periglacial**

**(S.-2.200/09)**

Señor presidente:

He pedido la palabra para participar de este debate, no porque sea una especialista en glaciares, ni tampoco porque, en este caso los intereses de mi provincia de Tucumán se vean especialmente tocados, por el tema que estamos tratando.

Pero en este tiempo de reflexión que hemos tenido los legisladores para escuchar todos los argumentos a favor y en contra de esta ley, llamada de protección de los glaciares, he sentido la necesidad de hacer mi aporte al tema.

En primer lugar, porque como muchos de los colegas, que han opinado, provengo de una provincia pequeña del norte de nuestro país, en donde a veces los recursos son pocos y las necesidades son muchas.

Al escuchar las referencias que han hecho algunos señores legisladores, y sobre todo algunas organizaciones defensoras del medio ambiente, sobre los recursos naturales, y en especial de las fuentes de agua ubicadas principalmente en las provincias cordilleranas, se me vino a la memoria un foro mundial de agua, que se realizó en el marco de Naciones Unidas y del que participé como parlamentaria Mercosur.

Sin entrar en detalles, rápidamente quiero comentarles que del mismo participaron delegaciones de muchos países del mundo, como también numerosas organizaciones ambientalistas dedicadas al cuidado y preservación de los recursos naturales.

En esa ocasión, y al promediar la larga serie de reuniones programadas, los organizadores pusieron a la firma un documento, en el cual entre otras cosas decía, palabras más, palabras menos, que las fuentes de agua son un patrimonio de la humanidad, y que todos los habitantes del mundo tienen derecho a acceder al agua potable.

Esto en una primera lectura nos pareció una importante defensa de un derecho humano básico y universal, como es el derecho al agua potable, como lo son también el acceso a una alimentación digna, un trabajo decente, a la vivienda, a la salud, etcétera.

Pero cuando le dimos una segunda lectura, descubrimos que si bien nadie puede negar que el acceso a una fuente de agua confiable es un legítimo derecho de todos los habitantes de este planeta, también consideramos que era muy importante afirmar que el cuidado y preservación de las fuentes de agua son responsabilidad exclusiva de cada Estado, y solamente cada uno de los países son los que deben decidir sobre el uso racional y responsable de sus reservas naturales. De otra manera, quedaría abierta la posibilidad a que en un futuro cualquier organismo pudiera inmiscuirse en cualquier país so pretexto de búsqueda de agua potable.

No me cabe la menor duda de que todos los que han trabajado en esta legislación de preservación y cuidado de nuestros glaciares, lo han hecho de muy buena fe, y demás está decir que comparto absolutamente esa preocupación.

Pero una cosa es que el Estado nacional arbitre y fiscalice el cumplimiento de ese cuidado, tratando de advertir y evitar todo riesgo de contaminación, y otra es avasallar los derechos de las provincias a decidir sobre el uso que deben hacer de sus recursos naturales.

Esto no significa que la Nación deba desentenderse definitivamente de algo que sin lugar a dudas nos involucra a todos, pero la función del Estado nacional, no debería ir mas allá de exigir el cumplimiento de los controles de impacto ambiental, que permitan resguardar los glaciares y toda fuente de agua.

Esto es al menos lo que estipulan tanto la Constitución Nacional como también está escrito en la mayoría de las Constituciones provinciales, y las leyes que muchas provincias cordilleranas ya han aprobado en ese sentido.

El artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias los necesarios para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

En virtud de ello, el establecimiento de presupuestos mínimos ambientales por parte de la Nación debe limitarse a fijar la legislación de base quedando, como competencia de las provincias, las atribuciones a legislar a partir de estos principios y establecer parámetros ambientales más rigurosos, de acuerdo a su especial situación.

Por lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, el Congreso Nacional, en ejercicio de la facultad de dictar normas que establezcan los “presupuestos mínimos ambientales” ha dictado la ley 25.675, conocida como “ley general del ambiente”. A través de dicha ley se exige como presupuesto mínimo ambiental para todo el territorio de la Nación un “sistema de evaluación de impacto ambiental previo” a la autorización de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente.

Lo que se desprende de toda esta legislación vigente es el compromiso de las provincias de legislar en este

mismo sentido, a los fines de que el estudio del impacto ambiental sea riguroso y preserve la calidad del agua para las generaciones futuras, cosa que la mayoría de las provincias cordilleranas han hecho. Casi todas tienen ya aprobadas leyes de protección de sus glaciares.

En el mundo contemporáneo ya a nadie se le ocurriría discutir acerca de lo imprescindible que son los minerales para el desarrollo de la vida cotidiana de la gente, así como tampoco se duda de la necesidad de que las actividades extractivas, de recursos no renovables, como lo son la minería o el petróleo, deben estar bajo estrictas medidas de control ambiental, y eso sí es absoluta responsabilidad del Estado nacional, tal como lo dispone la ley referida.

La escala e intensidad de sus desarrollos impone un adecuado marco regulatorio que además de proteger y preservar a futuro los recursos naturales, aseguren que su racional explotación redunde en un mejoramiento en la calidad de vida, principalmente de quienes viven en las comunidades cercanas.

Pero también es importante resaltar que la legislación debe ir acompañada de una eficiente política de control, dotada de recursos tecnológicos y humanos en la proporción y actualización adecuada al trabajo que deben realizar.

Y esto podría lograrse con la participación activa de todos los recursos disponibles, acudiendo de ser necesario a universidades y centros de investigación especializados, como así también dando participación a las comunidades que están involucradas en los emprendimientos, a los fines de darle la mayor transparencia posible al proceso de control ambiental.

Creo que de esta manera ambos factores en aparente pugna, el factor productivo y el factor ambiental, encontrarían el justo balance para que la acción productiva del hombre sirva para una mejor calidad de vida pero que también preserve los bienes para las generaciones futuras.

Es por las razones expuestas que he creído oportuno acompañar con mi voto a las provincias del interior de nuestro país que están viendo de alguna manera vulnerado su derecho constitucional a autocontrolarse y, sobre todo, consideran en riesgo a numerosas fuentes de trabajo para su gente, a disponer racionalmente de sus propios recursos. Es un voto de confianza hacia las mismas.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA RIOFRIO

**Protección de glaciares y ambiente periglacial  
(S.-2.200/09)**

Señor presidente:

Venimos a abordar en el día de la fecha un tema de innegable trascendencia, porque se dirimen cuestiones de raigambre constitucional en cuanto a la propiedad de los recursos naturales, el alcance de la intervención de las leyes regulatorias nacionales, la protección del



medio ambiente, la preocupación global y las posibilidades de desarrollo sustentable en zonas de los estados provinciales.

Las decisiones que se tomen al respecto son de vital importancia ya que tienen directa relación con el desarrollo económico regional, con las regulaciones ambientales y su compatibilidad con las actividades productivas, y con los márgenes de las potestades provinciales para definir el uso de los recursos naturales que les pertenecen por encontrarse en su circunscripción territorial.

La Constitución Nacional en su artículo 41 dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, artículo que significó un gran avance en materia de preservación del medio ambiente. Pero más adelante también señala: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementirlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.

Reforzando esta potestad, en la reforma constitucional de 1994 se introdujo el artículo 124 que expresa con meridiana claridad: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Es decir, prescribe en el ámbito del derecho ambiental un federalismo concertado. Esto es importante porque cualquier norma que prohíba indeterminadamente actividades en ciertos ámbitos geográficos estaría atentando contra las jurisdicciones provinciales y su desarrollo económico.

Señor presidente, la minería ha tenido desde sus orígenes en la Argentina, en varias de sus provincias, carácter fundacional y ha sido vital para el desarrollo económico y social de las mismas. Yo provengo de la provincia de San Juan, en la cual, lo que acabo de mencionar ha sido un principio sostenido en el tiempo desde su fundación.

No se puede decir que las zonas con glaciares se encuentren desprotegidas porque no es cierto. Los glaciares están protegidos por leyes vigentes de carácter nacional como la ley de contenidos mínimos para la defensa del medio ambiente, ley 25.675 y en San Juan por la ley 8.144 de protección de los glaciares. También encontramos leyes similares en otras provincias, por lo que no puedo aceptar que so pretexto de proteger los glaciares se conspire contra el desarrollo efectivo, necesario y justo de las provincias cordilleranas.

Lo que nuestro país necesita es una buena ley de protección de glaciares y de ninguna manera una ley que atente contra la producción y la minería. El proyecto de ley en discusión, como viene de Diputados, no sólo prohíbe la minería, sino todas las actividades conexas vinculadas a un desarrollo productivo, como las vinculadas con la construcción de infraestructura

comunicacional, proyectos para el desarrollo energético, entre tantas otras.

Tengo el orgullo de ser comprovinciana de Domingo Faustino Sarmiento, pionero del desarrollo de la minería en la República Argentina, y que siendo gobernador de la provincia de San Juan, en su mensaje a la Legislatura del 22 de junio de 1862, declaraba a la minería “industria principal en la provincia”, apelando nuevamente al apoyo del gobierno nacional para su desarrollo, y resaltando lo beneficiosa que resultará para la economía interna y el comercio exterior de la Nación, y agregaba: “La minería es el producto que permitirá la reactivación económica y, para lograrlo, su gobierno convoca capitales provinciales, nacionales y extranjeros con el fin de establecer una compañía que suministre el financiamiento necesario al desarrollo de la industria”.

La industria minera ha sido uno de los motores de nuestro crecimiento nacional y regional. Basta decir que sólo en el año 2009 se realizó una inversión directa de más de 750 millones de dólares que generaron impuestos para las provincias y la Nación. Cabe destacar también la creación de más de 8.000 puestos de trabajo, siendo los trabajadores mineros unos de los mejores pagos dentro de las economías locales. Además, 750 pequeñas y medianas empresas aprovecharon estas externalidades de escala para crecer y desarrollarse. Para este año que estamos transitando, empresas australianas han hecho inversiones que superan los 115 millones de dólares que significan nada más ni nada menos que tres mil puestos (3.000) de trabajo más, y empresas brasileñas han comprometido inversiones que superan los 3.000 millones de dólares en un proyecto sobre potasio en la provincia de Mendoza.

Ya son cerca de 500 mil los puestos de trabajo generados en el país por la minería, en actividades de exploración de reservas, producción de minerales y servicios para este sector, lo que representa un 500 % de crecimiento con respecto a 2003, según informó le Secretaría de Minería de la Nación. Esta actividad también registra uno de los mayores índices de trabajo formal con salarios que, en promedio, se ubican, como lo dije anteriormente, entre los más altos en los sectores industriales del país.

El incremento del empleo en minería se debe al fuerte crecimiento de este sector productivo nacional que agrupa a los minerales industriales, rocas de aplicación, minerales metalíferos, fabricación de ladrillos, cales, cementos, piedras preciosas y aguas termales para uso turístico, terapéutico y medicinal, y que en los últimos años superó récords históricos en inversiones, nuevos productos y producción.

Desde 2003 a estos días, el número de proyectos creció por arriba del 900 %, las inversiones superaron el 1.100 % y la producción se triplicó.

La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales correspondientes como ganancias, rentas provinciales, cargas

sociales, entre otros. Contribuye además con todos los impuestos y contribuciones de ley, paga ingresos brutos, sellos, cargas sociales; ingresos éstos que potencian las economías provinciales y la economía nacional.

También los emprendimientos mineros han generando puntos de encuentro de países que profundizan la integración regional, ejemplo claro de esto es el emprendimiento binacional de Pascua Lama, caso líder en el mundo en que dos países hermanos se asocian para un emprendimiento binacional.

En materia tecnológica el sector minero está utilizando la mejor tecnología de punta, la más moderna que se utiliza en el mundo y además es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica con los más modernos y significativos controles sobre ella.

Para nadie es novedad que el futuro de la minería en nuestro país presenta metas definitivamente importantes. Datos de la cámara que los agrupa y de organismos oficiales nos indican que para dentro de un quinquenio la Argentina estaría exportando por cifras superiores a los 7 mil millones de dólares, y estaríamos recibiendo inversiones directas por cifras superiores a los 9 mil millones de dólares. Es importante destacar esto porque en el 2003 no superábamos los 1.000 millones de producción.

¿A quién no le gustaría que en la provincia de San Juan se instalara una industria automotriz en lugar de una minera, como las que funcionan en las provincias de Córdoba y de Santa Fe? Lo cierto es que San Juan no tiene ninguna industria automotriz, ninguna industria electrónica y tampoco tiene soja.

La realidad es que la actividad minera es el eje estratégico del diseño de crecimiento y desarrollo para la provincia de San Juan, porque como manifestara el gobernador de San Juan ingeniero José Luis Gioja, “el 80 % del territorio provincial está cubierto por terrenos montañosos, conformados por distintos ambientes geológicos, propicios para albergar distintos tipos de mineralización y por lo tanto diferentes depósitos de minerales, algunos de interés económico y otros no”.

Estoy convencida de que existe una demonización de la actividad minera. Ocurre que, lamentablemente, en este tema se ha planteado una falsa antinomia entre el impacto económico de esta ley y la cuestión ambiental en función de un apego irrestricto a posiciones ideológicas, que por cierto, son un tanto extremas.

Esto da lugar a que se hable con ligereza de las multinacionales y de las regalías y parecer que si estas últimas fueran mayores, no sería tan importante preservar el medioambiente, esto es una verdadera falacia.

El texto aprobado en Diputados y que hoy es objeto de debate en este recinto tiene inexactitudes que conllevan una clara intencionalidad política que apunta a perjudicar a la actividad minera en las provincias cordilleranas. Estas inexactitudes llevan confusión y no definen con claridad los tipos de áreas con hielo, nevadas, congeladas o de glaciares. El proyecto aprobado en la Cámara baja tampoco apela a los controles

y a los estudios y dictámenes sobre impacto ambiental, que a mi entender, son imprescindibles al momento de evaluar un emprendimiento minero. Por último también atropella el artículo 124 de la Constitución Nacional.

El riesgo de este plexo normativo es que consista en una conspiración contra el desarrollo efectivo de esta actividad, perjudicando así a provincias cordilleranas en donde la misma constituye la principal fuente de explotación y desarrollo de la región.

Justamente este proyecto, con la versión que viene con media sanción de la Cámara baja, atenta no sólo contra la explotación minera en sí, sino también contra otras cuestiones conexas como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura a realizarse en la zona denominada “periglacial”.

Esta zona que la ley pretende proteger no está definida con exactitud, siendo por ende un concepto de definición imprecisa y de una amplitud conceptual peligrosa.

La norma que tratamos consiste por lo tanto en una norma “antiproductiva y antiminera” y no en una ley de protección de glaciares.

El texto aprobado por el Senado al definir en su artículo 2° glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, delimita claramente el ambiente periglacial siendo por tanto lo inventariable una posibilidad concreta y no genérica como resulta del texto de Diputados, que se refiere a suelos congelados y saturados lo cual daría lugar a diversas y disímiles interpretaciones administrativas y judiciales, con la consecuente secuela de controversias judiciales. El texto modificado por Diputados generaría una indefinición técnica que dificultaría la reglamentación y el cumplimiento de los tiempos que marca el proyecto.

Es importante destacar que en los dos proyectos la definición de glaciar clásico (el descuberto, donde se ve la lengua de hielo) es similar, pero el proyecto modificado por Diputados incorpora los conceptos de suelos congelados reguladores de recurso hídrico y suelos saturados en hielo, que tienen a priori el carácter de reserva estratégica y que, al no estar definido el grado de saturación ni el periodo de congelamiento del suelo, ocasionará dificultades en la implementación del inventario en los tiempos reglamentarios previstos.

Además, no se apela a los controles y dictámenes sobre impacto ambiental que son imprescindibles.

Se avasalla la autoridad jurisdiccional que tiene la provincia por ser “dueña” de los recursos naturales en su territorio.

Éste es producto de una oposición depredadora y de una perversidad increíble que perjudica no sólo a las provincias cordilleranas, sino también a la Nación porque la minería genera riquezas, ingresos genuinos e inversiones.

Quiero hacer algunas observaciones puntuales sobre los artículos que fueron modificados en la Cámara de

Diputados y que modifican para mal el proyecto aprobado por este Honorable Senado.

El artículo primero (1º) ya tiene un avasallamiento a las autonomías provinciales, habida cuenta que desconoce el artículo 124 de la Constitución Nacional donde establece que el dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias. También así lo estipula nuestra propia ley de protección de los glaciares. Ésta es una modificación que no podemos aceptar.

Si bien es cierto que los glaciares son de dominio público, debe quedar claro que este dominio va a pertenecer a las provincias cuando se encuentren ubicados dentro de sus jurisdicciones como surge claramente de la reforma constitucional de 1994. Por esto es mejor la versión del Senado, ya que la de Diputados sólo establece el principio de que los glaciares son bienes de dominio público (aunque esto ya se encuentra en la Carta Magna, no deja de ser preocupante su eliminación por la tendencia que tiene esta norma de centralizar poderes y avanzar sobre prerrogativas provinciales). Además, por esta supresión se da lugar a que se realice el inventario, reglamentado en el artículo 5º, sin intervención de las provincias en su confección.

Las modificaciones introducidas al artículo segundo (2º), sobre las definiciones, en el proyecto aprobado por este Senado la función de los glaciares y la parte periglacial a proteger se encuentra descrita en forma precisa. Las modificaciones introducidas por Diputados le dan una definición tan amplia que lleva a confusión. Por esto podría resultar que el Ianiglia, organismo al cual le tengo un profundo respeto, termine incorporando aéreas que no corresponden al inventario y ese solo hecho implicaría la prohibición de actividades sin posibilidad por parte de las provincias de conducir la evaluación de impacto ambiental en las actividades ubicadas en el ambiente periglacial. Esta modificación violenta la autonomía provincial y los derechos de las provincias sobre sus recursos. Debo alertar además que la ambigüedad del concepto de “zona periglacial” provocará una innecesaria judicialización del tema ya que seguramente se promoverán numerosas acciones de amparo que afectarán las actividades económicas y el empleo.

Asimismo, el proyecto del Senado claramente indica que el glaciar tiene que tener hielo, entonces en ausencia de hielo no es glaciar, lo que no surge claramente del texto de Diputados.

Es mejor la versión del Senado porque las definiciones son más claras y precisas quedando bien claro el bien jurídico protegido por la ley. La modificación de Diputados extiende la protección a ambientes extensos e indefinidos.

Reitero que con la versión de Diputados el Ianiglia tiene amplia discrecionalidad en la definición del inventario, generando incertidumbre en orden a proyectos existentes y futuros porque la mera inclusión de una zona en dicho inventario implicará la prohibición de actividades.

Para San Juan, donde hay principalmente glaciares de escombros, la versión del Senado le resulta más favorable al caracterizarlos con el adjetivo “permanentemente congelados” (presencia de hielo). De este modo, la prohibición quedaría limitada a los que verdaderamente son reservas estratégicas de agua y no alcanzaría a otros glaciares de escombros que no tienen esta última característica esencial.

La ley de mi provincia tiene mejor delimitado el ámbito de aplicación al establecer una diferencia entre glaciar de roca activo (que tiene hielo) y glaciar de roca inactivo o fósil (que no tiene hielo).

Respecto a este tema considero importante lo expresado por el doctor Villalba: “Un ambiente periglacial que tiene un suelo que se congela y descongela todos los años es como un manchón de nieve y eso no hace a una reserva estratégica de agua. La reserva estratégica de agua la componen los glaciares de escombros donde hay hielo acumulado por 100, 200 o 300 años [...] Un ambiente periglacial donde tenga un suelo congelado estacional, no tiene importancia hidrológica, esto no hay que protegerlo sino a aquellos cuerpos que tienen un alto contenido de hielo [...] Un suelo que se congela en forma temporaria no es importante desde el punto de vista de reserva hidrológica, por lo que no hay que protegerlo” (se visualiza claramente la importancia del calificativo permanentemente contenido en la versión del Senado).

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctor H. Bibiloni dijo: “El término regulador del recurso hídrico presente en el artículo 2º de Diputados, escindido del concepto de reserva estratégica también será motivo de controversia técnica al momento de reglamentar la ley y hacer operativo el inventario [...] La definición de glaciar clásico (el descubierto, donde se ve la lengua de hielo) en los dos proyectos es similar, pero el proyecto de Diputados incorpora los suelos congelados reguladores de recurso hídrico y suelos saturados en hielo, que no tienen, a priori, el carácter de reserva estratégica y al no estar definido el grado de saturación ni el período de congelamiento del suelo, resultará dificultosa la implementación del inventario en los tiempos reglamentarios previstos”.

También quiero traer a colación la inquietud del Senador Pérez Alsina: “Lo que me preocupa del proyecto de Diputados es que deja lugar a la interpretación [...] por ejemplo, la palabra ‘regulador del recurso hídrico’ [...] es un arroyo, un río? [...] ¿Quién interpretará quién está actuando como regulador de recursos hídricos?...”.

El doctor en Ciencias Geológicas, especialista en ordenamiento territorial y medioambiente, señor Eremchuk manifestó: “...Un fotointérprete puede marcar rápidamente todos los depósitos que podemos considerar periglaciales y ambientes periglaciales. Ahora, demostrarlo, que significa una investigación no invasiva, es decir, no hacer perforaciones en el glaciar sino a través de geofísica, lleva como mínimo demostrar que

3 años el cuerpo del glaciar se comporta como hielo. Tenemos la tecnología y los recursos humanos?...”.

Cuando vemos el artículo tercero (3°), si tomamos el proyecto del Senado, queda completamente claro que el inventario sólo será sobre los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, con los alcances y términos definidos. En virtud de la claridad de los bienes protegidos el Ianigla sabrá qué incluir en el inventario. Y la clara definición de las geoformas protegidas permitirá un dinámico desarrollo y confección del mismo. La indeterminación en el proyecto de Diputados dilatará su confección, impidiendo la rápida protección de los glaciares. Así, en el proyecto del Senado, a diferencia de la versión que viene de Diputados, queda claro que tanto en el artículo 2° como en el artículo 6° lo inventariado y protegido en el ambiente periglacial es la geoforma (glaciar de escombros).

Con respecto al artículo (5°), cabe decir que es negativa la modificación introducida por Diputados por cuanto elimina la siguiente frase: “...y con las instituciones nacionales y provinciales competentes...”. Surge clara la intención de quitar la intervención de las provincias en la confección del inventario, dejando que el reordenamiento territorial lo realice un instituto nacional (Ianigla). Por el contrario, el proyecto del Senado respeta el artículo 124 de la Constitución Nacional. Si se aprueba el texto modificado por Diputados, se van a generar demoras en la confección del inventario ya que no se aprovechará el trabajo ya realizado por algunas provincias. Mientras se confecciona el inventario, se suspenderán inversiones hasta tener la certeza de los límites de lo incluido en el mismo. Esto es más grave en la versión de Diputados por la indefinición y poca claridad. Además de desalentar emprendimientos, se facilita el monopolio en esta actividad y se lesionan derechos adquiridos por empresas que ya estén realizando algún tipo de actividad en esta materia. Respecto a este tema, quiero traer a colación al doctor Bibiloni: “La secretaría está en condiciones para el inmediato inicio del inventario, donde se tienen en cuenta las previsiones del articulado del proyecto de ley, contemplando la coordinación técnica vinculante del Ianigla y la participación de las provincias que en su territorio tienen glaciares, así como también de los otros organismos nacionales involucrados en la temática”.

En el artículo sexto (6°) podemos apreciar que las prohibiciones están contenidas en ambos proyectos. En el proyecto del Senado se aplicarían cuando cualquiera de las actividades enumeradas se produzcan en o sobre los cuerpos glaciares determinados en el artículo 2°. En la modificación introducida por Diputados la prohibición establecida se extiende a actividades no sólo a los glaciares sino también al ambiente periglacial ampliamente definido. En este punto es válido lo que ya he comentado para el análisis del artículo 2°.

En la redacción venida de la Cámara baja, la prohibición es mucho más extensiva atento a la amplia definición del artículo 2°. En cambio, en el texto apro-

bado por el Senado se establece que: “se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°”. La diferencia es que en el proyecto aprobado por la Cámara alta, los cuerpos protegidos están definidos con mayor precisión. Con las modificaciones de Diputados se extiende la prohibición a ambientes indefinidos como el periglacial y lo hace exclusivamente respecto de la actividad minera e hidrocarburífera, excluyéndola inconstitucionalmente de todo tipo de examen o evaluación de impacto ambiental. Asimismo, todas las actividades se encuentran prohibidas en los glaciares, salvo la actividad minera e hidrocarburífera que se encuentran prohibidas en los glaciares y en el ambiente periglacial. Por esto último se consagra un concepto discriminatorio y antiminero al equiparar las actividades minera e hidrocarburíferas a la acción ilícita de dispersión de sustancias contaminantes, distinta a la versión del Senado donde todas las actividades enumeradas en particular se encuentran prohibidas por igual. El proyecto de la Cámara baja extiende en el ambiente periglacial la prohibición automática y sin evaluación de impacto ambiental de la actividad minera e hidrocarburíferas.

En la versión de Diputados la prohibición opera en el caso de glaciares cuando existe una actividad sobre los mismos y además se determina que dicha actividad lo afecta o puede afectar. En cambio en el caso del ambiente periglacial la prohibición opera por verificarse la actividad minera o hidrocarburíferas sobre el mismo y sin analizar si lo afecta o puede afectar.

En relación al artículo séptimo (7°), referido a la evaluación del impacto ambiental, es importante destacar que la ley 8.144, de protección de glaciares de la provincia de San Juan, incluye más puntos a tener en cuenta para la elaboración y análisis de las matrices de impacto y somete a todas las actividades a tal estudio estén o no prohibidas, a los fines de determinar, a partir de la evaluación, si la actividad se encuentra establecida en las prohibiciones del artículo 6° de la misma ley.

En orden al artículo octavo (8°), cuadra puntualizar que en el proyecto del Senado, en la última parte de este artículo, se establece la competencia de la Dirección Nacional del Antártico respecto del Sector Antártico Argentino.

En el artículo quince (15), podemos observar que si bien en ambos proyectos se exigen revisiones o auditorías ambientales de proyectos que ya cuentan con aprobaciones, el proyecto sancionado por este Senado resulta más acorde con lo establecido por la Constitución Nacional. Esto surge porque se deja claramente establecida la intervención y competencia de las autoridades provinciales en la conducción de las auditorías, en la modificación de Diputados. También queda determinada la intervención de las autoridades provinciales a la hora de conducir las auditorías, el plazo para realizarlas se computa desde la creación del inventario en cada jurisdicción. Las empresas que



no cumplan con los cánones ambientales la posibilidad de adecuación a la ley sin que ello implique su cierre o traslado. En este punto el ingeniero Mayoral manifestó: "...el plazo para realizar las auditorías ambientales en el proyecto de Senado se computa desde la creación del inventario en cada jurisdicción[...]. No hay forma de realizar la auditoría sin conocer si un proyecto se encuentra ubicado en un glaciar y la única forma de conocer esto es luego de que esté confeccionado el inventario..."

El artículo diecisiete (17), también es objeto de importantes objeciones. Resulta peligrosa la versión de Diputados porque el Ianiglia tendrá que responder con el inventario. Si identifican un glaciar de roca, como por ejemplo el del Altar, entonces paran el trabajo ¿Hasta cuándo y por qué si ya determinamos que es fósil?, entonces el Ianiglia tendrá que determinar si hay hielo y cómo lo van a hacer si no les permiten usar equipos, ni puede haber rutas ni infraestructura. El proyecto de Diputados, al incluir este artículo, pretende suspender las facultades no delegadas por las provincias y suspender actividades en curso aún antes de que esté confeccionado el inventario.

En lo atinente a los plazos para realizar las auditorías ambientales, en el proyecto de este Senado se computa desde la creación del inventario en cada jurisdicción, elemento éste que desaparece en la modificación de Diputados. Sobre este mismo particular en el proyecto del Senado se establece de una manera más lógica y razonable la disposición de las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento de la ley, sin que ello implique cese o traslado de las actividades ya autorizadas y monitoreadas por la provincia; en la modificación de Diputados es la autoridad competente la que podrá disponer el cese o traslado, vulnerando la legislación local.

No hay que perder de vista que el discurso ambientalista que se utiliza penetra muy fácilmente en la gente. Sin embargo, sin ser expertos en el tema es evidente que el efecto ambiental que produce la actividad minera es bastante menor en comparación al del cordón industrial de la Ciudad de Buenos Aires o el cultivo intensivo de la soja.

Es muy bueno que todos trabajemos por el desarrollo sustentable y la protección de nuestros recursos naturales, pero sin olvidar que debemos armonizar el impacto ambiental con el impacto humano, y que este tema supera a aquellos oportunistas que desde la defensa sin sustentos técnicos de la ecología a ultranza, pretender hacer su plataforma electoral.

Por otro lado, reitero que el proyecto aprobado por este Senado guarda conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional, ya que deja claramente establecida la intervención y competencia de las autoridades provinciales en las revisiones o auditorías ambientales, no así las modificaciones introducidas por Diputados. En esa modificación se pone en evidencia una subestimación subliminal de la capacidad técnica y moral de los provincianos.

En consecuencia, insto a mis colegas senadores a que den resguardo legislativo a las autonomías provinciales, con racionalidad y visualizando que aprobar el proyecto remitido por la Cámara de Diputados no significa una superación en la protección al medio ambiente en comparación con el proyecto que por unanimidad fue aprobado en este Senado. Muy por el contrario, según la calificada opinión de las máximas autoridades del Ianiglia, ambos proyectos protegen el medio ambiente pero el que viene con modificaciones de Diputados es tan ambiguo, impreciso, con preocupantes indefiniciones terminológicas, que determinará indefectiblemente vacíos jurídicos y la judicialización futura, con su lógica consecuencia económica y social.

Quienes rechazamos las modificaciones introducidas por el acuerdo Filmus-Bonasso y apoyamos el del "verdadero consenso" (el que obtuvo el voto de la totalidad de la Cámara alta con el apoyo de todos los bloques que la componen y no así el de diputados donde el bloque del oficialismo no acompañó) no pretendemos restringir las áreas protegidas, simplemente que la ley sea precisa en su definición y adecuada para el medio ambiente y para el desarrollo de las economías provinciales. Tenemos derecho a este reclamo.

Debemos insistir en el proyecto aprobado por este Senado, es un proyecto racional, serio y con una lógica de respeto hacia el impacto ambiental que se compatibiliza con el aprovechamiento racional del recurso, recurso del cual vivimos las provincias con minería y también las arcas de la Nación en la cual abrevan todas las demás jurisdicciones.

Señor presidente, la Argentina tiene metas claras para el sector, en el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace sólo cinco años se alcanzaban algo más de 1.000 millones.

Finalmente, señor presidente, quiero transcribir la nota enviada por el gobernador de mi provincia en la que me da precisas instrucciones sobre el tema en tratamiento.

San Juan, 6 de septiembre de 2010.

*Señora senadora de la Nación, doctora Marina Raquel Ríofrio*

Me dirijo a usted en virtud de la representación provincial que ejerce en los términos del artículo 44 de la Constitución Nacional, en relación al próximo tratamiento del proyecto de ley sobre los glaciares en el Honorable Senado de la Nación.

Al respecto le recuerdo que la provincia de San Juan, en ejercicio de sus potestades constitucionales no delegadas, sancionó el día 14 de julio la ley 8.144, de protección de glaciares, reglamentada por el decreto de este Poder Ejecutivo 899 de fecha 22 de julio de 2010. Le adjunto copias de ambos cuerpos normativos para su información.

Dicha ley fue sancionada en ejercicio del dominio originario que la provincia de San Juan posee sobre los recursos naturales ubicados en su territorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 113 de la Constitución de San Juan. Los señores diputados provinciales aprobaron, por unanimidad de los bloques políticos el proyecto enviado por este Poder Ejecutivo defendiendo la soberanía y jurisdicción de la provincia de San Juan sobre sus recursos naturales, y protegiéndolos contra normas que lesionan y menoscaban las jurisdicciones locales, cercenando arbitrariamente los legítimos derechos provinciales.

En consecuencia, en mi carácter de gobernador de San Juan, le requiero que al momento del tratamiento del proyecto de ley sobre los glaciares en el Senado de la Nación, tenga en consideración e invoque en el recinto, la existencia de la Ley Provincial de Protección a los Glaciares, 8.144, y su decreto reglamentario 899, a fin de que quede constancia de ello en el diario de sesiones.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarla con distinguida consideración.

JOSÉ LUIS GIOJA.  
*Gobernador.*

Estimados colegas, en función de todo lo expresado y con el convencimiento de estar aprobando el mejor proyecto para la Nación y para las provincias, los invito a insistir en el texto aprobado en este Honorable Senado, el del “verdadero consenso” y el que respeta el federalismo que consagra nuestra Constitución Nacional para nuestra República, adelantando mi voto en ese sentido.

6

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR REUTEMANN

### **Libre acceso a la información pública**

Señor presidente:

Hoy estamos propiciando cubrir un importante vacío normativo, cual es la inexistencia en nuestro país de una ley de acceso a la información pública.

Buena parte de los países del mundo, y de la región latinoamericana en particular, ya cuentan con esta clase de normativa.

Por ejemplo, Brasil la tiene desde 1997, Paraguay desde 2001, Perú desde 2002, México también desde 2002, con la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental; Chile más recientemente, desde 2008, y ese mismo año se sumó Uruguay con su ley de acceso a la información pública y amparo informativo.

Igualmente, es justo señalar que en nuestro caso existe un antecedente, que tiene aún vigencia, que es el decreto 1.772 del 3 de diciembre del 2003.

Mediante el mismo se aprobaron los reglamentos generales: de audiencias públicas, para la publicidad de la gestión de intereses, para la elaboración participativa de normas, del acceso a la información pública y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos, y con el que se estableció el acceso libre y gratuito, vía Internet, a la edición diaria del Boletín Oficial de la República Argentina.

En sus considerandos se recordaba que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.

Se afirmaba que era un objetivo central concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente.

Se sostenía que se debía incrementar la transparencia de los actos de gobierno.

Otro considerando avalaba la tesis de que se iba a producir una “elaboración participativa de normas”.

A pesar de los fundamentos y normas establecidas en el mencionado decreto, en los últimos tiempos hemos visto como el principio de publicidad de los actos de gobierno, con su correlato de derecho al acceso a la información, se han visto vulnerados, entre otros, con la manipulación de la información estadística, a partir de la virtual intervención en el INDEC; con el manejo discrecional en la distribución de la pauta de publicidad de gobierno; con el control informativo de los mensajes que se producen en los medios oficiales, para citar sólo algunos.

Hasta el presente han fracasado los variados intentos que se hicieron en ambas Cámaras del Congreso de la Nación en aras de contar con una ley de acceso a la información pública, que aún se debe la República Argentina, y que sólo hoy estamos en condiciones de propiciar.

Del dictamen que se propone ahora, tras el prolijo análisis que se hizo luego del trabajo de las comisiones intervinientes en este Senado de la Nación destaco, especialmente, el objeto de garantizar el libre acceso a la información pública, y el de promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios.

Cuando tengamos la ley, a diferencia del insuficiente decreto actual, el ejercicio de este derecho a la información, no sólo a las actividades del Poder Ejecutivo nacional sino que, además, se extenderá a los otros poderes (Legislativo y Judicial) y a diversos organismos públicos, tales como la SIGEN, la AGN, la Defensoría del Pueblo, los entes reguladores de servicios públicos, el Banco Central, las entidades financieras oficiales, las universidades, las empresas y sociedades del Estado, las fuerzas armadas y de seguridad, los fondos fiduciarios, y de las personas que hubieran recibido subsidios estatales o que exploten un servicio o un bien de dominio público.

Por supuesto que, con la ley cuyo proyecto estamos hoy considerando se definen los casos limitativos o excepcionales en los que la información deba ser considerada como confidencial o reservada. Pero el principio general es el de la transparencia activa y el de la máxima divulgación.

A partir del dictado de una ley de acceso a la información pública habrá claros obligados a dar las condignas respuestas a los planteos de transparencia que procedan de parte de la ciudadanía y, en cualquier caso, con esta ley estarán los ciudadanos con la facultad de ejercer el derecho de que se les informe sobre lo que está efectivamente sucediendo.

Por eso es que expreso mi absoluto apoyo a esta iniciativa parlamentaria.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR REUTEMANN

**Servicio Cívico Voluntario – Medidas mínimas de seguridad bancaria – Delitos de lesa humanidad**  
**(O.D. N° 851/0, C.D. – 50/10, O.D. N° 791)**

Señor presidente:

Hoy, con este proyecto mediante el cual se disponen medidas para erradicar las “salideras bancarias”, estamos abordando la compleja y preocupante cuestión de la inseguridad ciudadana.

Frente al número de muertos y las graves consecuencias de este fenómeno que afecta a la Argentina, no podemos dejar de actuar como legisladores de la Nación, so pena de ser cómplices de una realidad que es cada vez más afligente y preocupante.

Sin embargo, señor presidente, no se trata meramente de adoptar medidas que vayan a los efectos y no a las causas que generan esta situación.

En los últimos tiempos, considero, que no se han instrumentado suficientes políticas públicas que hubieran permitido, por su impacto social, superar de raíz los males que nos aquejan en materia de inseguridad.

Por ello, en este último tiempo, en el Senado de la Nación nos hemos venido abocando al tema impulsando una serie de medidas legislativas que apuntan a solucionar esta problemática.

Es en ese marco que hoy, concretamente, junto al tratamiento de la creación del Servicio Cívico Voluntario, estamos tratando el proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados para impulsar medidas de control para combatir las “salideras bancarias”.

Los inhibidores visuales y tecnológicos que se prevé incorporar con la presente iniciativa, entre otras medidas, desde ya que los considero adecuados.

Igualmente no quiero dejar de señalar que, en el caso de los inhibidores de celulares, se deberá asegurar que

no afecten la salud estableciéndose, por vía reglamentaria, los niveles de radiación que resulten apropiados.

A estas medidas que hoy estamos consagrando se deberán adicionar, necesariamente, aquellas otras que apuntan a una mayor bancarización de forma tal que, en la práctica, se minimice la manipulación y tenencia de numerario por parte de la población.

Por lo expresado, señor presidente, y teniendo en cuenta que la inseguridad es una preocupación de todos, apoyo la iniciativa parlamentaria que estamos en este momento considerando, en la convicción de que ella pasará a formar parte de una necesaria política de Estado en la materia.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR REUTEMANN

**Protección de glaciares y ambiente periglacial**  
**(S.-2.200/09)**

Señor presidente:

La agenda ambiental no tiene tanta antigüedad en la consideración pública y política, al menos si se la correlaciona con lo que ha venido sucediendo con el tratamiento de las cuestiones vinculadas al desarrollo económico y al modelo productivo.

Y eso, lamentablemente, hace que a veces se establezca una subordinación de lo ecológico respecto de lo económico o, a lo sumo, se presente un estéril contrapunto, entre la problemática medioambiental y la productiva, como si se trataran de cuestiones decididamente irreconciliables.

Hoy, frente a proyecto de ley que vuelve de Diputados para su nueva consideración, y antes, con la ley que aprobara el Congreso de la Nación que fuera ulteriormente vetada por el Poder Ejecutivo, se pone en análisis la problemática vinculada a la necesidad de preservar los glaciares y el ambiente periglacial.

A esta discusión, señor presidente, se le ha contrapuesto implícitamente otra que pone el acento, no tanto en la cuestión ambiental sino en la necesidad de sustentar economías regionales basadas en la explotación del recurso minero, fundamentalmente, tipo de explotación que parece verse menoscabada si se impulsa, como hoy sostenemos, medidas centradas en una mirada ambiental.

El recurso supremo del agua, un bien que abunda, por suerte, en nuestros lares, aunque es bien escaso en otros puntos del globo, no puede ser comprometido de modo alguno.

El fenómeno del cambio climático, del que sólo recientemente se ha podido tomar debida conciencia, nos marca que los glaciares en el mundo están en retirada, alertándonos que, si tomamos decisiones equivocadas en el aquí y ahora, o no las adoptamos, podemos comprometer la calidad de vida del planeta.

Por ello, las iniciativas racionales y justificadas mediante las cuales se postule la protección del ambiente, en cualquiera de sus diversas y complejas facetas merecen nuestro acompañamiento.

De la iniciativa en análisis, destaco, por ejemplo, que se trata de un régimen de presupuestos mínimos, a los que las jurisdicciones provinciales se deberán indefectiblemente atener, pero que admite que cada una de las provincias pueda adaptar sus respectivas legislaciones a las características especiales que se presenten en los distintos territorios.

También, que se plantee el objetivo superior de proteger los glaciares y el ambiente periglacial, en su calidad de reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura, y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica, y como atractivo turístico.

Asimismo, es de destacar la declaración de los glaciares como bienes de carácter público, y que se impulse la realización de un inventario nacional de glaciares, a los fines de que sepamos perfecta y permanentemente cuál es la situación en la materia.

Sabemos que, por efectos del calentamiento global, y el consiguiente derretimiento de glaciares, se pueden llegar a presentar en el futuro hasta cuestiones de reclamos limítrofes, cuando los lindes entre países han sido previamente establecidos tomando como base líneas demarcatorias ubicadas en zonas de glaciares.

Por otra parte, destaco también que todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentren prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

Señor presidente, el informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo del año 2003 titulado, más que sugerentemente: “Agua para todos. Agua para la vida”, marca muy claramente la relación entre población y disponibilidad de agua en el mundo.

Por ejemplo, el continente asiático es el más comprometido ya que tiene el 60% de la población mundial y cuenta sólo con el 36% de los recursos hídricos globales.

La situación más holgada se presenta justamente en América del Sur donde, con sólo un 6 % de la población mundial, albergamos recursos hídricos del orden del 26 % del total del orbe.

Por eso, con la ley que hoy nos estamos aprestando a sancionar, entiendo que estamos claramente en ese camino protectorio.

Quizás, así como hemos contribuido (antes y ahora) tantas veces en nuestra calidad histórica de granero del mundo a ayudar a combatir el hambre y la necesidad de alimentos de tantos congéneres, en un futuro habremos de extender nuestra mano ayudando a saciar la sed de nuestros hermanos del planeta, frente a una creciente

escasez de un recurso tan vital como irremplazable. Por nosotros, y por todos, debemos cuidar el agua.

Por todo ello, señor presidente, adelanto mi voto positivo al proyecto de ley pasado en revisión a la Cámara de Diputados y que fuera devuelto con modificaciones y expreso mi deseo a que el Congreso de la Nación hoy termine de consagrar una ley de protección a los glaciares.

9

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR FILMUS

**Autorización para la salida de tropas de Haití  
(P.E.-136/10)**

Señor presidente:

El proyecto de ley renueva la autorización de salida del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para que continúen participando en la Misión de Estabilización de la Naciones Unidas en Haití (Minustah).

La citada resolución reitera la firme determinación de preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de la República de Haití, acogiendo con beneplácito los progresos logrados hasta el momento en el proceso político de la República de Haití e insta a todos los haitianos a que continúen participando en él y acepten pacíficamente sus resultados.

Reconoce la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como un medio fundamental para alcanzar la estabilidad y el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello, que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y la comunidad internacional deben seguir prestando asistencia para fomentar la capacidad de las autoridades e instituciones nacionales y locales.

Considera que el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, las garantías procesales y la lucha contra la delincuencia y el fin de la impunidad son esenciales para garantizar la seguridad en la República de Haití, encomiando a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) por la asistencia que sigue prestando al gobierno de Haití para garantizar un entorno seguro y estable.

Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional y a que, en coordinación con la comunidad internacional, promueva la reforma del sector de la seguridad, en particular continuando con los esfuerzos para reformar la Policía Nacional de la República de Haití, así como los esfuerzos para reformar los sistemas judicial y penitenciario.

La República Argentina ha contribuido activamente al restablecimiento de la estabilidad política y humanitaria de la República de Haití a partir de su participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión



Policia de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre los años 1997 y 1999 y actualmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.

Por otra parte, considerando que el devastador terremoto que azotó a este país el pasado 12 de enero ha causado más de 200.000 víctimas mortales, cientos de miles de heridos y gravísimos daños materiales, la resolución ONU 1908 (2010), aprobadas el 19 de enero de 2010, ha recomendado aumentar el número de integrantes de la Minustah a fin de apoyar la recuperación, reconstrucción y estabilidad de la República de Haití.

Asimismo, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha expresado, a través de la Decisión de Quito del 9 de febrero de 2010, su compromiso de cooperación con el pueblo y el gobierno de Haití, continuando con la ayuda humanitaria emprendida por los Estados Miembros y promoviendo acciones conjuntas tendientes a canalizar esa ayuda, como la creación de un fondo de financiamiento de dólares estadounidenses cien millones y la solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo de un crédito de largo plazo en el menor interés y asumido por los países miembros atendiendo además y prioritariamente las cuestiones referidas a la infraestructura y energía, agricultura y salud en la República de Haití contribuyendo a la reforestación, colaborando con la construcción de la sede del gobierno de Haití y apoyando las iniciativas sobre asistencia en el sector de la educación, entre otras contribuciones.

Del mismo modo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reafirmado su apoyo al gobierno y al pueblo haitianos en una declaración aprobada por aclamación en una sesión del 17 de febrero del corriente año en donde se asegura que “es esencial apoyar los esfuerzos de las autoridades de la República de Haití para mantener la estabilidad política, la democracia, la gobernabilidad y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y para promover el desarrollo socioeconómico”. Asimismo, la declaración agrega que la OEA seguirá colaborando y movilizand los recursos que sean necesarios para apoyar la recuperación y reconstrucción de ese país.

10

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA PARRILLI

### **Protección de glaciares y ambiente periglacial (S.-2.200/09)**

Señor presidente:

Considero de suma importancia lo que hoy estamos haciendo, esto es convertir en ley un proyecto que proteja a nuestros glaciares.

Quiero ser consecuente con lo que ya votamos en este recinto, por unanimidad por parte de los senadores. Por ello, voy a ratificar mi voto afirmativo por la posición elaborada y presentada oportunamente

por mis pares de la Comisión Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Los glaciares argentinos, junto al resto de los glaciares que hay en el mundo, representan hoy el 75 por ciento de las reservas de agua dulce del planeta. Siendo un mundo netamente azul, si se lo mira en un mapa; la tierra se encuentra cubierta en un 70 por ciento por agua, sin embargo, solamente el 2,5 por ciento de esa agua es agua dulce.

Al agua, tan esencial para la vida y el desarrollo de nuestros pueblos, debemos cuidarla. Tanto es así, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de julio 2010 una resolución que declara que el acceso al agua potable y el saneamiento básico son derechos humanos fundamentales e indispensables para el goce y disfrute de los demás derechos.

De donde yo provengo, la provincia del Neuquén, se pueden palpar los efectos maravillosos que genera el agua, mostrándonos el bello valle que forman el río Limay y río Neuquén. Zona productora de excelente fruta, conocida en el país y en el mundo.

Las provincias cordilleranas tenemos la gracia de poseer en mayor o menor cantidad éstos glaciares, siendo nosotros los que vivimos en estas, los que en primer lugar estamos preocupados por la necesidad de protección de los mismos.

Teniendo presente que según lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, estos recursos pertenecen a las provincias. No cabe duda de que la aprobación de esta ley en estos términos es un importante avance en defensa del federalismo. Así, el artículo señalado debe entenderse en congruencia con el 41 de la Carta Magna que dispone que sea la Nación a quien le competa dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental.

En virtud de ello y reafirmando el rol que nos toca, debemos trabajar en las distintas tareas que sean necesarias para el cuidado de estas reservas estratégicas de recursos hídricos.

Y en este lugar donde nos encontramos, el Senado, fuimos elegidos para representar a las provincias, en clara diferencia con los diputados que representan al pueblo de este país. Aquí es donde debemos reafirmar el rol que tenemos con la “Argentina profunda”, como acostumbra decir nuestra presidenta. Debemos con nuestro accionar y decisiones, reforzar el federalismo y trabajar en este sentido. Por ello, acompañando con mi voto a este proyecto, estoy convencida de que estoy trabajando en esa dirección.

Lamentablemente este recurso natural tan preciado, como es el agua, concentrado en los glaciares, está siendo atacado, por sobre todas las cosas por el calentamiento global, como consecuencia del efecto invernadero, provocado en gran parte por los denominados países del Primer Mundo, que incrementando la emisiones de dióxido de carbono ha generado que la temperatura de la Tierra haya aumentado en 0,6 grados.

Los efectos en la Argentina son diferentes, según las zonas. En los Andes patagónicos, se ve una reducción de las precipitaciones que trae como consecuencia una reducción del caudal del río Limay. En caso de mantenerse las tendencias se calcula que en Neuquén para el año 2070 la temperatura media aumentará entre 3 y 5 grados.

Considero que para avanzar en una protección de los glaciares, y del medio ambiente, hay que hacerlo en forma conjunta con todos los países en soluciones coordinadas y globales a escala mundial. Y que hoy estemos acá debatiendo este proyecto beneficiará el presente y el futuro de nuestro país.